

06/2/10

A su distinguido colega
Dr. Deleaze, le dedica este modesto,
su viejo amigo

JUEZ COMPETENTE

EN LOS

Mayo 16/902.

INTERDICTOS

V

ACCIONES POSESORIAS

POR EL

DR. CÁSTULO L. FURNUS

2.ª edición aumentada con el dictamen del Agente Fiscal,
Dr. D. Raymundo Naveira y la sentencia del Juez de 1.ª Instancia
en lo civil, Dr. D. Juan Agustín García (hijo).

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
Nº. DE ORDEN	30.256
UBICACIÓN	J 566

BUENOS AIRES

IMPRESA DE JUAN A. ALSINA, MÉXICO 1422

1894







Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil:

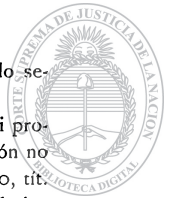
Cástulo L. Furnus, por sí y en representación de sus hermanos, en los autos promovidos contra los herederos de don M. I. Lagraña, por *restitución de la posesión* de un inmueble, contestando el traslado de las excepciones opuestas, á V. S., en la forma que mejor proceda en derecho, digo:

I.

Se opone á la demanda la excepción de incompetencia.

Que empiezo pidiendo disculpas á mi contra-parte, por la *confusión* que dice le he llevado á su espíritu, con una extensa relación de hechos; pero, un período de doce años estaría demasiado comprimido en una página.

Su confusión se trasluce cuando divaga averiguando si la acción, que deduzco, es la *reivindicatoria* ó el *interdicto de despojo*; y, por si fuera la primera, opone la ex-



cepción de *incompetencia*, y para el caso que sea lo segundo, la prescripción.

Ni la reivindicación ni el interdicto entran en mi propósito; sin embargo, como el nombre de la acción no obsta á que se la tome en consideración (Ley 10, tit. 17, Libro 4.º R. C., y Jurisprudencia uniforme de los Tribunales), debo hacerme cargo de estas excepciones, opuestas en la hipótesis de deducirse, por mi parte, dos acciones inconciliables y excluyentes.

Para desvanecer esa confusión, me veo obligado á exponer los fundamentos de derecho, en que apoyo mi acción; pero, como las circunstancias de hecho especialísimas, que la fundan, requieren un estudio detenido, que quizá empeore la situación del espíritu de mi contra-parte, le pido previamente otras mil disculpas.

En el caso *sub-judice*, requiero la atención del Juzgado muy especialmente, porque, lo declaro, pues procedo con sinceridad, V. S. debe deducir el derecho, cuyo reconocimiento exijo, de las complicadas disposiciones legales, que rigen la difícil materia de las acciones posesorias.

Y con la venia de V. S., voy á permitirme sostener la competencia del Juzgado, dejando á un lado la prescripción, ya que el excepcionante ha confesado que no conocía la corrección hecha al art. 2493 del Código Civil, por la Ley de Setiembre de 1882, que señaló el término de un año, en lugar de seis meses, para la prescripción de la acción de despojo. (Véase Ser. 3.º, tomo 3.º, pág. 58 de los Fallos de la S. Corte Nacional). Por otra parte, *reus in excipiendo fit actor*.

Expondré el derecho, en que fundo mi acción, buscando las disposiciones legales aplicables al caso, por-



que «en jurisprudencia, como decía el Dr. Cortés, abandonar sus reglas, en las materias que les conciernen, es hacer de las cuestiones jurídicas discusiones filosóficas, vagas, abstractas y sin término posible».

Además, dada la humildad de mis fuerzas y la falta absoluta de autoridad propia para razonar por mi cuenta, en esta difícil materia, buscaré mis argumentos en la misma ley, en los autores de indiscutible autoridad y en la Jurisprudencia de los Tribunales.

II.

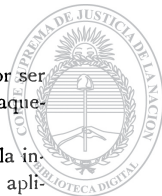
Cuestión que debe resolverse.

El punto capital á resolver se puede formular en la siguiente cuestión: ¿cuál es el Juez competente para entender en la *acción posesoria*, que promuevo por la *vía ordinaria*, para obtener la *restitución* de la *posesión* de un *inmueble* situado fuera de la jurisdicción del Juzgado, en que se encuentra radicada la parte demandada ?

III.

¿Qué disposiciones legales rigen la acción instaurada ?

Con generalidad se sostiene que todas las acciones posesorias, legisladas por el tít. 3.º Libro 3.º del Código Civil, se ejercitan en juicio de acuerdo con las disposi-



ciones del tít. 17 del Código de Procedimientos, por ser éstas las formas preceptuadas para el ejercicio de aquellas acciones.

Estudiando el conjunto de tales disposiciones y la interpretación dada por los Tribunales encargados de aplicarlas, no participo de esas opiniones, pensando que los *interdictos*, á que se refiere ese título del Código de Procedimientos, son distintos de las demás *acciones posesorias*, especialmente legisladas por el Código Civil.

Desde luego, observo que el art. 563 del primer Código indica la existencia de tres interdictos (pues el 4.º, de obra nueva, no es distinto de los anteriores).

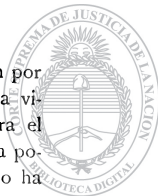
La Ley de Procedimientos para la justicia federal, en su art. 326, establece los mismos tres interdictos.

Sin embargo, el art. 2487 del Código Civil, dice que las acciones posesorias tienen por ÚNICO OBJETO obtener: la *restitución* de la posesión, ó la *manutención* en la posesión.»

¿Porqué se señala, entonces, el procedimiento para un *interdicto de adquirir*, si no existe tal *acción posesoria* en el Código Civil?

¿Se sigue un mismo trámite cuando la acción para adquirir la posesión se dirige contra el poseedor á título de dueño ó usufructuario, que cuando se deduce contra el que no invoca tales caracteres?

¿Median idénticas circunstancias, para que se sujete á las mismas reglas, la acción por manutención en la posesión, cuando se ejerce por el poseedor anual contra el perturbador, que cuando el poseedor actual pide amparo contra otro que tampoco es poseedor anual, ni tiene derecho de poseer?



¿Rige el mismo procedimiento cuando la acción por restitución es ejercitada por aquél cuya posesión sea violenta ó esté en la simple tenencia de la cosa, contra el despojante, que cuando la deduce el poseedor, cuya posesión anual está exenta de vicios, contra el que lo ha desposeído sin violencia ni clandestinidad?

No.

Las acciones tienen, en estos diversos casos, fundamentos y objetivos distintos, que exigen procedimientos diferentes.

Comprobemos.

IV.

Interdicto y acción para adquirir la posesión.—Son acciones personales.—El primero es sumario, la segunda se ejercita por la vía ordinaria.

El Código de Procedimientos, en la Sec. 1.^a, tit. XVII, señala el trámite *sumario*, á que debe ajustarse el *interdicto de adquirir*, exigiendo el art. 564, como *requisitos indispensables*, para que proceda: «1.^o que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo á derecho, y 2.^o que *nadie posca*, á título de dueño ó de usufructuario, los bienes cuya posesión se pide.»

El art. 326 de la Ley Nacional y 527 del Código de Procedimientos de Corrientes, exigen lo mismo.



Esta disposición es tomada del art. 694 de la anterior Ley de Enjuiciamiento de España, reproducido, su 2.º inciso, en el art. 1633 de la Ley vigente.

Puede verse Escriche: «Interdicto de adquirir».

En cuanto al primer requisito, un título suficiente (1), no hay duda alguna, porque es la base del derecho. La dificultad surge respecto del segundo, al menos por lo que se refiere al punto que estudiamos.

«Un *título válido*, dice el art. 2468 del Código Civil, no da sinó un derecho á la posesión de la cosa y no la posesión misma. El que no tiene sinó un derecho á la posesión, no puede, en *caso de oposición*, tomar la posesión de la cosa: *debe demandarla por las vías legales*.»

¿Y cuáles son éstas?

Indudablemente, el *interdicto* cuando «nadie posea á título de dueño ó usufructuario», pues así exigen expresa-

(1) Obsérvese una contradicción que conviene estudiarse: el art. 1634 de la vigente Ley de Enjuiciamiento española, requiere el *título hereditario*, como exclusivo para hacer procedente el *interdicto de adquirir*, estableciendo diverso procedimiento para cuando se invoque otro título (art. 1635).

Los Tribunales de la Capital declaran que «la tramitación que señala nuestro Código *no es aplicable* cuando se pide la posesión de los *bienes de la herencia*.» Véase: Jur. Civil, Ser. 1.ª, tomo 4.º, pág. 30; nota 1476 del primer tomo de la Instituta del Dr. Hall, y nota 9 al art. 3413 (3415) del doctor Segovia.

Entretanto, la Suprema Corte Nacional declara que «la acción *sumaria* para *adquirir* la posesión (art. 326 de la Ley Nacional) no corresponde á los que tengan un título de compra ú otro análogo, sinó á los hijos ó parientes más próximos, que tienen derecho de heredar por testamento ó *ab intestato*, ó al que presenta un testamento en debida forma, que lo instituye por heredero.» Ser. 2.ª, tomo 21, pág. 169—de sus Fallos.

Es decir, la Corte *está* de acuerdo con la Ley Española y en contra de la opinión de la Exema. Cámara de lo Civil.



mente, con este requisito indispensable, las leyes que de-
jo citadas.

¿Y en *caso de oposición* de alguien que se diga dueño ó usufructuario?

El art. 336 de la Ley Nacional del 63, contesta: «Si en el caso del interdicto de adquirir, el que saliere á oponerse fundare sus excepciones en título que pudiera darle derecho al dominio ó usufructo de los bienes demandados, la causa se sustanciará por la *vía ordinaria*.»

El Código de Procedimientos de la Capital (lo mismo que el de Corrientes, art. 528), se limita á establecer que «si alguno los poseyere, no podrá ser privado de su posesión, sin ser oído y vencido en *juicio*»; pero, nada dice sobre la naturaleza de este juicio (art. 565).

En tal concepto, pienso que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 66 del mismo Código, y es jurisprudencia constante de los Tribunales, á falta de una tramitación especial, señalada para este caso, debe seguirse el *juicio ordinario*.

«Para adquirir una posesión, que nunca se ha tenido, dice el doctor Segovia en la nota 52 al art. 2489 del C. Civil, existirá la *acción personal*, que corresponda, pero nunca una acción real ó una acción posesoria.»

«Debe demandarla por las vías legales, es decir, en *juicio ordinario* y por medio de una *acción personal* contra el que le trasmitió el título por el cual pretende ser dueño de la cosa», agrega el Dr. Llerena, comentando el art. 2468 ya transcrito.

Caravantes, comentando el art. 694, inc. 2.º, de la Ley Española de 1855, reproducido en la nuestra, dice: «El que posee á título de dueño, esto es, con un título por su



naturaleza traslativo de dominio, como compra, venta, donación, etc. *no puede ser privado de la posesión* por medio del *interdicto*; para ello *deberá* ser oído en el *juicio plenario de posesión*, cuyos trámites graves y solemnes permiten á las partes alegar las razones que les asisten en apoyo de su derecho y las pruebas en que se funda y al Juez apreciar debidamente de qué lado está la razón y la justicia»—(Autor citado—tomo 3.º, pág. 240, § 1011.)

Reus, explicando el art. 1633 de la Ley del 81—dice: «el artículo que examinamos está conforme, y no podía menos, con el que citamos como concordante de la ley anterior (art. 694, inc. 2º), en prescribir que es requisito *indispensable* para que proceda el INTERDICTO que *nadie posea* ni como *dueño*, ni como *usufructuario*, y la razón expuesta por todos los autores y todos los intérpretes es lógica, sencilla y justa. El que posee como dueño ó en virtud de un título traslativo de dominio, como compra, venta, donación, etc., y el que posee como usufructuario, tiene la posesión legal, la *tenencia derecha* de la cosa, como dicen las Partidas y el privarle de ella sería, según advierten los autores, un verdadero despojo. El que posee como dueño, posee con plenitud de derecho, en virtud del título más completo que puede dar lugar á la *posesión* legítima, que es el de propiedad, y *para ser privado de aquélla*, forzoso es que la ley *no reconozca* como medio el *interdicto*, *sinó el juicio ordinario*, el *juicio plenario de posesión* ó propiedad, donde hay posibilidad de saber de parte de quién está el derecho, ó á quién asiste más razón para poseer.» (Autor citado, tomo 3.º, pág. 580.)

«En las ventas, donaciones entre vivos, permutas,



etc., el que transfiere el dominio está obligado á entregar la cosa al que lo adquiere, y mientras esta entrega no se verifique, ya sea natural, ya simbólicamente, no queda consumado el contrato.

Hecha la entrega, entra el adquirente en posesión de la cosa y, de consiguiente, es innecesario el interdicto de adquirir. Y si el vendedor se resiste á la entrega podrá ser demandado por el comprador en *juicio ordinario* para el cumplimiento de la obligación; pero *nunca podrá éste utilizar el interdicto*, que en tal caso se dirige contra el que posee á título de dueño, lo cual está *prohibido por la ley*. (Fallos S. C. Nacional—Serie 2.^a, tomo 21, págs. 170, aunque está tomado de Manreza y Reus, tomo 3.^o, pág. 509.)

El sumario de un fallo del ilustrado Juez Federal Dr. Zuviría, dice:

«El *interdicto de adquirir* no puede obtenerse contra el que *posee en su nombre* y como *dueño ó usufructuario*.

El que tiene justo título debe, en ese caso, intentar un *juicio ordinario*, en el cual debe ser oído el poseedor. .

De otro modo, la posesión dada á consecuencia del interdicto sería un verdadero despojo».

Su considerando 6.^o, agrega: «Que las precedentes doctrinas legales, entre otras prácticas, se hallan sostenidas de la manera más clara y concluyente, por los comentadores de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, de la que procede la nuestra. D. José María Maurín y Navarro, quienes en el tomo 3.^o, pág. 591, comentando el extremo de que para que proceda la acción que se ha deducido es menester que *nadie posea á título de dueño* ó de usufructuario los bienes cuya



posesión se pide, se expresan así: « El que posee con estos títulos, tiene la posesión legal, la *tenencia directa* de la cosa, como dicen las leyes de Partida, y el privarle de ella sería un verdadero despojo. El que se halle, pues, en este caso no puede ser privado de su posesión sin ser oído y vencido en juicio, esto es, en el *juicio plenario de posesión* ó propiedad, según se ordena en el párrafo final del presente artículo y como estaba mandado también en la ley 2, tit. 34, lib. 11 de la Novísima Recopilación. . . » (Esta sentencia fué confirmada, por sus fundamentos, por la Corte Nacional y se encuentra en la pág. 19, tomo 13, Ser. 2.^a de sus Fallos.)

« *En todo juicio posesorio*, dice el Dr. Molina Arrotea, en el tomo 3.^o, pág. 34 de sus fallos, el hecho de la posesión es el punto capital á que debe atenderse principalmente; pues, un título, aunque sea válido, no da sino un derecho á la posesión y nó la posesión misma, siendo, por otra parte, esta cuestión materia de *acciones distintas y á las que la ley adjetiva hace referencia expresa*. (Art. 579 del Cód. de Proced.) »

La Jurisprudencia de los Tribunales de la Capital se ha pronunciado confirmando lo que dejo expuesto:

En la Ser. 2.^a, tomo 9, pág. 408, se declara procedente un *interdicto* de adquirir, porque «nadie posee á título de dueño ó usufructuario, no siendo necesario que el actor haya poseído jamás.» En esa oportunidad, el Dr. Sauze, á cuyo voto se adhirieron los Dres. Bustos y Molina Arrotea, decía: «ni el propietario ni el usufructuario podría ser obligado á que se discuta su *derecho de posesión en juicio sumario*.» En la Ser. 4.^a, tomo 6.^o,



pág. 271, se encuentra otro fallo que declara lo mismo.

Al revés, este *interdicto* fué rechazado, porque el demandado poseía á título de dueño, en los fallos consignados en la Ser. 1.^a, tomo 6, pág. 175 y tomo 7, pág. 265.

Al contrario, en la Ser. 1.^a, tomo 5, pág. 583, se encuentra un fallo en el que se declaró que los jueces de la Capital eran competentes para conocer en una demanda *ordinaria* contra una testamentaria, *por entrega* de un campo vendido por el causante; diciendo, su considerando 2.^o, « que esta acción es por su naturaleza *personal*, como se clasifica en la misma resolución de 1.^a instancia. »

En la Ser. 4.^a, tomo 1.^o, pág. 347, y tomo 6.^o pág. 40 se consignan otros fallos que hacen lugar á la acción iniciada en *juicio ordinario*, por el comprador contra el vendedor, por entrega de la propiedad vendida.

La Jurisprudencia de los Tribunales Federales también se ha pronunciado en análogo sentido.

Así, entre otros, el fallo consignado en la Ser. 3.^a, tomo 10, pág. 8, declara improcedente este *interdicto* contra el que alega poseer á título de dueño.

Los fallos de la Ser. 3.^a, tomo 3.^o, pág. 156 y tomo 8.^o, pág. 339, declaran la acción de compra, fundada en el *título*, como *acción personal*, la admiten en *juicio ordinario*, é indican, en consecuencia, como competente al juez del domicilio del demandado.

En cuanto á los casos en que puede prosperar este *interdicto*, debe tenerse presente que la Jurisprudencia Federal es contraria á la de los Tribunales ordinarios de la Capital, porque aquélla declara que la *acción sumaria*



para adquirir no corresponde á los que tengan un título de compra ú otro análogo, sinó á los que invocan un título *hereditario*, como puede verse en el fallo que se encuentra en la Ser. 2.^a, tomo 21, pág. 169; lo que se confirma con lo resuelto en el inserto en la Ser. 2.^a, tomo 16, pág. 71, que no hizo lugar al interdicto de adquirir, porque, si bien existía título de compra no se había hecho la tradición, necesaria para hacer adquirir el dominio al comprador.

La Corte Nacional, al confirmar el fallo de la Ser. 3.^a, tomo 10, pág. 8, ya citado, apoyaba también su resolución en el art. 2487 del C. Civil, que dice: «*las acciones posesorias solamente corresponden á los poseedores de inmuebles, etc.* De aquí quizá se deduzca que un título de compra, aunque dé derecho á poseer, no puede autorizar una acción posesoria, porque no se funda en la posesión ya adquirida, y como el único que llena este requisito es el título hereditario, porque el heredero sucede aún en la posesión del difunto (art. 3418) y puede unirla á la suya para hacer uso de esta acción (art. 2474), parece lógico entonces limitar á este título el exigido para que proceda el *interdicto posesorio* para adquirir.

Pero, fuera de este caso, la *acción para adquirir* la posesión, ni por el procedimiento *sumario del interdicto*, ni por el *ordinario* es una verdadera *acción posesoria*, porque, el que la emplea, según Savigny, reconoce *ipso facto* que no tiene la posesión, y aunque ésta sea el fin de los referidos interdictos, no basta eso para calificarlos de posesorios, puesto que hay también muchas acciones que tienden igualmente á obtener la posesión, como la



reivindicación, la *actio empti*, la *actio depositi* y á nadie se le ha ocurrido llamarlas posesorias.

Véase también á Maynz, tomo 1.º, § 88.

Resumiendo: en la ley, en la exposición de los autores y en la Jurisprudencia, existen bien definidas y caracterizadas las dos clases de acciones para adquirir: una, que sigue el juicio ordinario, y la otra que requiere un procedimiento sumario y toma el nombre especial de *interdicto*.

V.

Interdicto de retener y acción posesoria de manutención.—*Son acciones posesorias.*—*Al primero corresponde el juicio sumario, á la segunda, el ordinario.*

En el *interdicto de retener*, que debe sujetarse al juicio sumario señalado en la Sección II del tít. XVII del Código de Procedimientos, sólo se requiere, á más del acto de turbación, «que el que lo intente *se halle en actual posesión.*»

La Ley Nacional, en su art. 327 y el Código de Corrientes, en su art. 537, exigen lo mismo.

Esa disposición es tomada del inciso 1.º del art. 710 de la anterior Ley Española, que ha sido reformada por la Ley vigente.

El art. 2469 del Código Civil, dispone: «*Cualquiera que sea la naturaleza de la posesión, nadie puede turbarla arbitrariamente*», y el 2477, establece que «la



posesión, *no tiene necesidad de ser anual*, cuando es turbada por el que no es poseedor anual, y que no tiene sobre la cosa ningún derecho de posesión.»

Dice el Dr. Velez, en la nota á este último artículo: «Una posesión *actual*, dice Garnier, es siempre respetable; nadie puede turbarla, ni despojar al que la tiene, á no ser que él mismo tenga una posesión más antigua, que no haya sido interrumpida durante un año. Una heredad está vacante, yo tomo posesión de ella, la poseo durante tres meses, he cultivado y sembrado el campo y se me turba en esta posesión. Es claro que si el autor de la turbación es poseedor anual, yo no puedo ser mantenido en la posesión respecto de él: pero si él nunca hubiese poseído la heredad ¿no tendría yo acción contra él? El Código Francés la niega, pues exige en todo caso para la acción posesoria, que la posesión, sea de un año, contra lo cual están muchos escritores de esta nación. »

El Dr. Segovia, en su nota 28 al mismo artículo, expresa: «Así, el que poseyó un año menos un día, sin tener un derecho real sobre la cosa, que le dé el *derecho de poseerla*, no puede turbar la posesión del nuevo poseedor. Si la *posesión actual* no es protegida, se estimularía la violencia y el despojo. Se supone que el actual poseedor no haya despojado al anterior, y sea por esto pasible de la acción respectiva. »

El Dr. Llerena, agrega: «La Ley no distingue: exige *posesión actual y nada más . . .* »

Luego, pues, para la procedencia de este *interdicto de retener*, basta la posesión *actual*, cuando se dirige contra el que no es poseedor anual, ni tiene derecho de posesión. No se requiere que tenga los caracteres que



exige el art. 2473, pero es evidente que si ellos concurren, con mayor razón procederá la acción.

El *interdicto* de retener ó el amparo en la posesión ofrece el concepto de la protección más limitada é ínfima que puede recibir la posesión considerada en sí misma. El espíritu de esta protección es patentizar al poseedor inquietado en su posesión, que no tiene necesidad de valerse de la propia autoridad para conservar el mismo estado de cosas, existente al tiempo de la inquietud; puesto que la justicia desempeñará análoga misión, y con más ventajas, previniendo choques inútiles con el adversario y deslindando sus respectivas posiciones en virtud del orden público que hace respetar, ante todo, la personalidad del que posee.» (Dr. M. Camus,)

Tal es la razón por qué, en este *interdicto*, la sentencia deberá LIMITARSE *a amparar en la posesión* al que así lo haya solicitado, ó declarar que no ha lugar al *interdicto*. » (Art. 578 del Cód. de Proced.).

Y «cualquiera que sea la sentencia, se entenderá siempre, sin perjuicio de las *acciones de posesión* ó de dominio, que pueden corresponder al vencido con arreglo á derecho.» (art. 579 del mismo Código.)

¿Pero, qué otra acción de posesión existe, á mas de la que se ejercita por el *sumario interdicto de retener*?

El último artículo se ha tomado del 719 de la Ley Española del 55, modificándolo en su redacción para ajustarse á la interpretación dada por los autores.

Caravantes pregunta: «¿Dedúcese de este artículo que promovido el *interdicto* de retener no puede ya entablar-se la *acción posesoria en juicio plenario*? La generalidad



de los intérpretes opina por la afirmativa. . . . Pero, además, puede fundarse la opinión sobre que *ha lugar al juicio plenario de posesión aún después del interdicto*, si se atiende á que el procedimiento de éste no contiene más que un período, en que se conoce tan solamente el *hecho de la posesión* y de la perturbación, mas nó período alguno en que se controvierta y decida sobre el *derecho* que tengan en ella las partes, como sucede en el procedimiento del interdicto de adquirir. Así, pues, no creemos que la providencia judicial que aquí se dicta, sólo sobre el hecho de la posesión y con el *carácter de interina*, perjudique al vencido para entablar su demanda *posesoria plenaria en juicio ordinario*. »

Reus, comentando el artículo 1658 de la Ley vigente, que, como el nuestro, salva á las partes el derecho que puedan tener sobre la *propiedad ó posesión* definitiva, dice: « . . . En todo caso debe contener *la sentencia* la fórmula de sin perjuicio de tercero y la *reserva* de derechos, que se establece á favor de las partes, porque en nada ni para nada debe *prejudicar la cuestión del derecho á la posesión* ó á la propiedad. Se trata sólo de *amparar al poseedor* de una *perturbación* ó de un despojo, pero no se prejuzga sobre su *derecho á poseer* ó á la propiedad, ni sobre el que el perturbador ó despojante ó terceras personas puedan alegar á ambas cosas. »

Esriche, voz *Interdicto*, dice: « La acción que uno tiene para reclamar en juicio *sumario*, la posesión actual ó momentánea. Decimos *actual ó momentánea* y no de *hecho* como dicen algunos, porque la intención del que por medio del interdicto reclama la posesión, no se dirige á la posesión de hecho, ó sea á la simple tenencia de la



cosa, sinó á la posesión de derecho, esto es, á la posesión que cree que por derecho tiene ó le pertenece. Se dirá tal vez que en el interdicto sólo se ventila el *hecho de la posesión*; convenimos en ello; es verdad que sólo se ventila el hecho de la posesión, esto es, quién la tiene ó debe tenerla en el acto; pero hay mucha diferencia entre el hecho de la posesión y la posesión de hecho; el hecho de la posesión puede recaer y se supone aquí que recae sobre la posesión legal; y la posesión de hecho no es de suyo más que una mera tenencia, de la cual aquí no se trata.»

Más abajo, en el § II, agrega: «Puede litigarse, pues, sobre la *posesión, en juicio sumario ó en juicio plenario*: se litiga en juicio *sumario* cuando se trata sólo de la posesión *actual y momentánea*, esto es, de la posesión que uno tiene ó debe tener *en el acto ó momento*. . . . y se litiga en juicio *plenario* cuando se disputa sobre la *posesión permanente y perpetua* que uno tiene ó debe tener en virtud de la ley, aunque en el acto no la tenga. Ambos juicios se dicen *juicios posesorios* y las acciones que en ambas se ejercen se llaman también *acciones posesorias*, con la diferencia que *la acción que se deduce en el plenario no tiene nombre particular* y la que se *propone en el sumario es la que se denomina interdicto*, cuyo nombre se da también al juicio mismo. Pero el juicio sumario se sustancia brevemente, sin las solemnidades del ordinario. . . . y el juicio *plenario* se sustancia por el método y términos del juicio ordinario. En el plenario se procede con pleno conocimiento de causa y se requiere, por lo tanto, una prueba completa de la posesión y de sus calidades, al paso que en



el sumario basta una justificación semiplena. En el *plenario* se confiere ó declara la *posesión definitivamente*, y en el *sumario*, sólo *interinamente*, sin perjuicio del que tenga mejor derecho. Así es que *después de la decisión del interdicto*, ó sea después de la terminación del sumario, *puede entrarse en el plenario sobre la posesión ó propiedad.*»

Luego, después del *interdicto* queda á ventilarse la verdadera *acción posesoria*, la acordada al poseedor anual de conformidad con lo dispuesto en los arts. 2473 y 2495 del Código Civil, ó como la llama éste, la *acción de manutención*, en la que se debate la cuestión *definitiva sobre posesión*; pues su objeto es, como lo expresa el art. 2487, «la manutención de la posesión *en su plenitud y libertad.*»

En esta oportunidad se examina y requiere la concurrencia de todos los requisitos legales, porque «ésta es la única acción posesoria propiamente dicha,» á que son aplicables los arts. 2473 á 2481 del Código, como dice el ilustrado Dr. Segovia en la nota 81, al art. 2497 de su obra.

Pero, ¿por qué procedimiento debe ejercitarse esta acción posesoria por manutención en la posesión?

Los Códigos citados nada dicen á este respecto.

Pienso que debemos nuevamente aplicar la prescripción del artículo 66 del Código de Procedimientos, es decir, el *juicio ordinario*, á que hacen referencia los autores que acabo de citar y con lo que está de acuerdo la legislación española, que ha servido de base á la nuestra, así como la jurisprudencia de nuestros Tribunales.

El Juez Dr. Tedín decía: . . . «y teniendo, además,



en consideración que los *interdictos* son la forma breve y *sumaria* para obtener una reparación *provisoria* contra actos de *turbación* ó *despojo* de la posesión, *dejando* para el *juicio ordinario* la amplia discusión y justificación de los derechos de las partes. » (Ser. 3.^a, tomo 7.^o, pág. 252, de Fallos S. C. N.)

« Las acciones para las cuales las leyes no han creado un juicio excepcional deben sustanciarse por la *vía ordinaria*, » dice la Corte Nacional en la Ser. 1.^a, tomo 7, pág. 319, y Ser. 2.^a, tomo 6.^o, pág. 137; y así también lo han declarado constantemente los Tribunales de la Capital.

El Juez Dr. Molina Arrotea, en el fallo que se halla en la Ser. 2.^a, tomo 4.^o, pág. 244, y cuyo sumario es « rechazado el *interdicto de retener*, el desposeído *sólo puede entablar juicio ordinario*, el sumario de recobrar es improcedente, » decía, en el considerando 2.^o: « Que *si se han salvado* en la resolución definitiva, recaída en el interdicto de retener, las acciones petitorias y *posesorias* correspondientes á M. . . , no es en el concepto que le atribuye.

« Sobre la posesión puede litigarse (dice Escriche) en juicio sumario y en juicio plenario; en el primer caso cuando se trata sólo de la posesión actual y momentánea; y se litiga en plenario, cuando se disputa sobre la posesión permanente y perpetua que uno tiene ó debe tener. »

« Así, pues, *las acciones posesorias salvadas*, no se refieren á los interdictos, *sinó á las acciones ordinarias para conseguir la posesión definitiva.* »

Considerando 3.^o: « Que si fuera procedente instaurar



necesariamente todos los interdictos, se desnaturalizaría su carácter; son juicios esencialmente sumarísimos, á punto de que por la antigua legislación se podía fallar con la sola audiencia del actor; y una vez desechada la pretensión del demandante, debe acudir al juicio *ordinario*, sin que pueda renovar la calificándola con otra denominación.»

La Excm. Cámara confirmó esta resolución, fundándose en el voto del Dr. Damianovich, quien, en lo pertinente, decía: «Sobre si procede la deducción de interdicto de recuperar, cuando ha sido deducido por el mismo hecho y rechazado el de retener, *poco tengo que agregar* á la parte respectiva de la sentencia apelada.

Se entiende en derecho que cuando se elije una vía, no se puede volver á tomar la abandonada, porque sería no concluir jamás é introducir la confusión y hasta la contradicción en algunos casos.

Pero se puede pasar del juicio posesorio al petitorio y del sumario al plenario . . .

Considerando la opinión emitida la más segura ante la brevedad que exigen estos juicios, en que el conflicto es tan apremiante, ante la *salvedad única que consigna la ley para el juicio ordinario* y ante la resolución asentida dictada en igual sentido en el expediente sobre interdicto de retener», etc., pide la confirmación de la sentencia de 1.^a Instancia.

En general, la Jurisprudencia de los Tribunales de la Capital es abundante en resoluciones referentes á este punto, lo que demuestra que se ha prestado siempre á la posesión la protección eficaz que le es debida.

No pudiendo ser turbado en su posesión el que



posee, sinó por sentencia de juez competente, como se dice en la Ser. 1.^a, tomo 2.^o, pág. 309, se ha declarado muchas veces *procedente el interdicto de retener*, aún contra el auto judicial, que ordenaba la posesión sin audiencia del poseedor, como puede verse en los fallos consignados en la Ser. 1.^a, tomo 8.^o, pág. 405; Ser. 2.^a, tomo 2.^o, pág. 212 y tomo 3.^o, pág. 355; Ser. 3.^a, tomo 2.^o, pág. 333 y Ser. 4.^a, tomo 1.^o, pág. 186 y 314 de la Jur. Civil.

Observo que *todos* los juicios que al respecto se han sustanciado ante estos Tribunales, han sido deducidos por los interesados como *interdictos*, y, por consiguiente, los fallos se han limitado siempre, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 578 del Cód. de Proced., á amparar ó á no hacer lugar á lo solicitado; *no habiéndose promovido un solo caso de acción posesoria de manutención por la vía ordinaria*, tal como hemos visto le corresponde.

Como es difícil, especialmente en la Capital, que se presente el caso en que un poseedor no anual solicite amparo contra otro que tampoco lo sea ni tenga derecho de posesión, no es extraño que en todos los juicios que han ocurrido, ó el actor ó el demandado haya invocado la posesión anual, en cuyo examen se ha entrado en el mismo juicio sumario, como un medio de abundar en la comprobación de los extremos legales necesarios para asegurar el triunfo de la acción ó la excepción.

Algo análogo sucede en la Jurisprudencia Federal, si bien se observa más variedad en los casos ocurrentes y se hallan mejor caracterizadas, en los fallos, las diversas



acciones que examino; porque, en la jurisprudencia de los Tribunales de la Capital, se nota, en general, poca claridad en la ilustración de las causas.

Así, ante aquellos Tribunales han ocurrido algunos casos de amparo en la posesión mínima que puede autorizar el interdicto, es decir, de la posesión *actual*, contra un perturbador que no tiene posesión anual, como se observa en la Ser. 1.^a, tomo 9, pág. 365 (consid. 3.^o); Ser. 2.^a, tomo 16, pág. 443 y tomo 18, pág. 323; Ser. 3.^a, tomo 6.^o, pág. 56 (consid. 4.^o).

En otra serie de fallos, tales como los que se registran en la Ser. 2.^a, tomo 18, pág. 260 y tomo 21, pág. 528; Ser. 3.^a, tomo 4.^o, pág. 256 (consid. 1 y 6), tomo 7.^o, pág. 81, y tomo 10, pág. 123, se examina más ó menos la posesión anual y los actos arbitrarios ó vías de hecho del demandado.

En cambio, en los fallos consignados en la Ser. 2.^a, tomo 20, pág. 83 y Ser. 3.^a, tomo 5.^o pág. 375, se discutió la posesión amplia, definitiva, la anual exenta de vicios, porque el demandado era poseedor anual y alegaba derecho de posesión. En ambos casos, la acción fué rechazada, porque la posesión, en que se fundaba, no reunía *todos* los requisitos legales necesarios para autorizar el ejercicio de tal *acción posesoria*: en uno faltaba el *animus domini* y en otro, la anualidad. A pesar de todo, se observa que los interesados, descosos siempre de andar con rapidez en la definición de sus derechos, eligieron el juicio sumario del *interdicto*.

En consecuencia: la acción posesoria llamada *interdicto* de retener, que sólo exige la posesión *actual* y se ejercita por el *juicio sumario* del Código de Procedimien-



tos, es distinta de la *acción posesoria* de manutención, que requiere la posesión *anual, exenta de vicios* y á la que corresponde el *juicio ordinario*, á falta de uno especialmente previsto por la ley.

VI.

Interdicto de recobrar ó de despojo y acción posesoria por restitución.—Son acciones posesorias.—El primero se ejercita en juicio sumario y la segunda, en juicio ordinario.

Con estas acciones, sucede exactamente lo mismo que con las anteriores.

El Código de Procedimientos señala, en el art. 581 y siguientes, el trámite *sumario* que debe seguirse en el *interdicto*, exigiendo que el que lo intente haya estado en *posesión ó tenencia* de la cosa y «que haya sido despojado con *violencia ó clandestinamente* de esa posesión.»

El art. 2477, ya recordado, no exige la anualidad cuando la posesión es turbada por el que no es poseedor anual ni tiene ningún derecho de posesión.

El art. 2490 agrega: que corresponde la acción de despojo á todo poseedor despojado y sus herederos, de la posesión de un inmueble, *aunque su posesión sea viciosa* y sin obligación de producir título alguno contra el despojante» etc. Véanse las notas del Dr. Segovia á estos artículos y pág. 347, tom. 14, Ser. 2 de F. S. C. N.



Según esto, para la procedencia de esta acción de despojo ó *interdicto* de recobrar, se requiere un mínimo de posesión, la *tenencia* ó una *posesión viciosa*, y, en todos los casos, la existencia de *violencia* ó *clandestinidad*.

Entre tanto, el art. 2473 establece que *no puede entablarse acciones posesorias* aquél cuya posesión no esté *exenta de vicios*, y aún más, no tenga el tiempo de un año; siendo uno de sus dos únicos objetos el obtener la restitución de la posesión en su plenitud y libertad. (Art. 2487.)

En ésta, á diferencia del interdicto, no basta el mínimo, sino se requiere el máximo de posesión, es decir, la que reúne todos los caracteres legales necesarios para hacerla apta para prescribir la ajena.

Están, pues, claramente definidas las dos faces de esta acción: el *interdicto*, que requiere como mínimo la tenencia ó una posesión viciosa y siempre la violencia ó clandestinidad, y la que exige el máximo de posesión, la anual y exenta de vicios, aunque no medie violencia ni clandestinidad, á la cuál, no teniendo nombre especial, llamamos *acción posesoria por restitución*.

Es natural que si para la procedencia del interdicto basta un mínimo de posesión, no lo desnaturalizará el hecho de que ésta reúna todos los requisitos legales de que he hecho mención.

El Dr. Segovia, refiriéndose al primero, dice: «Esta no es una *acción posesoria* propiamente dicha, sino más bien una disposición de orden público para prevenir y reprimir el atentado de hacerse justicia por sí mismo, con grave turbación de la paz pública.»

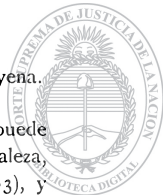
«Así, una vez restablecidas las cosas á su anterior



estado, el vencido, como despojante, puede intentar contra el vencedor la acción posesoria de manutención si procede; porque la sentencia en materia de despojo, sólo produce efectos *provisorios*, aún bajo el punto de vista de la *posesión y nada prejuzga sobre las acciones posesorias* que puedan corresponder.»—(Nota 61 al art. 2492 de su obra.)

« En cuanto al *interdicto* de recobrar, autores, comentaristas y prácticos, exponen que se funda en el principio de eterna razón y de orden social de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, sinó recurriendo al poder, á las autoridades instituidas para administrar justicia; que, en su consecuencia, tiene inmensa importancia, y que sólo así se comprende el gran favor de que ha gozado en todo tiempo.» (Reus.)

« El despojo, ó acto por el cual se priva á alguno de la posesión que ejerce, es, sin duda, una violación de las garantías individuales; aun aquéllos que piensan que la posesión no es un derecho, encuentran punible ese acto, en cuanto cambia perjudicialmente la posición de un individuo, y consideran por eso justo acudir en socorro de él con los medios legales eficaces para restituirle á la situación en que se hallaba. Ese individuo tenía una cosa bajo su poder; el origen del poder que ejercía sería un acto lícito ó ilícito; pero, aun cuando tuviera este último carácter, nadie podía arrebatársela sinó con la mano de la ley. De otra manera las violencias entre los particulares se multiplicarían con gran perturbación del orden social; y para evitarlo, se ha protegido siempre al despojado por el hecho sólo de serlo, según la máxima tan antigua como conveniente:



spoliatus ante omnia restituendus.» (Dr. Pedro Goyena. Tesis)

Por eso es que el art. 2469, establece que nadie puede turbar la posesión *cualquiera* que sea su naturaleza, porque el poseedor «posee porque posee» (2363), y hasta se autoriza el uso de la fuerza para rechazar la agresión, cuando la protección de la ley no pudiera llegar á tiempo. (Art. 2470).

« El despojo, dicen á su vez los autores, puede estar acompañado de injuria real, en cuyo caso es permitido al despojado repeler *incontinenti* al despojante, pudiendo, mientras no desampare la posesión, rechazar la fuerza con la fuerza; pero nó si se ha retirado ante su adversario y le ha dejado posesionarse de la cosa, porque el orden público no consiente que se trate de compensar un delito con otro; de modo que fácil es ver que real y verdaderamente está el fundamento del interdicto de recobrar en un principio de eterna razón, en un principio que puede calificarse de derecho natural». (Reus).

Y si tal es el respeto que merece á los ojos de la ley la posesión, no se puede menos, cuando ésta es *arbitrariamente* violada, que ampararla, volviendo las cosas, en la mayor brevedad posible, á su lugar, para que los interesados, si tienen derechos que deducir, pidan su reconocimiento ante las autoridades constituidas para dar á cada uno lo que es suyo.

El interdicto de recobrar ó de despojo no tiene así otro objeto que restablecer el orden social alterado momentáneamente por el *hecho* arbitrario de un individuo, pero sin prejuzgar ni decidir nada sobre sus derechos.

«Este *interdicto* se da no solamente al que se halle



en la *posesión* de la cosa de que se le despojó, como el propietario, sinó aún al que se halla en la *tenencia* ó *mera ocupación* de la misma, que no constituye la *posesión legal*, como los depositarios, comodatarios ó prenda- rios, y, en su consecuencia, aunque no sea señor de la cosa, y así mismo aún cuando la *posesión* ó *tenencia* sea *viciosa*, esto es, si se hubiese adquirido *vi, clam vel precario*, ó por fuerza, clandestinamente ó por encargo del dueño, como la de los colonos ó inquilinos del despojado. Esto se funda en que en este *interdicto* se trata de reponer las cosas al estado que tenían antes del despojo, para que no tengan efecto alguno los actos violentos ó de clan- destinidad del despojante, en castigo de su exeso y *sin prejuzgarse* sobre el mejor *derecho* de los contendientes, *respecto de la posesión* de la cosa, el cuál les queda á salvo para alegarlo después, en el juicio correspondiente. » (Caravantes)

La no anualidad y «la circunstancia de no exigirse que la posesión sea exenta de vicio, es lo que más hace diferenciar la *acción posesoria* propiamente dicha (*uti possidetis* del derecho romano) de la *acción de despojo* (interdic- to *unde vi*). Las acciones posesorias están fundadas, como hemos dicho antes, en la presunción de propiedad que para sí tiene todo poseedor anual; y es por esto que la Ley exige, á más de la tenencia de la cosa, ciertas condi- ciones que en cierto modo vienen á corroborar esa pre- sunción una vez reunida á la posesión. La acción de despojo, por el contrario, es una medida de orden público, que viene á dar eficacia á lo dispuesto en el art. 2468; es completamente independiente de las acciones posesorias. León Wodon estudia estas dos acciones desde el derecho



romano y deduce consecuencias importantes (véanse núms. 113 á 1160).»—(Llerena, comentario al art. 2490)

«Así, un individuo puede entablar sucesivamente, después de cada condenación, la *acción de despojo*, la *acción posesoria* y las acciones reales, sin que la resolución de una importe prejuzgar en la otra.»

«Son, pues, dos acciones completamente distintas: tan es así, que bien puede suceder que el condenado por la *acción de despojo*, entablada contra él, salga triunfante después en la *acción posesoria*, y, por último, que sea condenado en la acción real. Pero esto no puede suceder vice-versa.»

«La sentencia, en el *juicio de despojo*, como hemos dicho, le deja libre las dos vías: la *acción posesoria* para recuperar su posesión, si prueba que ella reúne todos los requisitos de la Ley, tales como la anualidad y que no sea viciosa, ó la acción real que le corresponda como propietario.» (Autor citado).

Estudiando la cuestión, de si el demandado puede dejar sin efecto la acción de despojo, oponiendo como excepción, la acción posesoria, León Wodon dice, en el núm. 129, que: «Si se pudiera hacer valer la *acción posesoria (complainte)* reconvencionalmente, sería permitir hacer indirectamente lo que no se puede hacer de un modo directo: esto sería paralizar la *acción de despojo (reintégrand)* y neutralizar su principio fundamental *spoliatus ante omnia restituendus*. La facultad de ejercer la acción posesoria y el ejercicio de esta acción no pueden legitimar la *vía de hecho, cuya represión inmediata es el objeto único de la acción de despojo*, como se acaba de demostrar.»



Finalmente, si alguna duda aun quedara sobre la diferencia entre el interdicto de despojo y la acción posesoria por restitución, se desvanecerá en presencia de los siguientes considerandos, en que se apoya el fallo de la Suprema Corte Nacional, que se encuentra en la Ser. 2.^a, tomo 6.^o, pág. 279.

«Primero: La *acción de despojo*, sancionada por el artículo 23, tit. 3.^o, Libro 3.^o (art. 2490) del Código Civil, *sólo tiene por objeto* restituir la posesión de bienes raíces, al que la ha perdido *violentamente ó por vías de hecho, sin prejuzgar nada sobre las acciones posesorias que corresponden, las cuáles podrán intentarse por una ú otra parte, luego que se restablezcan las cosas* en el estado en que antes se hallaban; por cuya razón, se concede esta acción al despojado y sus herederos, aunque su posesión sea viciosa, es decir, aunque la haya adquirido por fuerza, á ocultas de su dueño, por ruego ó encargo del mismo, ó por no haberla poseído bastante tiempo; y sin necesidad de producir título alguno contra el despojante, sus herederos y cómplices, aunque sea el dueño del inmueble.

«Segundo: Que *esta acción* (de despojo) *no es una acción posesoria*, propiamente dicha, para cuyo ejercicio se requiera la posesión anual, ni una acción real fundada en una presunción de propiedad; *sinó una disposición de orden público* con objeto de prevenir la violencia y el atentado de hacerse justicia por sí mismo.

«Tercero: Que *esta acción* (de despojo), por consiguiente, *no es aplicable* al presente caso, porque D....., *no ha sido privado de la posesión de..... por violencias ó vías de hecho* de D....., *SINÓ POR MANDATO JUDICIAL.*



«Cuarto: Que aunque el apoderado de U..... y el Juez de Sección han *confundido* en esta causa las *acciones posesorias con la de despojo*, calificando la acción de U..... indistintamente como interdicto de recuperar la posesión ó como acción de despojo; sin embargo, la calificación ó el nombre que un Juez ó un litigante den á una acción, nunca puede cambiar su naturaleza.

«Quinto: Que la acción que compete á U....., en el presente caso, es en verdad una *acción posesoria con el objeto de recuperar la posesión* tranquila y no interrumpida en que ha estado, á título de dominio y por mucho más tiempo que un año, de la estancia..... y de la que ha sido privado injustamente, *sin ser cuando menos citado y oído en juicio.*»

Distinguidas así claramente ambas acciones, y observando que el *interdicto de recobrar ó de despojo tiene fijado el juicio sumario* en los artículos recordados del Código de Procedimientos, ocurre preguntar á qué trámite debe ajustarse la verdadera *acción posesoria* para recuperar la posesión?

En el silencio del Código de Procedimientos, creo que es de aplicación, como en la acción de manutención, *el juicio ordinario*, de acuerdo con el art. 66 del referido Código.

Fúndome en las mismas consideraciones ya expuestas, por cuanto se trata de las *dos únicas acciones posesorias*, propiamente dichas, que por guardar en la esencia muchos puntos de contacto, ha motivado que la actual Ley de Enjuiciamiento de España, haya hecho uno de los dos interdictos de recobrar y retener, uniformando el procedimiento; reforma aplaudida calurosamente por el



señor Reus, quien opina que ambas acciones «deben ser y son en su esencia una misma. Su diferencia estriba en referirse á momentos distintos de la ejecución de una idea; pero, esto no es razón para que la Ley los distinga. La diferencia, sin hacerla la Ley, resultará de lo que se pruebe; según que aparezca cometido un despojo ó sólo actos de perturbación, así serán los efectos; pero esto, á nuestro juicio, no puede llegar hasta el punto de que si se ha alegado lo primero y resulta lo segundo, ó vice-versa, se deje por eso de atender á la demanda. El más y el menos en puntos que muchas veces no es fácil distinguir, no pueden ser exactamente apreciados; bastará, pues, que se pruebe el hecho general de haber sido atacada la posesión, para que el interdicto prospere, y aún para que tenga todas las consecuencias á que lógicamente pueda dar lugar lo probado. La Ley, por su parte, hace lo suficiente exigiendo, para evitar confuciones, que se expresen con claridad y precisión los actos exteriores en que consistan la perturbación, el conato de perturbarla ó el despojo.

Es decir, que la reforma ha hecho uno de los dos interdictos, *en cuanto al procedimiento*, en cuanto á hacer posible que prospere, sea cualquiera el que se intente, si uno de ellos resulta justificado; ha dejado en pie, como no podía menos, aquellas diferencias que la misma naturaleza de las cosas lleva forzosamente consigo.»

Y en realidad, enumerando los interdictos, el art. 1831 de esa Ley engloba, en su inciso 2.º, el de retener y el de recobrar, prescribiendo en los artículos 1651 á 1662 un mismo procedimiento para ambas acciones. En el artículo 1658 se establece que la sentencia *reservará á*



las partes el derecho que puedan tener sobre la posesión *definitiva*, el que podrán utilizar en el juicio correspondiente.

Es cierto que nuestro Código trata en capítulos separados estos interdictos, pero fácil es observar que el procedimiento es uno mismo, pues así lo indican los artículos 582 y 584.

Es verdad también que al tratar del interdicto de recobrar, el Código no formula un artículo semejante al 579; pero, qué importa si las semejanzas y diferencias entre los interdictos y las acciones posesorias, tales cuales hemos explicado, están en la naturaleza misma de los hechos que les sirven de fundamento?

Así lo ha considerado la Corte en el fallo de la Ser. 3, tomo 12, pág. 61, que se cita al final de este párrafo.

La Ley Nacional fija también los mismos trámites para los interdictos, como puede observarse en los arts. 332 y siguientes; y si señala (art. 336) el *juicio ordinario* á la *acción* (no interdicto) para adquirir la posesión ¿qué razones podrían alegarse para no aplicar el mismo procedimiento ordinario á las otras acciones por manutención y restitución, que, como la de adquirir, son correlativas á los respectivos interdictos sujetos á un mismo juicio sumario? *Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio*.

Doy, pues, por reproducido en este lugar lo expuesto al tratar del juicio ordinario, que corresponde á la acción posesoria por manutención, por ser de clara aplicación analógica.

En cuanto á la Jurisprudencia de los Tribunales de la Capital, que es más extensa respecto de esta acción que en las anteriores, por haberse presentado con más fre-



cuencia la oportunidad de hacerla valer, debe observarse que todos los juicios se han promovido como *interdictos*, y bastando en éstos la posesión actual, requiriéndose esencialmente la existencia de violencia ó clandestinidad, que caracteriza el *despojo*, el examen ha recaído siempre, con especial atención, sobre el carácter de los hechos que han causado la desposesión.

Y así, se ha declarado procedente este interdicto, por haber mediado necesariamente violencia ó clandestinidad ó ambas cosas, y haberse comprobado por lo menos la posesión actual, en los fallos que se encuentran en la Ser. 1.^a, tomo 6, pág. 570 y tomo 9, pág. 297; Ser. 2.^a, tomo 1.^o, pág. 283, tomo 4.^o, págs. 325 y 535, tomo 5.^o, págs. 171 y 385, tomo 8.^o, pág. 301, tomo 9.^o, págs. 165, 175, 240, 319 y 370; Ser. 3.^a, tomo 1.^o, págs. 52 y 58; Ser. 4.^a, tomo 1.^o, págs. 320 y 328 de la Jurisprudencia Civil.

Tal es la influencia decisiva acordada al carácter violento ó clandestino de la desposesión, que el fallo consignado en la Ser. 2.^a, tomo 8.^o, pág. 301, declara que: «reconocido judicialmente por el demandado haber tomado clandestinamente la posesión, *el que entabla el interdicto no necesita justificar que la tenía.*»

Al contrario, se ha rechazado el interdicto, por no mediar violencia ni clandestinidad, aunque se haya comprobado la *posesión*, en los fallos que se registran en la Ser. 1.^a, tomo 5.^o, pág. 441 y tomo 7.^o, pág. 357, y Ser. 4.^a, tomo 2.^o, pág. 102 de la Jurisprudencia Civil.

Referente á la *acción posesoria* por restitución, encuentro un solo fallo, Ser. 4.^a, tomo 3.^o, pág. 336, y éste mismo lo creo muy criticable, porque el interesado



promovió un interdicto de despojo, (por obra nueva), *probó su posesión actual*, la época del despojo y la *violencia* cometida en éste, y, sin embargo, el *interdicto* fué rechazado en virtud del examen que se hizo de la posesión del despojado, porque se encontró que no reunía todos los caracteres legales que constituyen el *derecho de posesión*, que *prescribe la posesión* agena y autoriza el ejercicio de las *acciones posesorias*, propiamente dichas.

El fallo aludido, olvidando la disposición del artículo 2490 del Código Civil y la antigua máxima *spoliatus ante omnia restituendus*, justificó, interponiendo su autoridad judicial, el despojo *violento*, que había cometido el despojante, haciéndose justicia por sí mismo. Recuérdese el núm. 129 de León Wodon citado anteriormente.

La cuestión se examinó como *acción posesoria* y no como *interdicto*, confundiéndose ó no distinguiéndose los diversos caracteres de estas dos clases de acciones.

Estas, en la Jurisprudencia Federal, están mejor definidas.

Se ha declarado procedente el *interdicto*, porque mediaba violencia ó clandestinidad, entre otros muchos fallos, en los de la Ser. 2.^a, tomo 2.^o, pág. 205 y tomo 21, pág. 95; Ser. 3.^a, tomo 3.^o, pág. 252, núm. 1.^o, tomo 8, pág. 172 y tomo 11, pág. 384, y también en el tomo 5.^o, pág. 284, en cuyo considerando 2.^o, la Corte, que conoció originariamente, decía: «Que con arreglo á los artículos 2469 y 2490 del Código Civil, la acción de despojo es procedente en los casos de violencia ó vías de hecho, aún contra el verdadero dueño del inmueble, sin que sea necesario justificar otro extremo que la *detentación material* del inmueble á la fecha del despojo.



Al contrario, por no mediar violencia, no se hizo lugar al interdicto en las causas de la Ser. 2.^a, tomo 19, página 442 y Ser. 3.^a, tomo 3.^o, pág. 358, (considerandos 3.^o y 5.^o)

En la Ser. 3.^a, tomo 12, pág. 61, la Corte, refiriéndose á la destrucción de un muro, por orden y de propia autoridad del demandado, dice: «caracterizando suficientemente tal acto la acción *de despojo* deducida y fundada en la disposición del art. 2490 del Código Civil, que ordena la restitución del despojado, *cualquiera que sea la naturaleza de la posesión*. Por estos fundamentos y *dejando á salvo las acciones de posesión* y propiedad que puedan corresponder á los interesados.....»

En cuanto á la *acción posesoria*, propiamente dicha, á más del fallo ya citado de la Ser. 2.^a, tomo 6.^o, página 279, se encuentran los de la Ser. 2.^a, tomo 15, página 103 y Ser. 3.^a, tomo 3.^o, pág. 252, (núm. 2) y tomo 5.^o, pág. 7. En estos últimos se sustanció la acción en el correspondiente *juicio ordinario*, y fué rechazada porque la *posesión*, en que se fundaba, *no reunía todos* los requisitos legales ya recordados.

En consecuencia, el *interdicto de despojo*, que se ejerce en juicio *sumario*, es una acción distinta de la llamada propiamente *acción posesoria por restitución*, que debe sustanciarse en el *juicio ordinario*.



La acción sub-judice es la llamada acción posesoria por restitución, que debe ejercitarse por la vía ordinaria.

Resumiendo lo expuesto, diremos: que hay tres acciones llamadas *interdictos*, á que hace referencia exclusivamente el Código de Procedimientos, y otras tres, nombradas propiamente *acciones posesorias*, establecidas por el Código Civil.

Estas, no teniendo señalado por aquel Código un procedimiento excepcional, deben ejercitarse en juicio ordinario.

Tienen por objeto, unos y otras, adquirir, retener y recuperar la posesión.

Se ha observado también que solamente las que tienen los dos últimos objetos son verdaderamente *posesorias*, porque se fundan en la posesión ya adquirida.

Pues bien, encuadrando la acción que promuevo en la teoría así desarrollada, fundándome en las disposiciones legales, en la interpretación dada por los autores y en la jurisprudencia de los Tribunales de la Capital y de la Nación, he afirmado que deducía, por la *vía ordinaria*, una *acción posesoria por restitución de la posesión* de un inmueble.

Me explicaré aún más:

Fundo mi acción en la *posesión* que teníamos, yo y mis hermanos, de un inmueble; posesión que reunía *todos* los



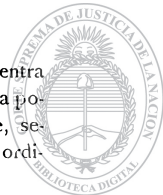
caracteres legales exigidos por el Código Civil, para habilitarme á entablar esta *acción posesoria* en los términos del art. 2473, y por *restitución* (art. 2487), porque hemos sido *desposeídos*.

Y deduzco acción posesoria por restitución y no *interdicto* de recuperar ó de *despojo*, porque entiendo que no ha mediado la *violencia* ó *clandestinidad*, tal como lo exige el inciso 2.º del art. 581 del Código de Procedimientos para caracterizar el interdicto; porque, aun cuando hubo violencia, cometida por la autoridad, y clandestinidad, según un fallo de la Excm. Cámara de la Civil (Ser. 2, tomo 2.º, pág. 212), que califica de tal «el despojo hecho en virtud de una orden judicial, dictada por informaciones falsas,» ha mediado *un mandato judicial*, que hace improcedente el interdicto, de acuerdo con el considerando tercero, ya transcrito, del fallo de la Suprema Corte Nacional, de la Serie 2.ª, tomo 6, página 279.

Finalmente, siendo el juicio sumario propio del interdicto, he entablado mi acción posesoria por la vía *ordinaria*, fundándome en las consideraciones que ya he expuesto, y porque tampoco podría hacerlo por la vía sumaria por una doble razón más.

Primera: porque fundo mi acción en la posesión amplia, completa, con todos los requisitos legales que constituyen el *derecho de posesión*; y segunda: porque la dirijo contra una persona que, escudándose con un auto judicial, pretende poseer á título de propietario.

Va, pues, á ponerse en tela de juicio, no la tenencia ó posesión momentánea ó actual, sino la posesión definitiva, después de la cual ya no hay más que la propiedad.



Puede decirse que en la acción, que promuevo, entra también, como elemento, la acción para adquirir una posesión tenida á título de propietario, y para la que, según hemos visto, se fija por la ley el procedimiento ordinario.

VIII.

La desposesión causada por mandato judicial no autoriza la interposición del interdicto, sino la de la acción posesoria.

Antes de pasar adelante, voy á tocar ligeramente una cuestión tendente á establecer, con mayor claridad, por qué deduzco la acción posesoria por la vía ordinaria y no el interdicto de despojo.

Hemos visto que el interdicto de retener procede aún contra el auto judicial, que ordena la posesión sin audiencia del poseedor. (Véanse los fallos recordados anteriormente).

La razón la daba, en mi concepto, el Dr. Damiano-vich (en el fallo de la Ser. 2.^a, tomo 4, pág. 244), diciendo: «Y tanto más, cuanto que esta Cámara ha declarado ya, en casos semejantes, que el poseedor se defiende con su posesión, desde que posee porque posee y no puede ser privado de su derecho, sin ser oído, *convirtiéndose el auto, que manda dar la posesión contra derecho, en mera citación.*»

Es cierto que esto lo decía sosteniendo precisamente



que «contra el auto judicial, que ordena la posesión, no procede el interdicto de retener,» porque «á su juicio, contra las resoluciones de los jueces, no hay sino *recursos*.»

Pero, cuál es el objeto de la *citación*, y qué se entiende en este caso por recursos?

Evidentemente no pueden ser otros, que: ó el reclamo hecho ante el mismo Juez, para que suspenda los efectos del auto, ó la interposición, de parte del poseedor, de un interdicto de retener.

La Novísima Recopilación, Lib. II, tít. XXXIV, Ley 2, establecía, que no solamente los particulares, sino que ni los mismos jueces podían privar de su posesión á persona alguna, excepto al despojante, sin que primero sea llamada, oída y vencida en juicio; y la que sin haber sido oída y vencida en juicio fuere despojada, debe ser repuesta en su posesión dentro del término de *tres días*.

Es jurisprudencia constante de los Tribunales, cuando se ordena la misión en posesión, hacerlo siempre con la cláusula de *sin perjuicio de los derechos de terceros*, así como atenderse sumariamente, por los mismos jueces que la han ordenado, las reclamaciones que se hicieren; porque se consideran competentes á ese efecto, como se ha resuelto en la Ser. 3, tomo 3, pág. 62.

Pero, si por cualquier circunstancia, por encontrarse, v. g. el bien, de cuya posesión se trata, en distinta jurisdicción, el poseedor no pudiese ocurrir al Juez que ordena la posesión, ó no le fuera posible á éste resolver la oposición en la brevedad que ordena la Ley Recopilada ¿no procedería, como recurso, el *interdicto* opuesto por el poseedor, cuando no hubiere sido oído en el juicio en que se ordena la posesión?



Creo que procedería tal interdicto, so pena de no tener otro recurso que el de dejarse *despojar*. Y así lo han declarado los Tribunales, cuyos fallos, ya citados, constituyen una serie, que puede decirse forman jurisprudencia.

Esto en la hipótesis de que al poseedor se le dejara tiempo para oponerse; pero, cuando, como en el caso *sub-judice*, de un día para otro, se presenta un *ejecutor* (de aquéllos de Corrientes!) con la fuerza pública y una orden judicial dada *contra tercero y por ignorancia ó malicia y hópote insalutato* le despojan de su posesión, ¿qué efectos tendrá esta *citación*, como dice el Dr. Damianovich?

Ya no puede pedirse que no se ejecute lo que está hecho, ni deducirse el interdicto de retener lo que ya no se tiene, y entonces sólo queda el derecho de reclamar la restitución de la posesión, pero por la vía legal, nó del interdicto de despojo, sino de la acción posesoria correspondiente, porque *no se ha cometido violencia al hacerse aquella citación!*

Muchas injusticias se cometen á la sombra de la autoridad judicial, porque al fin los que la sirven son hombres y como tales habemos de todo; pero, una razón superior á la flagilidad humana, el orden, la armonía social, necesaria para la existencia misma, obliga á considerar el mandato judicial como la expresión de la verdad y de la justicia; y así, por más que en realidad haya un *despojo*, sólo debemos ver una *inocente desposesión!*

«Los Jueces, decía el Dr. Damianovich, no tienen ningún interés, sino el de la justicia, que es precisamente de dar á cada uno lo que es suyo.

Son los particulares y nó los Tribunales los que pueden ser sospechados de despojarse con violencia ó clan-



destinidad de la posesión, como aparece del inciso 2.º del art. 581 del Código de Procedimientos. Ni los Jueces, ni los que á ellos acuden, hacen violencia ó proceden con la clandestinidad que tal cosa importa, pues ellos están puestos para hacer pública justicia y éstos usan de su derecho al solicitarla y bien saben á lo que se exponen obrando maliciosamente. Si los Jueces procedieran mal, otros serían los remedios constitucionales y legales.»

El mismo Dr. Damianovich, en el fallo de la Ser. 1.ª tomo 7, pág. 357, agregaba: «De todos modos, el desalojo decretado en juicio no puede nunca dar lugar á la acción de despojo porque ésta supone, por el contrario, la prescindencia de los Tribunales y tiene por objeto que ninguno sea osado de hacerse justicia por su propia mano. Los actos de los Tribunales no constituyen, pues, un despojo, como tampoco constituiría hurto tratándose de cosas muebles, y otras han de ser las defensas, recursos y medios á que den lugar sus resoluciones.

La violencia y la clandestinidad, de que hablan las leyes (art. 581, del Cód. de Proc.) son incompatibles con la intervención de los Tribunales de Justicia, establecidos para impedir la violencia y el fraude, haciendo prevalecer el derecho.»

... «es fuera de duda que el despojo no existe, pues, las resoluciones judiciales, sean cuales fueren, no pueden constituirlo,» agregaba el ex-camarista Dr. Bustos (Ser. 4.ª tomo 2, pág. 102).

Y tal es la razón porque el considerando 3.º, del fallo ya citado de la Suprema Corte Nacional, establecía: que el *interdicto* de despojo «no es aplicable», cuando



el desposeído «no ha sido privado de la posesión por violencias ó vías de hecho. . . . *sinó por mandato judicial.*»

Y, por consiguiente, dados estos antecedentes y las circunstancias de hecho que caracterizan la acción *sub-judice*, puedo decir, apropiándome el considerando quinto del mismo fallo, que «la acción que me compete, en el presente caso, es en verdad una *acción posesoria* con el objeto de recuperar la posesión tanquila y no interrumpida en que hemos estado, á título de dominio y por mucho más tiempo que un año, del campo de referencia, y de la que hemos sido privado injustamente, *sin ser cuando menos citado y oído en juicio.*»

Ya dejé establecido también, que á esta *acción posesoria* corresponde el *juicio ordinario*, que he solicitado se siguiera en la presente causa.

IX.

Definida la acción sub-judice, debe determinarse la competencia del Juez llamado á conocer en ella.—No hay disposición legal que la establezca, ni jurisprudencia al respecto.—Existe un solo fallo, que acepta un dictamen del Dr. Cortés, que trata de esta cuestión.—Este dictamen no hace el estudio completo del punto, y se presta á crítica.—Empezada ésta, nó con argumentos propios del que suscribe, sino con los de las autoridades en la materia.

Definida, como queda, cuál es la acción que ejercito, lo que he debido hacer con alguna prolijidad para desvanecer la confusión que domina el espíritu de mi contra-



parte, corresponde ahora examinar la competencia de V. S. para conocer en este asunto; es decir, determinar ¿cuál es el Juez competente para entender en las *acciones posesorias*?

Nuestros Códigos no lo indican de una manera expresa, lo que dificulta la solución, por cuanto debe deducirse del estudio relacionado de sus disposiciones.

Tampoco puede decirse que los Tribunales de la Capital se hayan pronunciado al respecto, pues he observado que ninguno de sus fallos, al menos de los que se han publicado hasta hoy, ha estudiado detenidamente estas acciones, haciendo las distinciones, que he examinado y determinando su verdadera naturaleza.

Un solo fallo de la Excma. Cámara de lo Civil, que acepta los fundamentos íntegros de un notable dictamen del ilustrado maestro del derecho Dr. Gerónimo Cortés, ha resuelto un caso, en el que se debatía directamente la cuestión de saber cuál era el Juez competente que debía entender en un *interdicto de obra nueva*, referente á un terreno situado en el Partido de Brown de la Provincia de Buenos Aires; se declaró competente al Juez de la situación de la cosa (Ser. 1.^a tomo 1.^o pág. 570 Jur. Civil).

En la Jurisprudencia Federal, no existe ningún fallo, en el que se haya debatido esta cuestión; si bien, el recto é ilustrado ex-Juez Dr. Tedín *entendió y falló un interdicto de recobrar un campo situado en Lincoln* (P. de B. Aires), y la Corte confirmó la sentencia, que rechazaba el *interdicto*, porque no se había acreditado, con «pruebas válidas y legales, los hechos de la *posesión anual* y de la *violencia*.» (Ser. 2, tomo 19, pág. 442).



El Dr. Tedín se consideró, pues, competente y así lo aceptó la Suprema Corte.

En la Jurisprudencia Civil de la Capital, existen dos fallos más, que se relacionan con este asunto, pero que absolutamente nada nuevo traen al debate, por cuanto se basan en el ya citado.

En efecto, en la Ser. 1.^a tomo 5.^o pág. 583, se encuentra uno, que declara competentes á los Tribunales de la Capital para conocer en las *acciones personales* (se trataba de una *acción* para adquirir la posesión) sobre bienes raíces situados fuera de su jurisdicción, y cuyo considerando 9.^o, contestando la excepción de incompetencia, que se fundaba en el fallo primeramente citado, decía: «que la resolución recordada y publicada en la Ser. 1.^a tomo 1.^o pág. 570, no contradice los principios expuestos; pues, allí se trataba del *interdicto de obra nueva*, que pertenece á las acciones posesorias, cuya naturaleza es especial, y, según la doctrina citada, el Juez competente, para intervenir en dicho *interdicto*, era el del lugar en que la cosa estaba situada.»

El otro se encuentra en la Ser. 2.^a tomo 5, pág. 411, el que, aceptando los fundamentos de otro breve dictamen del mismo Dr. Cortés, declaró que contra la testamentaría sólo se promueven las *acciones personales* y no «las reales ó por *interdictos* en que serían competentes los Jueces que ejercen jurisdicción donde se encuentra situado el campo que se disputa.»—El sumario de este fallo expresa más de lo resuelto.

Se ve que estos dos fallos son como consecuencias del primeramente citado, y, por consiguiente, basta que me detenga á examinar aquél, que, por otra parte, es el



único en que se ha estudiado esta cuestión, aunque no tan completa y acertadamente como hubiera sido de desear y esperar del ilustrado juriconsulto, así como de los señores Camaristas, que aceptaron *in-limine* su dictamen.

Pero ¿cómo voy á hacer yo la crítica de ese dictamen del Dr. Cortés, que es el germen de la nascente jurisprudencia de los Tribunales de la Capital, sin caer *ipso-facto* en el ridículo?

Una sola consideración me decide á intentarlo, y es que puedo hacerlo con preciosas armas ajenas y de toda precisión, puesto que pertenecen á personas de indiscutible autoridad, entre ellas el mismo Dr. Cortés y el Doctor Velez Sarsfield, que está en contra de las conclusiones de aquel dictamen.

Veámoslo.

He distinguido, creo de una manera indudable, con el apoyo de la Ley y la interpretación dada por los autores y la Jurisprudencia, *dos órdenes* de acciones, llamadas posesorias: los *interdictos* y las *acciones posesorias* propiamente dichas.

He observado también que las que tienden á adquirir no son posesorias, porque no se basan en la posesión, si bien se les da ese nombre porque tienen por objeto el adquirirla.

• Como es constante, dice el Dr. Cortés en la vista citada, la *naturaleza de las acciones participa de la de los derechos* que les sirven de materia y á cuya ejecución se encaminan, siendo *reales ó personales según éstos lo sean, é influyendo directamente esa clasificación en la determinación del Tribunal*, que debe conocer en ellas; pues, suministra la base que establece su competencia, la



que se deriva de las tres causas á que pueden reducirse las que ordinariamente surten fuero: 1.º el lugar del contrato ó del delito; 2.º el del *domicilio del demandado*; y 3.º donde se encuentra situada la cosa objeto del litigio; prevaleciendo *aquéllas* en las acciones *personales* y éstas en las reales.»

«¿Cómo se han de considerar, pues, los *interdictos*» — y las *acciones posesorias*?

«Son acciones reales ó personales?—Proponer esta cuestión, equivale á preguntar si la *posesión* es un derecho; y si lo es, á qué clase de derechos se haya de adjudicar.»

El Dr. Cortés, luego de estudiar las disposiciones de nuestro Código Civil, recordando los antecedentes de la legislación romana, dice: «*Demostrado* que el Código vigente clasifica por *personales el derecho de posesión y los interdictos*, que son las acciones de que se trata en el presente juicio, parece que sería lógico deducir la jurisdicción del fuero del domicilio del demandado. . . . , sin embargo, no procede, desde luego, esta deducción,..... por que, si bien *puede asegurarse que el autor del Código reputó la posesión un derecho personal*, él mismo previene, (1), no obstante, que es anómalo é irregular (un derecho mixto); no siguiendo en todo las reglas de los demás derechos personales; y ya hemos visto que aunque tales denominaba también á los interdictos de Derecho Romano, les designaba, á pesar de esto, por jueces com-

(1) Téngase presente desde ya que el Dr. Velez no *previene nada*, porque la nota ilustrativa á que se hace referencia, es no de él sino de Molitor, como lo veremos más adelante.

petentes, á los del lugar en que la cosa se hallaba situada.»

Creo que esta conclusión no es exacta por una doble razón: primera, porque ni en la teoría, ni en nuestra legislación vigente se admite la posesión como un *derecho mixto*, y segunda, porque esa conclusión, á que arriba el Dr. Cortés, sería aplicable, *por otras razones*, á los interdictos, pero nó á las acciones posesorias, propiamente dichas.

Para demostrarlo, veamos cuál es la naturaleza de la posesión y la de los interdictos y acciones posesorias?





Teorías de la posesión de Savigny y de Molitor expuestas por el Dr. Pedro Goyena, quien opina, como el segundo, que es un derecho mixto.—El Dr. Cortés demuestra que el «Código vigente clasifica por personales el derecho de posesión y los interdictos»; sin embargo, fundándose en una nota ilustrativa pretende deducir que el Dr. Velez consideraba la posesión como un derecho mixto.—El Dr. Cortés sufre un error: la nota no es del Dr. Velez sino de Molitor y precisamente es el párrafo que cita y acepta el Dr. Goyena.—El Dr. Velez declara expresamente que «en este Código no reconocemos acciones mixtas.»—Opiniones de varios autores y especialmente de Ortolán y Maynz, quienes critican, declarándolas IN PERSONAM, las llamadas acciones mixtas, desde Justiniano.—Mr. Laurent opina que no hay acciones mixtas porque no existen derechos mixtos.—La posesión, base de las acciones posesorias, es un derecho exclusivamente personal.

El Dr. Pedro Goyena decía, en su tesis: «Para Savigny la posesión es la posibilidad física de disponer de las cosas con exclusión de los demás. La tenencia ó detención de la cosa es, según su doctrina, lo esencial de la posesión. Así, en su opinión, *la posesión es un hecho*; sólo por sus efectos es un derecho. Explica luego por qué ese hecho llega á ser protegido como si fuera en realidad un derecho. Un acto de violencia contra la posesión, dice,



afecta dañosamente la posición del individuo que está en relación con la cosa poseída, é importa por lo mismo una violación de su personalidad. Para proteger esta personalidad la ley interviene y protege la posesión. »

« Molitor ha combatido esta opinión, á nuestro juicio, victoriosamente, demostrando que toda *posesión es un derecho*.» (Velez Sarsfield, nota al art. 2351).

« El Dr. Velez, continúa el Dr. Goyena, piensa como Molitor que la posesión es un *derecho*, doctrina que nos parece la verdadera. Savigny no ha podido llegar á decir neta y simplemente la posesión no es más que un hecho. Ella entraña, sin duda alguna, un hecho que forma, digamos así, su cuerpo ó su materia. No conseguimos formar idea de la posesión, si prescindimos de concebir una relación física entre el hombre y la cosa; pero esa relación externa no constituye por sí sola la posesión, la cual implica, además, un elemento, el *animus*, la intención, la voluntad del hombre ejerciendo su imperio sobre una parte del mundo externo. Cuando falta el elemento interior, existiendo únicamente la relación física á que nos hemos referido, la cosa está en las manos del hombre, *veluti si quis dormienti aliquid in manu ponat* (como si se pusiese algo en las manos de quien duerme), como pintoresca y enérgicamente dice la ley romana..... Se trata de asignar al elemento externo y al elemento interno de la posesión, su importancia respectiva. Savigny hace predominar el primero, á punto de declararlo el elemento esencial. Siguiendo la doctrina de Molitor, aceptada por el Dr. Velez, nosotros pensamos que en materia de posesión, como en todas las relaciones jurídicas, el elemento principal reside en la voluntad hu-



mana, raíz única é indispensable de todos los derechos... La posesión existe allí donde hay un individuo que tenga una cosa con la intención de considerarla como suya, *animo dominió animus rem sibi habendi.*» Véase artículo 2351 del Código Civil.

Sobre el fundamento filosófico del derecho de posesión puede consultarse el § 106 de las «Lecciones de Filosofía del Derecho» del Dr. W. Escalante, y Maynz § 80.

« Establecido ya (continúa aún el Dr. Goyena) que la posesión es algo más que un hecho, establecido que es una manifestación de la voluntad humana sobre una parte del mundo exterior, garantida por las leyes, es decir, un derecho, debemos examinar á qué clase de derechos pertenece.... Savigny, considerando «la posesión como base de los interdictos, establece que la posesión es un derecho personal. Cita la L. I, § 3, *Dig. de interdictis*, que dice: *interdicta omnia, licet in rem videantur concepta, vi tamen ipsa personalia sunt*, (todo interdicto, aún cuando parezcan concebidos *in rem*, lo son, sin embargo *in personam*) y fundándose en que según ella los *interdictos posesorios son acciones personales*, deduce que la *posesión*, á la cual corresponden como acciones esos interdictos, *es un derecho personal*.... Molitor, dice: «la posesión no es un derecho puramente real, porque aunque la cosa esté inmediatamente sometida al poseedor, este derecho no puede ser perseguido contra los terceros poseedores, sinó solamente contra aquéllos que han violado la posesión.... Por otra parte, la posesión no es un derecho puramente personal, un derecho mediato sobre la cosa; no es un *jus ad rem*, en el sentido de que para tener la cosa sea necesario el hecho, sea necesaria



la mediación de una tercera persona obligada á entregarla ó á darla. El derecho de posesión no es un derecho directo sobre la cosa.

No es, pues, en sí un derecho puramente real, ni un derecho puramente personal, pero como *el derecho manifiesta sobre todo su carácter y su energía por la acción*, diremos que pertenece *más bien* á la clase de los derechos *personales*. Podríamos llamarle derecho *real-personal*: real porque el derecho sobre la cosa es directo é inmediato, motivo por el cual los interdictos son ó parecen ser *concepta in rem*, y personal, por que el interdicto no se intenta sinó contra el autor de un hecho, del hecho de la turbación posesoria, sin que se pueda alcanzar á los terceros poseedores. *Ambos autores*, pues, consideran la posesión como un *derecho personal*, con esta diferencia: que Savigny *lo afirma* neta y categóricamente, mientras que Molitor dice que *más bien* es un derecho personal, añadiendo, como se ha visto, que podría llamarse *real-personal*. *Esta opinión es, en efecto, acertada*. Si se entiende por derecho real al que estriba en una relación directa con las cosas, la posesión, que somete una cosa al imperio de la voluntad humana, (1) es sin duda alguna un derecho real. Si se entiende por derecho personal, aquél que sólo puede ejercitarse contra ciertas personas, la posesión, cuyas acciones sólo se intentan contra el que la viola, es un derecho personal. Siendo exactas (2) ambas observaciones, diremos que la

(1) (2) Esta afirmación es demasiado absoluta y conviene á la propiedad, pero nó á la posesión, que se refiere sólo al uso y goce de la cosa.



posesión es un derecho especial, que tiene caracteres del derecho real y del derecho personal.»

Estudiando nuestra legislación positiva, el Dr. Cortés llega, como ya lo he dicho, al mismo resultado que el Dr. Goyena, esto es, que la *posesión es un derecho mixto*; pero debemos observar desde ya que tal conclusión no la deduce del cuerpo de las disposiciones legales, sino de la *nota* ilustrativa puesta antes del *art. 2351* que pertenece á Molitor y nó al Dr. Velez Sarsfield, como parece haberlo creído equivocadamente el Dr. Cortés.

«Nuestro Código Civil, dice este ilustrado jurisconsulto, *no considera la posesión un derecho real y esto se puede demostrar*, no solamente por la exposición de su autor en la nota antes mencionada, en que así lo manifiesta expresamente, indicando también con arreglo á la doctrina de Savigny, que los interdictos son acciones penales, que nacen de delito ó cuasi-delito, sino también por el *texto mismo de sus disposiciones* sobre la materia.»

«Así, declarando en el título 4.^o *de los derechos reales*, el cuál viene después del tratado de la posesión, que no existen otros de esta clase que los que la ley reconoce, el art. 2.^o (2503) los enumera á todos prolijamente, sin hacer mención alguna entre éstos del derecho de posesión.»

«En el tit. IX *de las acciones reales* (2756 y sigtes), sucede una cosa semejante; porque, después de declarar que todas ellas nacen de la propiedad, ya sea el dominio pleno ó sus desmembraciones, agrega: que aquéllas no son más que tres: la *revindicatoria*, *confesoria* y *negatoria*, á ninguna de las cuales clases pueden ciertamente referirse los interdictos.»



«Pero, lo que viene á quitar toda duda al respecto (dice el mismo Dr. Cortés), es el contenido del art. 15, tít. 3, *De las acciones posesorias* (art. 2482), en el cual no sólo contrapone el juicio *petitorio* al *posesorio*, sino también las *acciones posesorias á las reales*; y esto por tres veces consecutivas en una misma disposición, como lo notará V. E.»

El art. 2482 dice así: «El que tuviere derecho de poseer y fuere turbado ó despojado en su posesión, puede intentar la *acción real*, que le competa, ó servirse de las *acciones posesorias*; pero no podrá acumular el *posesorio* al *petitorio* (1). Si intentase *acción real*, perderá el derecho á intentar las *acciones posesorias*; pero, si usase de las *acciones posesorias*, podrá usar después de la *acción real*.»

También, en la nota al art. 2091, se dice: «En fin, toda *acción real*, y aún las *acciones personales ó posesorias*, que pueden ser ejercidas contra terceros.» . . .

Por consiguiente, si queda «*demostrado*, (por el mismo Dr. Cortés), que el Código vigente clasifica por *personales* el derecho de *posesión* y los *interdictos* . . . ; si *puede asegurarse* que el autor del Código reputó la posesión un derecho personal,» es lógico deducir de una simple nota ilustrativa, que no es tal y sí un *derecho mixto*.³

Así lo considera Molitor en la nota de referencia, que le pertenece, porque toda ella es transcripción íntegra

(1) En breve veremos que las acciones son exclusivamente *personales ó reales*, y si el Dr. Velez dice, en la nota á este artículo, que: «las acciones *petitorias* son las que tienen por fin un *derecho real*,» es evidente que las acciones *posesorias* tendrán por objeto un *derecho personal*.



del § 11 de su tratado sobre «La Posesión», pero en ninguna parte el Dr. Velez ha dicho que hacía suyas esas opiniones de Molitor.

El Dr. Cortés sufre un grave error afirmando que «*el autor de nuestro Código Civil, en la nota al art. 1.º tít 2.º de la posesión, siguiendo al parecer la opinión de Molitor, DICE:*» . . . ; pues, la nota es de Molitor, aunque así no se exprese en ese párrafo, ni esté entre comillas, y el error del Dr. Cortés es evidente, porque si así no fuera, no afirmaría que en ella se *sigue al parecer* la opinión de Molitor.

Es cierto que al final de su nota al art. 2351, el Doctor Velez manifiesta que á su juicio Molitor ha combatido victoriosamente la opinión de Savigny de «que la posesión no es sinó un hecho y sólo un derecho por sus efectos, que son la prescripción y las acciones posesorias, diciendo: así la posesión es un hecho y un derecho á la vez»; pero se completa su idea en el párrafo final: «*demonstrando que la posesión es un derecho*», de lo que indudablemente no puede deducirse que el Dr. Velez acepte la opinión de Molitor de que es un derecho, pero *mixto*.

Y aún más, sería ilógico sacar tal deducción, y menos para hacerla prevalecer sobre la que resulta del texto de la ley, del mero hecho de la transcripción de un párrafo de Molitor, cuando el Dr. Velez ha dicho *expresamente en su nota* al art. 4023: «*En este Código no reconocemos acciones mixtas de reales y personales.*»

De acuerdo con esto el art. 497 del mismo Código habla solamente del *derecho personal*, al que corresponde una obligación personal y del derecho *real*, al que no corresponde obligación alguna.



El art. 4.º del Código de Procedimientos se refiere también exclusivamente á las acciones *reales y personales*.

Se ha hecho, pues, exclusión, de nuestros Códigos, de las llamadas acciones mixtas, y con esto el Dr. Velez no ha hecho sinó adelantarse al progreso de la ciencia, que empieza á calificar definitivamente de errónea tal clasificación.

En efecto, «mucho se ha discutido acerca de la naturaleza de las acciones mixtas y no falta quien asegura que no existen, que sólo hay acciones personales y acciones reales.

Justiniano no hace más que poner ejemplos de esta clase de acciones.

Según Ulpiano son mixtas, porque las dos partes son demandantes.

Pothier dice que lo son, porque, á más de la cosa, se piden daños y perjuicios.

Boncenne y también Favard combaten con datos irrefutables estas teorías.

Para Voet, las acciones mixtas son más reales que personales, y para Vinio son más personales que reales.

Thouret, en su proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, dijo que «las acciones mixtas quedaban abrogadas.» Esto es quitar muchas espinas á la zarza, observa Boncenne.» (Reus tomo 1.º pág. 58).

Los Sres. de la Serna y Montalván, hablando de la *familix eriscundæ, communi dividundo y finium regundorum*, dice: á pesar del carácter de *mixtas* que hemos dado á estas acciones, atemperándonos á la doctrina admitida generalmente, *no puede negarse* que en rigor son



acciones personales, porque toman su fundamento de las relaciones que existen entre las partes, por razón de la comunión ó confusión en que se hallan; relaciones que dan lugar á un cuasi-contrato.»—(Tratado de procedimientos judiciales tomo 1.º pág. 262.)

Caravantes dice: «La razón que en nuestro concepto atribuye á las acciones, de que vamos hablando, el carácter y la naturaleza de mixtas, dicen los autores de la Enciclopedia, se explica en pocas palabras. La acción real se distingue de la personal, en que, por la primera, se reclama una cosa sin consideración á la persona que la detenta, y la segunda se entabla y provoca precisamente porque hay una persona obligada. *Ambas se confunden cuando se reivindica una cosa contra aquél á quien cierta obligación ó compromiso formal obliga á entregarla* (1).

De aquí se deduce fácilmente la razón que da á las acciones mencionadas el carácter de mixtas; porque siendo *antes* que la reivindicación de una cosa, unas demandas dirigidas a determinar la parte de derecho de

(1) Esta observación quizá fuera cierta recordando que en el derecho francés la simple convención transmite la propiedad, sin necesidad de la tradición, y en tal caso, la acción que se ejercita, para reclamar el derecho *real* adquirido por el contrato, contra la persona que se ha obligado á entregar la cosa, sería mixta. Pero, en nuestra legislación, *antes de la tradición* de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real (art. 4.º de las obligaciones de dar)....., el dominio importa un derecho real, en virtud del cual una cosa se encuentra sometida á la voluntad y acción de una persona (art. 1.º del dominio)... sin tradición, por algunos de los medios legales (arts. 28, 29 y 30 de la posesión) no hay dominio y *si únicamente relaciones personales*» (R. García, Obras Jurídicas, tomo 2.º pág. 377.)

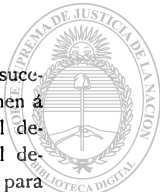


cada uno de los interesados en esa cosa misma, *nacen del cuasi-contrato y de la disposición de la Ley*, que quiere que nadie sea obligado á vivir en la indivisión ó en oscuridad ó confusión de sus derechos» (tomo 1.º pág. 249 núm. 316).

Boncenne, á quien pertenece el párrafo anterior, continúa:

«Estos caracteres de *personalidad* subsisten independientemente de las prestaciones personales que pueden ir unidas á la demanda. La acción de deslinde se complica á menudo con la reivindicación de una porción de terreno usurpado en la confusión de límites; pero, siempre le queda el carácter de *personalidad que sale del cuasi-contrato entre vecinos y de una obligación impuesta por la Ley*. (Théorie de la proc. civ. tomo 1.º cap. V.)

El Jurisconsulto Ortalán, demostrando que la división *actio in rem* y *actio in personam*, «dimana esencialmente, y ante todo, de la naturaleza del derecho,» cuya división en *real* y *personal* «está en la naturaleza de las cosas y es de todas las épocas y de todos los lugares,» dice, que: «Si se considera la redacción de la fórmula, no puede presentarse la idea de que una acción sea á la vez concebida *in rem* é *in personam*; porque, es imposible que el nombre del demandado sea al mismo tiempo enunciado y no enunciado en la *intentio*; pero, puede suceder, que la misma persona tenga relativamente al mismo objeto un derecho de propiedad y un derecho de obligación; por ejemplo, si me ha arrendado ó confiado una cosa en depósito, tengo á la vez respecto de esta cosa el derecho real de propiedad en general, y además, en particular, el derecho de obligación que resulta de



nuestro contrato. Lo mismo los coherederos en la sucesión y los copropietarios de una cosa indivisa; tienen á la vez, con relación á esta herencia y á esta cosa, el derecho real de propiedad en general y en particular el derecho de obligación procedente *cuasi ex-contractu* para exigir la partición. Igualmente, si nuestros dos campos están vecinos, tengo, relativamente á mi campo, el derecho real de propiedad en general, y contra vos en particular el derecho de obligación que resulta *cuasi ex-contractu* para obligaros á fijar límites. Pero son dos derechos distintos, que se ejercen por dos acciones distintas y separadas, según que necesite hacer reconocer el uno ó el otro. Así con relación á la naturaleza del derecho, como respecto á la redacción de la fórmula, no podría ser la misma acción, bajo el sistema formulario, á la vez *in rem* é *in personam*: por ejemplo, cuando procedo contra vos por las acciones divisorias *familiæ erciscundæ*, *communi dividundo*, ó por la acción para el señalamiento de límites (*finium regundorum*), persigo puramente el cumplimiento de vuestra obligación: mi derecho de herencia ó de propiedad, lejos de debatirse y decidirse en estas acciones, se da por supuesto en ellas, porque si se pusiere en cuestión, sería un negocio prejudicial, el objeto de un *prejudicium*, que habría que evacuar previamente. Así, las tres acciones mencionadas son, en cuanto á la naturaleza del derecho, tres acciones *in personam*, que persiguen el cumplimiento de una obligación nacida *cuasi ex-contractu*....

Estoy, pues, convencido de que jamás ocurrió á los Jurisconsultos, en tiempo del sistema formulario, considerar estas acciones á la vez *in rem* é *in personam*, y



hacer de ellas una tercera clase bajo la denominación de acciones *mixtas*. Esto supuesto, la división de que nos ocupamos no consta más que de dos términos: acciones *in rem* y acciones *in personam*, *no hay medio ni subdivisión posible*. Si más tarde, los redactores de las instituciones de Justiniano, dijeron, de las tres acciones de que acabamos de hablar: *mixtam causam obtinere videntur, tam in rem quam in personam* (parece tener una naturaleza mixta, tanto real como personal) fué en una época en que los antecedentes del procedimiento formulario se habían perdido de vista; y aún así no forman una tercera clase de acciones las acciones mixtas, puesto que en esta misma legislación de Justiniano están calificadas de *actiones personales*» (Instituciones de Justiniano, tomo 2.º, pág. 561).

En análogo sentido se pronuncia Maynz, pues en el § 50 del primer tomo, al tratar de las acciones, acepta como división general, comprensiva de todos los derechos y basada en la naturaleza de las cosas, la de *in rem acciones* é *in personam acciones*; y en el núm. II de ese mismo §, al tratar de las acciones llamadas *mixtas*, se reserva demostrar «que esta apreciación resulta de un error y que las acciones de partición son verdaderas *actiones in personam*.»

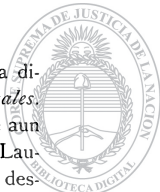
En efecto, en el § 278 del 2.º tomo, dice: «Según un pasaje de las Instituciones, las acciones divisorias son acciones *mixtas*, en el sentido de que ocupan un lugar intermedio entre las *actiones in rem* y las *actiones in personam*. Esta aserción de Justiniano es desde luego incompatible con la naturaleza misma de la división en *actiones in rem* é *in personam*, división que evidentemente abarca



toda la materia de las acciones y no deja lugar á una clase intermedia. En segundo lugar, está en contradicción con muchos textos positivos de nuestras leyes. Lo que ha dado lugar al *error* de Justiniano, es probablemente la circunstancia de que la sentencia en los *judicia divisoria* es atributiva de propiedad para los coparticipes; mas, como la propiedad es un derecho real, se ha pensado que una acción que producía el efecto de atribuir á una parte el derecho de propiedad, debía tener un carácter real; y como *el carácter personal de estas acciones era incontestable*, de ahí el carácter mixto. Un examen más detenido demuestra, no obstante, de una manera irresistible, que nuestras acciones son *por su naturaleza exclusivamente personales*. Lo son, en primer lugar, por su causa y por su origen, porque están fundadas en las relaciones obligatorias que existen entre los comuneros; en segundo lugar, lo son por su dirección, pues se dan contra una persona que está siempre determinada previamente, por el lazo obligatorio de la comunidad. Por fin, son personales por el objeto á que se encaminan. Lo que las partes persiguen en estos juicios es, en efecto, no el mantenimiento de su derecho, sinó, por el contrario, la cesación de las relaciones de derechos, existentes.

Bajo este punto de vista, la circunstancia que ha hecho que se considerasen nuestras acciones como mixtas, prueba precisamente que no participan en nada de la naturaleza de la reivindicación, porque esta acción supone un derecho existente y no un derecho de propiedad que se va á adquirir.»

Luego, pues, según se observa, hasta las mismas acciones llamadas *mixtas* desde Justiniano, no son conside-



radas actualmente como tales, no admitiéndose otra división de *derechos y acciones* que en *reales y personales*.

Para terminar y desvanecer la mínima duda que aun quedara en el ánimo, veamos lo que dice el sabio Mr. Laurent en el tomo 6.º, núm. 78 de su grande obra, después de distinguir lo que es derecho personal y real, y á propósito de las definiciones que dan la Corte de Casación y Pothier, de las *acciones mixtas*.

«Sea lo que fuere, las dos definiciones de las acciones mixtas concuerdan en un punto, que para nosotros, es esencial; que la *acción mixta* no significa un *derecho mixto* perseguido en juicio. En cuanto á la definición de Pothier la cosa es evidente: es porque el derecho del actor á pedir el deslinde ó la división, deriva de un cuasi contrato, es. decir, de una obligación personal, por lo que la acción real por su objeto, toma un carácter personal. La definición de la Corte de Casación no implica, desde luego, que haya derechos mixtos; si los hubiera la acción sería siempre mixta, lo sería por su esencia, mientras que no lo es sinó porque el actor, á más de la cosa, reclama *casi siempre* prestaciones. Después de esto se puede negar que haya *acciones mixtas*. En efecto, la *acción real* es el *derecho real* ejercitado en juicio; la *acción personal* es el *derecho de obligación* perseguido en juicio; luego la *acción mixta* debería también ser el *derecho mixto* ejercitado en juicio; mientras que en la doctrina de Pothier, la acción es real en cuanto á su objeto y no es personal, sinó porque se deriva de una obligación; y en la doctrina de la Corte de Casación, es necesario decir que la acción es siempre real, porque las prestaciones que la hacen mixta no son de su esencia. Siempre resulta que no hay



derecho mixto; en efecto, *la razón no concibe que un solo y mismo derecho sea á un tiempo personal y real*, pues que las dos especies de derechos difieren bajo todos respectos, como acabamos de decirlo.»

«*Nuestra conclusión es que no hay acciones mixtas, porque no hay derechos mixtos.....* Mr. Demolombe dice, como nosotros, que no hay derechos mixtos; esta forma de lenguaje, agrega, le chocaría vivamente si fuera empleada. Esta confesión condena la teoría de las acciones mixtas, porque *el derecho no puede tener otra naturaleza que la de la acción* por la cual se ejercita en juicio..... ¿Cómo se explica que no haya dos autores que estén de acuerdo sobre la naturaleza de estas acciones?—Cómo se explica que aquéllos mismos que enseñan que hay acciones mixtas se contradicen á cada paso?—No será esto una prueba de que la distinción es falsa?»

Por consiguiente, si en teoría la clasificación de derechos y acciones mixtas, es falsa; si en nuestro Código Civil «no reconocemos acciones mixtas de reales y personales;» si «nuestro Código no considera la posesión un derecho real;»..... si «puede asegurarse y queda demostrado que nuestro Código reputa la posesión un derecho personal;» si las acciones tienen la misma naturaleza que los derechos de donde proceden, porque son su ejercicio en juicio, y la posesión es la base de las acciones posesorias, ¿qué más pueden ser éstas sinó *exclusivamente personales*? (1)

(1) Maynz, en el § 88, de las acciones posesorias, dice «unos y otros suponen que el demandante era poseedor en el momento en que la lesión tuvo lugar, y no se dan más que contra la persona que se ha hecho culpable de esta lesión; pues las acciones posesorias son esencialmente in personam.» Véase también el § 71 con sus notas 18, 36 y 37 y § 80 con la nota 7 y sus citas.



Y si las *acciones posesorias son acciones personales* y no reales ni mixtas, cuál será el Juez competente para entender en ellas?

Para decidirlo, necesitamos ver aún algo más.

XI

Demostrado que las acciones posesorias son acciones personales, correspondería atribuir su conocimiento al Juez del domicilio, de acuerdo con el art. 4.º inciso 4.º del Código de Procedimientos; pero, el hecho elocuente de que desde la legislación de Justiniano se indica como competente al de la situación de la cosa, obliga á estudiar la naturaleza de las acciones posesorias para buscar una explicación satisfactoria antes de desestimar tal antecedente.

El Dr. Cortés, á más de fundar su dictamen en la naturaleza mixta que creía se atribuía por el Dr. Velez Sarsfield á la posesión y á las acciones posesorias, como acabo de examinarlo, aduce un argumento histórico en favor de la *lex rei sitæ*, diciendo que las legislaciones romana, canónica y española designaban, como Juez competente, al del lugar de la situación de la cosa y nó al del domicilio.



Nada de particular tiene que el derecho canónico someta el conocimiento de las acciones posesorias al Juez de la situación de la cosa, porque, como dice el Dr. Cortés, «concediendo la acción de despojo contra el tercer poseedor, considera, sin duda, la *posesión como derecho real*.» (1)

Pero, lo extraño es que el Derecho Romano y la legislación Española (2), que, como la nuestra, consideran que la posesión y las acciones posesorias son *personales* designen, como Juez competente para entender en ellas, al de la situación de la cosa.

La necesidad de explicar esta circunstancia, probablemente ha hecho pensar en que la posesión era un derecho *mixto*.

«El Derecho Romano, dice el Dr. Cortés, establecía que la posesión consistía más bien en el hecho, que en un derecho; *potius in facto, quam in jure consistit*; y aunque declaraba que los interdictos, á pesar de hallarse concebidos con relación á la cosa, eran, sin embargo, por su naturaleza personales,.... atribuía con todo su conocimiento al Juez del lugar donde se hallaba ubicada la cosa, cuya posesión se disputaba: *ubi aut vis facta dicitur, aut mo-*

(1) El art. 507 del Código de Zurich, concede también la acción de restituir contra terceros poseedores; sin embargo, Mr. Bluntchli, redactor del Código, en el comentario que publicó al mismo, dice que *es una acción personal y de ningún modo real...* (Tratado de D. Civil Germánico de Lehr, pág. 102.)

(2) Según Caravantes, en la legislación española, deben considerarse los interdictos como acciones reales. Núm. 336 de su obra.



mentaria possessio postulanda est, ibi loci judicem adversus eum, qui possessionem turbabit, convenit judicare.»

Concuerdan con esta disposición los artículos 693 de la Ley Española del 55 y 63, inciso 15 de la vigente, así como la conclusión á que ha arribado el Dr. Cortés en el dictamen de referencia.

Pero, si en estas legislaciones la posesión es un derecho personal, ¿cómo se explica que no designen al Juez del domicilio sinó al de la situación de la cosa, que es el que corresponde al derecho real?

He comprobado, con la opinión de autores irrefutables, que ni en teoría ni en la legislación vigente tiene asidero la calificación de derecho mixto, que se atribuye á la posesión y con lo que se ha pretendido explicar esa especie de contradicción.

¿Y es lógico resolver ahora, en el silencio de nuestra Ley, que debe ser el Juez de la situación de la cosa, aunque la acción posesoria sea personal, nada más que porque las legislaciones anteriores, en las que tienen origen estas acciones, así lo establecían?

Puede decirse que «nuestra Ley de Procedimientos nada contiene respecto á la competencia del Juez que debe conocer en los pleitos de posesión,» cuando el art. 4.º inciso 4.º del Código respectivo indica, en primera línea, *«el del domicilio del demandado» para las acciones personales*, y «queda demostrado» que lo son, según nuestro Código, las acciones posesorias?

No. Tratándose de acciones personales, que no son ni reales ni mixtas, lo legal, racional y lógico es indicar como competente al Juez del domicilio del de-



mandado, de acuerdo con la prescripción de este último artículo.

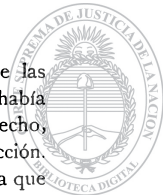
Pero, el hecho de que desde la legislación romana hasta hoy se indique como Juez competente al de la situación de la cosa, aun cuando se reconozca que las acciones posesorias son acciones personales, es demasiado elocuente para que no examinemos algo más, buscando alguna otra razón, si la hay, que satisfaga el espíritu actual, porque los errores pasados no nos obligan por más años que cuenten.

Veamos cuál es la naturaleza de las acciones posesorias, es decir, de los interdictos y de las acciones posesorias propiamente dichas.



El interdicto en la legislación romana era una especie de reglamento de policía.—Con tal carácter policial se ha conservado hasta la legislación actual, en la que se considera siempre como mera disposición de orden público, que no prejuzga sobre las acciones posesorias.—En aquella legislación sólo se conocía el interdicto fundado en el hecho de la posesión; las acciones posesorias basadas en el derecho de posesión pertenecen á la legislación moderna.—En los interdictos la razón de orden público, que los caracteriza, predomina sobre la naturaleza de la posesión y determina la competencia del Juez del lugar donde se comete el delito ó cuasi-delito.—Las acciones posesorias participan esencial y exclusivamente de la naturaleza de la posesión y sólo según ésta debe fijarse la competencia del Juez.—La Ley 1.ª del Dig., citada por el Dr. Cortés, se refería al interdicto.—Las citas de Savigny, Ahrens, Murillo, etc. no son oportunas, porque consideran la posesión como un derecho real. El dictamen del Dr. Cortés y el fallo que lo aceptó, se refieren á un interdicto de obra nueva—El mismo Dr. Cortés, citando un párrafo de Lehr, que parece está de acuerdo con la doctrina que expongo, reconoce «que ésta podría considerarse como la teoría de nuestro Código».—En la jurisprudencia no hay un solo caso en que se haya promovido y sustanciado la acción posesoria en la forma que propongo la cuestión sub-judice.—Siendo ésta una acción pura y exclusivamente personal corresponde su conocimiento al Juez del domicilio de los demandados, de acuerdo con la regla general consignada en el art. 4.º del C. de Procedimientos.

El distinguido Dr. Malaver, en la cátedra de Procedimientos, nos decía:



«La orden del magistrado, que imponía á una de las partes una obligación, se convertía para quien la había obtenido, en fuente ú origen de un verdadero derecho, cuya violación daba naturalmente lugar á una acción. Así (y ésta es la idea más extensa y más exacta que puede formarse de él), el interdicto, considerado en su naturaleza íntima, no era más que un *reglamento de policía*, destinado á suplir las deficiencias de la ley; una ley especial hecha para la causa, lo que hacía decir á Ulpiano: *Omnia interdicta licet in rem videantur concepta, vi tamen ipsa personalia sunt*—bien que los interdictos parezcan concebidos *in rem*, lo son, sin embargo, *in personam*.—L. 1, § 3, Dig. de Interdic.

En las palabras *concepta in rem*, Ulpiano alude á las fórmulas del interdicto que, en su tiempo, se insertaban en el Edicto en forma de reglas generales, y, por consiguiente, sin designación de las personas á quienes se dirigían. Pero, en cuanto al fondo, *el interdicto era in personam* bajo un doble aspecto: primero, porque en su origen el interdicto no era más que una orden especial dada contra persona determinada, y que constituía para ésta una verdadera obligación; y segundo, porque el que quería aprovecharse de él, se veía forzado á sostener que el *adversario estaba obligado*; lo cual forma el distintivo de la *acción personal*.»

Los jurisconsultos Namur, en el § 513, Ortolán en el Lib. IV, tit. XV, Mackeldey § 242, Maynz § 71, 80 y 88 y Molitor en los núms. 54 y siguientes, explican uniformemente, coincidiendo con lo expresado por el Dr. Malaver, el origen y el carácter de los interdictos, atribuyéndolos á la necesidad de proteger ciertas relaciones, *no re-*

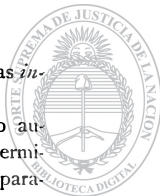


conocidas por la ley, contra las vías de hecho ó violencias de terceros, que causan una alteración del orden público.

Este último autor, dice (en el núm. 56 in-fine): «De allí concluiremos que en los *interdictos*, que, á excepción de los interdictos posesorios, intervenían siempre en un interés público ó religioso, el pretor que tenía la *jurisdictio* con el *imperium*, que reunía á la vez en su persona la administración de la justicia y de la seguridad pública, tenía, ante todo, por objeto impedir las vías de hecho capaces de comprometer la seguridad pública; de allí la orden que expedía conforme á las conclusiones del demandante, pero sin examen del fondo.

Los interdictos, pues, han sido introducidos, no solamente á causa del *ager publicus*, sinó para proteger la posesión que, como lo hemos demostrado, es siempre un derecho, al menos relativo, y para impedir las vías de hecho y las violencias.»

Caravantes agrega que: «para decidir las cuestiones de posesión que hubieran impulsado á los particulares á tomarse la justicia por sí mismos, siendo otras tantas ocasiones de violencias, imaginó el derecho romano los interdictos. Y en efecto, entre los romanos, el interdicto era una especie de edicto que daba el magistrado respecto de dos particulares, *inter duos dictum vel edictum*, á instancia de uno de ellos, para proscribir ó prohibir alguna cosa sobre intereses públicos ó privados y en que era necesaria la intervención del magistrado, para evitar luchas entre las partes; edicto que venía á ser para aquél á cuyo favor se había expedido, el origen de un verdadero derecho, que daba lugar á una acción, y de



aquí la etimología de los interdictos de providencias *interinas*, *interim dicta*.» (N.º 1003).

«Nuestro derecho adoptó también, dice el mismo autor en el núm. 1002, estas últimas disposiciones, permitiendo entablar litigios sobre la posesión, con separación de la propiedad, bien en juicio plenario de posesión, bien por medio de los sumarios llamados interdictos.»

Esriche, en la voz Interdicto; Reus en el Lib. 2.º, título XX y todos los autores que tratan de la materia, afirman unánimemente que los interdictos de que tratamos tienen su origen en la legislación romana.

«El Derecho Romano establecía (dice el Dr. Cortés) que la posesión consistía más bien en el hecho, *potius in facto, quam in jure consistit*.»

Molitor dice que Savigny ha tenido razón de ver que «el origen de las acciones posesorias se encuentra, sobre todo, en la protección que reclamaba la posesión, en los casos en que el poseedor no podía pretenderse propietario *ex jure Quiritium*, lo que tenía lugar cuando se era poseedor de una porción del *ager publicus*.»

De acuerdo con esto, Maynz agrega que aquel origen «debe atribuirse á la necesidad de garantir ciertas manifestaciones de la voluntad individual, que sin tener el carácter preciso de un *derecho*, merecían ser protegidas.»

Ortolán también lo atribuye «á la necesidad en que debieron hallarse los pretores de intervenir y suplir con su autoridad. . . . á lo que no se hallaba prescrito por la ley.»

Pero, en la legislación actual, la posesión es algo más



que una simple relación de hecho, es un verdadero derecho, reconocido expresamente por la ley; y ésta, aparte de la protección que presta por el interdicto á la mera tenencia, á la posesión momentánea, acuerda las *acciones* correspondientes para hacer efectiva la seguridad é inviolabilidad del *derecho de posesión*, que no pertenece á la legislación romana.

Bajo el punto de vista de la legislación actual es que los autores hablan de los *interdictos*, diciendo, como el Sr. Gomez de la Serna, que ellos versan sobre asuntos que reclaman con urgencia una medida que los termine, por interesarse inmediatamente el orden público, la seguridad amenazada de las personas ó de las cosas ú otros derechos privados, que á no ser atendidos sin dilación, pueden perderse.» (Motivos de la Ley de Enjuiciamiento de España).

Reus, agrega: «se fundan en el principio de eterna razón y de orden social, de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, sinó recorriendo al poder. . . . En *todos ellos* se suscitan y ventilan cuestiones que pueden comprometer el orden social, cuestiones en que está interesado el orden público.»

El Dr. Goyena ha dicho que el *despojo* es una violación de las garantías individuales» y que la ley, para evitar «la perturbación del orden social, ha protegido siempre al despojado por el hecho de serlo, según la máxima tan antigua como conveniente, *spoliatus ante omnia restituendus*.»

El Dr. Llerena indica que «es una medida de orden público.»

El Dr. Segovia opina que «es más bien una dispo-



sición de orden público, para prevenir y reprimir el atentado de hacerse justicia por sí mismo con grave turbación de la paz pública.» (Nota 61, al art. 2490 del C. Civil).

La Corte Nacional dice: «que esta acción (de despojo) no es una acción posesoria, propiamente dicha, sino una disposición de orden público con el objeto de prevenir la violencia y el atentado de hacerse justicia por sí mismo.» (Considerando 2.º del fallo anteriormente citado).

El Juez Federal de Corrientes, Dr. Lujambio, decía, en el fallo consignado en la Ser. 3.ª tomo 111 pág. 384, que el objeto de la acción de despojo, es simplemente restituir la posesión del bien raíz al que la ha perdido, *sín prejuzgar nada sobre las acciones posesorias* que correspondan, las cuales podrán intentarse por una y otra parte, luego que se restablezcan las cosas en el estado en que antes se hallaban.»

La Corte Nacional, refiriéndose á «la ocupación y vías de hecho llevadas á cabo arbitrariamente y de propia autoridad» agregó: «que estos hechos caracterizan suficientemente la acción de despojo, definida y regida por los arts. 2490 y siguientes del C. Civil, *que es una acción de orden meramente policial*, y tendente á evitar toda vía de hecho y toda pretensión de hacerse justicia por sí mismo, con prescindencia de los Tribunales y de los medios creados por la Ley para el efecto.»

Esta distinción tiene su fundamento racional y 'lógico.

La organización del Estado tiene por base y por objeto la seguridad é inviolabilidad de los derechos de las personas.—Allí donde un individuo extralimita su círculo



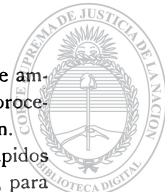
de acción, y atenta contra el derecho ajeno, se produce una alteración del orden social, que, con independencia del interés del perjudicado, debe restablecerse inmediatamente, para conservar el imperio del derecho, base del orden, que á su vez es requisito indispensable para la existencia social; debe evitarse que los individuos se hagan justicia por sí mismos, porque esto sería el predominio del más fuerte, es decir, se erigiría la fuerza, que es la negación del derecho, en principio de orden.

De manera que, cuando el atentado se dirige contra la posesión, se viola el derecho del poseedor y se afecta la existencia del estado. Aparte de la protección que debe prestarse al primero, existe un interés público inmediato, que exige previamente y con urgencia el restablecimiento del orden, para convencer al perturbador de que es inconveniente usar de la violencia y que ha debido ocurrir á los Tribunales á pedir el reconocimiento de sus derechos, y aun para prevenir al despojado de que no es lícito ni conveniente hacerse justicia por sí mismo.

En tales casos hay, pues, un doble motivo que decide la protección de los Tribunales: el derecho violado del poseedor y la tranquilidad pública comprometida con las vías de hecho ó violencias del perturbador.

Para el reconocimiento del primero, el perjudicado tiene la acción correspondiente, que participa de la naturaleza propia del derecho herido, y que, tratándose del *derecho de posesión*, será una *acción posesoria*, que se hará valer en la forma general que las leyes establecen para asegurar los derechos de los individuos.

Lo segundo despierta el interés público, que predominando sobre el interés privado, pide se le satisfaga pre-



viamente (1), ó por lo menos, en la concurrencia de ambos, impone una mayor brevedad ó rapidez en el procedimiento prescrito para alcanzar aquella satisfacción.

Los *interdictos* son los remedios urgentes y rápidos que satisfacen preferentemente el interés social, para mantener esa tranquilidad pública, necesaria para mejor asegurar la inviolabilidad de los derechos de los particulares.

Pero, quítese á la desposesión esta razón de orden público, que surge con motivo de las violencias ó vías de hecho, y no queda sinó un conflicto de derechos privados, que en nada se diferencia de los que todos los días caen bajo la jurisdicción de los Tribunales ordinariamente encargados de definirlos.

Tal es la razón esencial que establece la diferencia entre los dos órdenes de acciones posesorias, que he estudiado anteriormente, llamados: *interdictos* y *acciones posesorias* propiamente dichas, porque no tienen un nombre especial.

Las acciones participan de la misma naturaleza de los derechos que protejen y con los cuáles se confunden; y así, las acciones posesorias tienen la misma naturaleza que la posesión, que les sirve de fundamento.

Pero, observo que en los *interdictos* hay un elemento más, existe esa razón especial de orden público, que

(1) La Ley 5, tit. 19, Part. 3, establece que cuando el despojo se opone como excepción, ó como reconvencción, debe juzgarse previamente á la demanda principal. «E es derecho, por que la fuerza nace de gran cobdicia, ó de gran soberbia. E por ende los Judgadores *se deven ante parar á ella*, acorriendo al forçado con justicia; e despues devenle fazer responder á la demanda sobre que fué emplazado.»



predomina sobre la del interés particular, y que modificando, puede decirse, la naturaleza que les corresponde en razón de la posesión que les sirve de base, *los caracteriza* especialmente, deferenciándolos de las otras *acciones posesorias*, en las que no concurre aquella razón y donde se discute el *derecho de posesión* en toda su amplitud, no la simple tenencia ó la posesión momentánea, sino la que reúne todos los caracteres necesarios para hacerla apta para prescribir la posesión agena (1).

Observo, también, que nadie más que el Juez del lugar donde se producen estos actos violentos, que amenazan la estabilidad social y dan origen á esta razón especial que caracteriza el interdicto, puede y debe conocer en ellos, porque precisamente está investido de autoridad para mantener, dentro de los límites de su jurisdicción territorial, ese orden público afectado directamente por los actos violentos de desposición.

La violencia altera el orden allí donde se produce y no en otra parte, y los Jueces, cuya jurisdicción se encierra en límites territoriales, deben mantener el orden allí dentro de su jurisdicción, siéndoles indiferente la alteración producida en otro lugar.

En tal concepto, creo que ésta es la razón única que ha impuesto en todo tiempo, para los *interdictos*, la competencia del Juez de la situación de la cosa, pues predominando su carácter *ex-maleficio*, natural es que conozca en ellos el Juez del lugar donde se comete el

(1) Véase el segundo párrafo de la nota del Dr. Velez al art. 3251 del C. Civil y la nota 9 del Dr. Segovia.



delito ó cuasi-delito, aun cuando no le correspondiera en razón de la naturaleza de la posesión, que viene así á ocupar un lugar secundario.

La Ley 15, tít. 1.º part. 7, designaba como competente al Juez del lugar donde se cometía el delito.

Por consiguiente, por esta *única razón*, considero acertada la conclusión del Dr. Cortés, pero *sólo en cuanto á los interdictos y nó respecto á las acciones posesorias* propiamente dichas, en las que la naturaleza de la posesión, es lo único que determina la competencia del Juez que debe conocer en ellas, porque aquí no concurre esa razón especial que obliga, puede decirse, á modificar la regla general.

En la legislación romana, como ya he hecho notar, « la posesión consistía más bien en el *hecho* que en un derecho, » pues, no era reconocida por la ley, y el pretor, para proteger *el hecho de la posesión* contra los ataques de los demás, ha imaginado el *interdicto*, el que, recién cuando *aquél* contra quien se dirijía la prohibición lo desobedecía, daba origen á una verdadera *acción personal*, que se ejercitaba lo mismo que las demás de igual naturaleza.

En el derecho romano no existían estas *acciones posesorias* fundadas en el *derecho de posesión*, tal como la ciencia jurídica actual lo entiende.

Se refería, pues, al *interdicto* la Ley 1.ª del Dig. *ubi de possessione*, que cita el Dr. Cortés, y que dice *ubi aut vis facta dicitur, aut MOMENTARIA POSSESSIO postulanda est, ibi loci judicem adversus eum, qui possessionem turbabit, convenit judicare;* » allí donde se dice hecha la *violencia*, ó se turba la *posesión momentánea*, allí conviene



que el Juez proceda contra el que turbó la posesión. Y donde hay *violencia* ó se trata de la *posesión momentánea*, procede el *interdicto* y nó, la *acción posesoria*.

En cuanto á la cita que el Dr. Cortés hace de Savigny, que «al tratar del derecho local por que debe regirse la posesión, reconoce que éste ha de ser el del lugar donde se encuentra situada la cosa,» véase el núm. 339 de Caravantes, y obsérvese que Savigny dice: «aunque la posesión no debe contarse entre los derechos reales, *siendo por su naturaleza una relación puramente de hecho*, se halla necesariamente sometida al derecho del lugar donde está situada la cosa.....»

La legislación española, que acepta el principio de que la posesión es un *derecho real*, no nos puede servir de antecedente ilustrativo al respecto, aun cuando indique el Juez de la situación de la cosa, porque, procediendo así, es lógica con el principio aceptado, que precisamente es el contrario del que reconoce nuestro Código—V. Escriche *posesión y competencia*: tom. 2.º, pág. 368, Caravantes n.º 334 y sigts., Reus, art. 63, inc. 14 y 15 y Lib. 2.º tit. XX.

«Los que como Ahrens sostienen que la posesión es un *derecho real*, agrega el Dr. Cortés, lo creen parte integrante de la propiedad; pues, al propietario corresponde naturalmente el derecho de poseer; y por esto la posesión hace presumir la propiedad, que á su vez no puede reputarse completa mientras no se alcance la posesión. Observa también que mal podría la ley castigar la violación de la posesión, si no reconoce en ella un derecho que debiere garantizar; en fin, que todas las obligaciones y los derechos que emanan de la posesión,



no son personales, pues sólo corresponden al poseedor en su calidad de tal. »

Obsérvese que el párrafo de Murillo, referente á la legislación canónica, con que apoya el Dr. Cortés su conclusión, se refiere también á los *interdictos*, pues dice: « Si se trata de la posesión *momentánea*, la cuestión debe terminarse en el lugar en que la cosa se halla situada, porque habiendo sido establecido este juicio para impedir el que los interesados *ocurran á las vías de hecho*, esto es más de temerse que en cualquiera otra parte, en donde existe la cosa objeto de la disputa. » *In jus Canonicum*, tom. 2.^o pág. 212 n.^o 32.

A estos mismos interdictos se refiere la otra observación que se hace de que « hay para ello razones bastante graves y manifestas, porque no solamente en ese lugar se encuentran con más facilidad los elementos de prueba acerca de los hechos que motivan la cuestión, sino que siendo también más de recelarse allí las *violencias que se trata de evitar*, podrán así mismo adoptarse y ejecutarse con más oportunidad las *medidas tendentes á precaverlas*. »

El Dr. Cortés dice también que « Lehr reconoce en la posesión un derecho, pero personal y no real, creyendo que los interdictos, sólo se dirijen á conservar el orden público, preservando á los particulares de las vías de hecho, y que las leyes castigan la violación de aquél por medio de las acciones posesorias; pues, en cuanto á la cuestión de propiedad privada, los interdictos la dejan completamente intacta. »

Parece, según esto, que Lehr está de acuerdo con la teoría que dejo desarrollada.



Pues bien, el mismo Dr. Cortés no ha dejado de pensar, que «ésta *podría* considerarse como la teoría de nuestro Código, *si* el art. 2501, al declarar que todos los juicios posesorios han de ser sumarios, *no pareciese* haber suprimido con esto el plenario de posesión, en cuyo caso el derecho no *quedaría* ciertamente intacto: *aunque es verdad* que el art. 579 de la ley de procedimientos *lo ha entendido sin duda de otro modo*, resolviendo que cualquiera que sea la sentencia recaída en el interdicto, se entenderá siempre sin perjuicio de las acciones de posesión ó de dominio que puedan corresponder al vencido.»

El Dr. Cortés planteó así el problema, pero no lo resolvió; y tampoco tenía necesidad de hacerlo cuando trataba únicamente del interdicto.

Pero, es fácil percibir, por la redacción del párrafo transcrito, que su ánimo se inclinaba en favor de esta teoría, y quizá la falta de oportunidad para profundizarla, el error en que estaba de que el Dr. Velez consideraba la posesión como un derecho mixto, la disposición del art. 2501 del Código Civil y aún la poca claridad que al respecto se nota en el Código, nos hayan privado de la autorizada opinión del ilustrado maestro en esta difícil materia, puesto que su dictamen se concretó al estudio del *interdicto* de obra nueva, así como también el fallo que lo aceptó íntegro.

Es cierto que el art. 2501 establece que «las acciones posesorias serán juzgadas sumariamente», pero agrega que lo serán en «*la forma que prescriban las leyes de los procedimientos judiciales*» y éstas hemos visto que establecen el juicio llamado *sumario para los*



interdictos y el ordinario para las *acciones posesorias* propiamente dichas.

No podría tampoco dársele otra interpretación o mayor alcance á ese artículo de la ley de fondo, que prescribe una regla de procedimiento, si se observa que el Dr. Velez, en la nota respectiva, hace referencia á los *interdictos* del D. Romano y al *juicio de despojo* del D. Español.

Finalmente, el Dr. Cortés agrega que «nuestra Ley de Procedimientos nada contiene respecto á la competencia del Juez que deba conocer en los pleitos de posesión; pero, constando hallarse calcada sobre la mencionada Ley Española, no sería impropio ocurrir á las disposiciones de ésta, para explicar aquélla en los casos de silencio ú oscuridad.»

Es cierto que nuestra ley de procedimientos no indica de una manera expresa cuál sea el Juez competente en las cuestiones de posesión; pero, el art. 4.º consigna la regla general para el ejercicio de las acciones reales ó personales, únicas que se admiten en nuestra legislación vigente.

Y si hemos comprobado que las acciones posesorias son acciones personales, por qué no las sometemos á la regla general, que indica el Juez del domicilio, en lugar de ir á buscar otro Juez especial, cuando tal excepción, que no se presume y es de interpretación restrictiva, no está consignada expresamente en nuestras leyes?

Podemos recurrir á las leyes españolas, en virtud de lo dispuesto en el art. 814 del Código de Procedimientos de la Capital y 374 de la Ley Nacional, pero no en lo



que sean contrarias á éstas, como creo son las disposiciones sobre la competencia en las acciones posesorias, porque dominan principios opuestos en ambas legislaciones; pues la española considera la posesión como un derecho real.

Nuestra ley, en el art. 4.º, ha aceptado la regla general consignada en aquellas leyes y ¿por qué ha guardado silencio respecto de las disposiciones especiales que ellas contienen sobre este punto?

Además, el art. 62 del Código de Procedimientos, concordante con el art. 16 del Código Civil, requiere que en estos casos se ocurra á los *principios jurídicos de la legislación vigente* y en su defecto, á los *principios generales del derecho*.

Pues bien, hemos distinguido, en nuestras leyes, dos órdenes de acciones: los interdictos, que caen bajo la acción directa del Código de Procedimientos, y las acciones posesorias, que son del dominio exclusivo del derecho civil.

Hemos visto también que los interdictos tienen una naturaleza especial y propia, que los caracteriza, en virtud de una razón de orden público, que ha exigido en todo tiempo y aun requiere el procedimiento sumario y el conocimiento del Juez del lugar donde se produce el hecho, porque es el único á quien afecta el delito y el único también que tiene jurisdicción sobre ellos y el deber de suprimirlos ó evitarlos.

Como estos *principios* que rigen al interdicto son distintos de los que dominan la *posesión*, único fundamento de las acciones posesorias propiamente dichas, no pueden considerarse las disposiciones propias del



primero como una excepción á los principios que rigen á la segunda, y mucho menos no habiéndolo así establecido la ley.

Por consiguiente, si nos es lícito, según lo dispuesto en los artículos 62 y 16 últimamente citados, en ausencia de una disposición especial de nuestra ley, aplicar aquellos *principios* que siempre (desde la legislación romana), han dominado la materia de los interdictos, debemos concluir que es Juez competente para conocer en ellos el de la situación de la cosa, es decir, el del lugar del delito ó cuasi-delito.

Esta conclusión es la misma que la de la ley española, á que se refiere el Dr. Cortés; pero obsérvese que se fundan en motivos distintos.

En las *acciones posesorias*, propiamente dichas, no existe esta razón de orden público; los *principios* que rigen la posesión tienen un imperio absoluto sobre tales acciones y no hay motivo alguno que obligue á separarlas de las reglas generales consignadas en nuestras leyes; las que, ajustándose á principios universalmente reconocidos, establecen que es Juez competente para conocer en las *acciones personales, como son las posesorias el del domicilio del demandado*.

En cuanto á la Jurisprudencia, sobre este punto, al empezar el párrafo IX, he citado los únicos fallos que he encontrado en todas las Series publicadas hasta hoy; y para terminar observaré: que *todos* los juicios deducidos sobre posesión y en los cuales directa ó indirectamente se ha tocado la cuestión de competencia, se han *promovido y sustanciado como interdictos y no como acciones posesorias*, propiamente dichas; lo que significa



que, aun cuando pudiera considerarse que la Jurisprudencia se ha pronunciado respecto de la competencia en los *interdictos*, no lo ha hecho respecto de las *acciones posesorias*, porque *no hay un solo caso* en que se hayan ventilado estas acciones, en la forma que propongo la cuestión sub-judice.

No debe olvidarse tampoco que los fallos y decisiones de los Tribunales de cualquier jerarquía, sólo son aplicables al caso para que han sido declarados (Ser. 1^a, tomo 1^o, pág. 505 de la Jur. Civil.)

En la nota 1185 del primer tomo de la Instituta del Dr. Hall, se dice: «Si bien las decisiones de los Tribunales y especialmente las de la Suprema Corte, son antecedentes muy respetables y dignos de tomarse en consideración para la resolución de casos análogos ó semejantes, no se les puede atribuir tanta autoridad como á la ley misma, ni constituyen una doctrina imperativa é invariable, ni forman propiamente Jurisprudencia sino cuando ellas han sido confirmadas por una serie de resoluciones en el mismo sentido.»

Conclusión: la acción posesoria, que he iniciado por la vía ordinaria, para recuperar la posesión de un inmueble, es una acción exclusivamente personal, y, como tal, puedo ejercitarla ante V. S., por ser el *Juez del domicilio de los demandados*.



XIII.

El Juez competente para entender en las acciones mixtas, lo es también el del domicilio del demandado.

En la *hipótesis* de que fuera cierta la razón principal alegada por el Dr. Cortés y aceptada por la Excma. Cámara, de que la *posesión es un derecho mixto* y por tanto, que la *acción posesoria es una acción mixta*, ¿correspondería conocer en ella al Juez de la situación de la cosa?

No admitiendo nuestros Códigos tal clasificación, es natural que nada hayan dispuesto al respecto, y entonces sí que corresponde examinar los antecedentes de nuestra legislación, porque no existen en ésta principios jurídicos en la materia respectiva.

Esriche dice: « acerca de las reglas que determinan el Juez competente para conocer en las acciones mixtas en general, Jurisconsultos respetables opinan que deben regir con preferencia las que señalan al Juez del domicilio del demandado, fundándose en que siendo la persona más noble que la cosa, debe determinarse por ella la competencia. Sin embargo, habiendo designado la ley como Juez competente para las acciones reales el del



lugar donde se halla sita la cosa, y para las personales el del domicilio del demandado, no podía menos de designar dichos lugares, al determinar los que deben surtir fuero respecto de las acciones que tienen los dos caracteres de personales y de reales, si había de ser consecuen- te en sus disposiciones. » (V. Competencia, tomo 2.º, pág. 366.)

La anterior Ley de Enjuiciamiento de España, en el art. 5.º, párrafo 4.º designaba al Juez de la situación de la cosa ó al del domicilio del demandado, á *elección del demandante*.

La misma disposición se ha reproducido en el inciso 4.º del art. 62 de la ley vigente.

La Suprema Corte Nacional así también lo tiene declarado en el fallo de la Ser. 1ª, tomo 3.º, pág. 31.

Nada he encontrado en la Jurisprudencia de los Tribunales de la Capital sobre acciones mixtas, lo que prueba su ausencia en nuestra legislación.

Por consiguiente, aun en la hipótesis de que la acción posesoria que he iniciado fuera mixta, tendría yo la elección entre el *domicilio* del demandado ó el de la situación de la cosa. Y he elegido el primero, en que V. S. es competente.



XIV.

Hay una razón más en favor de la competencia de V. S.: la parte demandada es, en el caso sub-judice, la sucesión de D. M. I. Lagraña, cuya testamentaria está radicada ante estos mismos Tribunales, ante el Juzgado á cargo actualmente del Dr. Mendez Paz, Secretaría del Sr. Oderigo.

Ahora bien, según la disposición contenida en el art. 634, inciso 4.º del Cód. de Procedimientos y en el art. 3284, inciso 4.º del Código Civil, las *acciones personales* deben entablarse ante el Juez de la sucesión.

La Jurisprudencia de la Corte Nacional se ha pronunciado en tal sentido, como puede observarse en sus fallos contenidos en la Ser. 1ª, tomo 9, pág. 515; Ser. 2ª, tomo 17, pág. 124 y especialmente en el que se registra en la Ser. 3ª, tomo 10, pág. 276, cuyo sumario dice: «Fallecido el demandado por *interdicto posesorio*, el conocimiento de la causa debe pasar al Juez de la testamentaria de aquél, aunque su estado sea el de la ejecución de sentencia.»

XV.

Por todas las consideraciones expuestas, pido á V. S. que quiera declararse competente para conocer en este asunto.



Será justicia, etc.

Cástulo L. Furnus.



DICTAMEN

DEL

AGENTE FISCAL Dr. R. NAVEIRA



Señor Juez:

D. Carlos F. Sidders, á nombre de varios herederos de D. Manuel I. Lagraña, sin contestar el traslado que se le confería de la demanda entablada por la sucesión de D. Luis Furnus, opone la excepción de incompetencia de jurisdicción, fundándola en que de los términos empleados en la demanda surge claramente que la acción deducida no es otra que la de *reivindicación*, aún cuando se citan los artículos 2469 á 2501 del Código Civil, que corresponden al título de las acciones posesorias; que, además, esta acción la deduce invocando el carácter de propietario; que habiendo entablado una acción real debe ocurrir á los Jueces del lugar donde están situados los bienes y no á los Jueces del domicilio de los demandados, como si se tratase de una acción personal.

Comunicado el traslado correspondiente, el Dr. Cás-tulo L. Furnus, representante de la sucesión actora, establece con claridad su pensamiento, sosteniendo que no ha intentado la *acción de reivindicación*, sinó que ha en-



tablado una *acción posesoria*, por la vía ordinaria, para que se le *restituya la posesión de un inmueble, de la que se le despojó*, estableciendo como base para la discusión la siguiente cuestión: ¿Cuál es el Juez competente para entender en la *acción posesoria*, que promuevo por la *vía ordinaria*, para obtener la *restitución de la posesión* de un inmueble, situado fuera de la jurisdicción del Juzgado, en que se encuentra radicada la sucesión demandada?

Sujetándonos, desde luego, á los términos claros de la demanda y á los explicativos del traslado de la excepción, debemos convenir en que ésta no tiene razón de ser, desde que fué opuesta *para el caso* de que la acción entablada fuera la *reivindicatoria*. No siéndolo, como no lo es, ha desaparecido la causa de la excepción.

¿Está obligado el actor á someterse servilmente á la forma de un juicio para conseguir el objeto que busca en su demanda, cuando tiene á su voluntad el derecho de elegir la acción y la forma de ese juicio, siempre que con ella no viole una ley?

Pienso que no. El actor puede elegir la vía que más le convenga, pues los procedimientos establecidos para los juicios especiales, si bien importan una ley de orden público, han sido creados en beneficio del actor y no del demandado; así tenemos que si un acreedor, por un título que traiga aparejada ejecución, renuncia á la *vía ejecutiva* (creada en su favor y no en el de su deudor) y lo demanda por la vía ordinaria, el deudor demandado no puede excepcionarse, no puede obligar á su acreedor á que demande ejecutivamente; al locador, que su locatario no le paga el precio del arrendamiento, ni le desocupa la finca, la ley le da la acción de desahucio; pero, si al



actor se le ocurre demandarlo por la *vía ordinaria*, ¿el inquilino podría excepcionarse exigiendo que entable su acción por el procedimiento sumario de desalojo?

No, porque como ya lo dejo dicho, estas acciones son creadas como un privilegio en favor del actor; privilegio que puede renunciar, por una u otra razón. Lo contrario sucedería si debiendo entablarse la demanda por la *vía ordinaria*, el actor eligiese una especial de procedimiento, sumario o sumarísimo; en este caso sí que el demandado podría excepcionar por improcedencia de la acción.

Tenemos, pues, en el caso *sub-judice*, que la sucesión Furnus pudo haber entablado el *interdicto de recobrar ó de despojo*, creado por la Sección III, tít. XVII del Cód. de Proc., que es un juicio especial y sumarísimo, pero ha renunciado á ese privilegio que la ley le acuerda y ha preferido someterse al procedimiento lento del juicio ordinario, para recobrar la posesión de que se le ha despojado, y para ser restituido en ella; el actor sabrá lo que hace y por qué lo hace, el resultado será el mismo, sólo los medios empleados son distintos.

La acción intentada por la sucesión Furnus ¿es real ó personal?

A mi juicio es *puramente personal*, desde que consideramos la posesión como un hecho que da derecho á exigir se le respete y mantenga en ella.

No hay más *acciones reales* que las que la ley distingue como medios de hacer declarar en juicio la existencia y la libertad de los *derechos reales*; ellas nacen del derecho de propiedad, no nacen de la posesión y son la *reivindicatoria*, la *confesoria* y la *negatoria*.

La posesión no establece vínculos de derecho entre el



poseedor y la cosa poseída, y tanto es así que un título válido da derecho á la posesión y no la posesión misma, por lo que no teniendo sinó un derecho á la posesión, no puede tomarla por sí mismo, en caso de oposición, sinó que debe demandarla ante los Jueces; la posesión, pues, nada tiene de común con el derecho de poseer.

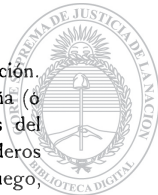
No teniendo el poseedor (cualquiera que sea la causa de la posesión) ningún derecho real sobre la cosa poseída, al ser despojado de ella no se dirige sobre la cosa misma, por medio de una acción real, sinó que dirige su acción personal contra el que lo ha perturbado ó trata de perturbarlo en la posesión, para que se le restituya ésta, en el primer caso, ó se le mantenga en ella, en el segundo.

El que me incomoda, perturba ó despoja de mi posesión tiene la obligación personal de dejarme gozar de ella tranquilamente y restituírmela cuando se lo exija, porque á todo derecho personal corresponde una obligación personal también y no hay obligación personal que corresponda á derechos reales, así como no hay obligación sin causa.

Tratándose de obligaciones personales, el juez competente para entender en ellas queda á elección del actor, quien puede entablar su acción en el lugar del cumplimiento de su obligación ó en el domicilio del demandado.

Los herederos Lagraña tienen su domicilio en esta Capital; la sucesión Lagraña se ha seguido ante los Tribunales de esta misma Capital y ante los mismos se sigue también la sucesión de Furnus.

Es, pues, competente la justicia de esta jurisdicción para intervenir en el presente juicio, y debe, desde luego,



rechazarse la excepción de incompetencia de jurisdicción.

Debe tenerse presente que los herederos Lagraña (ó el Sr. Lagraña mismo), desposeyeron á los Furnus del campo «San Luis»; la acción la dirigen los herederos Furnus contra los herederos Lagraña y, desde luego, ésta debe intentarse ante el juez de la sucesión, de acuerdo con lo establecido por el art. 3284 del Código Civil, desde que se trata de una obligación personal.

.
.
.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1893.

R. NAVEIRA.



SENTENCIA

DEL JUEZ

Dr. D. JUAN AGUSTÍN GARCÍA (HIJO).



Buenos Aires, Febrero 10 de 1894.

Y Vistos los presentes autos, de los que resulta :

Que á fs. 22, se presentó el Dr. Cástulo L. Furnus, por sí y en representación de sus demás hermanos, como sucesores de D. Luis Furnus, iniciando demanda contra la sucesión de D. Manuel Ignacio Lagraña, por devolución de la posesión de un campo situado en el Departamento de Curuzú-Cuatí (Provincia de Corrientes).

A fs. 47, se presentó el Sr. Carlos F. Sidders, con poder de D.^{ña} Florentina Cabral de Lagraña, D. Francisco Javier, D. Cipriano U. y D. Rodolfo M. Lagraña, y sin contestar el traslado que se les confirió de la demanda, oponen las excepciones de incompetencia de jurisdicción é improcedencia de la acción de despojo.

Funda la primera, en las siguientes razones : que la acción promovida es la de reivindicación y no posesoria; que se confunden las acciones que nacen de la posesión,



con las de la propiedad; que el art. 4.º del Código de Procedimientos, bajo la denominación de acciones reales, comprende todas las que tienden á garantir los derechos sobre los bienes, estando incluidos los interdictos, y que el mismo artículo atribuye competencia al Juez del domicilio, cuando se deducen acciones personales, que son las que nacen de los contratos.

En cuanto á la segunda, dice que aceptando que el juicio promovido sea un interdicto de despojo, sería improcedente por haber transcurrido más de seis meses.

Este escrito fué reproducido por D. Manuel I. Lagranda á fs. 92.

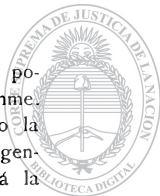
A fs. 54, se dió traslado á los actores, siendo evacuado con el extenso y erudito escrito del Dr. Furnus, que corre á fs. 55, en el que en síntesis sostiene lo siguiente: que no entabla el interdicto posesorio, sinó la acción ordinaria de devolución de la posesión, y que, no siendo esta acción real, está comprendida en el art. 4.º, inciso 4.º del Código de Procedimientos.

Oído el Agente Fiscal á fs. 87, se llamó Autos para resolver dichas excepciones.

Y considerando:

Que no habiendo hechos controvertidos, se hace innecesario recibir la causa á prueba.

Evidentemente nuestra legislación admite dos clases de acciones posesorias, mejor dicho, dos juicios: En el sumario, se discuten brevemente ciertos hechos especiales en un procedimiento rapidísimo, adecuado para impedir que se turbe el orden público, análogo á los procedimientos policiales, por su base y por su objeto. El derecho no está en cuestión, ni se invoca ni se cita.



Sólo se relacionan en la litis dos simples hechos: la posesión y su ataque en cualquier forma; el Juez falla inmediatamente, dejando á salvo los derechos. Usando la frase de un autor célebre, el magistrado actúa como gen-darme, evitando que los particulares recurran á la fuerza antes de discutir legalmente sus pretensiones.

En la antigua legislación francesa, eran de competencia del Juez de Paz local; en la romana, canónica, española y en la nuestra, del Juez de la cosa: así lo dice el Dr. Cortés y se ha declarado por los Tribunales de la Capital y Federales; pero nó por razones de materia, á mi juicio, sinó de orden público: se trata de solucionar un conflicto ó evitar el ya producido, y nadie mejor que el Juez local para averiguar el hecho sobre el terreno, interrogar los vecinos, examinar el muro destruido, los actos de atropello, las huellas visibles de la perturbación; nadie mejor que él para conservar el orden, mientras las partes discuten ante la autoridad correspondiente.

Es la misión del interdicto posesorio, su rol policial de evitar violencias y garantizar la inmunidad de la persona, que se amenaza é inquieta en la disputa sobre los bienes.

Debieron inventarse en épocas poco cultas, en las más violentas, que registra la historia: la romana y la feudal. En la romana, los crea el pretor; de su propia autoridad se interpone entre las partes y las remite al Juez, dejando arreglado provisoriamente la cuestión de hecho. En la Edad Media, los crea el rey, y tal vez por las necesidades de la época, los hicieron más enérgicos y eficaces.

Este origen ha penetrado de tal manera su naturaleza, que, á pesar del Código Civil, el de Procedi-



mientos saliendo de su esfera propia, los legisla con toda independencia; crea el interdicto de adquirir y expresa las condiciones de los demás, omitiendo las señaladas en el Código Civil, en ese análisis prolijo del legislador, preocupado, ante todo, de los derechos afectados y que exige al poseedor, para estar en juicio, una serie de requisitos que, *prima facie* y no obstante lo que se diga, sugieren la propiedad.

Para encontrar el plenario, debe procederse por un método de deducciones del texto y espíritu de la ley, de la comparación entre las leyes de forma y fondo. Dice el Código de Procedimientos: «sólo se admitirán las pruebas que tengan por objeto acreditar el hecho de la posesión ó no posesión del que haya promovido el interdicto y la verdad ó falsedad de los hechos de perturbación atribuidos al demandado»; ni siquiera insinúa una referencia del Código Civil, que, en los artículos 2473, 2478, 2479, 2480 y 2481, exige que la posesión no sea violenta, precaria, viciosa ó clandestina. Y en su nota al art. 2351, el legislador dice: «definimos la posesión por la que tiene mayor importancia jurídica..., la que da acciones posesorias *adversus omnes*, dejando para otro lugar la que sólo sirve para los interdictos ó acciones posesorias».

Luego, hay distintas acciones posesorias, con sus distintos procedimientos, sobre las que influye naturalmente la clase de derechos ó hechos de que surgen.

Caravantes, al tratar de los interdictos, se refiere al juicio plenario de posesión. Febrero dice que: «*las causas de posesión se dividen en plenarias y sumarias. Llamare plenarias á las que se siguen por el modo y trámite*



de cualquier juicio ordinario; sumarias á aquellas que se sustancian y deciden brevemente: El que pretende tener derecho sobre esta posesión momentánea usa del interdicto que le corresponde, y en un breve juicio se declara quien ha de tener la posesión, mientras en otro más largo se ventila la propiedad ó la verdadera posesión ».

No podría ser de otro modo: el interdicto fundado en derecho, con la discusión amplia que éste exige, acompañada del largo término probatorio, se desvirtuaría, perdiendo totalmente su eficacia con su rapidez; y vice versa, la acción posesoria, discutida sumariamente en términos premiosos y con una prueba limitada, sería un sarcasmo jurídico.

Ambas acciones difieren por su naturaleza intrínseca y por su fin; unas están regidas por la ley civil y las otras son creación exclusiva, desde su origen, de la ley de forma.

Difieren por su naturaleza intrínseca, porque la causa del interdicto es siempre un delito ó un cuasi-delito. Basta leer los artículos pertinentes de los Códigos de Procedimientos y Civil.

Al través de los términos concisos de la ley, se vislumbran los hechos de fuerza, de dolo y fraude que reprime.

Como principio general, que domina y rige toda la materia, escribe el legislador las máximas cultas y civilizadas: el que sólo tiene derecho á poseer, debe demandar su posesión por las vías legales; y cualquiera que sea la naturaleza de la posesión, nadie puede turbarla arbitrariamente.—Arts. 2468 y 2469 del Código Civil.

Y para precisar más la naturaleza de estas acciones,



agrega en el art. 2472: « la posesión nada tiene de común con el derecho de poseer, y será inútil la prueba en las acciones posesorias del derecho de poseer por parte del demandante ó demandado. » Es decir, la ley defiende la tranquilidad del actual poseedor, turbada, con ó sin derecho, por medios ilegítimos; defiende, ante todo, la inviolabilidad de la persona contra cualquier ataque, aún fundado en el más amplio y completo dominio.

La causa del interdicto es una obligación *personal ex delicto*, tiende á reponer el estado anterior, y corresponde al Juez local, por las razones ya expuestas.

Las otras acciones posesorias *adversus omnes* se refieren directamente á la cosa; su carácter es distinto, como que nacen de una posesión amplia y completa; tener una cosa bajo un poder, con intención de someterla á un derecho de propiedad».—Art. 2351.

Será la oportunidad de abordar el problema de la posesión, que justifica, en el derecho, el excepticismo del pensador francés sobre la veracidad de las conclusiones científicas. Nuestro Código Civil resuelve la cuestión adoptando una de las opiniones; la posesión no es seguramente un derecho real, no hay más derechos reales que los del art. 2503; será entonces un derecho personal, ó un hecho (1), pero generador de derechos personales, salvo los casos expresamente previstos por la ley, que se transforma en derecho real.

Definidas y clasificadas las acciones posesorias ¿cuál es el Juez competente? En el caso, se trata de una acción de devolución, iniciada por juicio plenario. No puede ser,

(1),—V. párrafo final de la nota del Dr. Velez al art. 2351 del C. Civil.



por lo tanto, interdicto; es uno de los analizados en la nota del art. 2351 del Código Civil: *adversus omnes*.

Siguiendo el método de analogía, lógicamente se llega a la conclusión de que corresponden al Juez local (1); pero, tratándose de materia de orden público, como es la jurisdicción, no puede el magistrado interpretar extensivamente la ley, si su texto es claro y explícito; y si el legislador no incluyó las acciones posesorias en el art. 4.º del Código de Procedimientos, limitándolo a las acciones reales, no se debe suplir una omisión, tal vez intencional, sin que a ello obliguen razones muy imperiosas. Por otra parte, ¿no dice el art. 217 del Código de Procedimientos que la sentencia debe fundarse en el texto expreso de la ley y sólo a falta de éste, en los principios jurídicos vigentes?

Dicen los demandados que la acción no es posesoria, sino la reivindicación del art. 2758 del Código Civil: se reclama la posesión a título de propietario, se elige el procedimiento del juicio ordinario, renunciando a las ventajas del propio del interdicto, confundiendo, por lo tanto, las acciones que nacen de la posesión con las de la propiedad. Además, el art. 4.º del Código de Procedimientos comprende bajo el nombre de acciones reales,

(1) Más lógico es lo contrario; es decir, llegar a la conclusión de que aun los interdictos están sometidos a la jurisdicción del Juez del domicilio del demandado.

En efecto: los interdictos son acciones *personales ex-delicto* y el art. 4.º del Cód. de Proced. designa expresamente al Juez del domicilio como competente para las acciones *personales*, sin distinguir si deben nacer ó no de un delito; por consiguiente, atenta la máxima jurídica *ubi lex non distinguit nec non distinguere debemus* y la disposición del art. 59 del Cód. recordado, puede afirmarse que también los interdictos están comprendidos en aquella prescripción expresa de la ley —C. L. F.



todas las que tienden á garantir derechos sobre los bienes, incluyendo los interdictos. El mismo artículo sólo atribuye al Juez del domicilio las acciones personales que son las que nacen de los contratos. .

En los anteriores considerandos se han contestado estos argumentos, al tratar de la naturaleza y división de las acciones posesorias. El art. 2482 del Código Civil faculta al propietario para intentar la acción posesoria ó real; pudo, por lo tanto, el actor elegir la más conveniente á sus intereses.

Se ha explicado que el art. 4.º del Código de Procedimientos es suficientemente claro y explícito y no admite interpretaciones; ni podría aceptarse la teoría del demandado, sin violentar sus términos.

Habiéndose retirado la excepción de prescripción á f. 53, no hay objeto en considerarla.

Por estos fundamentos, los concordantes de la vista fiscal de f. 87, y lo dispuesto en el artículo 4.º del Código de Procedimientos, no ha lugar á la excepción de incompetencia deducida, debiendo contestarse, por los demandados, derechamente el traslado de la demanda en el término legal, teniéndose presente lo pedido en el 4.º otro sí del escrito de f. 55, sin especial condenación en costas, por no haber mérito, para ello. Respecto de los sellos del citado escrito de f. 55, téngase por resolución la vista del Agente Fiscal. Repónganse las fojas.

JUAN A. GARCÍA.

Ante mí

Julio R. Guyot.

DICTAMEN

DEL FISCAL

Dr. CARLOS L. MARENCO







Los derechos que emanan de la posesión consisten: 1.º En que el poseedor debe ser mantenido en la posesión contra todo agresor injusto; 2.º En que todo poseedor debe ser restituído en la posesión que le haya sido arrebatada ilegalmente. Mantención y restitución en la posesión son las garantías que la ley social acuerda al poseedor.

Pero estas garantías tienen una mayor ó menor eficacia, según sea la índole de la relación posesoria y el carácter de la agresión con que se la lesiona.

Si la posesión es turbada por actos materiales, el poseedor puede defenderse por medio del interdicto de retener.

Si el poseedor es despojado violenta ó clandestinamente, puede obtener la reparación del agravio por medio del interdicto de recobrar.

Estos medios de defensa sólo tienen en vista la posesión actual, según se desprende de los artículos 574 y 581 del Código de Procedimientos, concordantes con el artículo 2477 del Código Civil, que establece que la



posesión no tiene necesidad de ser anual, cuando es turbada por el que no es poseedor anual y que no tiene sobre la cosa ningún derecho de posesión.

Los interdictos se acuerdan por la consideración de que nadie debe hacerse justicia por sí mismo, perturbando el orden social.

Procedería establecer cierta distinción entre el despojo y la turbación de la posesión, en vista de los términos de los artículos 2490 y 2495 del Código Civil, pero para los efectos de la cuestión en tela de juicio, ello no es necesario y conduciría sólo á disertaciones teóricas, que, cuando no se relacionan con el punto debatido, conviene siempre apartar.

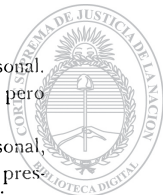
Fuera de los casos enunciados, es decir, cuando la turbación no consiste en actos materiales, ó la posesión se ha perdido por medios que no sean violentos ó clandestinos, compete al poseedor una *acción posesoria*, y ella ha de reconocer *por base una posesión anual*. Art. 2473.

Es de esto de lo que se trata, y el punto á resolver consiste en determinar la jurisdicción competente para conocer de las acciones posesorias.

El actor sostiene que la acción posesoria es una acción personal y que es juez competente para conocer de ella el del domicilio del demandado, según se prescribe en el art. 4.º del Código de Procedimientos.

Corresponde entonces averiguar si esa acción es efectivamente personal. Las acciones son reales ó personales, como lo enseñan los tratadistas, según se funden en un derecho real ó en un derecho personal.

El Código Civil establece en el art. 497, que á todo



derecho personal corresponde una obligación personal. Como se vé, no ha definido el derecho personal, pero lo ha caracterizado.

Es necesario, para que un derecho sea personal, que haya una persona determinada sujeta á una prestación. Los derechos personales son los que se tienen contra una persona determinada, la cual puede ser compelida á dar ó á hacer alguna cosa; *alicujus solvende rei*, como dice el texto romano.

Podría definirse, piensa un autor, un derecho á la prestación ó sea al hecho de una tercera persona. La noción de los derechos personales presenta tres elementos: en primer lugar, una persona á quien compete el derecho; en segundo lugar, una persona determinada contra la cual aquel derecho compete, y, en tercer lugar, el hecho ó sea la prestación que el acreedor puede pretender del deudor.

Si no se considerara aún suficientemente precisado el concepto del derecho personal, relacionándolo con la idea del derecho real, ese concepto aparecerá más nítido y concretado en su verdadero alcance.

Aubry y Rau, en el tomo II, pág. 49, presenta con suma maestría la naturaleza de uno y otro derecho y los rasgos diferenciales que los separan.

«Los derechos sobre los *objetos exteriores* son *reales* ó *personales*.

«Los *personales* se subdividen en derechos personales propiamente dicho ó de créditos y en derechos de poder.

«Los *derechos reales* son aquellos que crean una relación inmediata y directa entre una cosa y la persona al poder de la cual se encuentra sometida de una



manera más ó menos completa, y por esto mismo susceptibles de ser ejercidos, no solamente contra una persona determinada, sinó contra todos.

«Los *derechos personales* propiamente dicho, son aquellos que, emanando de un vínculo de obligación entre dos personas determinadas, no son, por su naturaleza, susceptibles de ser ejercidos sinó contra la persona obligada y contra aquéllos que responden de los compromisos de esa persona obligada.

«A diferencia de la distinción entre derechos muebles é inmuebles, la cual se refiere á la naturaleza de la cosa que forma el objeto de tal ó cual derecho, la división de los derechos en reales y personales, reposa sobre la naturaleza intrínseca de los derechos mismos.

«Los derechos reales y personales propiamente dichos difieren los unos de los otros bajo tres puntos de vista principales.

«(A) El derecho real supone una *cosa determinada en su individualidad* sobre la cual recae. El derecho personal no tiene por objeto sinó una prestación, es decir, el cumplimiento de un hecho ó la entrega de una cosa que *puede no estar* determinada sinó en su especie.

«(B) Aquél, al cual pertenece un derecho real, puede perseguir el ejercicio sobre la cosa misma sometida á este derecho contra *todo poseedor ó detentador* de esta cosa. Al contrario, aquél que sólo está investido de un derecho personal, es decir, el acreedor, no puede ejercerlo sinó contra la persona obligada á la prestación, es decir, contra el deudor.

«(C) Cuando muchas personas han adquirido sobre una cosa, en épocas diferentes, sea el mismo derecho



real, sea derechos reales diferentes, que se encuentran en colisión el uno con el otro, el derecho adquirido anteriormente prevalece en principio sobre el derecho adquirido más tarde. Al contrario, en caso de colisión de diversos derechos personales contra un mismo deudor, ninguno de los acreedores goza, en tesis general, de un derecho de preferencia.

Pero, estas ideas, que tan clara y metódicamente expresadas se ven en Aubry y Rau, son las mismas que han inspirado al Codificador Argentino, al traducir, en los breves preceptos de la ley, el concepto jurídico de los derechos reales y personales.

Como fuente de su clasificación, cita la siguiente opinión de Demolombe, al empezar á ocuparse de los derechos reales.

« Aunque en la nota al art. 497, definimos los derechos reales, tratando ahora especialmente de ellos, diremos, con Demolombe, que derecho real es el que crea entre la persona y la cosa una relación directa é inmediata, de tal manera, que no se encuentran en ella sinó dos elementos: la persona, que es el sujeto activo del derecho, y la cosa, que es el objeto.

« Se llama, al contrario, derecho personal, aquel que sólo crea una relación entre la persona á la cual el derecho pertenece y otra persona que se obliga hacia ella, por razón de una cosa ó de un hecho cualquiera, de modo que en esa relación se encuentren tres elementos, á saber: la persona, que es el sujeto activo del derecho (el acreedor), la persona, que es el sujeto pasivo (el deudor), y la cosa ó el hecho, que es el objeto.



«Los derechos reales comprenden los derechos sobre un objeto existente; los derechos personales comprenden los derechos á una prestación, es decir, á un objeto que tiene necesidad de ser realizado por una acción. La persona, á la cual pertenece un derecho real, puede reivindicar el objeto contra todo poseedor; la que tiene un derecho personal, no puede perseguir sinó á la persona obligada á la acción ó á la prestación.

«Cuando muchas personas han adquirido en diversas épocas, sobre el mismo objeto, el mismo derecho real, el derecho anterior es preferido al derecho posterior, mas el derecho personal anterior no es preferido al derecho personal posterior.

«La causa eficiente del derecho personal, es la obligación, siempre y únicamente la obligación, cualquiera que sea su origen: un contrato, un cuasi-contrato, un delito ó un cuasi-delito, ó la ley.

«La causa eficiente del derecho real, es la enagenación, ó generalmente, los medios legítimos por los cuales se cumple la trasmisión en todo ó en parte de la propiedad.

«El derecho real se tiene cuando entre la persona y la cosa, que es el objeto, no hay intermediario alguno y existe independiente de toda *obligación especial* de una persona hacia otra.

«Por el contrario, el que no puede dirigirse directamente sobre la cosa misma y tiene necesidad de dirigirse á una persona especialmente obligada á él, por razón de la cosa, no tiene sinó un derecho personal.

«El derecho real supone necesariamente la existencia actual de la cosa á la cual se aplica, pues que la cosa es



el objeto directo é inmediato, y no puede haber un derecho sin objeto; mientras que el derecho personal, no teniendo en realidad por objeto sinó el cumplimiento de un hecho prometido por la persona obligada, no exige necesariamente la existencia actual de la cosa, á la cual ese hecho debe aplicarse.»

Podemos ahora preguntar: ¿La acción posesoria anual, contra quién se dirige? No es ciertamente contra una persona determinada en el momento de la generación del derecho, es decir después de cumplido el año de posesión, sinó contra cualquiera que eventualmente lo perturba, pretendiendo que también le asiste un derecho posesorio. Podemos aún preguntar: ¿Qué relación de persona á persona determinada engendra la posesión? Ninguna absolutamente; y ante la contestación negativa á estas interrogaciones, es forzoso convenir que la posesión no es un derecho personal.

La parte demandante ha sido inducida á sostener que la posesión es un derecho personal, adoptando su criterio á un procedimiento de eliminación. Ha examinado los *derechos* reales, que el Código Civil consagra, y como no se han encontrado las *acciones* posesorias incluidas en ellos, ha deducido que los derechos, en que ellas se basan, son de carácter personal.

Si el Código Civil hubiera dicho: todo derecho que no es real, es un derecho personal, tal procedimiento sería irreprochable. Pero esto no ha sucedido, y antes bien, el legislador ha precisado ó caracterizado lo que es un derecho personal.

Entonces, para determinar la índole de cada derecho, es necesario estudiarlo en su esencia, y así estudiada



la relación jurídica, de que se trata, resulta con toda evidencia que no afecta los caracteres de un derecho personal.

Si yo aplicara para la individualización de los derechos, el criterio empleado por los sucesores de Furnus, llegaría al extremo de que la posesión es un derecho real, desde que he demostrado que no tiene cabida en el concepto jurídico del derecho personal; pero me abstengo de ello, porque el sistema, como dejo dicho, me parece incorrecto.

¿Qué derecho es entonces el que engendra la posesión anual? Los que sostienen que la posesión es un derecho, en contraposición de los que aseguran que es un simple hecho, dicen que la posesión no es puramente real, porque, aunque la cosa esté inmediatamente sometida al poseedor, este derecho no puede ser demandado contra los *terceros poseedores*, sinó sólo contra aquéllos que han violado la posesión. Esto podrá ser muy cierto en derecho romano, en el que la posesión no estaba protegida sinó por interdictos y en el que bastaba la ocupación actual; pero no se sostendrá que sea de aplicación rigurosa á nuestra legislación ese modo de pensar, desde que se tenga en vista *que el C. Civil protege la posesión por el interdicto y por las acciones posesorias*, teniendo en cuenta, en un caso, la posesión actual y en otro la posesión anual. El interdicto, conceptualizado como un acto de violencia y de perturbación al orden público, pudo muy bien ser restringido en su alcance á los límites en que lo concretó la legislación romana, pero las *acciones posesorias se dan adversus omnes* y desaparece entonces la consideración ó punto



de vista que se ha tenido para decir que no es puramente un derecho real, el que se ejercita en virtud de una posesión anual.

No se atrevieron, sin embargo, los que excluían la posesión de la categoría de los derechos reales, á colocarla en el catálogo de las acciones personales, y así, en seguida de expresar el óbice que los inducía á no conceptuarlo un derecho real, agregaban que la posesión no es, por otra parte, un derecho puramente personal, un derecho mediato sobre la cosa; no es un *jus ad rem*, en el sentido de que, para tener la cosa, sea necesaria la mediación de una tercera persona obligada á entregarla ó á darla. El derecho de posesión es un derecho directo sobre la cosa. En vista de estas perplejidades, tuvieron que decidirse por considerarlo un derecho anómalo, que bajo cierto punto de vista, podría conceptuarse real y bajo otro personal.

Pero el Código no admite estas anfibologías, no hay en él derechos mixtos y su autor expresa categóricamente su repugnancia por esta clase de derechos, condenados, por otra parte, por la jurisprudencia moderna, al consignar, en la nota al art. 4023, estas precisas palabras: «En este Código no reconocemos acciones mixtas de reales y personales.»

Excluida la posesión de la categoría de los derechos personales, por las consideraciones que dejo expuestas; excluida de la categoría de los derechos reales, por los términos de los artículos 2502 y 2503 y por la contraposición en que aparecen en el art. 2482 y eliminada y proscripta de la clasificación de derechos mixtos ¿cómo deben considerarse los derechos emergentes de la pose-



sión, derechos de existencia indudable desde que el Código los consagra?

Si no hay más que derechos reales y personales, no encuentro otra solución sinó asimilarlos á aquéllos que más se avengan con su índole y sus efectos.

Si la posesión anual sirve de base para reclamar la cosa contra *cualquier poseedor*, si *al surgir el derecho y la acción* no se requiere que intervenga para nada una tercera persona, ni es necesario hecho ni acción alguna que no sea entre el poseedor y la cosa, la similitud de los derechos posesorios con los derechos reales es evidente y las respectivas acciones adquieren un aspecto de paridad incuestionable.

A esto obedece, sin duda, la casi uniformidad de las legislaciones más adelantadas, *en atribuir* al Juez de la situación de la cosa el conocimiento de las *acciones posesorias*, como si efectivamente fueran acciones reales.

Los mismos tratadistas de derecho romano, á pesar del alcance restringido que les dan á los interdictos, enuncian doctrinas que se prestan á dar á las acciones posesorias del derecho moderno, el carácter de acciones reales.

Maynz, en el § 137, se expresa de la siguiente manera: «Se llama *in personam actio* la que tiene por objeto garantizar un derecho de obligación; toda otra acción es *in rem*. La noción de las acciones *in rem* es pues negativa; abraza todo lo que no es *actio in personam*. Aplicando estas ideas á la división de los derechos, encontramos que la lesión de un derecho de obligación *hará nacer* una *actio in personam*, mientras que la *actio in rem* *será provocada* por la lesión de cual-



quier otro derecho, sea de un derecho real, sea de un *derecho personal*, sea de un derecho de herencia.»

Si buscamos en el derecho moderno principios que se ajusten á este orden de ideas, encontramos que en Francia, en Italia y en España las acciones posesorias están asimiladas á las reales, en cuanto á su ejercicio en el lugar donde está situada la cosa; y como deseo ser breve, me concreto á indicar que en confirmación de lo dicho puede verse á Boitard, Lecciones de Procedimiento Civil, núm. 625 adelante; Ricci, Comentario al Código de Procedimiento Civil Italiano, núm. 92 y Caravantes núm. 298, en el que dice: «Se entablan ante el Juez del lugar donde estén sitas las cosas, según la regla del art. 5º de la ley, las siguientes acciones por pertenecer á las reales: las que se dirijen á reclamar la propiedad ó el dominio, la *posesión*, las servidumbres, etc.»

Mi conclusión es, como consecuencia de lo expuesto, que el Inferior no es competente para conocer en este asunto, desde que no se trata de una acción personal, lo que en mi concepto es evidente, no obstante la erudición, que para demostrar lo contrario, se ha desplegado por parte del Dr. Furnus.

Buenos Aires, Abril 28 de 1894.

CARLOS L. MARENCO.



INFORME *IN VOCE*

DEL DR. CÁSTULO L. FURNUS

ANTE LA EXC^{MA}. CÁMARA DE APELACIONES







En mi escrito contestando la excepción de incompetencia, creía haber comprobado de una manera indudable, porque tenía en mi apoyo al ilustre jurisconsulto Dr. G. Cortés, que, en el Derecho Argentino, la posesión, que sirve de base á las acciones posesorias, es un derecho exclusivamente personal; pero, la opinión contraria del actual Fiscal, emitida en este pleito que inicié de conformidad con aquel parecer, me obligan á ampliar los fundamentos de mi tesis; lo que voy á hacer con la venia de V. E., declarando que ante la gran autoridad del ilustrado Dr. Marengo, la humildad de mis fuerzas no tiene más apoyo que mi convicción íntima de estar asistido de la razón, el derecho y la justicia, que espero serán reconocidos á pesar de las desventajas de mi posición.



Meditando fríamente sobre los fundamentos y la conclusión del dictamen fiscal, mi espíritu no se encuentra satisfecho y sí inclinado á adelantar el estudio analítico de esta cuestión, para aclarar ciertos conceptos oscuros.

Después del examen de los caracteres de los derechos reales y personales, el Dr. Marengo llega á esta conclusión: que la posesión no es un derecho *personal*, porque él no le encuentra todos los caracteres propios de tal clase de derechos; que no es un derecho *real*, porque los términos de los artículos 2502, 2503 y 2482 así lo indican, y que tampoco es *mixto*, porque en la nota al art. 4023 del Código Civil se proscribe tal clasificación.

Sentado esto, la consecuencia lógica sería concluir que la posesión no es un *derecho*, desde que no puede incluirse en aquella clasificación, que, según los tratadistas, es comprensiva de todos los derechos y acciones, pues el sabio jurisconsulto Ortolán, dice: «Todos los derechos sin excepción, de cualquier modo que hayan sido adquiridos, ejercidos ó reclamados en justicia (así no sólo los que son protegidos por acciones, sino aun los que no están garantidos sinó por excepciones), y cualquiera que sea la cosa corpórea ó incorpórea, que haya sido objeto de ella (así los derechos que se refieren al estado del hombre, á su individualidad corporal ó moral), vienen á colocarse en una ó en otra categoría. No es arbitraria, pues procede forzosamente de la naturaleza de las cosas, ordenando al hombre,



inmutable y reproduciéndose inevitablemente en toda legislación.»

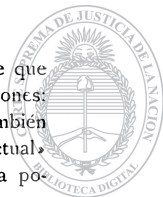
Sin embargo, su conclusión no es ésta, porque afirma que «los *derechos* emergentes de la posesión son de existencia indudable, desde que el Código los consagra.»

Pero, agregar que no habiendo «más que derechos reales y personales,» para poder incluir en esta división á la posesión, que es un derecho, pero nó personal, ni real, ni mixto, «no se encuentra otra solución» sinó asimilarla al derecho real, porque hay entre ellos una «similitud evidente» por su «índole y efectos» y «las respectivas acciones adquieren un aspecto de paridad incuestionable,» ó es una distinción demasiado sutil, que no he podido percibir, á pesar de haber meditado bastante sobre ello, ó es un simple juego de palabras, que disimula una solución equivocada.

Quizá sea cierto lo primero, pero no concibo un *derecho* que no sea derecho personal ó derecho real, y no esté, como consecuencia, incluido en esta gran división, tan antigua como general y exacta, reconocida también por nuestra legislación. Tampoco me explico que hayan acciones con caracteres idénticos, que produzcan efectos jurídicos semejantes, se sujeten á las mismas reglas, y sin embargo, no puedan incluirse en la categoría cuyo nombre corresponde precisamente á las acciones que tienen esos caracteres, efectos y reglas.

Debiendo, no obstante, formar y emitir opinión, según mi modesta ciencia y conciencia, creo que la segunda proposición es la verdadera.

Intentaré demostrarlo, haciendo, entre tanto, otra observación:

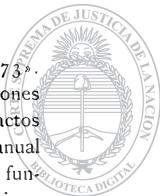


El Dr. Marengo acepta la distinción que hice de que en nuestro derecho hay dos clases de estas acciones: los interdictos y las acciones posesorias, y dice también que los primeros «sólo tienen en vista la posesión actual» y que las últimas «han de reconocer por base una posesión anual.»

Y desentendiéndose de los interdictos, porque cree que su estudio «conduciría sólo á disertaciones teóricas, que cuando no se relacionan con el punto debatido, conviene siempre apartar,» se concreta á estudiar la naturaleza de la acción posesoria, analizando únicamente algunos de sus caracteres, sin examinar su verdadero fundamento filosófico.

Pero, como, en mi concepto, no se puede prescindir en absoluto de la teoría, porque precisamente en falta de una prescripción legal expresa, se debe resolver la cuestión según los principios que rigen la materia, es decir, de acuerdo con la teoría filosófica legal, pregunto: entre las varias que pretenden fundar estas acciones, ¿cuál es la aceptada por nuestra ley, según el señor Fiscal?

En cuanto á los interdictos, luego de manifestar que deben mediar actos materiales, violencia ó clandestinidad en la turbación ó despojo, dice que ellos «se acuerdan por la consideración de que nadie debe hacerse justicia por sí mismo, perturbando el orden social», y al hablar de las acciones posesorias se limita á consignar que «*fuera de los casos enunciados*, es decir, cuando la turbación no consiste en actos materiales ó la posesión se ha perdido por medios que no sean violentos ó clandestinos, compete al poseedor una *acción posesoria* y ella ha de



reconocer *por base una posesión anual*. Art. 2473».

Al radicar la distinción, entre interdictos y acciones posesorias, únicamente en la intromisión ó nó de actos materiales, violentos ó clandestinos y la posesión anual ó actual, parece que el Dr. Marengo aceptara como fundamento común de esas acciones (pues no menciona otra distinta para las acciones posesorias) la máxima citada de que «nadie debe hacerse justicia por sí mismo».

Y si observamos que la aceptación de esa máxima es el argumento más decisivo en favor de la naturaleza *personal* de la acción, que en ella se funda, se percibirá al punto la contradicción en que se incurre al atribuir á las acciones posesorias tal fundamento y declarar al mismo tiempo que no son acciones personales.

Tales hechos, sugieren dudas y con ellas la necesidad de profundizar el estudio del punto discutido, y mucho más cuando es tan fácil, dada la dificultad de la materia, resbalar por el camino más accesible, aunque equivocado, que ha seguido el señor Fiscal.

En realidad, apenas se inicia el examen de esta materia, se presentan á dificultarlo: la falta de estudios especiales de nuestra legislación, que, á diferencia de todas las extranjeras, admite dos órdenes de acciones posesorias en vez de uno solo; la variedad de teorías que pretenden fundar tales acciones; los diversos caracteres de éstas, que hacen difícil su clasificación; la poca claridad de nuestra legislación al respecto, y más que todo, este escollo enorme para quien prejuzgue que tales acciones no son personales: el Código Civil, en sus arts. 2502, 2503, 2482, etc., indica que no son acciones reales; en la nota al art. 4023, rechaza la clasificación de acciones



mixtas, y nada dice expresamente si son ó no son personales.

Y como, al fin, los caracteres más ostensibles de estas acciones se asemejan á los de las acciones reales y algunas de las legislaciones extranjeras las declaran tales, cuando no consideran la posesión como simple hecho, halaga, desde el primer momento, una solución acomodaticia, que se presenta fácil y que consiste en asimilar tales acciones á las reales, dándoles todos sus caracteres y efectos, pero quitándoles el nombre, para eludir las disposiciones contrarias y claras de nuestro Código Civil.

Cómo se explica que esas acciones, no siendo reales, tengan, sin embargo, todos sus caracteres y produzcan todos sus efectos?

Entiendo que si tienen estos caracteres y efectos son acciones reales, y si no lo son, no deben tenerlos; pero conferirles aquéllos y negarles el nombre por el cual se distingue precisamente esa clase de acciones, choca al mismo sentido común, y no hay una sola razón seria que autorice semejante anormalidad.

Quizá estudiando las diversas teorías en que se pretende fundar la posesión, se encuentre como más lógica la que la considera como un derecho real; pero, una cosa es reconocer la bondad ó superioridad de una teoría y otra es comprobar cuál es la aceptada por nuestro Código, es decir, cuál es la que tiene fuerza de ley. Quizá, pues, nuestro Código ha aceptado la peor, pero aun cuando así fuera, ésa sería la teoría legal y la única aplicable al caso sometido al fallo judicial.

En lugar de eludir las disposiciones claras y terminantes de la ley, el intérprete debe procurar armoni-



zarlas y penetrar su espíritu para deducir el principio legal, cuya aplicación debe hacerse con independencia absoluta de lo dispuesto en las otras legislaciones extranjeras.

Todas éstas, desde la legislación romana, admiten un solo orden de acciones posesorias llamadas interdictos, mientras que la nuestra establece, como lo reconoce expresamente el Sr. Fiscal, dos órdenes distintos: los interdictos y las acciones posesorias. Y si puede interesarnos averiguar qué fundamentos da la legislación comparada á los interdictos, que también admitimos, no nos importa, ni podemos averiguar nada, en aquellas legislaciones, respecto de nuestras *acciones posesorias*, porque no las establecen.

Estudiemos, pues, estas acciones en nuestro propio derecho, porque son de «existencia indudable desde que el Código las consagra;» pero, no eludamos sus disposiciones terminantes para dar preferencias á teorías ó legislaciones extrañas, que nada dicen al respecto, y que aun cuando dijeran ó fueran superiores á la nuestra, no tienen valor alguno, porque no hacemos filosofía en esta oportunidad, sino el estudio analítico de las prescripciones legales, para averiguar la verdadera teoría legal, que debe guiarnos, con sus principios, aquí donde la ley no alcanza con sus preceptos expresos.

Y como la distinción que he hecho entre interdictos y acciones posesorias, no había sido establecida aún en la jurisprudencia, cuya confusión conducía á aplicar las teorías extranjeras á nuestras acciones posesorias, que son exclusivas del derecho argentino, he debido hacer el estudio de los caracteres distintivos de tales acciones,



así como el de las teorías que les sirven de fundamento, no por prurito de teorizar, sinó con el deseo de despejar un poco tanta confusión.

Si tal distinción es una verdad en nuestra legislación, necesariamente hay que admitir la existencia de motivos, razones ó teorías diversas, que funden ambas clases de acciones, porque las mismas causas no producen efectos diferentes.

Y si el Dr. Marengo acepta la existencia de estas dos clases de acciones, admite también forzosamente la dualidad de fundamentos, y si «los interdictos se acuerdan por la consideración de que nadie debe hacerse justicia por sí mismo, perturbando el orden social,» por qué razones se admiten, según él, las acciones posesorias?

No lo dice, y la forma de silenciarlo autoriza á creer que les asigna el mismo fundamento, lo que es un gran error.

Si nuestro Código reconoce la posesión como un derecho, este *derecho de posesión* será la base de las acciones posesorias, cuyo ejercicio estará sujeto al principio general de la seguridad é inviolabilidad de todos los derechos. Su naturaleza surgirá de ese mismo derecho de posesión, así como la de los interdictos se deduce de la máxima citada y no de la posesión, porque en éstos se la considera como un simple hecho, pues, sólo exigen «la actual posesión» ó la «*tenencia* de la cosa» (arts. 574 y 581 del Cód. de Proced., 2477 y 2490 del Cód. Civil), la «posesión actual ó momentánea», el «*hecho de la posesión*», como dice Escriche, y las otras requieren «la posesión que tiene mayor importancia jurídica, la que presenta todos los caracteres indispensa-

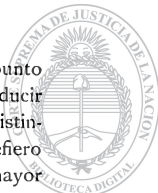


bles para los *derechos posesorios*, la posesión que sirve para la prescripción y que da acciones posesorias *adversus omnes*,» como dice, en su nota al art. 2351 del C. Civil, el Dr. Velez, quien, «dejando para otro lugar tratar de la posesión que sólo sirve para los interdictos», admite indudablemente esas mismas dos clases de acciones, que, con caracteres especiales, se ejercitan por procedimientos diversos y producen efectos jurídicos diferentes, según ya lo dejo comprobado en los párrafos III á VI y VIII de mi escrito, al principio citado, los cuales doy por reproducidos.

Luego, pues, en nuestro derecho tenemos: los *interdictos*, que se basan en el *hecho de la posesión* y se fundan en la máxima de orden público: «nadie debe hacerse justicia por sí mismo,» y las *acciones posesorias*, que se basan en el *derecho de posesión* y se fundan en el principio general de la seguridad é inviolabilidad de todos los derechos.

Naturaleza de los interdictos.

Pudiera prescindir de tratar de la naturaleza de las acciones llamadas interdictos, pero atenta su estrecha relación con las otras acciones, como que todas son posesorias y para mayor ilustración de esta materia, que «forma, como dice León Wodon, incontestablemente la porción mas difícil y árdua del derecho civil moderno», no estando, por otra parte, obligado, como se consi-



dera el señor Fiscal, á limitarme estrictamente al punto discutido, desechando toda cuestión que pueda conducir á disertaciones teóricas, la mencionaré para mejor distinguirlas, aun cuando, para evitar repeticiones, me refiero al § XII de mi citado escrito, si bien agregaré, para mayor claridad, algunas consideraciones más tomadas de la notable obra de León Wodon, sobre posesión y acciones posesorias.

Este autor, de acuerdo con Savigny, dice que *en el derecho romano*, «la posesión, en su principio, no es sinó un hecho, *res facti*; que aunque no sea un derecho, puede ser de derecho, *non jus, sed juris*; . . . que los únicos efectos jurídicos que produce son las acciones posesorias; que el derecho en los interdictos y acciones posesorias, *no es un derecho real sinó un simple derecho personal, que sólo engendra acciones personales*; que este derecho personal tiene su verdadero fundamento en la ley de policía y de orden público: *nadie puede hacerse justicia por sí mismo*».

«Las acciones posesorias ó interdictos, dice en el N° 40, son verdaderas *acciones penales privadas*, introducidas entre los Romanos por el derecho pretoriano, para impedir que las personas se hagan justicia á sí mismas, según la expresión del edicto, *ne vis fiat*, etc.»

«Ellas tienen su *fundamentum proximum*, en la posesión *animo domini* y la turbación causada, en tanto la ley lo permita; en cuanto al verdadero fundamento ó *fundamentum remotum* de las acciones posesorias, está exclusivamente en una ley de orden público, en la obligación legal *ex delicto, ex quasi-delicto, ex maleficiis*, que resulta de la disposición expresa del legislador; y de aquí



hay que concluir necesariamente que la acción posesoria es una acción *personal*. La posesión es así más la condición ó causa ocasional de los interdictos ó de la usucapión que su verdadero fundamento».

«Tal es la *verdadera* explicación de la posesión en *derecho romano* y lo que únicamente nos hace comprender el significado de la ley: *interdicta omnia, licet in rem videantur concepta, vi tamen ipsa personalia sunt.*»

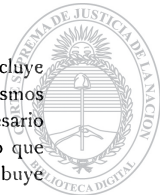
«En la fórmula romana el demandado por acción posesoria debía ser *nombrado* como en materia personal; aquél, que quería prevalerse de ella, debía sostener que el demandado, que el *adversario estaba obligado.*»

«Todo el procedimiento era *penal* en la fórmula del antiguo derecho romano; y por este motivo, el interdicto se prescribía por un año.»

«El interdicto era, pues, una ordenanza ó acción de policía privada, establecida para impedir ó reprimir los actos de violencia, destinada á garantir la posesión contra aquél que la turbaba ó usurpaba por vías de hecho: era, pues, una acción personal.»

El mismo autor piensa que «los principios del derecho romano, sobre la *personalidad* de las acciones posesorias, no se han alterado en el derecho francés.»

Cita á Pothier, en cuyas doctrinas se han inspirado principalmente los legisladores, quien dice: «Las acciones posesorias, que son la de restitución y la de manutención, deben también ser incluidas en la clase de las *acciones personales*, porque la primera *nace* del delito de aquél que ha despojado al poseedor, y la otra del cuasidelito de aquél que, sin derecho, lo turba en su posesión.»



El sabio Mr. Laurent, estudiando este punto, concluye que la posesión «teniendo absolutamente los mismos caracteres que tenía en el antiguo derecho, es necesario decir que ella es lo que siempre ha sido, un hecho que manifiesta la propiedad, hecho al cual la ley atribuye ciertos derechos.

Por qué el legislador da derechos al poseedor?—Hay un motivo de orden público: la turbación y la violencia se traducen en vías de hecho, y la ley no puede permitir las vías de hecho, aun cuando fueran ejercidas por aquél que pretenda tener un derecho sobre la cosa.—Si tiene un derecho que lo haga valer ante los Tribunales.»—(tomo 6, núm. 82 y tomo 32, núm. 265).

Cita en su apoyo á Pothier, Toullier, Troplong y Aubry y Rau.

La legislación italiana, «que de la francesa viene casi literalmente copiada», como dice Cuzzi (El Cód. Ital. de Proced. Civil. Vol. 5º, pág. 383), también admite que «la reintegración no es la acción posesoria propiamente dicha.—En ésta es indispensable la posesión legítima, anual; en aquélla basta una posesión cualquiera. La posesión no es sinó el elemento indispensable del despojo; despojo y posesión son los únicos factores. Es el motivo de la paz social, del orden preestablecido, la máxima fundamental que á nadie le es permitido hacerse justicia por sí, lo que anima la reintegración.»

(Cuzzi, Ob. cit. pág. 387.—Sent. Cort. Sup. de Palermo).

Nuestra legislación ha tomado los interdictos de la Española, la que á su vez se ha inspirado en el Derecho Romano—y si en aquellas legislaciones han conservado,



en general, los mismos caracteres que tenían en éste, á pesar de las muchas modificaciones introducirlas, es evidente que la teoría romana, expuesta por Savigny, sostenida, entre otros, por León Wodon y Laurent, y aceptada por las legislaciones francesa, italiana, etc., es también nuestra teoría legal, en materia de interdictos.

Y no puede negarse que nuestra ley considera la posesión, en estos interdictos, como un hecho, porque sólo exige la *tenencia*, la posesión actual, el hecho de la posesión (arts. 574, 577 y 581 del Cód. de Proc.), que no tiene necesidad de ser anual y aunque sea viciosa (arts. 2477 y 2490 del Cód. Civil), y en los juicios sumarios, en que ellas se ejercitan, no se resuelve la cuestión de posesión definitiva sino provisionalmente, como hice notar en mi citado escrito.

Siendo indudable que nuestros interdictos tienen el mismo fundamento y, por consiguiente, el mismo carácter que los del derecho romano, debemos concluir que son acciones *personales*, pero ex-delicto, ex-quasi-delicto, ex-maleficiis y nó por ser la posesión, en que ellos se basan, un derecho personal, como lo afirmaba el Doctor Cortés.

Es cierto que, fundado en la nota del Dr. Velez al art. 2351, *in-fine*, donde dice que Molitor ha combatido la opinión de Savigny, á su juicio victoriosamente «demostrando que *toda* posesión es un derecho», podría argumentarse diciendo que la posesión, que sirve de base á los interdictos, aunque sea momentánea ó actual, es también un derecho.

Pero, esto en nada influiría sobre nuestra conclusión, puesto que en el § XII recordado, dejé establecido que



en los interdictos la razón de interés público los caracteriza principal y especialmente, predominando sobre la naturaleza de la posesión, que les sirve de base y que ocupa así, puede decirse, un lugar secundario, ó, como dice Wodon: «la posesión es más la condición ó causa ocasional de los interdictos, que su verdadero fundamento.»

Por otra parte, aunque así no fuera, es decir, aunque la naturaleza de los interdictos se determinara por la de la posesión, en mi concepto siempre serían acciones personales desde que sostengo que la posesión, en nuestra legislación, es un derecho personal.

Es cierto que existen muchas otras teorías que pretenden fundar los interdictos del D. Romano, y entre ellas una original de Ihering, como puede observarse en su obra sobre «El fundamento de la protección posesoria»; pero, aparte de lo vagas, poco satisfactorias y criticables que son, la que dejo expuesta aparece aceptada por nuestro legislador, por los tratadistas, por algunos fallos y hasta por el Sr. Fiscal Dr. Marengo, desde que reconoce que «los interdictos se acuerdan por la consideración de que nadie debe hacerse justicia por sí mismo, perturbando el orden social.»

La posesión es un derecho.

Según esto, doy por aceptado que los interdictos, en la legislación argentina, son acciones personales.



¿Y podría darse el mismo fundamento á las acciones posesorias propiamente dichas, afirmando por otra parte que son acciones reales, aunque sea á título de asimilación, ya que no conviene darles el nombre correspondiente?

No es posible. Si tienen el mismo fundamento serán necesariamente acciones personales. Si son acciones reales, tendrán forzosamente un fundamento distinto, que no indica el Sr. Fiscal.

Por mi parte, buscando el que les corresponde, *según los caracteres que les atribuye la legislación positiva*, creo encontrarles en la teoría que sostiene como más lógico el principio de que la posesión es un derecho exclusivamente personal.

Ya dejé establecido que la posesión era lo único que determinaba la naturaleza de las acciones posesorias propiamente dichas.

Veamos primeramente cuál es esa teoría y luego examinaremos si los caracteres de las acciones posesorias se armonizan con los de las acciones personales ó si «la similitud de los derechos posesorios con los derechos reales es tan evidente», como lo sostiene el Sr. Fiscal.

Desde luego observaré, que las teorías que pretenden fundar los interdictos del D. Romano, no tienen para nosotros, al tratar de las *acciones posesorias*, sino un valor puramente filosófico, porque estas acciones son exclusivas del derecho moderno, que considera la posesión con independencia de la propiedad, reconociéndola como un derecho, mientras que en aquél no era reconocida por la ley y se la consideraba más bien en el hecho: *«potius in facto, quam in jure consistit.»*



Es evidente que si se considera la posesión como dependiente, absorbida ó unida á la propiedad, que es un derecho amplio, general, exclusivo y absoluto sobre la cosa, será sólo su manifestación exterior, su *ejercicio material* y en tal concepto será más un hecho que un derecho, ó como dice Ihering, la «exterioridad de la propiedad» «una posición avanzada de la propiedad.»

Pero, el concepto jurídico moderno de la posesión es independiente del de la propiedad, sin perjuicio de que en la práctica se hallen generalmente unidas en una misma persona, porque á nadie puede corresponder más la posesión que al que tiene la propiedad, (art. 2513 C. C.) que en nuestro derecho no se adquiere sin la tradición.

Pues bien; la verdadera teoría filosófica de la posesión, en su concepto moderno, la considera como un derecho, tanto ante el orden natural como ante el positivo.

El hombre encargado de cumplir por sí mismo su propio destino, desarrollando armónicamente sus facultades intelectuales, morales y físicas, tiene derecho á las condiciones indispensables para ello, y, en tal virtud, puede usar é incorporar á su personalidad, todos aquellos objetos que forman la escena exterior en que se desarrolla, y que, según su naturaleza, puedan servir de *medios* á su fin, con tal que no ataque igual derecho de otra persona, que haya con anterioridad incorporado ó apropiádose el mismo objeto, imprimiéndole el carácter sagrado é inviolable de su personalidad, respetable para todos los demás seres que con él coexisten.

He ahí el fundamento del derecho de propiedad y el



de su protección; el respeto debido á la personalidad que, puesta en relación directa, inmediata con la cosa, la apropia de una manera absoluta, completa y exclusiva, absorbiendo todos los servicios que ella puede prestar, como medio indispensable para el cumplimiento de su fin.

Pero, sucede frecuentemente, que una cosa, apropiada por una persona, se halla en poder de otra, que utiliza sólo ciertos servicios.

Esta relación limitada, incompleta de la personalidad con la cosa y que recibe el nombre de posesión, ¿constituye un derecho de propiedad?

«Desde luego, dice el Dr. Escalante, para que constituya un derecho de propiedad, es necesario que no ataque derecho de tercero. Hemos visto que una persona, en tanto comunica su carácter inviolable y sagrado á las cosas, que se incorpora, en cuanto no ataca derechos de tercero; que en tanto su acto es lícito, en cuanto por él no viole, ni invada la esfera jurídica de otra persona. Sería absurdo invocar el derecho de personalidad sobre una cosa que se quiere apropiar, cuando, al mismo tiempo, se atacara con él la personalidad de otro á quien la cosa perteneciera. No hay derecho contra derecho; no hay colisión de derechos; éstos están encerrados en círculos tangentes, no superpuestos, y la esfera del uno termina donde empieza la esfera del otro. Por consiguiente, la relación de la persona con la cosa, con intención de apropiársela, no basta para que ella se incorpore á su patrimonio, y no constituye, por lo tanto un derecho de propiedad.»



«Será un derecho de otro género, al goce y uso más ó menos limitado de la cosa?»

«Aquí hay que distinguir elementos intencionales,» continúa el Dr. Escalante.

«Si el que tiene la cosa con intención de someterla al *ejercicio* de un derecho de propiedad, sabe que es agena, que no es apropiable, entonces no puede nacer ningún derecho de la relación inmoral que él establece, porque ningún acto violatorio del orden moral, del derecho de tercero, puede dar origen á un derecho legítimo. Por consiguiente, la *posesión de mala fe jamás puede constituir un derecho, ante el orden natural.*»

«Pero, veamos el caso de la posesión de buena fe. Una persona toma una cosa, que cree no ser de nadie ó que, por cualquier razón, cree que le pertenece; la incorpora á su patrimonio, según su intención, para gozar de ella con arreglo á sus fines morales y jurídicos; pero sucede que aun cuando él lo ignora, la cosa pertenece á otro. La habrá incorporado á su patrimonio como una propiedad? Indudablemente nó, porque falta el objeto, la cosa apropiable, la *res nullius* á la que se pueda imprimir impunemente el sello de la personalidad y hacerla sagrada; la cosa ha recibido ya un sello anterior, que no permite otro nuevo.»

«Este acto, aunque realizado de buena fe, *no constituye un derecho con respecto al propietario anterior*, y el poseedor tiene que devolverle la cosa.

«Si la personalidad es el fundamento de la propiedad, el poseedor debe reconocer el derecho del verdadero propietario y está por consiguiente obligado á restituirle el objeto.»



«Ahora, cuando relacionamos al individuo que posee, con otro que no posee y que tampoco es dueño, encontramos, que esa relación de derecho entre la persona del poseedor y la cosa, le incorpora á ésta un sello de personalidad, que, aun cuando no sea el de la propiedad, la hace, sin embargo respetable para aquéllos que no tienen ningún vínculo de derecho con la cosa. De aquí nace que la posesión de buena fe importa una relación lícita de la persona con la cosa, por que aunque ésta sea agena, el poseedor de buena fe con tomarla no viola ninguna regla moral; pues, su intención es sana, aunque ataque materialmente un derecho que no conoce. Luego es perfectamente respetable la relación del poseedor con la cosa poseída, y si no se transforma en propiedad, es porque la cosa es agena y está apropiada ya; pero *esa relación constituye un verdadero derecho de posesión. . . .*»

«Por consiguiente, desde este punto de vista, la posesión de buena fe constituye un *derecho*, respetable por los terceros. . . .; no como un derecho de propiedad, sino como un *derecho de uso, de percepción de frutos, mientras dure la posesión.*»

«Esto sucede ante el derecho natural; pero, ¿ante el derecho positivo? Como éste no puede andar juzgando las intenciones, ni apreciando los elementos puramente íntimos de los actos, se fija sólo en el hecho material y cuando una persona está relacionada con una cosa, para hacer respetar esa relación, no tiene más que *darle el carácter sagrado de la personalidad* y con ese fin establece que ninguno, sino en virtud de un derecho preexistente, puede turbar esa relación, ni introducirse á juzgar si es legítima ó ilegítima. . . .»



«El derecho positivo dice: cuando un hombre se relaciona con una cosa, nadie tiene derecho de investigar su intención, ó examinar si es lícita ó inmoral; *hay que respetarlo en virtud de la inviolabilidad de la persona y del carácter sagrado de sus relaciones privadas religioso-morales*, y mientras no afecten á tercero, ni violen un derecho legítimo anterior, sanciona ese hecho del poseedor y establecé que nadie puede arbitrariamente perturbarlo (art. 2469). Él posee porque posee (art. 2363). Por eso la legislación positiva lo protege con las acciones posesorias.»

«Esa protección es tanto más eficaz y extensa cuanto mejores son las calidades que constituyen y levantan el DERECHO en el sujeto. Por eso es que la posesión cuando no tiene cierto tiempo, la condición de ser anual; cuando, además, adolece de vicios por que sea violenta, precaria ó clandestina, sólo es protegida contra un tercero que la ataca sin las codiciones de poseedor anual (arts. 2473 y 2477). En este caso, la protección no es evidentemente á un derecho natural, es pura y simplemente á un hecho y ella se acuerda en virtud de ser un principio de la legislación positiva, que cada uno es respetable en su esfera de acción individual, aun cuando no observe las leyes de la moral, siempre que no ataque derechos de tercero.»

«El Código distingue los elementos subjetivos de la posesión, para atribuirles diferentes efectos, de acuerdo con los principios del D. Natural; distingue la posesión legítima, ilegítima, de buena fe, de mala fe, la que es precaria, violenta ó clandestina, de la que tiene calidades opuestas; y *no acuerda las acciones posesorias sinó á la que está desprovista de estos vicios.*»



«Cuando un tercero despoja al poseedor, rompe arbitrariamente el vínculo físico-moral y la ley protege su restablecimiento, dando acciones posesorias, para hacer cesar el despojo y recuperar la posesión. Los medios que la legislación positiva crea para la defensa de la posesión, las *acciones posesorias*, *no se dan para el derecho de poseer, que nace del dominio*, por que á este derecho corresponden las *acciones reales*. De ahí que *la condición para el ejercicio de las acciones posesorias sea la posesión misma* y que se haga diferencia, al establecerlas, entre el *hecho de la posesión*, con los *derechos que de él nacen* y el simple *derecho de poseer*, que pertenece al propietario y que no es protegido por acciones posesorias.» (Lecciones de Filosofía del Derecho por W. Escalante).

Para terminar con la exposición del fundamento filosófico del derecho de posesión y de su protección, citaré las siguientes notas con que, el Dr. Adolfo Posada, ilustra su traducción española de la notable obra «El fundamento de la protección posesoria» de R. Von Ihering:

«La *posesión* de los *medios* por la persona es condición esencial para verificar la relación económica, que implica la propiedad; es condición necesaria, en general, para cumplir el *fin* de la vida racional en el derecho.»

«La posesión no implica meramente la tenencia material de los objetos y no se refiere sólo á la relación de propiedad, sino que es un momento esencial de la vida ó cumplimiento de la relación entre el sujeto (persona) y la condición, en virtud de la que se hace posible la aplicación de ésta á su fin correspondiente.»

Á propósito he citado casi íntegramente estos párrafos, en especial los del ilustrado profesor Dr. Escalante, por



que en ellos se demuestra que ante la legislación positiva «*toda posesión*, como decía el Dr. Velez, *es un derecho*.»

El Dr. Escalante tampoco hace con claridad la distinción entre los interdictos y las acciones posesorias.

Debe observarse, en consecuencia, que la posesión, que no tiene mayor importancia jurídica, la que no es anual, ni se halla exenta de vicios, la que sirve de base á nuestros interdictos, no es un derecho en todos los casos, sinó cuando es de buena fe (se entiende ante el orden natural, porque el derecho positivo no la requiere. Art. 2473. C. Civil) y se la considera en relación á un individuo que no posea, ni tenga derecho de poseer. (Art. 2477 C. Civil.)

Cuando no reuna estas condiciones no es más que un hecho.

Y considerando que la ley positiva sólo exige la «*actual posesión*», la «*tenencia de la cosa*» (arts. 574 y 581 del Cod. de Procedimientos y 2477 y 2490 del C. Civil), la «*posesión actual ó momentánea*», el «*hecho de la posesión*», como dice Escriche, he afirmado que en nuestro derecho vigente es considerada la posesión, que sólo sirve para los interdictos, como un *hecho* y no como un derecho, y con mayor razón aún cuando dichos interdictos reconocen por fundamento el principio de orden público: nadie puede hacerse justicia por sí mismo y no la posesión, cuya naturaleza, tomando así un lugar secundario, importa poco averiguar.

Adviértase de paso, que esta posesión, no da acciones posesorias (llamadas interdictos) contra *todo violador*, *adversus omnes*; pues no pueden dirigirse contra el violador que posee á título de dueño ó usufructuario (ar-



título 564 C. de Procedimientos); «sólo es protegida, dice el Dr. Escalante, contra un tercero que la ataca sin las condiciones de poseedor anual, (arts. 2473 y 2477. C. Civil).

Pero, «la protección posesoria es tanto más eficaz y extensa cuanto mejores son las calidades que constituyen y levantan el *derecho* en el sujeto,» y por eso se acuerdan las acciones posesorias propiamente dichas á la posesión que se halla desprovista de vicios y ha durado el término de un año (art. 2473).

Tal posesión, dice el Dr. Velez, «es la que tiene mayor importancia jurídica, la que *presenta todos los caracteres indispensables para los derechos posesorios*, la posesión que sirve para la prescripción y que da acciones posesorias *adversus omnes*.»

La ley, que declara en sus arts. 2473 y 4040 que por el trascurso de un año, el desposeído ó turbado en la posesión pierde el derecho de ejercitar las acciones correspondientes y que el nuevo poseedor adquiere el derecho de ejercitarlas con toda su eficacia y extensión, reconoce de una manera indudable la posesión como un *derecho del poseedor*, porque rompiendo el vínculo físico-moral, que mantenía la cosa dentro de la esfera de atracción de la finalidad racional del primitivo poseedor, la atribuye al último, con todos sus efectos y consecuencias.

Con lo expuesto hasta esta oportunidad, que está de acuerdo y se basa en las citadas opiniones de Molitor, Vélez Sársfield, Goyena, Cortés, Escalante y aun el mismo Dr. Marengo, creo puedo concluir afir-



mando que la posesión, en la legislación argentina, es un *derecho*.

Obsérvese, también de paso, que este *derecho de posesión*, á diferencia de la otra, origina acciones posesorias *adversus omnes*, como dice el Dr. Velez, dándole, nó el significado que le atribuye el Sr. Fiscal, sinó en el sentido de que pueden dirigirse, á diferencia de lo que sucede en los interdictos, contra *todo violador*, aunque sea el verdadero propietario.

Insistiré luego sobre esto.

División de los derechos---Regla general.

Bien, pero, comprobado que la posesión es un derecho, queda aún por resolver qué clase de derecho es? Qué elementos de la posesión deben examinarse para hacer su clasificación?

«Á diferencia de la distinción entre derechos muebles é inmuebles, dice el Dr. Marengo, citando á Aubry y Rau, la cual se refiere á la naturaleza de la cosa que forma el objeto de tal ó cual derecho, la división de los derechos reales y personales reposa sobre la *naturaleza intrínseca* de los derechos mismos.»

Atendiendo precisamente á esta naturaleza intrínseca, encuentro que todo derecho, sin excepción, es personal.

Su raíz y fundamento está siempre en la personalidad humana, en el ser inteligente, libre y sensible, que, debiendo cumplir por sí su propio destino, tiene la



facultad, el derecho de exigir las condiciones necesarias para llenar su fin; la persona es siempre el sujeto de todo derecho, pues solamente el sér de razón y libertad es capaz de tenerlos; el carácter sagrado é inviolable de la misma persona es también la razón de su protección, y hasta la noción del derecho surge de la relación de persona á persona, porque el individuo no vive aislado con las cosas, sinó en sociedad con otras personas.

«No existen derechos sinó de persona á persona, dice el jurisconsulto Ortolán: todo derecho tiene necesariamente un sujeto activo y uno ó muchos sujetos pasivos; los cuales, ya activos, ya pasivos, no pueden ser sinó personas. Bajo este aspecto todo derecho es personal.»

«Todo derecho en definitiva, si se quiere llegar hasta el fondo de las cosas, se resume en la facultad que tiene el sujeto activo, de exigir del sujeto pasivo alguna cosa. Esta necesidad que tiene el sujeto pasivo de hacer ó de abstenerse, es lo que se llama en el lenguaje jurídico una obligación. Todo derecho en definitiva y sin excepción, si se quiere llegar hasta el fondo de las cosas, consiste en obligaciones,» que son de dos especies: la una, general de abstenerse y la otra, especial de hacer ó no hacer.

Todo derecho, pues, en razón del carácter de sus elementos principales, sujeto activo y pasivo, es esencial y exclusivamente personal.

Pero, como aun cuando este carácter sea el más esencial, el que define más intrínsecamente su naturaleza, es tan general á todos los derechos que no puede



fundar una distinción, se busca la base de la clasificación en otros elementos secundarios, que también entran en toda relación jurídica.

«Hay la costumbre, dice Ortolán, ya por no haberlo suficientemente examinado, ya porque existiendo en todos los casos se puede no tener ninguna consideración con ella para marcar la diferencia, de hacer abstracción de la obligación general que pasa sobre todas las personas.»

«Hecha así esta abstracción, continúa el mismo autor, la diferencia que existe entre los dos casos se explica en estos términos: en el primer caso, no existe ninguna persona que sea individualmente sujeto pasivo del derecho..... (derecho real); en el segundo caso, existe una persona individualmente como sujeto pasivo del derecho..... (derecho personal)».

Como se ve, la clasificación de Ortolán se funda en esta única circunstancia: la mediación ó no mediación de una persona determinada con obligación especial, porque se prescinde de la general.

Esta misma clasificación es la base de la argumentación del Sr. Fiscal, es el molde al cual ajustó el derecho de posesión para decidir si es personal ó real, y como no encontró una persona determinada, *especialmente obligada*, como sujeto pasivo del derecho, dedujo que la posesión no es un derecho personal.

Pero, si no se tiene en cuenta la *persona*, que siempre es sujeto activo de todo derecho; si se prescinde del elemento *persona*, que sirve de sujeto pasivo, con obligación general, en todo derecho, ¿basta para fundar la división del derecho en personal ó *real*, tomar en



consideración sólo el elemento *persona* que hace de sujeto pasivo, con obligación especial, en algunos derechos y prescindir también del *objeto* de todo derecho y de las *relaciones* que necesariamente tienen entre sí estos elementos?

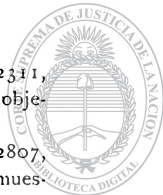
Evidentemente nó; porque, si puede bastar, para que un derecho sea personal, la mediación de un sujeto pasivo con obligación especial, su ausencia no constituye por sí solo el derecho real.

Podrá fundarse en ella una subdivisión del derecho en general (que acabamos de ver en su esencia es siempre personal), llamándose *derecho personal* simplemente cuando, en ausencia de un sujeto pasivo con obligación especial, no queden sinó los sujetos pasivos que tengan obligación general, y *derecho personal de obligación ó de crédito*, cuando se tenga un sujeto pasivo con obligación especial.

Pero, si queremos fundar la división en la naturaleza intrínseca de los derechos mismos, como dice Aubry y Rau, necesitamos considerar el otro elemento, *objeto* del derecho, y sus *relaciones*, porque la índole de la resultante de las relaciones de todos los elementos constitutivos de todo derecho caracterizará esencial é intrínsecamente su naturaleza.

Y bien, así como *todo derecho* tiene un sujeto, ya activo, ya pasivo, tiene también un *objeto*. Pero, no todo objeto de derecho autoriza á clasificar éste de real. Para que el derecho sea *real*, se necesitan dos circunstancias: que el objeto del derecho sea una *cosa* y que ésta esté en relación *directa* con el sujeto activo.

Las *cosas* son uno de los elementos de los derechos



reales, dice el Dr. Velez en la nota (a) antes del art. 2311, que prescribe «Se llaman *cosas* en este Código, los objetos corporales susceptibles de tener un valor.»

Y en efecto, este art. 2311 y sus notas, el 2506, 2807, 2948, 2970, 3108, 3204 y 3239 del C. Civil, demuestran que todos nuestros derechos reales tienen siempre por objeto una *cosa*.

Cuando se consideran estas relaciones de derecho, que tienen especialmente por objeto una cosa, se presentan dos modalidades que sirven para fundar una distinción: la relación del sujeto activo con el objeto, con la cosa, puede ser directa ó por intermedio de otra persona.

En ambos casos interviene siempre el elemento personal, que es esencial á todo derecho; pero, como cuando la relación entre el sujeto activo y la cosa es *directa*, la intervención del sujeto pasivo es mínima, porque sólo está sujeto á la obligación general de abstenerse, se acostumbra á prescindir de éste y se da á esa relación jurídica el nombre de derecho *real*, en obsequio al predominio de tal elemento.

Cuando la relación del sujeto activo con la cosa no es directa, sino que se establece por medio de una persona, que tiene, á más de la obligación general de abstenerse, una especial de ejecutar un acto positivo ó negativo, que facilite aquella relación, se ha dado en llamarle derecho personal y más propiamente, *derecho de obligación ó de crédito* en obsequio á la obligación especial del sujeto pasivo.

Aubry y Rau, en el lugar citado por el Sr. Fiscal, dice: «Los derechos sobre los *objetos exteriores* son *reales ó personales*.»



«Los *personales* se subdividen en derechos personales propiamente dichos ó *de créditos* y en derechos de *poder*.»

Esta última expresión *derechos de poder* en contraposición á los *derechos de crédito*, la creo impropia fuera del caso de referírsela á los derechos personales en las relaciones de familia.

«La expresión *derecho personal* es equívoca por sí misma, dice Mr. Laurent, porque tiene otras acepciones... Vale más servirse de la expresión que emplean los autores de derecho romano: *derecho de crédito*; ella indica perfectamente la naturaleza del derecho que llamamos personal por oposición al derecho real: nace de una obligación, es decir, de un vínculo de derecho que existe entre un acreedor y un deudor y que engendra una acción contra la persona obligada, etc.» (Tomo 6.º N.º 72).

«La causa eficiente del derecho personal (dice Demolombe, en la nota transcrita por el Dr. Velez, á que se refiere el Sr. Fiscal), es la *obligación, siempre y únicamente la obligación*, cualquiera que sea su origen: un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, ó la ley.»

«El derecho real se tiene cuando entre la persona y la cosa, que es el objeto, no hay intermediario alguno y existe independiente de toda *obligación especial* de una persona hacia otra.»

«Por el contrario, el que no puede dirigirse directamente sobre la cosa misma y tiene necesidad de dirigirse á una persona *especialmente obligada* á él, por razón de la cosa, no tiene sinó un derecho personal.»

Como se ve, el derecho es *real* únicamente cuando interviene una *cosa* puesta en relación *directa* con el sujeto.



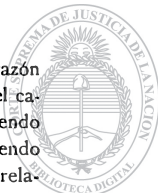
Fuera de este único caso, el derecho será *personal propiamente dicho, de obligación ó de crédito*, siempre que exista un sujeto pasivo con *obligación especial*.

Y en todas las demás circunstancias, que no puedan incluirse en uno ú otro caso: cuando el objeto no sea una *cosa* y aunque lo fuera, no esté en relación directa con el sujeto, ni haya tampoco una persona especialmente obligada, qué será el derecho?

Evidentemente será lo que es todo derecho en general: esencialmente *personal*, aunque se le llame en especial *derecho de poder*, si se le aplica á los derechos personales en las relaciones de familia, ó *derechos individuales*, si se hace referencia á los derechos personales en las relaciones políticas, ó *derechos inherentes á la persona* ó *personales* simplemente, cuando se extinguen con el sujeto, ó *derechos posesorios* cuando, como en el presente caso, se trata del derecho personal en la relación jurídica llamada posesión.

Considerado así el conjunto de los derechos, lo general es que sea personal, porque así surge de la naturaleza del sujeto activo y de la del sujeto pasivo, aun en el caso de considerar las relaciones de la persona con las *cosas*; lo excepcional es que el derecho sea real, porque recibe este nombre en la sola circunstancia en que la *cosa*, objeto del derecho, se halle en una relación tan estrecha, tan íntima con el sujeto, que haga predominar en la relación jurídica su carácter de realidad.

Y solamente así, por excepción, para distinguir una determinada posición del sujeto de los derechos con respecto á una cosa, puede admitirse la expresión *derecho real*; porque el concepto del derecho es más per-



sonal que real, pues nace, se funda y tiene la razón de su protección en la naturaleza humana y en el carácter sagrado é inviolable de la persona, coexistiendo con otras personas, y no en las cosas, que no pudiendo ser ni sujeto pasivo de los derechos, determinan relaciones que son más un hecho que un derecho.

Tan cierto es que el derecho sea real por excepción, que el C. Civil, en su art. 2502, establece *limitativamente* que «*los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley*» y el 2503 enumera cuales son ellos.

Véanse: la nota del Dr. Velez, la nota 5 del Dr. Sgovio y el comentario del Dr. Llerena, al primer artículo.

Examinando especialmente las disposiciones legales contenidas en los artículos 2506 y 2513; 2807 con su nota y 2820; 2948 con su nota, 2949 y 2950; 2970 con su nota, 2977, etc., 3108 con su nota, 3157, 3162 y siguientes; 3204 á 3207, 3211 y 3213; 3239 y 3240 del Código Civil, se observa que todos ellos tienen por objeto una *cosa* y que ésta se halla en posesión, en relación inmediata con el sujeto activo; pues, como dice el Dr. Velez (nota a, art. 2311), «*las cosas y la posesión son los elementos de los derechos reales*».

De acuerdo con los principios expuestos, que vemos aceptados en nuestra legislación, puede, pues, formularse la regla general, señalando la excepción, como hace la ley en concreto, en esta forma: El derecho es real cuando el sujeto activo está en relación directa é inmediata con una cosa; en todos los demás casos el derecho es personal.

Ó en otra forma: Todo derecho, cuyo sujeto no esté en relación directa con una cosa, es personal; y aun



más breve: «*Todo derecho que no es real es personal*».

Esta fórmula, que surge así lógicamente de los principios que son el verdadero fundamento del derecho, es contraria á la expresada por Maynz, citada por el Sr. Fiscal, y que dice: «Se llama *in personam actio* la que tiene por objeto garantizar un *derecho de obligación*; toda otra acción es *in rem*».

Mientras que no sólo los derechos de obligación son derechos personales, acabamos de ver que exclusivamente los designados por la ley son derechos reales.

La fórmula de Maynz no es, pues, correcta en nuestro derecho, y su inexactitud resalta á la simple vista, si se observa que se presta al grave error de afirmar que mientras la lesión de un derecho de obligación hará nacer una *actio in personam*, «la *actio in rem* será provocada por la lesión de *cualquier otro derecho*: sea de un derecho real, sea de un derecho *personal*, sea de un derecho de herencia».

Esto es confesar que, además del derecho de obligación, existen otros derechos *personales*, lo que es verdad; pero, que su lesión dé nacimiento á una acción *real*, es un absurdo inexplicable, contrario á los principios universalmente aceptados de que á un derecho real corresponde una acción real y á un derecho personal una acción personal, porque las acciones participan de la misma naturaleza del derecho herido.

Y aun descendiendo á más detalles, yendo al fondo de las cosas, puede afirmarse que una acción real jamás puede surgir de la lesión de un derecho personal, mientras que lo contrario es perfectamente posible. Obsérvese que los objetos de los derechos reales no responden por



sí solos á las respectivas acciones reales sinó que necesitan la intervención de una persona para que los represente ó defienda en juicio, y ésta, una vez determinada, se halla en posición análoga á la del sujeto pasivo de un derecho de obligación y la acción toma los caracteres de una verdadera acción *personal*. «De una manera general, esta acción supone un derecho ó una obligación personal, que ella tiende á hacer respetar ó ejecutar. Pero no hay que preocuparse del origen de la obligación; poco importa que ella se refiera al establecimiento ó al modo de ejercicio de un derecho real, desde el momento que la contestación que motiva la acción no recae sobre el derecho real mismo (Aubry y Rau, Cours de Droit Civil français, 4º ed., tom. 8, § 746, p. 124; Garsonnet, Cours de procédure, 1882, § 125, nota 12)» Dalloz —Suplemento al Repertorio, tom. 1º pág. 221, nº 4— «Solo en caso de violación, el derecho *real*, lo mismo que el *personal*, da lugar á una obligación, engendrada por un acto ilícito, que es la violación», (Segovia nota 4 al art. 497.)

En la acción real, los caracteres de personalidad aumentan á medida que el ejercicio de la acción avanza, porque cada vez menos puede prescindirse del sujeto pasivo que defiende la cosa en juicio, mientras que en la acción personal, aun en el caso de que el objeto sea una *cosa*, su relación con el sujeto activo siempre se realiza con la intervención directa de la persona obligada.

Se observa, pues, que es posible que la lesión de un derecho real origine una acción personal, pero es un absurdo lo contrario, consignado en la fórmula de Maynz.

*La posesión es derecho personal porque la ley no la declara
derecho real.*



De todo lo expuesto, se deduce que si un *derecho* no se halla incluido entre los que limitativa y excepcionalmente enumera la ley como reales, es porque está comprendido en la regla general, entre los derechos personales.

No es, pues, incorrecto, como lo califica el Sr. Fiscal, el sistema de eliminación á que he ajustado mi criterio, para sostener que las acciones posesorias, basadas en la posesión, que no se halla incluida entre los derechos reales enumerados por el C. Civil, son de carácter personal.

«*Si el C. Civil hubiera dicho*, agrega el Dr. Marengo: *todo derecho que no es real es un derecho personal, tal procedimiento sería* IRREPROCHABLE. Pero, esto no ha sucedido, y antes bien, el legislador ha precisado y caracterizado lo que es un derecho personal.»

Esto último, refiriéndose al derecho de crédito ó de obligación, de que trata el Libro 2º de nuestro Código Civil, es tan cierto como que también ha precisado y caracterizado lo que es un derecho real, como lo comprueban los artículos que dejo citados y la extensa nota transcrita á este respecto en su dictamen.

No puede, pues, sacarse un argumento de tal circunstancia y menos si se tiene presente la acepción general y la especial que del primer término he indicado.

Es cierto aún que el C. Civil no dice *literalmente* que



«todo derecho que no es real es personal»; pero, también es verdad que en ninguna parte se halla aceptada ni implícitamente la fórmula contraria de Maynz.

En tal concepto, lo que correspondería, ante el silencio del Código, sería guiarnos por los principios generales, como manda el art. 16 del Código Civil y 62 del de Procedimientos. Pero, estos principios, según ligeramente he desarrollado, nos enseñan que *todo derecho*, en su esencia, en su naturaleza intrínseca, es personal y sólo por excepción, para distinguir determinados casos (art. 2503), se le llama derecho real.

Pero hay más. Si bien el C. Civil no ha expresado aquella fórmula de una manera tan concreta y literal como lo exige el Sr. Fiscal, es indudable que se halla aceptada terminantemente en la prescripción contenida en el art. 2502 ya citado, que establece: «Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. Todo contrato ó disposición de última voluntad, que constituyese otros derechos reales ó modificase los que por este Código se reconocen, *valdrá sólo como constitución de derechos personales*, si como tal pudiese valer.»

Este artículo es de interpretación restrictiva, y si todo *derecho* tiene que ser necesariamente real ó personal, por que no admitimos que hayan mixtos ni anónimos, es evidente que los que no están incluidos entre los enumerados por la ley como reales, deben considerarse como personales.

Subrayo *derecho*, porque si el contrato ó disposición de última voluntad no valiera, por sus vicios ó defectos, como tal derecho, menos podría calificársele de real ó personal.



La posesión es reconocida en nuestra legislación como un *derecho*, y no hallándose incluida entre los enumerados como reales, ¿valdrá como derecho personal, atentos los términos de la disposición legal recordada?

Para mí es fuera de toda duda, porque si vale el contrato ó disposición de última voluntad, emanado de los particulares, con tal que no sea nulo por vicioso, con mayor razón valdrá una institución formalmente sancionada por la ley.

La contraposición frecuente, en que usa el Codificador las expresiones *acciones reales* y *acciones posesorias*, en los artículos y notas citados en mi primer escrito, ya recordado, confirma la conclusión á que acabo de arribar, hallándose así de completo acuerdo la teoría, y nuestra ley positiva.

Pero, aun reconociendo la verdad de la fórmula que he enunciado y la de su aceptación por nuestra ley positiva, puede objetarse con el Dr. Segovia, diciendo: «La posesión es indudablemente un derecho real. Si nuestro Código no lo enumera aquí entre los derechos reales, siguiendo en ello á Freitas, lo ha legislado en este Libro 3.º, que trata de esos derechos, y la omisión, ó es una *inadvertencia*, ó es quizá por haberlo clasificado de derecho *real-personal* ó *mixto*.» (Notas 95 y 6 á los artículos 2501 y 2503 del C. Civil).

Creo excusado insistir en que ni el Dr. Vélez considera, ni puede admitirse que la posesión sea un derecho mixto, desde que esta teoría es falsa.

En cuanto á la *inadvertencia*, fuera de que choca semejante omisión involuntaria en un codificador como el Dr. Vélez Sársfield, no hay razón alguna que autorice á



considerarla como un derecho real, á la par de los que limitativamente enumera el art. 2503, cuando ellos no pueden ser creados sinó por disposición expresa de la ley y ésta, lejos de prescribir que la posesión es un derecho real, tiene disposiciones numerosas que se oponen á considerarla como tal.

Finalmente, si el codificador ha legislado sobre la posesión en el Libro 3º, que trata de los derechos reales, manifiesta expresamente, en su nota *a* antes del art. 2311, que en ello sigue «la opinión y el método de Mackeldey, porque las cosas y la *posesión* son los *elementos* de los derechos reales» y la parte, un elemento, no puede ser igual al todo.

Por lo demás, el mismo Dr. Segovia no siempre sostiene que la posesión sea un derecho real, pues en la nota 4 al art. 2352, dice: «En cuanto á los *interdictos*, juzgamos que *son acciones reales*, como todas las que nacen del dominio y demás derechos reales, *cuando son ejercidos por el verdadero propietario* ó por el titular de esos derechos (yo he afirmado que en este caso la posesión es un simple *hecho*, como mera exterioridad de la propiedad, y que los interdictos no se fundan en el carácter de propietario, de quien los ejercita, sinó en un principio de orden público, que excuso repetir y en cuya virtud son acciones personales); pero, cuando lo son por el *simple poseedor*, continúa el Dr. Segovia, importan más bien la *sanción de una obligación* legal, de la prohibición de no perturbar la posesión ajena, y en tal caso es aun más *exacta* la doctrina de Molitor, que clasifica de *mixtas*, las acciones posesorias.» Dejé también comprobado que esta teoría de las acciones *mixtas* no es *exacta* sinó *falsa*.

El Dr. Segovia tampoco hace distinción clara entre interdictos y acciones posesorias, aunque usa ambas expresiones.



La posesión no es un derecho real.

Pero, no sólo he dicho que las acciones posesorias son acciones personales porque la posesión no se halla incluida entre los derechos reales, sinó también he afirmado que lo son porque esta posesión, en que ellas se fundan, es, por su naturaleza intrínseca, un derecho personal, y en tal concepto, el Codificador ha hecho muy bien en no incluirla entre aquellos derechos.

Veámoslo.

De todo lo que dejo expuesto, se deduce que los derechos de propiedad y posesión, tienen el mismo fundamento: la personalidad humana, que, como sujeto activo y pasivo, interviene, como elemento principal, en toda relación jurídica, á la que comunica esencialmente su carácter personal.

Pero, como la distinción entre derechos personales y reales, en sentido restricto, se basa nó en la naturaleza de este elemento, sinó, como hemos visto, en la índole de su relación con el objeto y hasta en la clase de éste, voy á examinar estas circunstancias en la posesión, para clasificarla debidamente.

Desde luego observo que así como nadie pone en duda que la propiedad sea un derecho real, el des-



acuerdo respecto á la posesión, es completo: unos afirman que es un simple hecho, otros sostienen que es un derecho personal, alguien que es un derecho real, tampoco faltan quienes digan que es mixto, y finalmente, el Sr. Fiscal sostiene que no es nada de todo esto, aunque es un derecho pero *anónimo*; todo lo cual acusa que la posesión es diferente de la propiedad y que intervienen en ella elementos varios, que le dan un carácter particular, difícil de clasificar.

«En general, dice el Sr. Posada, puede afirmarse que la noción de la *posesión*, distinta por un lado de la mera *tenencia* y por otro de la *propiedad*, es una noción jurídica difícil y que como tal no puede encontrarse en el derecho positivo, sinó después que la cultura llega á cierto grado. Los pueblos primitivos son inhábiles para entrar en aquellos distingos que la posesión romana y moderna suponen. La distinción entre mero detentador y propietario es fácil, pero no lo es tanto la otra, al menos tal como va implícita al fin en la usucapión y en cierto modo en el interdicto».

En cuanto á la mera tenencia, que es un simple hecho, nada diré porque trato de la posesión que tiene mayor importancia jurídica, de la que es reconocida como un derecho.

Los caracteres de la propiedad son bien definidos y fácilmente se explica por qué es un derecho real.

La relación jurídica entre el sujeto activo y la *cosa* es la más directa, inmediata y completa que se conoce; el sujeto la *apropia* de una manera absoluta y exclusiva y reflejando sobre ella los caracteres de su personalidad, la hace sagrada é inviolable para todas las demás personas,



de las cuales se prescinde, desde que no tienen sino la obligación general de abstenerse de interrumpir aquella relación.

Ese vínculo físico-moral, que somete la cosa de tal manera al imperio de la personalidad, la sigue como un sello indeleble á las manos de *cualquier detentador*, contra quien puede el propietario reclamarla cuando se le impidiera el ejercicio de su derecho.

La cosa queda tan absorbida en esa relación jurídica, que ésta participa, pudiera decirse, de su carácter de realidad; por cuya razón se la llamada derecho *real*.

En análogas condiciones están los demás derechos reales, enumerados en el art. 2503; pues se refieren á una *cosa*, existe en ellos la relación directa é inmediata entre el sujeto y el objeto, y su origen está siempre en la *voluntad*, legalmente presunta ó expresa *del propietario* (arts. 2818, 2949, 2977, 3119, 3213 y 3241 del C. Civil); razón por la cual se los considera como una desmembración de la propiedad y por consiguiente como participantes de sus caracteres y fundamentos.

Los de la posesión no son tan bien definidos, claros y precisos, y basta observar que los derechos reales están constituidos exclusivamente por la propiedad y sus desmembraciones y que la posesión no es la propiedad, porque la reconoce en otro, ni su desmembración, porque prescinde y hasta se establece en contra de la *voluntad del propietario*, para percibir que se trata de una institución completamente diversa de nuestros derechos reales.

En todas estas relaciones jurídicas la intervención



de una cosa es siempre esencial, porque su *aprehensión* constituye un elemento de la posesión, como su *apropiación* lo es de la propiedad.

Y esta apropiación de la cosa por el propietario es precisamente lo que impide, según ya hemos visto, que la relación *jurídica* del poseedor con la misma cosa sea tan inmediata y completa como se requiere para que el derecho sea real.

El sello impuesto á la cosa por el propietario, la hace respetable para todos los demás é impide que otros se pongan en una relación jurídica tan directa como la suya. La posesión, que respeta aquel vínculo en sus elementos principales, porque no puede haber colisión de derechos, no tiene por objeto la cosa, con todas sus cualidades y servicios, como la propiedad, que comprende su uso y abuso, sinó solamente su goce, uso ó percepción de frutos por el poseedor, mientras esté ella en su poder (nota al art. 2341); pero nunca llega á la disposición de la cosa, que pertenece exclusivamente al propietario.

El derecho de posesión, que respeta el vínculo físico-moral directo entre el propietario y la cosa, estableciendo únicamente una *relación jurídica* indirecta entre el poseedor y la misma, tiene así por objeto principal no la cosa, sinó algunos de sus servicios. Digo relación jurídica, porque no debe confundírsele con la relación de hecho, que constituye la aprehensión que es uno de los elementos de la posesión.

La índole de esta relación de derecho que se llama posesión es, pues, evidentemente diversa de la propie-



dad, y así como la cosa es el objeto de ésta, solamente algunos de sus servicios lo es de la primera.

Y si la vinculación directa é inmediata entre el sujeto activo y la *cosa* es el motivo en cuya virtud, según hemos visto, se da el nombre de derecho real á ciertas relaciones jurídicas, es evidente que no le corresponde este nombre á la posesión, porque falta esa razón especial, aun cuando concurren otros elementos, que no se toman en consideración á los efectos de la clasificación, y mucho menos cuando, aplicándose tal nombre excepcionalmente á determinadas relaciones jurídicas, debemos usar de un criterio restrictivo.

Pero, ¿no podría decirse que la posesión es un derecho real en razón de que los servicios, que son su objeto, están en relación directa é inmediata con el poseedor?

No me parece correcto, porque, aparte de que generalmente esos servicios no consisten en *cosas*, sino en simples usos ó goces, no debe olvidarse que se trata de la posesión de una cosa y no de la de los objetos que constituyen ó pueden constituir sus frutos ó servicios, que es algo completamente diferente.

Es cierto que todos los servicios que presten las cosas corresponden al propietario, porque «es inherente á la propiedad el derecho de poseer la cosa» (art. 2513); pero debe tenerse presente que considero la posesión en sí misma, con independencia de la propiedad y no como simple hecho por el cual ésta se manifiesta al exterior.

Es verdad también que estos mismos servicios forman el objeto de algunos derechos reales, pero éstos toman su origen, tienen su razón de ser en la propiedad, como desmembraciones de ella, porque es el mismo propietario



quien consiente en ceder tales servicios, mientras que la posesión se establece prescindiendo de la propiedad y debe su existencia como relación jurídica independiente, como derecho, exclusivamente al reconocimiento que de ella hace la ley, en virtud del respeto debido á la personalidad del poseedor, porque «es un principio de la legislación positiva, dice el Dr. Escalante, que cada uno es respetable en su esfera de acción individual, siempre que no ataque derechos de tercero».

«La protección de la posesión, dice el Sr. A. Posada, se explica por la *dignidad jurídica de la posesión misma*, la cual supone en sí un *estado de la persona*, en su relación con los *medios*, que exige respeto y determina todo un conjunto de obligaciones.»

«Lo que se protege ante todo (dice Bruns) es la personalidad, porque al desarrollarse las relaciones jurídicas, esto es, al producirse adecuadamente la actividad racional de la persona, la posesión del medio es un momento esencial, y no protegerla sería negar la condición de vida de la persona misma.

Mirando al espíritu de la institución de los interdictos, no sería difícil mostrar que lo que al cabo se protege es la integridad de la persona, en una de las condiciones fundamentales de su vida de relación con la naturaleza, para la satisfacción de sus necesidades, mediante la acción de su libre actividad.»

«El respeto debido á la persona refleja indirectamente sobre el hecho, dice Savigny. La persona en efecto debe ser garantida contra toda violencia. Hay en la posición de la persona algo cambiado en su perjuicio, cuando se ataca la posesión que tiene; y el agravio que le es causa-



do por la violencia, no puede ser enteramente reparado sinó por el restablecimiento ó la protección de ese estado de hecho al cual la violencia ha atacado.

Bien, se dirá; pero es que también el respeto á la personalidad es el fundamento de la propiedad, y sin embargo, ésta es un derecho real.

Perfectamente, pero observo que á ésta se llama derecho real, no en consideración á la persona del sujeto, sinó porque la *cosa*, que es el objeto inmediato, se halla tan directa y enérgicamente vinculada al sujeto que impone, hace predominar su carácter de realidad sobre todos los demás elementos que entran en la relación jurídica y justifica así el nombre de derecho real con que se distingue esta circunstancia excepcional.

La posesión, que no tiene por objeto la *cosa*, sinó algunos de sus servicios (que pueden no ser y generalmente no son cosas, sinó usos ó goces) y en que la relación jurídica entre el poseedor y la cosa poseída es sólo indirecta, porque ella no desconoce ni rompe el vínculo físico-moral que la somete directamente al propietario, tiene pues menos caracteres de realidad que la propiedad; no reúne las condiciones especiales que se necesitan, se exigen para clasificar un derecho excepcionalmente de real, y, por consiguiente, la posesión no puede ser, no es un derecho real.

La teoría de que es un derecho real, es sustentada, según Vélez, por Maynz, Demolombe, Zachariæ, Belime, Troplong y otros.

En Derecho Romano, no siendo la posesión reconocida por la ley, no podía ser un derecho.

Mr. Laurent dice que «según el texto y el espíritu de



la ley francesa, la posesión no es un derecho real», y, hablando de Pothier, agrega que «importa notar que él ni discute la cuestión de saber si la posesión es un derecho real; constata la negativa como una cosa admitida y no contradicha».

León Wodon, refutando á Troplong, Appleton, y Mühlebruch, que sostienen esta teoría, dice que «convienen, sin embargo, que en derecho romano la posesión no tiene acción real para sostenerla, que los interdictos son acciones personales».

Que «la originalidad de un derecho real sin acción real correspondiente, es una prueba suficiente del vicio del sistema adoptado por Mühlebruch y otros partidarios de la misma doctrina», entre los que se encuentra Molitor, quien, «para salir de esta falsa posición es que ha concluido por decir que la posesión era un derecho real y personal á la vez, y que llama mixtas á las acciones que de ella se derivan.»

Desde los Núms. 40 y 62 en adelante rechaza, con gran ilustración, estas clasificaciones, concluyendo que ni en el Derecho Romano ni en el Francés existe el derecho real ó el mixto de posesión.

El ilustrado jurisconsulto Dr. Cortés, afirma, con verdad, que nuestro C. Civil «no considera la posesión un derecho real», y esto lo *demuestra* «con el texto mismo de sus disposiciones sobre la materia», en la forma que ya he indicado anteriormente.

Es cierto que concluía, fundado en una nota ilustrativa, afirmando que el Dr. Velez consideraba la posesión como un derecho mixto; pero, á mi vez, creo haber com-



probado de una manera satisfactoria que en esto padecía un error.

Para evitar repeticiones, refiérome al párrafo X de mi escrito.

Si se observa la posesión en uno de sus efectos principales, resaltará la verdad de mi conclusión aún con mayor claridad.

*Las acciones posesorias no se dirigen contra terceros
detentadores.*

¿Las acciones posesorias pueden ejercitarse, como las acciones reales, contra los *terceros* poseedores ó detentadores?

Respecto de las últimas no hay duda alguna, porque los derechos reales afectan tan directamente la cosa, que constituyen verdaderos gravámenes que la siguen á todas partes y pueden, por consiguiente hacérselos valer contra cualquier persona á cuyo poder pasaren. Esta es también la razón por la cual el derecho real anterior prevalece siempre.

En cuanto á que las primeras no puedan ejercitarse contra los terceros poseedores, el Dr. Marengo dice que «esto podrá ser cierto en derecho romano, en el que la posesión no estaba protegida sinó por interdictos y en el que bastaba la ocupación actual; pero, no se sostendrá que sea de aplicación rigurosa á nuestra legislación ese modo de pensar, desde que se tenga en vista que el



C. Civil protege la posesión por el interdicto y por las acciones posesorias,... que se dan *adversus omnes*.

No hay duda alguna, y no lo niega el Sr. Fiscal, que en el derecho romano, cuya teoría sirve de base á nuestros interdictos, estas acciones no se conceden contra los terceros detentadores. En esto están de acuerdo casi todos los autores, como Savigny, Molitor y aun Ihering, como que es el punto de apoyo del gran argumento de los que sostienen que la posesión no es un derecho puramente real.

Pero, como á diferencia de las otras legislaciones, la nuestra establece, á más de los interdictos, otras acciones basadas en la posesión, que tiene mayor importancia jurídica, en «la posesión que, según la expresión del mismo codificador, da acciones posesorias *adversus omnes*», el Sr. Fiscal ha creído lógico deducir que, en nuestra legislación, estas acciones posesorias se dan aún contra los *terceros poseedores* y no sólo contra aquéllos que han violado la posesión.

En mi concepto, ha incurrido en error.

Primero, porque como ya hice notar anteriormente, la expresión *adversus omnes* no está usada, por el codificador, en el sentido y con el alcance que le atribuye el Sr. Fiscal, sinó simplemente para hacer notar una diferencia entre los interdictos y las acciones posesorias propiamente dichas, que se basan en las dos clases de posesión, de cuya distinción hablaba el Dr. Vélez en el párrafo de la nota (a, antes del art. 2351) á que se hace referencia: la posesión natural, definida por el Código Francés y la posesión civil, que definía entonces, dejando para otro lugar la que sólo servía para los interdictos, etc.



Aquella diferencia consiste principalmente en que los interdictos *no pueden dirigirse contra todo (adversus omnes)* VIOLADOR de la posesión, sinó contra el que no reuna las condiciones de poseedor anual ó tenga derecho de poseer; mientras que las acciones posesorias *se dirigen contra todo (adversus omnes)* VIOLADOR del derecho de posesión, aunque sea el mismo propietario del inmueble.

En uno y otro caso se trata de *violador* y no del tercer poseedor ó detentador.

Segundo, porque el Dr. Velez no podía, con esa expresión *adversus omnes*, empleada en su nota ilustrativa, dar á las acciones posesorias mayor alcance que el que les atribuía expresamente en el cuerpo de las disposiciones legales.

En el final de la nota al art. 2482, dice el Dr. Vélez: «La acción posesoria es intentada válidamente contra el que ha cometido personalmente un acto de turbación, aunque él pretenda no haber obrado sinó en el interés, y por orden de un tercero. (Es ejecutor de un acto ilícito (art. 2469), y como tal personalmente responsable (art. 1066), agrega el Dr. Segovia en su nota 46).

El demandado no puede librarse del juicio, exceptuando con el mandato que hubiese recibido. Debe llamar á que lo garantice aquél á cuyo nombre pretende haber obrado». (Massé y Vergé, nota 1^a al § 290 de Zachariæ).

El Dr. Segovia en la nota 54 al art. 2487, dice que «la acción se da únicamente contra el autor del acto violatorio de la posesión y *nunca contra terceros*. Si los herederos no continuaron trabando la posesión, son



pasibles de la acción posesoria abierta contra su autor, pero al solo objeto de restablecer las cosas, en cuanto fuere posible, é indemnizar el daño que él causó: art. 1098, combinado con el 1109, y art. 503.»

El art. 2490 establece que corresponde la acción de despojo. . . . «contra el despojante, sus herederos y cómplices, aunque sea el dueño del inmueble.» «Es decir, agrega el Dr. Segovia en su nota 68, contra el despojante, aunque sea el dueño del inmueble, contra el sucesor de mala fe, por título singular (art. 2491, inc. 1º) y contra los herederos de uno y otro (art. 1098 y 1109, inc. 2º).»

«Será considerado cómplice del despojante, dice el art. 2491, quien, sabiendo el despojo, obtuvo el inmueble usurpado; pero *no el tercer poseedor* del inmueble, que no lo hubo inmediatamente del despojante, aunque lo obtuviese de mala fe, sabiendo el despojo sufrido por el poseedor.» Las acciones, agrega el Dr. Segovia, que puedan corresponder en este caso, serán: la reivindicatoria, la confesoria ó la negatoria; es decir, las acciones reales del art. 2757.

El Dr. Llerena, en su comentario á este artículo, pregunta: «Si la adquisición es á título de heredero de aquél que no lo hubo inmediatamente del despojante, ¿podrá dirigirse la acción contra él?

Es necesario distinguir si el causante era de mala ó de buena fe.

Así, por ejemplo: Pedro despoja á Juan de un inmueble; el primero la trasmite á Diego, que la adquiere sabiendo que Pedro ha obtenido la cosa por despojo contra Juan. En este caso la ley considera á Diego



como cómplice del despojo, porque como dice el artículo «es cómplice del despejante, el que sabiendo el despojo, obtuvo el inmueble usurpado». Ahora bien, Diego, cómplice, como hemos dicho, transmite dicho inmueble por título singular á un tercero: no compete, dice el art., la acción de despojo contra este tercero, aunque sea de mala fe, porque como dice Molitor, el fundamento de la acción es un delito, cuyas consecuencias no pueden ir hasta los terceros. Pero esta transmisión de Diego es á un heredero suyo, en este caso la acción puede dirigirse contra esos terceros herederos del cómplice, porque la acción se da contra los herederos; es como debe entenderse el artículo anterior (véase art. 1098). Diego no ha podido transmitir su posesión sino con los mismos vicios y sujeta á las mismas acciones á que él estaba en razón de su posesión.»

El mismo Comentador, refiriéndose al art. 2487, pregunta: «¿contra quién se da la acción posesoria?—Indudablemente que sólo se puede dirigir contra el autor de la turbación, por ser éste personalmente responsable».

En la nota 78, al art. 2494, donde dice que «el demandado debe ser condenado á restituir el inmueble», el Dr. Segovia agrega: «Si lo posee. Si no posee por cualquiera causa, pagará las pérdidas é intereses de la desposesión y las costas, sin perjuicio de responder de la cosa y sus frutos, como poseedor de mala fe: artículos 2435 á 2444. Vé á Pothier, N^{os} 127 y 128.»

El considerando 2º del Fallo de la S. C. Nacional que se halla en la pág. 442, del tomo 3º, de la Serie 1ª, dice: «Que el despojo es un acto ilícito, que compromete siempre la responsabilidad [del ejecutor] etc.



Todo lo cual indica, de una manera evidente, que tales acciones sólo pueden dirigirse: contra el violador del derecho de posesión, por ser *autor* del acto ilícito; contra sus cómplices, porque se vinculan por el delito; y contra sus herederos, porque representan su persona; pero, no contra el tercer poseedor, el actual tenedor que, no siendo cómplice, heredero ó violador del derecho, en una acción ordinaria para adquirir la posesión, no tendrá obligación de responder á la demanda entablada por el comprador contra el vendedor, su anterior propietario (art. 594 C. C. y concordancias del Dr. Llerena); en una acción posesoria por manutención, nada tendrá que ver con el hecho ageno ejecutado por el perturbador, ni en una acción posesoria por restitución, estará obligado á devolver el inmueble poseído de buena fe, y aunque fuere de mala fe, siempre que no obtuviere el inmueble inmediatamente del despojante (2491).

La violación de la posesión da, pues, nacimiento á una *obligación personal* del violador, que si bien pasa á sus herederos y cómplices, jamás puede llegar hasta el tercer poseedor.

En esto la acción posesoria se aleja aún mas de las acciones reales y se aproxima tanto hasta identificarse con las personales.

La posesión, que no tiene por objeto directo la cosa poseída, que no implica una relación jurídica inmediata entre el sujeto activo y la cosa, y cuya acción no puede ejercitarse contra terceros poseedores, no puede ser, no es un derecho real.

La posesión, por su naturaleza intrínseca, es un derecho personal, aunque nó de crédito ó de obligación.



Será entonces un derecho personal?—«No se atrevieron, sin embargo, dice el Sr. Fiscal, Dr. Marengo, los que excluían la posesión de la categoría de los derechos reales, á colocarla en el catálogo de las acciones personales, y así, en seguida de expresar el óbice que los inducía á no conceptuarla un derecho real, agregaban que la posesión no es, por otra parte, un derecho puramente personal, un derecho mediato sobre la cosa; no es un *jus ad rem*, en el sentido de que para tener la cosa sea necesaria la *mediación de una tercera persona obligada á entregarla ó á darla.*»

«La acción posesoria anual, contra quién se dirige?—No es ciertamente contra una *persona determinada en el momento de la generación del derecho*, es decir, después de cumplido el año de posesión, sinó *contra cualquiera* que eventualmente *lo perturba*, pretendiendo que también le asiste un derecho posesorio. (Obsérvese que éste, que perturba la posesión, es el autor del acto ilícito, pero no se llama tercer poseedor). Podemos aún preguntar ¿qué relación de persona á persona determinada engendra la posesión? Ninguna absolutamente; y ante la contestación negativa á estas interrogaciones, es forzoso convenir que la posesión no es un derecho personal».

«La posesión entraña, sin duda alguna, decía el Doctor



Goyena, un *hecho* que forma, digamos así, su cuerpo ó su materia. No conseguimos formar idea de la posesión, si prescindimos de concebir una *relación física* entre el hombre y la cosa; pero, esa relación externa no constituye por sí sola la posesión, la cual implica, además, un elemento, el *animus*, la intención, la voluntad del hombre ejerciendo su imperio sobre una parte del mundo externo Nosotros pensamos que en materia de posesión, como en todas las relaciones jurídicas, el *elemento principal* reside en la voluntad humana, raíz única é indispensable de todos los derechos. La posesión existe allí donde hay un individuo que tenga una cosa con la intención de considerarla como suya, *animo domini* ó *animus rem sibi habendi*.»

Si la posesión, en su *elemento material*, es una simple relación de hecho ¿qué papel tendría que desempeñar esa persona determinada, cuya ausencia se nota, si no fuera el de abstenerse de interrumpir aquella relación, que es, al fin, la obligación general á que están sujetas todas las personas?

¿Cómo puede haber una persona obligada á *entregar ó dar* al poseedor la cosa que, en la posesión, *se halla en poder de este poseedor*?

Es innegable que en el derecho de posesión no existe una persona determinada con obligación de *entregar ó dar* la cosa poseída, que es lo que caracteriza el derecho personal en su concepto especial como derecho de obligación ó de crédito.

El requerir semejante condición es para mí algo como el lecho de Procusto. Se quiere ajustar la posesión á las



condiciones propias del derecho de obligación, para poder llamársele derecho personal.

Pero ¿acaso no hemos visto que no sólo los derechos de obligación son derechos personales?—¿Y por qué la posesión, que vamos viendo tiene una naturaleza especialísima, no puede ser un derecho personal de esos á los cuales no les corresponde el nombre de derecho de obligación?

¿Qué persona determinada, especialmente obligada, interviene en mi derecho de dar un paseo, de elegir profesión, casarme, etc.? ¿Y se negará que éstos sean derechos personales, aunque más no fuera en consideración á la persona del sujeto activo, ya que los otros elementos se presentan tan debilitados?

En la escala variadísima de los derechos es muy natural que los elementos que los constituyen y se toman en consideración para clasificarlos, no intervengan de la misma manera, y parece lógico que si no es posible distinguirlos por los detalles y reglas más especiales, se vayan tomando en cuenta sus aspectos más generales.

En todo derecho intervienen tres elementos esenciales: sujeto activo, sujeto pasivo y objeto, cuyas diferentes relaciones caracterizan su naturaleza intrínseca.

El elemento principal es siempre el sujeto activo, por que es la raíz única, el fundamento de todo derecho, y por cuya razón se prescinde de él, basándose la clasificación en el predominio que, en la relación jurídica, alcanza uno de los otros dos.

La posesión no es un derecho real, porque el objeto no es una *cosa directamente* relacionada con el sujeto.

La posesión no es un derecho personal (de obligación



ó de crédito), porque el sujeto pasivo no tiene una *obligación especial*.

Y si en la relación jurídica de que tratamos, ninguno de los dos elementos, en que se basa esta clasificación, predomina en la forma que se requiere para convenirle uno ó otro nombre (porque su objeto no siempre es una *cosa* y aunque lo sea nunca se halla en relación jurídica *directa* con el sujeto, ni tiene sujeto pasivo con obligación *especial*), podremos decir que existe un equilibrio de tales elementos?

Si así fuera, la noción del derecho mixto sería exacta; pero, no concebimos una relación jurídica en que su sujeto pasivo tenga y no tenga, á un mismo tiempo, una obligación especial, y en que el objeto sea y no sea, á la vez, una cosa, que esté y no esté en relación directa con el sujeto

Y si no es derecho personal, ni real, ni mixto, como lo sostiene el Sr. Fiscal, puede esa relación constituir un derecho *anónimo*?

Imposible.

La relación tiene ó no tiene los tres elementos esenciales, constitutivos de todo derecho.

Si no los tiene, no puede ser un derecho, sinó un hecho.

Si los tiene, será un derecho, como lo admite el señor Fiscal.

Y si es derecho, no pueden ser sus tres elementos sinó: dos personales y uno real.

Y si estos tres elementos no pueden equilibrarse, forzosamente debe predominar alguno de ellos, y predominando alguno, el derecho es necesariamente ó real ó personal.



Y si en la posesión no predomina el elemento real, objeto; ni tampoco el elemento personal, sujeto pasivo, ¿qué queda, entonces, caracterizando la naturaleza intrínseca de este derecho? Su raíz, su base, su fundamento, su elemento principal, el sujeto de todo derecho: una *persona*.

En la posesión, pues, cuyo elemento real se presenta pasivo, como un simple hecho, el elemento personal predomina, constituyendo la dignidad jurídica de la posesión, determinando su reconocimiento como derecho por la ley y atribuyéndole caracteres y efectos que permiten clasificarla netamente de personal.

Carácter personal que aparece más nítido si se le observa en su acción, porque, como dice Molitor, «el derecho manifiesta sobre todo su carácter y su energía por su acción.»

Las acciones posesorias son esencialmente personales.

El Dr. Marengo, que pregunta ¿contra quién se dirige la *acción* posesoria?, dice que «no es ciertamente contra una *persona determinada en el momento de la generación del derecho*, es decir, después de cumplido el año de posesión . . .»

Convengo que no hay una persona determinada, especialmente obligada, en el derecho de posesión, porque, empezando por una simple relación de hecho, entre el sujeto activo y la cosa, que se convierte en relación jurí-



dica al cabo del año, no requiere para su ejercicio la intervención especial de un sujeto pasivo. El poseedor *ejercita su derecho* directamente sobre la cosa ó sus servicios, hasta el momento en que una *persona determinada* se lo impida. En tal circunstancia, la ley le concede el derecho de *ejercitar* una *acción* posesoria, contra aquél que «eventualmente lo perturba, pretendiendo que también le asiste un derecho posesorio»; es decir, *contra el violador de su derecho*.

Encuentro así, que mientras para el *ejercicio del derecho* no interviene una persona determinada y obligada, ésta existe cuando se trata del *ejercicio de la acción* posesoria, por la cual se va á reclamar en juicio el reconocimiento del derecho violado.

Distingo el ejercicio del derecho, del ejercicio de la acción, así como también el momento de la generación del primero y del nacimiento de la última, pues «sólo en caso de violación, el derecho real, lo mismo que el personal, da lugar á una obligación, engendrada por un acto ilícito, que es la violación,» dice el Dr. Segovia en la nota ya citada.

Puedo, así, afirmar que si bien es cierto que desde el momento de la generación del derecho, no hay una persona determinada, obligada á soportar su ejercicio, también es innegable que desde el momento del nacimiento de la acción posesoria, que es posterior, existe una persona determinada y obligada personalmente á responder al ejercicio de esta acción.

Es verdad que esta persona no está determinada ni obligada desde el *momento de la generación del derecho*, como exige el señor Fiscal; pero, para qué tanto lujo



de precauciones; qué objeto práctico, qué interés jurídico tendría el poseedor de mantener una persona obligada a responder á una acción posesoria futura, que bien pudiera suceder que nunca existiera, por que no es difícil que nadie viole su derecho?

Además, qué disposición legal ó principio racional establece que la persona, contra quien se dirija la acción, deba estar determinada en el momento de la generación del derecho y no desde cuando nazca la acción, en los casos en que ésta surja con posterioridad?

En los derechos de obligación, es natural que existan desde el primer momento el derecho y la acción, porque el sujeto no puede ejercitar su derecho sobre el objeto, sinó por intermedio del sujeto pasivo, de la persona obligada.

Los derechos reales se ejercitan directamente sobre el objeto, no habiendo acción alguna que hacer valer hasta que se desconozca el derecho, en cuyo instante nace la acción; pero, como ella se da también contra los terceros poseedores ó detentadores, por la razón anteriormente expresada, la persona, contra quien se dirija definitivamente, queda indeterminada hasta el momento mismo de iniciarla en juicio, por cuanto su obligación no reconoce otra causa que el ser detentador de la cosa agena, en aquel momento preciso en que se la reclama.

En la posesión, el derecho se ejercita también sobre la cosa y la acción nace recién cuando se le viola; pero, como la obligación y responsabilidad del violador es personal, como efecto necesario del acto ilícito por él cometido, queda la persona completamente *determinada y obligada*, desde el *momento mismo en que nace la acción*.



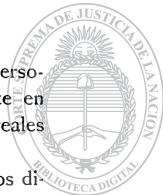
En consecuencia, la acción posesoria se presenta netamente, desde que *existe*, y no desde antes, con todos los caracteres propios de las acciones personales. En la acción por manutención, el poseedor reclama y el perturbador demandado (no un tercero) *está obligado* á no perturbar nuevamente la posesión y á indemnizar el daño que hubiere causado; en la acción por restitución, el actor exige y el despojante demandado (no un tercero) *está obligado á entregar* la cosa, sobre que recaía la posesión violada, tal cual sucede en la acción para adquirir la posesión, que nadie niega sea pura, exclusiva y claramente personal, ó á pagar las indemnizaciones correspondientes.

Y aun más; como la generalidad de los derechos personales, (véase la nota 1.^a del Dr. Segovia á la nota a art. 2502) el derecho de posesión posterior prevalece sobre el anterior, pues cuando la posesión posterior se convierte en derecho de posesión, lo que sucede al cabo de un año, el poseedor anterior ya ha perdido su derecho y acciones posesorias. Sería absurdo afirmar lo contrario, como consecuencia de que el derecho de posesión anterior prevalece sobre el hecho de la posesión, sobre la posesión no anual posterior, de que no tratamos.

El carácter personal del derecho de posesión y de la acción posesoria surge, pues, del predominio de sus elementos personales, sujeto activo y pasivo, sobre el elemento real.

En el primero radica el fundamento de todo derecho; en el segundo, «en la *persona del adversario*, dice Ihering, es donde obra el motivo de la facilitación de la prueba, que los remedios posesorios conceden al demandante.»

El derecho de posesión y las acciones posesorias son,



pues, por su naturaleza intrínseca, exclusivamente personales, y nuestro codificador ha hecho perfectamente en no incluirlos entre los únicos derechos y acciones reales que reconoce.

Es cierto que dada la concurrencia de elementos diversos, que bajo ciertos aspectos los asemejan ya á los derechos reales, ya á los personales, algunas legislaciones los han declarado expresamente derechos y acciones reales; pero, no habiéndose hecho así en nuestra legislación, estudiando el espíritu de sus disposiciones legales, creo encontrar aceptada la teoría indicada, en la forma y con el alcance que queda expuesta.

Juez competente.—Conclusión.

El Sr. Fiscal, después de afirmar que la posesión no es un derecho personal, ni real, ni mixto, concluye, fundado en el ligero examen que ha hecho de sólo algunos caracteres, sosteniendo que «la similitud de los derechos posesorios con los derechos reales es evidente y las respectivas acciones adquieren un aspecto de paridad incuestionable;»

Que «á esto obedece sin duda la casi uniformidad de las legislaciones más adelantadas, en atribuir al Juez de la situación de la cosa el conocimiento de las acciones posesorias, como si efectivamente fueran reales:»

Que «si buscamos, en el derecho moderno, principios que se ajusten á este orden de ideas, encontramos que



en Francia, en Italia y en España, las acciones posesorias están asimiladas á las reales, en cuanto á su ejercicio en el lugar donde está situada la cosa».

En primer lugar, distingo las acciones posesorias, llamadas interdictos, que son las únicas conocidas en todas las legislaciones extranjeras, de las acciones posesorias propiamente dichas, que son propias y exclusivas del derecho argentino.

De las citas y referencias, que tengo hechas, en esta oportunidad y en mi primer escrito referido, resulta que en las legislaciones Francesa, Italiana y Romana, de donde toman origen los interdictos, éstos son acciones personales, la posesión no es un derecho real y, sin embargo, el conocimiento de ellos corresponde al Juez de la situación de la cosa, al del lugar donde se comete la violación.

León Wodon dice que *«por motivos de interés público, de conveniencia y de economía y no por razón de la naturaleza de los derechos, es que el art. 3º del Cód. de Proced. Francés, ha conferido el conocimiento de las acciones posesorias al Juez de la situación del objeto litigioso.»*

«Por esta misma disposición, agrega, el legislador ha deferido el conocimiento de las acciones posesorias á los Jueces de Paz, y es sabido que, en principio, los Jueces de Paz no pueden conocer de las acciones reales sobre inmuebles»; con lo que prueba que estas acciones son personales.

En la legislación Italiana sucede lo mismo, pues, como dice Cuzzi, viene casi literalmente copiada de la francesa.

En cuanto á la Española, natural es que declarando



que la posesión es un derecho real, indique como competente al Juez de la situación de la cosa.

Finalmente, en la legislación argentina, consecuente con la teoría romana, que es nuestra teoría legal en materia de interdictos y la que, en razón de su carácter *ex malificiis*, designaba, en la Ley 1.º del Dig. *ubi de possessione*, como Juez competente al del lugar donde se cometía la «violencia» ó se turbaba la «posesión momentánea»; en ausencia de una disposición especial de nuestra ley y contemporizando con la Jurisprudencia establecida por V. E., he aceptado, como *Juez competente en los interdictos*, al del lugar del delito ó cuasi delito, que será el de la situación de la cosa; pero, en rigor de principios, debiendo aplicarse la ley tal cual es, según mandato imperativo de los artículos 59 y 217 del Código de Procedimientos, observando que el art. 4º inc. 4º del mismo Código fija, para las *acciones personales*, una regla general, en términos claros é intergiversables y que *ubi lex non distinguit nec non distinguere debemus*, creo que los interdictos, que son acciones *personales*, aunque sean ex delicto ó quasi ex-delicto, se hallan también comprendidos en aquella regla, que no hace distinción alguna sobre la *causa* de la *personalidad* de las acciones, y, con mayor razón, cuando no existe una disposición especial que los exceptúe, como en la ley Española, que nuestro legislador ha copiado á medias, tal vez intencionalmente.

Bien; pero, observaré una vez más que todo esto es referente á los interdictos y no á las acciones posesorias, que, basadas en el derecho personal de posesión, son exclusivamente personales, y como el art. 4 inciso 4º de los



Cods. de Procedimientos de esta Capital y de Corrientes establecen, en términos generales y absolutos, que las *acciones personales* deben ejercitarse ante el *Juez del domicilio del demandado*, es indudable que la *acción posesoria*, que he promovido, debe ejercitarse ante los Jueces de esta Capital, por ser *aquí el domicilio de los demandados*.

Confirmando esta conclusión, en la Serie 4.^a, tomo 9, pág. 127, Fallos de la Exc.^{ma} Cámara se encuentra uno, cuyo sumario dice: «Es Juez competente, para demandar la posesión de un inmueble, el del domicilio del demandado, aun cuando el bien se encuentre en distinta jurisdicción.» Este fallo es revocatorio del de 1.^a Instancia, «por los fundamentos» del dictamen del Fiscal Dr. Marenco.

Es cierto que en este caso, como en varios otros fallos citados en el § IV. de mi primer escrito, se trata de la *acción para adquirir la posesión*, que nadie niega sea exclusivamente *personal*; pero pregunto ¿qué diferencia existe entre las acciones para *adquirir* y para *recuperar* la posesión?—Ninguna, fuera de la causa, del origen de la acción, que en ésta se funda en una posesión que se ha tenido y la primera en un título que le da el derecho de tenerla. Ambas son acciones personales, se ejercitan por el juicio ordinario y tienden á obtener la posesión de un inmueble; deben corresponder á la misma jurisdicción.

Debe consultarse la extensa nota del muy ilustrado Dr. Hall, al vocablo *Juez Competente* del tomo 3.^o de la Instituta, la que, por brevedad, me concreto á dar por reproducida, pues en ella se contesta á otras objeciones que se hacen.



Finalmente, si las acciones posesorias fueran acciones reales, siendo inherente á la propiedad el derecho de poseer la cosa (art. 2513), los titulares de los derechos reales, tendríamos dos acciones de igual naturaleza, sustanciables por los mismos trámites, tendentes al mismo fin, ejercitables ante el mismo Juez, y entonces ¿cuál sería la razón de su distinción tan radical, en la doctrina y en la legislación?

Lo que sirve de base á mi acción, no es el hecho de la posesión, sino el *derecho personal de posesión*.

No sé que haya otra legislación que, como la nuestra, reconozca también la posesión como un derecho personal, garantido con acciones propias, diversas de los interdictos.

Y esta distinción es para mí sumamente radical é importante, pues aclara y explica ciertas disposiciones del derecho argentino, que, cuando se estudia el origen y la índole de estas acciones en la legislación comparada, se nota *prima facie* una especie de anomalía, que puede conducir y conduce, como hemos visto, á algunos errores.

Como se ve, este sistema es especial, exclusivo de nuestro derecho, y, por consiguiente, hay necesidad de estudiarlo en sí mismo, para penetrar su índole propia y hacer su aplicación correcta á los casos ocurrentes.

No lo encuentro estudiado en ninguna parte y ya que la oportunidad se ha presentado, no he querido omitir una sola consideración, á trueque de molestar la atención de V. E., por lo que pido disculpas, pues su alta autoridad va á admitirla ó rechazarla por primera vez entre nosotros, así en la forma que la cuestión *sub judice* viene planteada.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1894.

FALLO

DE LA

EXCMA. CÁMARA DE LO CIVIL







Vistos estos autos y Considerando: Que, según resulta de los propios términos del escrito de f. 22, los actores piden se condene á los herederos de D. Manuel I. Lagraña á devolverles la posesión que actualmente tienen del campo que expresan, situado en la Provincia de Corrientes, Departamento de Curuzú-Cuatía, del que fueron despojados en 17 de Agosto de 1892, dando á esta demanda el trámite establecido para el juicio ordinario, y aduciendo, entre otras consideraciones de hecho y de derecho, que entre el campo de los sucesores de D. Manuel I. Lagraña y D^a Flora Lagraña de Labougle, denominado el primero Rincón del Chañar y Puntas del Chañar, el segundo, existía una pequeña fracción llamada San Luís, de propiedad fiscal, de la que tomó posesión con su hacienda el causante de los demandantes, D. Luís Furnus, denunciándola en compra al Gobierno de Corrientes, por quien se aceptó la propuesta, se ordenó la mensura correspondiente y acaba de otorgarles la escritura de transferencia respectiva, siendo esta propiedad de la que han sido despojados; que este despojo se ha consumado á virtud de una orden de desalojo librada por el Juez Federal de la misma Provincia en el juicio seguido por los demandados contra D. Carlos J. Pozzi



sobre el campo lindero denominado Rincón del Chañar, siendo así que el campo desalojado, que poseían los demandantes y que se ha confundido con aquél, les corresponde en propiedad, á título de compra al Gobierno de Corrientes, como está, además, reconocido en el mapa de la misma Provincia, publicado por el Instituto Geográfico Argentino en 1889, que lo señala como propiedad de su causante.

Que, según resulta de la misma demanda, ésta se funda en las disposiciones del Código Civil, que acuerda acción posesoria al que hubiera sido turbado ó despojado de la posesión, que tenía adquirida por más de un año, sin los vicios de precaria, violenta ó clandestina, y en las del Código de Procedimientos, que prescribe que deben ser ventiladas en juicio ordinario las contiendas judiciales que no tengan señalada una tramitación especial (art. 66), y la que establece que cualquiera que sea la sentencia que se pronuncie en el interdicto de retener (art. 579), debe entenderse sin perjuicio de las acciones de posesión ó de dominio que puedan corresponder al vencido.

Que los demandados, sin evacuar el traslado de la demanda, deducen contra ella la excepción de incompetencia de jurisdicción, manifestando en su escrito de f. 47, que la acción deducida por los demandantes no es otra que la reivindicación por el carácter de propietarios que se atribuyen al afirmar que el campo mencionado lo han comprado al Gobierno de Corrientes, y que éste les ha otorgado la respectiva escritura en cuya virtud los actores deben acudir al Juez del lugar donde está situado aquel inmueble, de conformidad con lo dispuesto en el



art. 4º del Código de Procedimientos, alegando otras consideraciones con respecto á la prescripción del interdicto, que se supone también deducido y que ha quedado fuera del debate después de lo manifestado por esta misma parte en su escrito de f. 53.

Que, dados los antecedentes relacionados y lo expuesto por los demandantes en su escrito de f. 55, contestando el traslado de la excepción de incompetencia deducida á f. 47 vta., que en el caso *sub-judice* no se trata de una acción de reivindicación, ni de ninguna de las demás acciones reales, que nacen del derecho de propiedad y que la ley autoriza como un medio de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales (art. 2756 á 2758). Por el contrario, la acción deducida en la demanda de f. 22 es la posesoria autorizada por el mismo Código Civil en su art. 2482 al disponer que el que tuviera derecho de poseer y fuese turbado ó despojado en su posesión, puede intentar la acción real que le compete ó servirse de las acciones posesorias, agregando que no podrá acumularse el petitorio y el posesorio, que si intentase acción real perderá el derecho á intentar las acciones posesorias; pero si usase de las acciones posesorias, podrá usar después de la acción real; de lo que se deduce la naturaleza distinta que corresponde á una y otra acción, y la libertad que la ley deja para poder ejercitarlas en juicio con la separación y distintos efectos que la misma establece.

Que, por consiguiente, no tratándose de ninguna de las acciones reales determinadas por la ley, carece en absoluto de fundamento legal la excepción de incompetencia de jurisdicción deducida por los demandados en



el concepto expresado, siendo, por lo mismo, innecesario establecer cuál es el carácter que corresponde á la acción deducida por los demandantes, fundado en el derecho que alegan tener para exigir de los demandados la restitución del inmueble cuestionado, conforme á lo dispuesto por el art. 2487.

Baste saber que la jurisdicción atribuida por la ley al Juez del lugar donde está situada la cosa litigiosa, se refiere al caso en que se ejerciten acciones reales; que entre éstas no está comprendida la posesión, deducida en la demanda, de distinta naturaleza y con diversos efectos, como se deduce claramente en presencia de lo dispuesto en el art. 2482 citado, y que, en fin, no podría tampoco considerársela con analogía en aquel carácter, sin contrariar abiertamente los principios fundamentales á que deben ajustarse las resoluciones judiciales, sin hacer distinciones donde la ley no las autoriza.

Que, finalmente, tanto la sucesión demandante como la demandada, se encuentran radicadas ante los Tribunales de esta Capital, según resulta de autos, circunstancia que es de tenerse presente.

Por estas consideraciones y las concordantes aducidas por el Inferior, se confirma, con costas, el auto apelado de f. 98.

NICANOR GONZÁLEZ DEL SOLAR.

CARLOS MOLINA ARROTEA.

Ante mí:

Jorge L. Dupuis.



En disidencia: Y vistos.

Considerando: Que no es sobre la procedencia de la acción deducida que el Tribunal está llamado á pronunciarse, pues lo único que por el momento está en tela de juicio es la competencia de los Tribunales de la Capital para conocer en el juicio que la mencionada acción va á provocar.

Que, por consiguiente, sólo se trata de una cuestión que debe resolverse exclusivamente con arreglo á las leyes, principios y precedentes que rigen el derecho procesal, y con especialidad los relativos al poder jurisdiccional atribuído á los Tribunales.

Que á este respecto debe, desde luego, recordarse que la jurisdicción, ó sea la facultad, en lo que á la justicia se refiere, de decidir las contiendas surgidas por las colisiones de intereses ó derechos privados, es un atributo de la soberanía, y que estando la Nación Argentina regida por instituciones federales en que cada Estado ó Provincia conserva los poderes innatos, no delegados (art. 104 de la Constitución), á cada una de ellas corresponde determinar los medios, las formas y demás condiciones tendentes á garantizar la efectividad de la jurisdicción dentro de sus respectivos territorios, pues sólo han delegado en el gobierno central la facultad de dictar las leyes sustantivas, reservándose expresamente juzgar de su aplicación á los casos ocurrentes (art. 67, inc. 11 de la Constitución).

Que esto establecido, y no habiéndose dictado hasta el presente, ley ó tratado (art. 7 y 107 Constitución



Nacional) que prevea los conflictos jurisdiccionales, entre una ó más Provincias ó entre una de éstas con la Capital de la República, para solucionar el que el caso *sub-judice* ofrece, debemos acudir á los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. (Art. 62 del Código de Procedimientos).

El art. 4º del Código de Procedimientos, invocado por el actor para sostener la competencia de los Tribunales de la Capital, no es aplicable, ni es de aplicabilidad á caso alguno que pudiera ocurrir en el territorio de la Capital, donde los diversos Tribunales de un mismo fuero ejercen unidad de jurisdicción. Ese artículo se explica para la Provincia de Buenos Aires, como que para ella fué dictado, cuyo territorio está dividido, á los fines de la administración de justicia, en Departamentos judiciales, con determinados medios jurisdiccionales, y requerría, en consecuencia, prefijar reglas á las que hubieran de acomodarse para prevenir conflictos y contiendas de competencia. Pero esas reglas no podrían aplicarse, ni aun por analogía, al caso *sub-judice*, porque aquí no se trata de complicaciones de jurisdicción dentro de un mismo Estado, sino entre la Capital y una Provincia autónoma, cada una de las cuales tienen ó pueden tener reglas diversas relativas á sus respectivas jurisdicciones.

Carecen, pues, de oportunidad los razonamientos del actor tendentes á demostrar que para determinar la competencia jurisdiccional, tratándose de acciones personales, como califica á la deducida por él, sólo debe tenerse en cuenta el domicilio del demandado, con absoluta prescindencia del lugar en que se encuentra situada la cosa sobre que versa la acción. Esto será



verdad cuando el domicilio del demandado y la cosa litigiosa se encuentren sometidos á una misma jurisdicción, como sucedería en la Provincia de Buenos Aires, en que no obstante la subdivisión departamental, cada Tribunal tiene *imperium* en todo el territorio de la Provincia, pero cuando el domicilio del demandado no coincida con el lugar de la cosa litigiosa, cambia de aspecto la cuestión, pues vana é ilusoria sería toda decisión careciendo de los medios de hacerla efectiva, porque, como decía una ley romana, «Sine modica coercicione nulla est jurisdicctio».

No toda acción personal, por otra parte, puede ser llevada ante el Juez del reo, como con tanto absolutismo lo sostiene el actor, pues el mismo Código de Procedimientos nos proporciona casos de excepción (art. 609), y lo demuestra concluyentemente el ilustrado Dr. Cortés en una de sus magistrales vistas fiscales, que se registra en la página 380 del tomo 1º de sus obras.

Debe tenerse presente asimismo, que aun cuando la acción deducida debiera calificarse exclusivamente de personal, tiende en definitiva á recuperar un bien raíz y es un principio de derecho internacional, consignado igualmente en nuestra ley civil, que los bienes raíces se rigen por la *lex rei sitæ*, á los efectos de su posesión ó dominio público y privado (art. 10 Código Civil), y ya hemos visto que los derechos inherentes á la soberanía se ejercen por la Nación ó Provincia en la medida de sus respectivas delimitaciones.

A la primera corresponde la legislación de fondo, sin *alterar la jurisdicción de las segundas*.

Los juicios, pues, relativos á la posesión de bienes

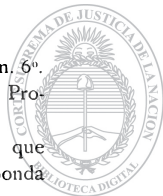


raíces situados en la República son de la exclusiva competencia de los Tribunales de la República, que serán federales ó locales, según que cayeren en las jurisdicciones de unos ú otros. Y si la Nación debe respetar la jurisdicción de cada Provincia, con mayor razón deben prestarse entre sí igual respeto.

El conflicto de jurisdicción en el caso *sub-judice* proviene de la circunstancia de tener el demandado su domicilio en la Capital Federal y encontrarse la cosa materia de la acción posesoria deducida contra él en la Provincia de Corrientes, y como la jurisdicción se ejerce sobre las personas y cosas, la dificultad está en determinar cuál de estos dos elementos debe prevalecer en el caso ocurrente.

Si así como se trata de un bien raíz situado en una Provincia argentina, se tratara de cosa ubicada en la República Oriental, por ejemplo, no podría ser dudoso que el conocimiento del asunto correspondería al Tribunal extranjero, no obstante estar domiciliados en la República el actor y el demandado, pues así lo resuelve el derecho internacional y así está además expresamente establecido en tratados celebrados al efecto. (Arts. 26 y 27 del tratado celebrado en febrero de 1889 sobre materia civil y jurisdiccional aprobado por la ley de 1894).

Son, pues, estos principios los que por su notoria pertinencia deben aplicarse al caso *sub-judice*, pues las Provincias argentinas son entre sí y dentro de su autonomía equiparables á los Estados independientes, en todo lo que se relacione con sus derechos de soberanía no delegados en la Nación. (Causas XCV, tom. 4º, pág. 457, y XCIX, tom. 5º, pág. 18, Ser. 2ª. Fallos de



la Suprema Corte de la Nación. Causa CCLVIII, tom. 6º. pág. 22, Ser. 2ª. Fallos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.)

En resumen, todo juicio posesorio, cualquiera que sea la forma de procedimiento legal que corresponda imprimirle, sumario ú ordinario, solo puede promoverse «ante el Juez del lugar en el cual exista la cosa sobre que la acción recaiga».

Por estas consideraciones, se revoca el auto apelado de f. 98.

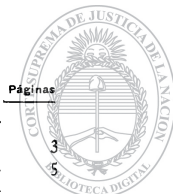
JULIÁN GELLY.

Ante mí:

Jorge L. Dupuis.



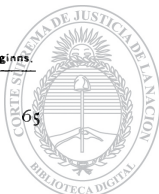
ÍNDICE



	Páginas
§. I. Se opone á la demanda la excepción de incompetencia.....	3
§. II. Cuestión que de ella surge y debe resolverse.	5
§. III. Disposiciones legales que rigen la acción instaurada.....	5
§. IV. Interdicto y acción para adquirir la posesión.—Son acciones personales.—El primero es sumario, la segunda se ejercita por la vía ordinaria.....	7
§. V. Interdicto de retener y acción posesoria de manutención.—Son acciones posesorias.—Al primero corresponde el juicio sumario, á la segunda, el ordinario..	15
§. VI. Interdicto de recobrar ó de despojo y acción posesoria por restitución.—Son acciones posesorias.—El primero se ejercita en juicio sumario, y la segunda, en juicio ordinario..	25
§. VII. La acción sub-judice es la llamada acción posesoria por restitución, que debe ejercitarse por la vía ordinaria.....	38
§. VIII. La desposesión causada por mandato judicial no autoriza la interposición del interdicto, sino la de la acción posesoria.....	40
§. IX. Definida la acción promovida, debe determinarse la competencia del Juez llamado á conocer en ella.—No hay disposición legal que la establezca, ni jurisprudencia al respecto.—Existe un solo fallo que acepta un dictamen del Dr. Cortés, que trata de esta cuestión.—Este dictamen no hace el estudio completo del	



- punto, y se presta á crítica.—Empieza ésta, nó con argumentos propios del que suscribe, sinó con los de las autoridades en la materia.....
- §. X. Teorías de la posesión de Savigny y de Molitor expuestas por el Dr. Pedro Goyena, quien opina, como el segundo, que es un derecho mixto.—El Dr. Cortés demuestra que el «Código vigente clasifica por personales el derecho de posesión y los interdictos»; sin embargo, fundándose en una nota ilustrativa, pretende deducir que el Dr. Velez consideraba la posesión como derecho mixto.—El Dr. Cortés sufre un error: la nota no es de Velez sinó de Molitor y precisamente es el párrafo que cita y acepta el Dr. Goyena. El Dr. Velez declara expresamente que «en este Código no reconocemos acciones mixtas».—Opiniones de varios autores y especialmente de Ortolán y Maynz, quienes critican, declarándolas *in personam*, las llamadas acciones mixtas desde Justiniano.—Mr. Laurent opina que no hay acciones mixtas porque no existe derechos mixtos.—La posesión, base de las acciones posesorias, es un derecho exclusivamente personal.....
- §. XI. Demostrado que las acciones posesorias son acciones personales, correspondería atribuir su conocimiento al Juez del domicilio, de acuerdo con el art. 4º, inc. 4º, del Código de Procedimientos; pero, el hecho elocuente de que desde la legislación de Justiniano se indica como competente al de la situación de la cosa, obliga á estudiar la naturaleza de las acciones posesorias, para buscar una explica-



- ción satisfactoria antes de desestimar tal antecedente.....
- §. XII. El interdicto en la legislación romana era una especie de reglamento de policía.—Con tal carácter policial se ha conservado hasta la legislación actual, en la que se considera siempre como mera disposición de orden público, que no prejuzga sobre las acciones posesorias.—En aquella legislación solo se conocía el interdicto fundado en el hecho de la posesión; las acciones posesorias basadas en el derecho de posesión pertenecen á la legislación moderna.— En los interdictos, la razón de orden publico, que los caracteriza, predomina sobre la naturaleza de la posesión y determina la competencia del Juez del lugar donde se comete el delito ó casi delito.—Las acciones posesorias participan esencial y exclusivamente de la naturaleza de la posesión y solo según esta debe fijarse la competencia del Juez.—La ley 1.^a del Dig. citada por el Dr. Cortés, se refería al interdicto.—Las citas de Savigny, Ahrens, Murillo, etc., no son oportunas, porque consideran la posesión como un derecho real.—El dictamen del Dr. Cortés y el fallo que lo aceptó se refieren á un interdicto de obra nueva.—El mismo Dr. Cortés, citando un párrafo de Lehr, que parece está de acuerdo con la doctrina que expongo, reconoce «que esta podría considerarse como la teoría de nuestro Código».—En la jurisprudencia no hay un solo caso en que se halla promovido y sustanciado la acción posesoria en la forma que propongo la cuestión sub-judice.—Siendo esta



	una acción pura y exclusivamente personal, corresponde su conocimiento al Juez del domicilio de los demandados, de acuerdo con la regla general consignada en el Art. 4.º del C. de Procedimientos.....	69
§. XIII.	El Juez competente para entender en las acciones mixtas, lo es también el del domicilio del demandado.....	86
§. XIV.	Las acciones personales deben promoverse ante el Juez de la sucesión.....	88
	Dictamen del Agente Fiscal Dr. D. R. Naveira.....	91
	Sentencia del Juez de 1.ª Instancia en lo Civil Doctor Don Juan Agustín García (hijo).....	97
	Dictamen del Fiscal Dr. Carlos L. Marengo.....	105
	Informe <i>in-voce</i> del Dr. Furnus	
	Consideraciones generales.....	122
	Naturaleza de los Interdictos.....	129
	La posesión es un derecho.....	134
	División de los derechos—Regla general.....	144
	La posesión es derecho personal porque la ley no la declara real.....	154
	La posesión no es un derecho real.....	158
	Las acciones posesorias no se dirigen contra terceros detentadores.....	166
	La posesión, por su naturaleza intrínseca, es un derecho personal, aunque no de crédito ó de obligación.....	172
	Las acciones posesorias son esencialmente personales..	176
	Juez competente.—Conclusión.....	180
	Fallo de la Excma. Cámara.....	185
	Disidencia del Dr. Gelly.....	187

FURNUS CONTRA LAGRAÑA



ACCIÓN

POSESORIA



BUENOS AIRES

TIPO-LITO SAN JORGE, SANTA FE 2292

1897



DOS PALABRAS



Aunque, en el presente caso, el fin sólo coronó á medias la obra, porque *errare humanum est*, dedico este humilde fruto de alguna labor á los estudiosos, que, con más capacidad y preparación, quieran meditar sobre esta materia que «forma incontestablemente, como dice León Wodon, la porción más difícil y ardua del derecho civil moderno».

Y sírvales de estímulo la observación de Dn. Adolfo Posada, anotador de Jhering, de que «en general, puede afirmarse que la noción de la *posesión*, distinta por un lado de la mera *tenencia* y por otro de la *propiedad*, es una noción jurídica *difícil* y como tal no puede encontrarse en el derecho positivo, sinó después que la cultura llega á cierto grado. -- Los pueblos primitivos son inhábiles para entrar en aquellos distingos que la posesión romana y *moderna* suponen.

Y ante la transformación actual de los derechos positivos, que no encuentra en el derecho romano todas las inspiraciones necesarias, en virtud del cambio radical de las condiciones de la vida, principalmente en las relaciones de propiedad, creemos de necesidad imprescindible el examen de todos los problemas, *que en el de la propiedad van implícitos*, á la luz abierta de la filosofía.

Quizá lo que más falta hace hoy, es buscar un criterio fundamental jurídico, en que basar las instituciones positivas, que la transformación interna de la vida social exige y apenas se vislumbra todavía. Y cuenta que una de las instituciones positivas que piden nueva savia, es la que se deriva del concepto



romano de la propiedad, que es, después de todo, el que supone ciertas dificultades para comprender y organizar la *posesión*, á diferencia del *dominio* absoluto y pleno de las cosas».

«La lucha en el cercano porvenir (dice el Dr. Machado, en la introducción de sus comentarios al Código Civil) tendrá lugar al rededor de la propiedad, porque la civilización moderna tiene por ideal la elevación del hombre en todas sus manifestaciones, y la propiedad, distribuida convenientemente, es el pedestal sobre que se levantará.

La legislación del porvenir debe tener por base la transmisibilidad de la propiedad, considerándola bajo su faz económica, de cambio, de utilización rápida, de elemento de progreso y bienestar».

Y cuál no será el papel que corresponda desempeñar á la *posesión*, si, como sostiene Von Jhering, el crítico de Savigny, es la *exterioridad* de la propiedad, y concebida así la posesión, acompaña siempre á la utilización económica de la propiedad y el propietario no tiene que temer que el derecho le abandone mientras use de la cosa de una manera conforme á su destino?»

Prescindiendo del resultado final del pleito, desde que, subsistiendo la acción reivindicatoria sólo causa demora, es la importancia de la cuestión exclusivamente jurídica la que me determina á dar á la publicidad estos modestos resultados de mis estudios.

11 octubre de 1898.

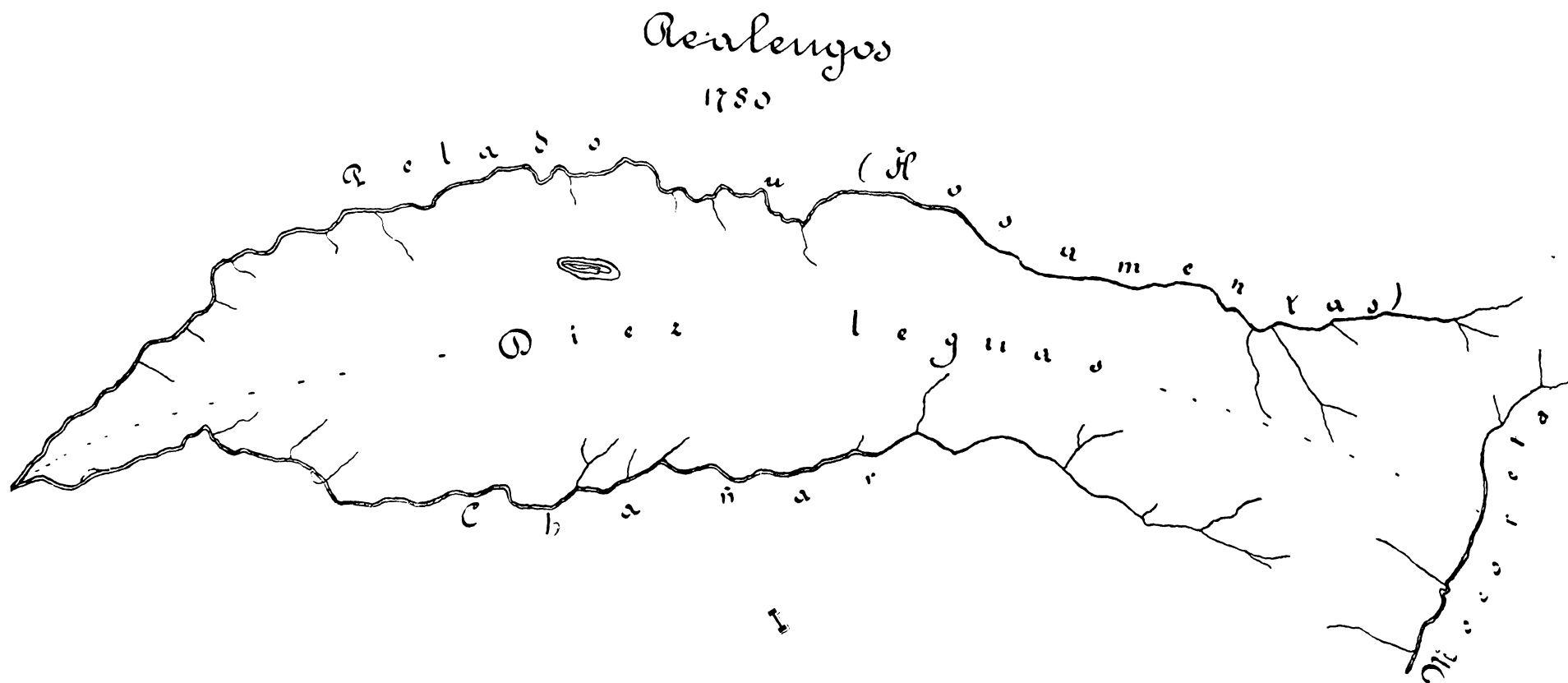
Victoria 420.

CÁSTULO L. FURNES.

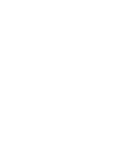
DEMOSTRACIÓN GRÁFICA

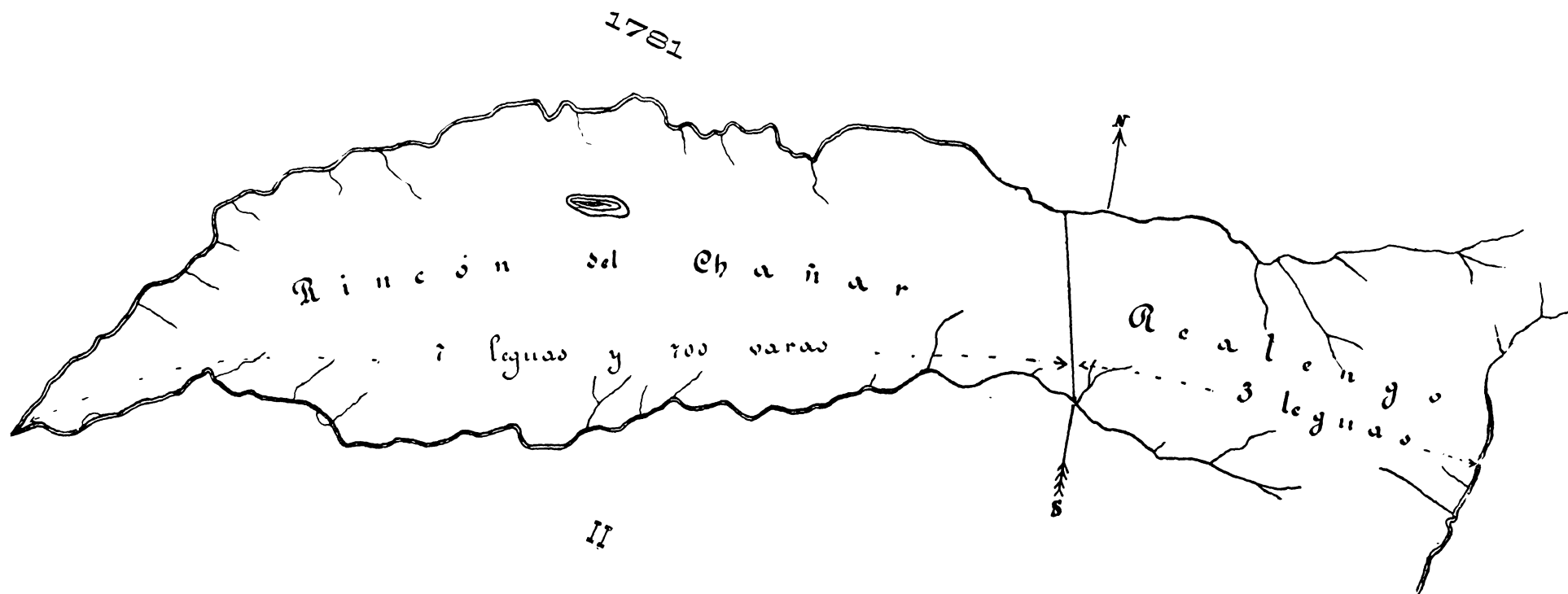






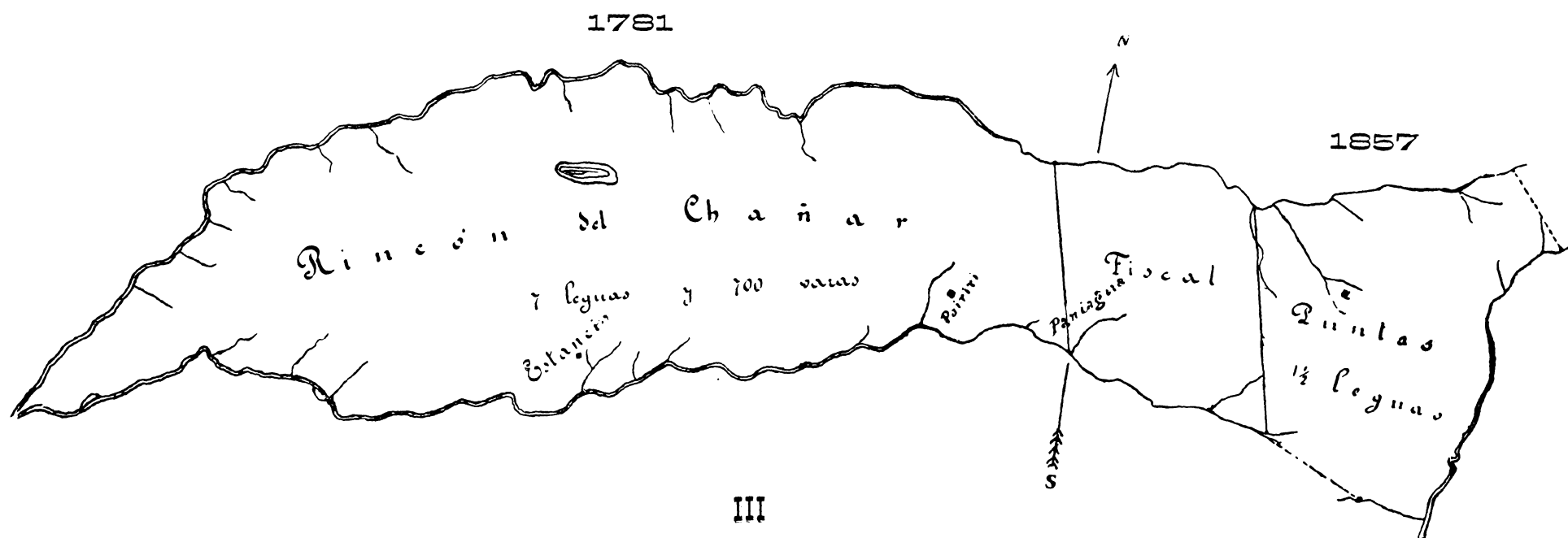
«Denuncia de unas tierras.... realengas.... desiertas y despobladas.... se componen de 2 leguas de frente y el fondo hasta el rincón». (Tits. del Rincón, fs. 145 y sigts).





Antecesores de Lagraña compran al Fisco el campo Rincón del Chañar, «con 7 leguas y 700 varas, hasta dar con el **rincón** del arroyo Pelado á donde **rematan** dichos arroyos, lindando.... con tierras realengas». (Tits. del *Rincón*, fs. 145 y sigts.—Mensura).



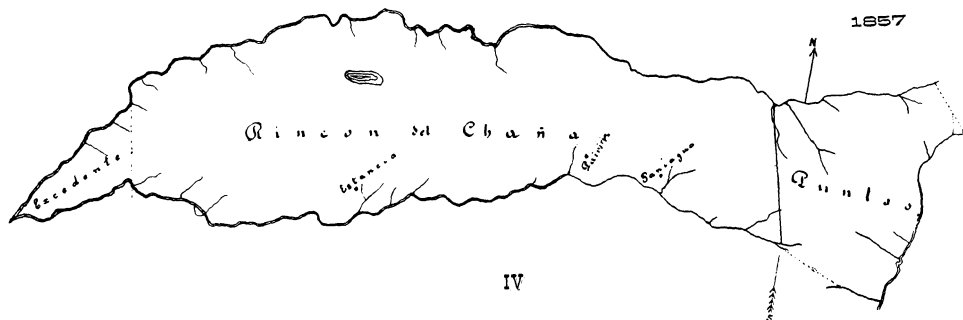


1857—Manuel I. Lagraña compra Puntas del Chañar, según mensura de Caballero, cuyo extracto se halla en los títulos de propiedad de Furnus. (Emb. prev).



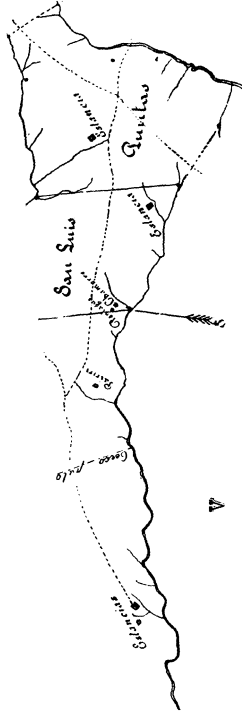
Mensuras de Caballero

1858



Se desubica el Rincón del Chañar para trasponer campo fiscal.
¡Aparece el excedente integrante!





Verdadera ubicación, según títulos de propiedad.





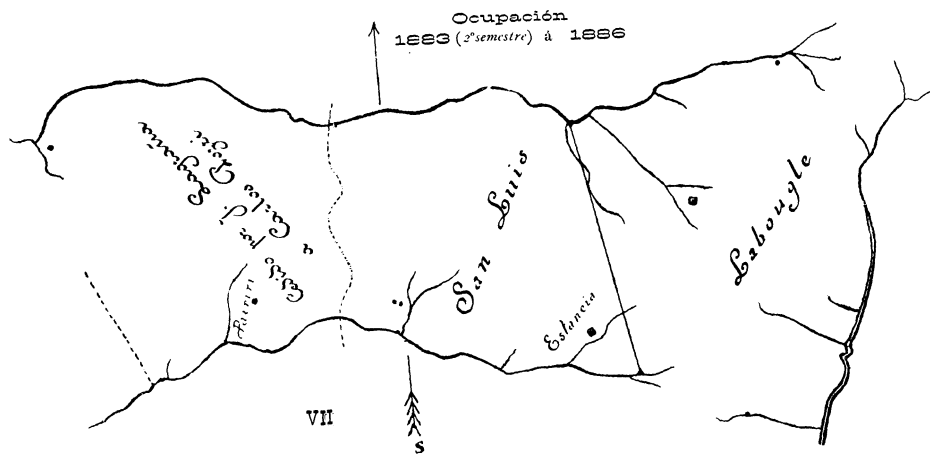
Position 9 de fs. 344 y contestación de D. Francisco Javier Lagrana.

VI

Posición 9 de fs. 344 y contestación de D. Francisco Javier Lagaña.



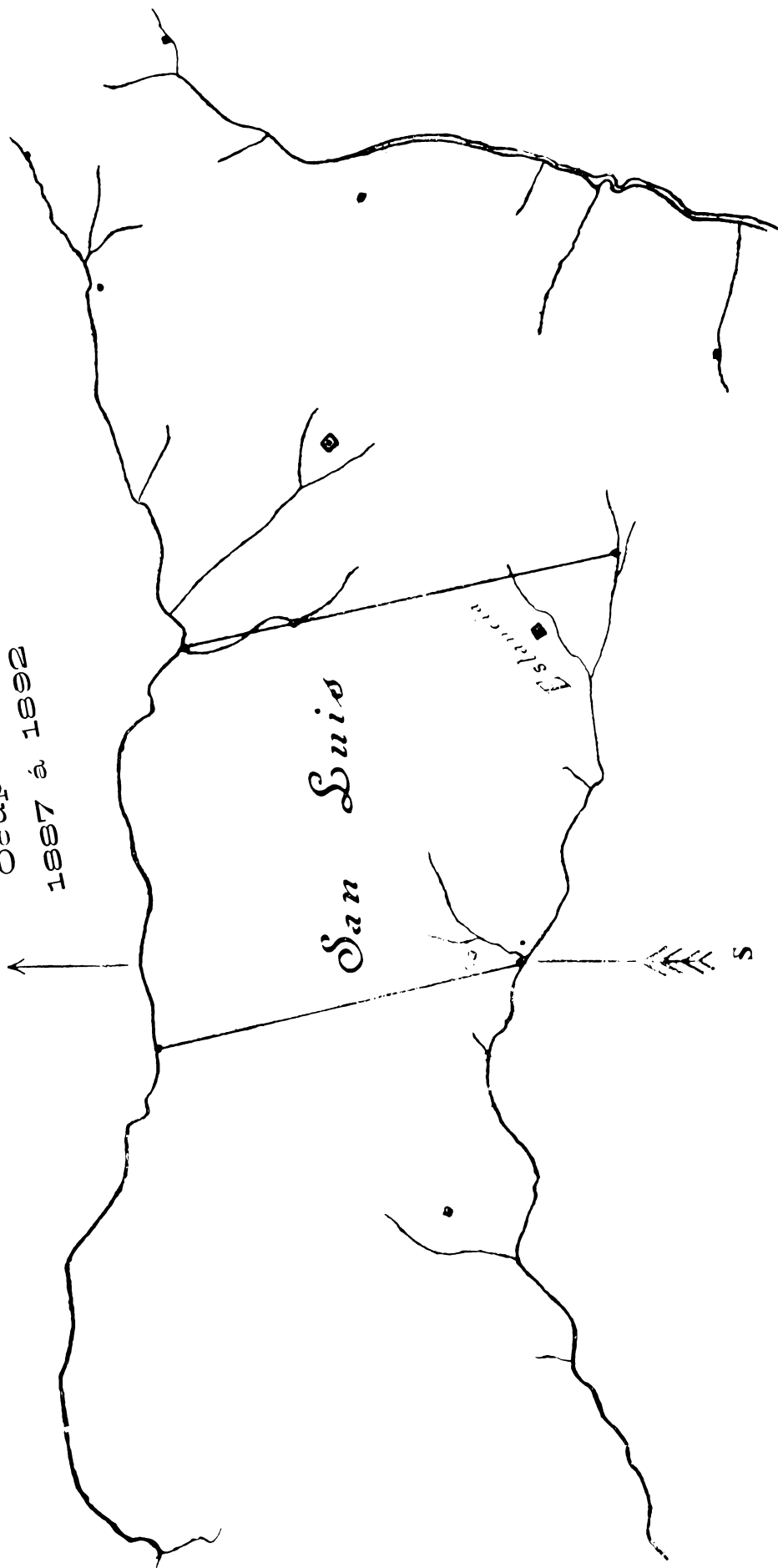




«Que es cierto que las haciendas de D. C. J. Pozzi, parte de ellas, pastaban hasta el arroyo Fairiri, durante el tiempo que el Sr. Pozzi ocupaba ese campo, por cesión gratuita del absolvente». (F. J. Laguna. Posic. 11 de fs. 347 vta.)



Ocupación
1887 á 1892



VIII

... fué nombrado, por D. Luis Fournus, en 1890, encargado del Establecimiento, que él denomina-
ba San Luis. Repregunta s de fs. 367 vta. del Sr. Lagraña al testigo Sr. Puga).



ALEGATO

DE

FURNUS





SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL:



Que, por lo que resulta de las constancias de autos, cuyo mérito voy á examinar y las consideraciones legales que expondré. V. S. se ha de servir fallar en definitiva de acuerdo con lo solicitado en la demanda de f. 22 á 23 y su ampliacion de f. 142 á 144. en la forma que concretaré al final de esta exposicion.

De los numerosos hechos alegados en la demanda, unos son reconocidos como exactos, otros tachados de falsos, se afirman como verdaderos algunos distintos, se ignoran pocos, se silencian varios, y así, si de acuerdo con lo dispuesto en el art. 100, inc. 1 del Código de Procedimientos, diéramos por confesos los silenciados, deberíamos concretarnos á estudiar simplemente los negados y afirmados por la contraria, para ver quién tiene razón: pero, dada la gran importancia del asunto, el número y complicación de hechos y la época desde que se traen á colación, prefiero entrar al examen de todos y cada uno de ellos, para darles el significado preciso que les corresponde en la época y circunstancias en que han sucedido.



Debo, sí, ante todo, hacer una observación de conjunto, para evitar algunas confusiones, en que, con demasiada frecuencia, incurre la parte demandada.

La demanda entablada tiende á obtener principalmente la restitución de la *posesión* de un campo, ejercitando la respectiva *acción posesoria*.

No tratamos de la *propiedad* del mismo campo ni de la correspondiente acción de reivindicación.

Por consiguiente, la prueba á producir debe referirse á los hechos que sirven de base á la *posesión* y no á los títulos que acrediten la *propiedad*, que es á lo que exclusivamente se han dedicado los demandados, exhibiendo, desde los otorgados en 1781, el testamento de doña Rosalía Acosta, hijuela de M. I. Lagraña, etc., hasta las hijuelas que demuestran que últimamente se ha adjudicado el campo Rincón del Chañar á los señores Francisco Javier y Rodolfo Lagraña, lo que nada importa á mi parte, ni tiene influencia alguna respecto de la solución que debe darse á este pleito, que versa exclusivamente sobre la posesión.

HECHOS PROBADOS



I

CAMPOS DEL CHAÑAR

La existencia de estos campos es admitida por ambas partes y no pueden negarla porque ellos existen en realidad y cualquier mapa, como puede observarlo V. S. en los presentados por ambas partes, enseñan su ubicación.

Están en la Provincia de Corrientes, Departamento de Curuzú-Cuatiá, encerrados entre los arroyos «Pelado» al Norte, al Sur «Chañar» y «Mocoretá» al Este.

Esta zona de tierra se divide, por la parte actora, en tres fracciones llamadas: «Puntas», «San Luis» y «Rincón».

La parte demandada divide en dos: «Puntas» y «Rincón» (porque incluye el San Luis en ésta).

Respecto del campo «Puntas», no hay discusión; ambas partes respetan la línea amojonada y alambrada desde hace más de diez años.

La discusión versa exclusivamente sobre la fracción contigua al Oeste del campo Puntas.

La actora llama á esa fracción «San Luis» y afirma es propiedad distinta de la del «Rincón del Chañar».

La demandada sostiene que se llama «Panigua» y que es parte integrante de esa propiedad.

II

«RINCÓN DEL CHAÑAR»

ES

PROPIEDAD DE LAGRAÑA



La parte de Furnus, no sólo no ha desconocido jamás que el «Rincón del Chañar» haya sido y sea propiedad de la familia Lagraña, sino que, al contrario, tanto en su escrito de demanda, como en el de f. 203, lo ha reconocido así expresa y categóricamente.

Después de este reconocimiento, no me explico con qué objeto se ha formulado insistentemente por la parte de Lagraña, á todos los testigos, la pregunta segunda de su interrogatorio, inquiriendo si sabían que ese campo pertenecía á la familia de don M. I. Lagraña.

Lo único que ha dejado de manifiesto semejante pregunta es la ignorancia de los testigos, porque todos dicen que lo han oído decir, pero á ninguno le consta por haber visto los títulos que acreditan dicha propiedad.

La parte de Furnus conoce esos títulos, hoy agregados á estos autos, porque los ha estudiado en 1883, con motivo de las gestiones hechas ante el Gobierno de Corrientes, que los ha tenido presentes, y el reconocimiento hecho lleva ese antecedente ilustrativo.

Se pretenderá, talvez, en el alegato, utilizar esa pregunta para argumentar diciendo que es un hecho público y notorio, desde tiempo inmemorial, en Curuzú-Cuatíá, que el «Rincón del Chañar» pertenece á la familia Lagraña; pero, si se observa la razón del dicho de los testigos, se



verá que eran los mismos miembros de la familia Lagraña, los que propalaban tales noticias.

Si nadie pone en duda que el Rincón pertenece á Lagraña, no hay para qué empeñarse en probar un hecho no negado.

Otra cosa es, sin embargo, preguntar hasta dónde llega esa propiedad «Rincón del Chañar»?

Ya lo veremos.

III

«PUNTAS DEL CHAÑAR»

ES

PROPIEDAD DE LABOUGLE

Algo análogo á lo anterior sucede con este punto.

Quién lo niega?

Mi parte no ha pretendido semejante cosa. Al contrario, también ha reconocido que ese campo pertenece, en propiedad y en posesión, á la familia Labougle.

¿Qué importa, á los efectos de este pleito, que sea del Dr. Labougle ó de su señora madre, y que lo haya heredado ó no de Robustiano Lagraña?

La parte demandada, en sus interrogatorios, ha formulado prolija é insistentemente tal pregunta, tan inútil como equivocada.

Inútil, porque á ningún testigo le puede constar sinó por oídas tal hecho, desde que don M. I. Lagraña, ha tenido siempre cuidadosamente guardados los títulos respectivos (final de la carta de Labougle á Furnus, corriente á f. 513).

Equivocada, porque las preguntas hechas á los



testigos contradicen la explicación dada por el mismo propietario, Dr. Labougle, al contestar la primera repregunta que le fué formulada por la parte de Lagraña.

Y aun más: esos títulos no han estado en nombre de Robustiano, sinó de Manuel Ignacio Lagraña, como lo confiesa la misma parte demandada, en el núm. 31 de su escrito de contestación á la demanda.

Por otro lado, ¿quién no ha oído decir en Curuzú-Cuatíá, después de la muerte de Robustiano, que ese campo lo había heredado don Manuel Ignacio, quien disponía de esos intereses como de cosa propia, hasta el extremo de ceder el campo para el establecimiento de la sociedad Lagraña, Furnus y Pozzi?

Y nadie más interesado que el mismo Lagraña en hacer correr esa voz, tratándose de campos poco conocidos y poblados, abiertos, constituyendo una zona única, sin líneas divisorias que la fraccionara y encerrando más área de la que le correspondía, y que procuraba apropiarse por confusión de límites, como resulta evidente de todas sus pretensiones manifestadas desde 1882 hasta la fecha.

IV

«SAN LUIS»

ES

PROPIEDAD DE FURNUS

Como en este pleito se discute sobre la posesión de ese campo, sólo puedo incidentalmente tratar de la propiedad; pero, como la parte



Lagraña pretende discutirla en primer término, haciendo la base capital de su defensa, me veo obligado á aprovechar esta oportunidad, para probarles, de una vez por todas, que no tienen (como lo sostienen, sin admitir ni la duda siquiera) la *propiedad* de esa fracción, que llamo «San Luis» y ellos dicen «Paniagua».

Eluden discutir la posesión ó porque no la entienden ó porque tienen miedo, é insisten en probar la propiedad, que, á los efectos de este pleito, es indiferente que la tengan ellos ó mi parte.

He dicho y lo repito, que casi todas sus pruebas tienden exclusivamente á comprobar que el campo «Rincón del Chañar» es de su propiedad: agregan que ese campo *linda* con el de «Puntas» y, por consiguiente, que la fracción sobre cuya posesión se litiga, es parte integrante del «Rincón» etc., etc.

Han presentado:

Los títulos primitivos del campo «Rincón», f. 145 á 176.

El testamento de Rosalía Acosta de Lagraña, fs. 454 á 458.

El testimonio de la adjudicación de bienes á su hijo don Manuel Ignacio Lagraña, fs. 459 á 464.

Declaratoria de herederos de don M. I. Lagraña, fs. 496.

Hijucla de Javier Lagraña, fs. 499.

Id id de Rodolfo Lagraña, fs. 503.

Auto aprobando la cuenta particionaria de los bienes de Manuel Ignacio Lagraña, fs. 506.

Como se observa, todos estos documentos tienden á acreditar los derechos hereditarios de los señores Lagraña, y en especial, de los señores Rodolfo y Javier, actuales propietarios del campo.



Mi parte no les discute, ni sus derechos hereditarios ni su propiedad sobre el «Rincón del Chañar».

Es excusado, pues, que diga una sola palabra más respecto de las constancias de estos documentos, perfectamente impertinentes á la cuestión de posesión que discutimos referente á otro campo, distinto del «Rincón» á que ellos se refieren.

Sin duda, con el objeto de comprobar que la propiedad «Rincón del Chañar» linda con la de «Puntas del Chañar» y, por tanto, que la fracción discutida es parte integrante de aquella, presentaron otros testimonios que contienen:

Las diligencias de mensura practicadas en 1858 por el Sr. Caballero, sobre ese campo (fs. 171 á 181).

Algunas piezas de las actuaciones seguidas ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Corrientes, sobre remensura del mismo (fs. 465 á 478).

Varias piezas de los autos contencioso-administrativos, seguidos, ante el Gobierno de Corrientes, sobre denuncia hecha por Luis Furnus de patriolengos en esos campos, f. (508 á 538).

Después de esto, solo restan ciertos elementos de prueba de parte de Lagraña: el plano y folleto de Zacarías Sánchez, los testimonios referentes al juicio contra Pozzi y las declaraciones de testigos, sobre los que hablaré más tarde.

Veamos para qué sirven las constancias de estos testimonios.

No lo creerá V. S. en el primer momento; pero, basta una hojeada lijera para ver que ellos prueban precisamente lo contrario de lo que pretenden los señores Lagraña, del propósito que les guió al presentarlos.



Prueban, nada menos, señor Juez, que esa fracción sobre cuya posesión se litiga, que ellos llaman «Paniagua» y mi parte «San Luis», es propiedad exclusiva de los herederos Furnus!!!

Mi parte no necesitaba presentar sus títulos de propiedad, pues estos testimonios tienen aún algo más que aquellos, contienen la constancia de la intervención y oposición (desestimada por el Gobierno) de parte de Lagraña, en las gestiones referentes á la adquisición de esa propiedad, lo que acusa que existe cosa juzgada á su respecto.

Ahí tiene V. S. las mentadas diligencias de mensura del Sr. Caballero, que desubicó la propiedad «Rincón», de acuerdo con el propietario, precisamente para dejar el excedente fiscal en el *rincón*, á fin de poder alegar después que estaba encerrado entre límites naturales, etc.

La misma parte que las presentó se encarga, con las constancias de los mismos testimonios exhibidos, de darles el triste valor que les corresponde.

En la foja 473 vta. se transcribe el dictamen de 23 de Julio del 83 (la mensura es de 1858) en el que el Departamento Topográfico, llegó á esta conclusión: *«que existe campo fiscal»* y que esa mensura de Caballero *«es deficiente y defectuosa por muchas consideraciones*, por cuya razón V. E. debe ordenar nueva mensura», lo que fué aceptado por el representante de Lagraña, Dr. Sánchez, quien, con fecha 22 de Agosto del mismo año, pide se la decrete, proponiendo, para efectuarla, á su hermano el señor Zacarías Sánchez, f. 434.

Este agrimensor, Sr. Zacarías Sánchez (autor del folleto y plano presentado por la parte de Lagraña) practicó la mensura en ese mismo año 1883, algo más prolija, en sus detalles, que la de Ca-



ballero, pero dejando, como éste, el excedente fiscal en el *rincón* del campo «Rincón».

Tampoco podía hacerlo de otra manera, desde que especialmente era propuesto, con el fin de servir esos intereses, por su hermano; quien ha hecho prevalecer sus absurdas teorías, sobre la ubicación que debía darse al patriolengo, en la convicción científica, que el Agrimensor Sánchez no ha sabido formarse y exponerla con la ilustración é independencia que correspondía al carácter de perito profesional que inviste y que con mayor razón ha debido tenerla, para no ser tachado de parcial, cuando era propuesto por su hermano, el abogado, consejero y apoderado de los señores Lagraña.

Encabeza este testimonio que examino, á f. 465, una vista fiscal de fecha 8 de Mayo de 1862, en la que se sostiene, con argumentos rápidos, pero ilevantables, que la venta hecha del campo «Rincón del Chañar» fué *ad-mensuram* y que la mensura de Caballero comprobó la existencia de un sobrante patriolengo.

Sigue después un escrito del Dr. Sánchez, en el que se esfuerza en rebatir la vista fiscal que le precede, y llama, desde luego, la atención su fecha 4 de Julio de 1883.

De manera que la parte de Lagraña ha necesitado nada menos que 21 años y 2 meses, para incubar los argumentos que su representante expone en ese escrito!

Desgraciadamente parece que su autor no ha tenido en cuenta que la *oportunidad* es una señora que decide de la eficacia ó inutilidad de las cosas humanas, según se la consulte ó no.

En la mente de D. Manuel Ignacio Lagraña existió el propósito de hacer una sola propiedad de todo el campo del «Chañar», desde la con-



fluencia de los arroyos «Chañar» y «Pelado» hasta el «Mocoretá», para, una vez encerrada así toda ella entre límites naturales, alegar, con visos de verdad y esperanzas de triunfar, que todo lo que allí existía le correspondía y que lo más ó lo menos que resultare (que bien sabía él no faltaba) sería por razón simplemente de la imperfección de los sistemas de mensuras!!

Para realizar esta idea, se apropió y dispuso del campo «Puntas», que, por confusión de límites, formaba de hecho uno solo con el «Rincón»; pues, jamás se encontró el mojón que sirvió de base á la mensura de 1781, ni tenía alambrados ó cercos divisorios de ninguna clase.

Hizo algo más: sostuvo un pleito valioso con la señora Labougle, defendiendo la integridad de esos campos del «Chañar».

Pero murió antes de ver realizados sus propósitos, que nunca se cumplirán ya, porque sus herederos, acto continuo, destruyeron su base, entregando el campo «Puntas» á Labougle y dejando en descubierto el flanco vulnerable que el causante con tanto empeño cubría.

Quedó así de manifiesto que el «Rincón» jamás tuvo ni tiene límites naturales por el Este.

Pero, ¿qué hacen aún los herederos Lagraña para sostener que el excedente resultante les pertenece?

Pues, sostienen que el campo «Rincón» no está ubicado en el *rincón*, sinó afuera, en las *puntas*, y que el sobrante fiscal no está en las puntas, donde estuvo en mayor extensión hasta 1857, sinó allá en el rincón y, por consiguiente, que esa fracción lindera al campo «Puntas» (fiscal, hasta 76 años después de vendido el «Rincón») es parte integrante de la propiedad «Rincón del Chañar», porque este campo tiene límites naturales...!... á



tres leguas de distancia al Este, allá en el Moretá!!

¡Y qué defensa la hecha por la parte de Lagraña!

¡Le ha costado 21 años de ímprobo estudio!

¡Lástima que quedó en el tintero la consulta á la Oportunidad!!

No crea, señor Juez, que voy á distraerle tan lastimosamente su precioso tiempo, ocupándome de rebatir esos absurdos argumentos, aducidos tan fuera de la oportunidad que se les preparó.

No tienen cabida en este litigio y no merecen ni los pocos momentos que se emplean en leerlos.

Análoga suerte cabe al Dictamen del Departamento Topográfico, de fecha 15 de Diciembre de 1883 (f. 474), en el que dicha corporación científica da una triste muestra de su insipiencia: pues, bien poco dice de lo que debió hablar: del mérito científico de la operación técnica, y, suelta de cuerpo, presta su conformidad sobre lo que ni entiende ni le corresponde opinar ni resolver: la *ubicación* del sobrante patriolengo, que es exclusivamente cuestión jurídica y de la competencia del Gobierno.

Pero, aún más: ¿este Dictamen ha sido aceptado?

¿La mensura de Sánchez, ha sido aprobada por la autoridad competente?

¿Esta misma autoridad ha admitido las conclusiones jurídicas del Sr. Dr. Sánchez?

Nó, como V. S. puede verlo observando el final del testimonio de referencia.

No han sido estimadas aún por el Juez que entiende en esos autos sobre remensura y, por tanto, carecen de todo valor legal.

Digo mal: el Gobierno de la Provincia, ante quien tramitó, como correspondía, el expediente sobre denuncia en compra hecha por Furnus,



las ha estimado, y encontrando tan absurda la argumentación del representante de Lagraña, como la ubicación proyectada por el Agrimensor Sánchez, para el patriolengo resultante y la aprobación aconsejada por el Departamento Topográfico, resolvió rechazarlas como las rechazó, y aceptó y aprobó la mensura de Carlevaro, practicada en 1884; aceptó y aprobó la ubicación del patriolengo proyectada por éste, ordenó la expedición correspondiente del título de propiedad y lo otorgó á favor de Furnus.

La misma parte de Lagraña se ha encargado de acreditar en autos estas circunstancias, acompañando los testimonios corrientes de f. 5o8 á 538.

Estos testimonios, con los presentados por mi parte, completan las actuaciones contencioso-administrativas, seguidas ante el Gobierno con motivo de la denuncia hecha por D. Luis Furnus, y precisamente constituyen el título que acredita de la manera más amplia y fehaciente su *derecho de propiedad*, sobre esa fracción de referencia.

Lea V. S. simplemente la primera foja, en donde se enumeran las actuaciones cuyos testimonios se solicitaron y verá que se pidieron:

Del poder otorgado por Luis Furnus á D. Tomás Vedoya:

Del escrito de Vedoya haciéndola enuncia en compra al Gobierno;

De la vista fiscal y decreto del Gobierno aceptándola y ordenando la mensura:

De las notificaciones hechas á la parte de Lagraña;

De las contestaciones, protestas, poderes, escritos de Lagraña, que demuestran el conocimiento que de todo tuvieron y la intervención y actitud opositora que tomaron desde un principio, Octubre de 1882 (fecha del poder dado al Dr. Sán-



chez), resultando de esa misma intervención la aceptación, por parte de Lagraña, de la competencia del Gobierno para entender en ese asunto.

Vienen después:

El Dictamen del Departamento Topográfico, contrario á la mensura de Scheffer;

Las citaciones del Agrimensor Carlevaro á Labougle y Lagraña;

La protesta de éste;

El Dictamen de la Sección Tierras y Colonias, sobre la mensura de Carlevaro;

Y.....

Lo creará V. S.?

La misma parte de Lagraña exhibe en autos, otro testimonio de la *resolución* que terminó aquella cuestión, en 17 de Julio de 1893, rechazando sus pretensiones, aprobando la ubicación proyectada y la mensura practicada en 1884 por Carlevaro, vendiendo la fracción de campo fiscal mensurado, deslindado, amojonado y llamado San Luis, y otorgando, á favor de los herederos de Furnus, el correspondiente título de propiedad, que, en original y debidamente autenticado he presentado á V. S.

Y, sin embargo, Sr. Juez, la parte de Lagraña todavía sostiene que *no existe* el tal «San Luis», propiedad de Furnus; que ese campo es una fracción del «Rincón», propiedad de Lagraña.

Mucho podría escribir sobre esto, Sr. Juez; pero, repito, porque la parte de Lagraña no quiere oír, que no tratamos de la *propiedad*, sino, de la *posesión* de una fracción de campo, que tiene existencia real, ya se llame «San Luis» ya «Paniagua», como ellos dicen.

Ahí están las actuaciones y la resolución que terminó ese litigio de once años, y ¿vamos ahora á remover de nuevo la discusión?



No corresponde, y, por tanto, todos esos documentos, en cuanto acrediten la propiedad, son inútiles al discutir la posesión, y si yo pedí que se tuvieran como parte de mi prueba, solo ha sido para completar los justificativos que quería exhibir, para comprobar la propiedad de Furnus y desmentir á Lagraña, que, desde hace quién sabe cuántos años, andan haciendo creer á todo el mundo, como dicen, que ese campo es propiedad de la familia y que, en consecuencia, los herederos Furnus cometen una tropelía, una ilícita usurpación, al pretender derechos sobre la fracción referida.

El proceder de los señores Furnus en este asunto es sumamente más correcto que el de los Lagraña, y al abundar, al hacer lujo de elementos de prueba en estos autos, no tiene la parte de Furnus otro objeto que dejar bien comprobada esa corrección de sus procederes, para neutralizar los malos efectos que puede producir la divulgación de falsas noticias contrarias, que se diseñan en el uso impropio de ciertas frases incul-tas, que adornan el escrito de contestación á la demanda.

Además, comprobada la propiedad de Furnus, en virtud de la denuncia en compra hecha al Gobierno en Setiembre de 1882, aceptada por éste en Octubre siguiente y que trajo, como consecuencia, la mensura de Scheffer en 1883 y la de Carlevaro en 1884, queda evidentemente acreditado el *animo domini*, requerido, de parte de Furnus, para que su posesión produzca íntegramente sus efectos legales.

En oportunidad, haré valer también las constancias que encierran esos mismos testimonios, que constituyen el título de Furnus, referentes á los actos de posesión, en que se basa la presente acción posesoria.

V.

TRES FRACCIONES NO DESLINDADAS



Ya he dicho en la demanda que esas tres fracciones no tenían señaladas las líneas separatorias, ni accidentes naturales que las deslindaran, como V. S. puede observarlo fácilmente en los planos presentados.

La parte demandada no niega ese hecho, que tiene gran importancia, porque esa confusión de límites sirvió á Lagraña para obtener el desalojo de una fracción de campo, en razón de un permiso otorgado para ocupar otra fracción distinta.

Más que confusión: no había límites marcados ni determinados, y las referencias á esos distintos campos se hacían simplemente por los nombres de los arroyos ó parages, como es muy común hacerlo en todas partes en tales circunstancias.

En la Posición 4ª (fs. 343), el Sr. Javier Lagraña confiesa que es cierto que el campo cuya posesión se litiga, no tiene límites naturales por el Este y el Oeste.

Contestando á la pregunta 3ª del interrogatorio de mi parte, todos los testigos están de acuerdo al afirmar (dando razón satisfactoria de sus dichos) que el campo del Chañar era abierto, antes de 1884, desde la Estancia «Puntas» hasta una manga de palo á pique que está al Oeste del arroyo Pairirí; es decir, que no había cercos de ramas ni alambrados que lo dividiera.

Según puede V. S. calcular, examinando la escala del plano en el que se marca la ubicación de la Estancia «Puntas» y la del arroyo «Pairirí», esa distancia comprende más de 15 ki-



lómetros ó tres leguas; es decir, empieza desde más de dos kilómetros al Este de la línea divisoria de los campos «Puntas» y «San Luis», comprende éste, que tiene seis ó siete kilómetros de ancho, y llega, fuera de la línea del Oeste, hasta unos seis ó siete kilómetros más hacia el «Rincón».

Queda comprobado que toda esa extensión de campo formaba una sola zona.

¿Cuándo se construyeron los cercos divisorios?

El Sr. Lagraña, contestando la misma posición, dice: «el alambrado que lo separa de la propiedad de Labougle, fué construido por éste, en sociedad con el absolvente», y según el documento de f. 549, reconocido por el Dr. Labougle como referente á este alambrado, el Sr. Lagraña, que lo suscribe, decía, en Diciembre de 1886 «que él (Dr. Labougle) ha construido», lo que significa que ese alambrado se construyó por Labougle á fines de 1885 ó durante 1886.

(Digo ese alambrado, porque, desde fines de 1883, el Dr. Labougle había mandado alambradores que trabajaran en el campo, como resulta de su contestación á la pregunta 5ª de mi interrogatorio, pero construyeron primeramente otros alambrados, en otras direcciones, que no nos interesa, á los que no nos referimos al tratar este punto.)

En cuanto al alambrado divisorio del Oeste, que lo deslinda del «Rincón», el Sr. Lagraña, en la misma posición, dice que fué construido por los herederos de M. I. Lagraña, después del desalojo del Sr. Pozzi; es decir, después de Agosto de 1892.

Sin embargo, según lo referido en mi escrito de demanda, á cerca de lo manifestado por Lagraña, en el juicio de desalojo contra Pozzi, de que en 1889 se había empezado á construir



alambrados en el campo, resulta comprobado que tal alambrado se construyó en dicho año de 1889 y no con posterioridad á 1892.

Aún más: en el N° 14 del escrito de contestación á la demanda, se reconoce que Pozzi construyó ese cerco (que se dice no era un verdadero alambrado, sinó una enrramada) cuando entró á ocupar, se agrega, el campo cedido por Javier, etc., lo que, estando de acuerdo con la pregunta 7ª de los interrogatorios para los Dres. Gómez y Labougle y 9 del interrogatorio general, y teniendo presente que el permiso de referencia y la ocupación consiguiente de Pozzi fué á fines de 1883, comprueba suficientemente que ese alambrado ó enrramada, á que me refiero, divisorio del «San Luis» y «Rincón», fué construido recién en 1884.

La afirmación hecha por Javier Lagraña al contestar la posición 4, se halla contradicha por su contestación á la posición 20.

Mi objeto es simplemente dejar acreditado, como queda, que esas tres fracciones se confundían en una sola, no teniendo límites divisorios marcados antes de 1884, y que el cerco que deslinda «San Luis» de «Puntas» fué construido por Labougle y el que deslinda «San Luis» del «Rincón» no fué construido por los Lagraña sinó por Furnus, como resultará en breve observando la participación principal y dirigente que tenía en todos los hechos posteriores y anteriores allí realizados.

Fácilmente comprenderá V. S. cuál es el objeto de la comprobación de estos hechos.

En tales circunstancias, ¿cómo se designarían las distintas fracciones en 1883?

Los nombres de los arroyos ó parages ó poblaciones ó pobladores era lo único que servía de gufa, y las referencias no podían hacerse sinó



aproximadamente, porque sólo algunos parages tenían nombres y ninguno, límites conocidos y determinados, como más claramente lo observará en los detalles de las declaraciones de testigos.

VI.

POSESIÓN DEL «SAN LUIS»

Ya he repetido muchas veces, que el objeto del presente juicio es la posesión de la fracción situada al Oeste del campo «Puntas» y al Este del »Rincón», á la que Furnus llama «San Luis» y Lagraña, «Paniagua», y en donde se produjo en 1892 el lanzamiento que originó este pleito.

No siendo cuestión de nombres, éstos son indiferentes.

Lo que interesa es la determinación precisa del campo sobre cuya posesión se litiga, y la encontraremos, con toda exactitud, en las constancias del título de Furnus, al que se acompaña el plano, debidamente autorizado, que constata la mensura, el deslinde y el amojonamiento, practicados por el Agrimensor Carlevaro en el año 1884, así como las explicaciones y referencias correspondientes, en el testimonio de las diligencias respectivas: á todo lo cual se refiere la resolución del Gobierno, de fecha 17 de Julio de 1893, á que se ha hecho referencia, haciendo, por consiguiente, plena fé al respecto, aún como operación técnica, porque el Departamento Topográfico no hizo observación sino á la ubicación proyectada para el patriolengo resultante.

El mapa acompañado por la contraria señala también la ubicación de esos campos, así como la de los arroyos «Paniagua» y «Pairiri», á que



nos referimos, y aunque no contenga los detalles que da el Sr. Carlevaro, ni, por consiguiente, la exactitud de éste, basta la coincidencia en los lineamientos generales, sobre situación de los arroyos «Chañar» y «Pelado», línea de Labougle y arroyos citados, etc., etc.

Debo pasar en seguida á estudiar y determinar los actos, ejecutados en ese campo, que importen posesión y de parte de quién, haciendo el examen de todos los antecedentes traídos á colación, para comprobar con evidencia la posesión de Furnus.

A este efecto, debo empezar por hablar de la Sociedad Lagraña, Furnus y Pozzi, desde cuya disolución se ha hecho arrancar la posesión á probar, para dejar bien evidenciada la *posesión anual* anterior al despojo, que es la que funda la presente acción posesoria, y que no podrá menos de considerarse probada, si acredito la posesión de Furnus desde diez años antes, como en realidad la tuvo.

VII.

SOCIEDAD «LAGRAÑA, FURNUS Y POZZI»

A f. 229, corre agregado un ejemplar del contrato original, reconocido como auténtico por la parte demandada, en el otro sí de f. 260 vta.

De sus constancias, resulta:

a) que Manuel Ignacio Lagraña y Luis Furnus, como capitalistas y Carlos J. Pozzi, como industrial, constituyeron, en Mayo 11 de 1876, una sociedad para la procreación de ganado vacuno y lanar;

b) que los Sres. Lagraña y Furnus introdu-



jeron, como capital de cada uno 1500 vacas y 2000 ovejas:

c) que el Sr. Lagraña cedió el campo «Puntas del Chañar», para el establecimiento de la Estancia;

d) que el Sr. Furnus fué el administrador;

e) que el Sr. Pozzi fué el encargado del establecimiento, sujeto en todo á la dirección del socio administrador;

f) que las ganancias se dividían por partes iguales etc., etc.

Esto en cuanto á las condiciones y relaciones de los socios: pero, que la sociedad haya existido en realidad, se comprueba con las posiciones 5, 7, 12, etc., á Javier y el certificado de f. 250, aparte de que nadie lo ha negado.

Excuso, pues, insistir, dejando simplemente la constancia de lo que resulta acreditado en forma, para más tarde referirme á estos antecedentes.

VIII.

DÓNDE VIVÍAN LOS SOCIOS

Resulta igualmente comprobado en autos, por la posición 13, confesada por el Sr. Javier Lagraña y por varias otras referencias de testigos, que omito citar, que el señor Lagraña vivía continuamente en esta Capital, que D. Luis Furnus vivía siempre en la ciudad de Curuzú-Cuatiá y el Sr. Pozzi, en la Estancia.

Agregaré, sin embargo, que esto no quiere decir que D. Manuel Ignacio no hubiera ido algunas veces á la Estancia, así como lo ha hecho el Sr. Furnus, con más frecuencia por ser el administrador y estar más próximo, lo mismo que Pozzi continuamente venía á la ciudad.



Aun más, el Sr. Furnus, desde 1888 se retiró á vivir en esta capital, así como el Sr. Pozzi ya tenía casi siempre su familia en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, desde 1885 más ó menos.

Resulta también confesado (posición 12 de Javier) así como por otras declaraciones de testigos, que Pozzi era yerno de Furnus.

IX.

FURNUS OCUPABA «SAN LUIS» EN 1882

Este hecho importantísimo fué confesado categóricamente por la demandada, al contestar la posición 9, en la que se le preguntó si las haciendas de la sociedad (Lagraña, Furnus y Pozzi), establecida en el campo «Puntas», llegaban antes y durante el año 1882 hasta el arroyo «Paniagua», sobre cuya costa estaba el último puesto de la Estancia «Puntas», llamado «Chamorro», «contestó que era cierto y que llegaban las haciendas hasta «Paniagua», agregando que eso sucedía porque el Sr. Manuel I. Lagraña permitió, á la sociedad, ocupara esa parte del campo «Rincón del Chañar».

El hecho de que las haciendas comían hasta llegar al arroyo Paniagua, en esa época, está además acreditado con las declaraciones contestes y bien ilustradas de los testigos Sres. Puga, Valenzuela, Aguirre y Espíndola, al contestar la pregunta 5 del interrogatorio de mi parte.

Entre tanto, el agregado es completamente falso: no tiene ningún antecedente en que apoyarse.

Es un hecho completamente nuevo, recién invocado al contestarse la posición referida y no se halla comprobado en forma alguna.



Hay más: las constancias del contrato social, ya citado, se encargan de comprobar su inexactitud, porque su cláusula 3 acredita que el campo cedido por el Sr. Manuel Ignacio Lagraña, para la sociedad, era el conocido por «Puntas del Chañar» y jamás se ha hablado de permiso para ocupar parte del campo «Rincón», como dice el agregado.

Cuando se trató de la entrega del campo á Labougle, siempre se habló del campo «Puntas» y á él se han referido todos los actos tendentes á efectuar esa entrega, como lo veremos más claramente en el número siguiente.

Una prueba más de que es falso lo del permiso alegado ahora, para ocupar esa fracción de campo, antes y durante 1882, es la posición tercera y su contestación, en la que el absolvente cita como permiso, que niega la pregunta, el concedido á Pozzi por él, cuando se afirma, en otro lado, que esta cesión se hizo en el 2º semestre de 1883.

De modo que la demandada alega que se ocupó ese campo antes y durante el 82 con permiso dado á fines del 83.

Más adelante resultará que el permiso dado por Javier á Pozzi se refería á otro campo, y quedará en descubierto y bien comprobado, que esa fracción en litigio estuvo ocupada con haciendas de Furnus antes, durante el 82 y después, hasta 1892, sin que jamás Lagraña ni nadie haya dado permiso á ese efecto ni á Luis Furnus ni á sus herederos, inclusive su yerno Pozzi.

Los testigos citados han declarado, confirmando este hecho (pregunta 5ª), que en la Estancia «Puntas» había un rodeo llamado «Tagüé», que se paraba enfrente de la Estancia, que tenía como



3000 vacas y que comían en el campo comprendido entre los arroyos «Chañar». «Paniagua» y «Pelado».

También lo declara el Dr. Labougle, contestando la 8ª pregunta de Furnus.

Si V. S. observa en los planos, el campo «San Luis» tiene dos leguas. y tres mil vacas, para pacer con holgura en él. forzosamente tienen que extralimitarse: lo que es fácil comprender que así sucediera desde que no habían cercos que las encerraran en potreros.

Llamo, además, la atención de V. S. sobre el alcance de la confesión hecha; pues. el final de la pregunta dice también que sobre la costa del arroyo «Paniagua» estaba el último Puesto de la Estancia «Puntas», llamado «Chamorro», lo que por sí solo significa que allí habían haciendas. porque si nó. no habría Puesto.

En el plano de Carlevaro se señala y nombra el puesto «Chamorro»; en el de Sánchez. se indica simplemente su situación aproximada con un punto negro, pero se omite el nombre.

Puede V. S. observarlo y verá que está situado al Oeste del arroyo llamado «Paniagua» y muy próximo á la línea limítrofe del Oeste del San Luis.

Queda, así, plenamente comprobado en juicio, el hecho alegado por mi parte de que. en 1882, se ocupaba con haciendas esa fracción (llamada «San Luis») que va desde el campo «Puntas» hasta el arroyo «Paniagua» y aún algo más. supuesto que al otro lado, al Oeste de ese arroyo, estaba situado el puesto «Chamorro». que cuidaba esas haciendas, que á veces llegaban hasta el «Pairirí». porque era campo abierto y despoblado (V. la posición 2ª y su contestación y los planos).

También queda comprobado en juicio la false-



dad del hecho nuevo, recién invocado por Lagraña al absolver posiciones. de que Furnus ocupaba esa fracción de campo en virtud de permiso concedido por Lagraña.

Furnus la ocupó entonces y continuó ocupándola hasta 1892, fecha del despojo, y si la contraria cree que fué con su permiso ¿por qué es que en tan largo tiempo jamás le reclamaron la devolución de ese campo, como han debido hacerlo desde que «por el hecho de su denuncia. se erigía en usurpador», como dice la contraria. en el núm. 19 de su escrito de contestación á la demanda?

Este es el hecho material. la *ocupación efectiva* que he querido constatar, para comprobar en seguida que con ella *empieza* la *posesión* de Furnus, porque fué él quien tuvo el *ánimo*, porque siendo administrador de la Estancia «Puntas». dispuso la ocupación, aún con haciendas de la sociedad, de ese campo, que supo era fiscal, lo denunció en compra ese mismo año. compró la parte de Lagraña en esa Estancia. continuó ocupando esos campos un año más. se estableció definitivamente en él después del año. etc., etc., como veremos enseguida.

X

FURNUS DENUNCIÓ PATRIOLENGOS EN 1882

Según las constancias de los testimonios que constituyen los títulos de propiedad de los actores, don Luis Furnus otorgó poder á don Tomás Vedoya, con fecha 16 de Setiembre de 1882. para que solicitara la remensura del campo llamado «Chañar», de propiedad de don Manuel Ignacio



Lagraña y solicitara también en compra el patriolengo que resultare.

De acuerdo con esta autorización, el Sr. Vedoya formuló la denuncia, en Setiembre de 1882, en los términos consignados en el testimonio de referencia, la que dió como resultados inmediatos las operaciones practicadas por Scheffer del 7 al 17 de Agosto de 1883 y por el Sr. Carlevaro en 1884, quienes midieron, deslindaron, amojonaron y ubicaron los patriolengos resultantes, en ese mismo campo ocupado por Furnus y que se llama «San Luis» al que se refieren los títulos de propiedad exhibidos, otorgados por el Gobierno, que aceptó y aprobó la operación de Carlevaro, que coincidía con la de Scheffer en cuanto á la ubicación y deslinde de tres rumbos dados al patriolengo, porque Scheffer le daba como límite Oeste una línea que cruzaba á la altura del «Pairirí», es decir, creyó que habían cuatro leguas de campo fiscal en lugar de las dos á que redujo Carlevaro.

La parte de Lagraña, en los números 16 y siguientes de su escrito de contestación á la demanda, subrayando la palabra «ocupación» que encuentra usada en el escrito de denuncia del Sr. Vedoya, se enamora de ella y en el núm. 17, muy satisfecho consigna: «En ese escrito, pues, se reconoce que mis poderdantes ocupan todo el campo sin limitación alguna».

En ese mismo escrito se dice: existe un extenso campo denominado «Chañar» propiedad de los herederos del finado don M. I. Lagraña. Este campo es un gran rincón, limitado por los arroyos Chañar, Pelado y Barrancas y al Norte, que es su frente, linda con propiedad de la señora Flora L. de Labougle, ocupando los herederos de Lagraña toda la parte comprendida entre los expresados límites, como de propiedad».



Pero, Sr. Juez, una cosa es ocupar de palabra y otra es *ocupar de hecho*

Lagraña usaba lo primero y Furnus lo segundo.

Ya he dicho que Lagraña, propietario del «Rincón» (donde tenía su Estancia á seis leguas al Oeste de «Puntas» y con 5000 vacas más ó menos, en quince leguas de campo), se había apropiado y disponía del campo «Puntas», con el propósito de hacer suyo *todo el campo Chañar, desde el rincón hasta* el «Mocoretá», para alegar límites naturales y apropiarse los sobrantes fiscales allí encerrados.

¿Quién conocía en 1882 los límites fijos del campo «Rincón» ni los de «Puntas», cuando las diligencias de mensura de Caballero estaban guardadas en poder de Lagraña, desde Julio de 1858 (nota final de la diligencia de Caballero) hasta 1883, en que el Dr. Sánchez presenta su célebre y kilométrico escrito jurídico, sosteniendo aún que la venta era ad-corpus, así como también guardaba en su poder los títulos del campo «Puntas», recién dados á luz en 1883 (final de carta de Labougle á Furnus, que testimoniada corre á f. 513 vta.)?

¿Y quién no había *oído* decir antes de 1882 que esos campos del «Chañar», *desde el rincón hasta el* «Mocoretá» eran de Lagraña?

Observe V. S. las preguntas 2. 3. 6 y 7 del interrogatorio de f. 386 de Lagraña y las contestaciones de sus testigos y en especial las de los Sres. Arévalo, León Martínez y Guillermo Rodríguez (f. 388, 399 y 401) y se convencerá que los mismos Lagraña *hacían oír* semejantes cosas, que aun se afirman tercamente en las preguntas citadas.

¿Qué les importa á los extraños, á los no interesados directamente en el asunto, el conocer



ó no exactamente los límites precisos de esos campos?

Y aun teniendo interés en ello ¿cómo era posible conocerlos oyendo á los mismos interesados en ocultarlos?

Ni viendo los documentos referentes á esos campos, se los podía conocer, desde que, al hacerse la denuncia del hoy campo «Puntas», en 1856, ya se le daba como lindera la propiedad de Da. Rosalía Acosta de Lagraña (extracto hecho por Scheffer que encabeza sus diligencias de mensura).

Más tarde viene la del señor Caballero y vuelve á hablar de que ambos campos lindan.

Después se siguen, por once años, las gestiones de Furnus ante el Gobierno, con la intervención y oposición de Lagraña y estos insisten siempre en sostener que lindan ambos campos.

Se demanda á Pozzi ante el Juzgado de Paz en Febrero de 1889, se reitera la demanda ante el Juzgado Federal á fin del mismo año y siempre se insiste que el «Rincón» linda con «Puntas».

El Gobierno falla resolviendo en 1893 que existe, entre ambas propiedades, dos leguas de campo fiscal, que vende á Furnus, otorgándole los títulos de propiedad, y todavía en 1896 se pregunta por Lagraña y se insinúa á los testigos que lo afirmen, que el campo «Rincón» linda con el campo «Puntas»!

Dados estos antecedentes ¿puede afirmarse que las referencias hechas en 1882, por el Sr. Vedoya, en el escrito de denuncia, importan reconocer que ambos campos lindan?

Esto es tan absurdo que la contraria solo incidentalmente lo afirma, diciendo que sus poderdantes «ocupan todo el campo sin limitación alguna».



¿Qué limitación podría indicarse en 1882 cuando (queda probado) eran campos abiertos, sin cercos que los dividieran, desde la Estancia «Puntas» hasta más allá del «Pairiri»?

Era natural que se usaran las expresiones generales y la voz corriente entonces, que hacía oír que ambos campos lindaban.

Pero, el uso de esas expresiones jamás podría importar un reconocimiento, con los efectos atribuidos de contrario, desde que precisamente eran empleadas en una gestión cuyo *principal objeto* era la determinación del campo *fiscal*, cuya existencia se conocía, aunque se ignoraba su extensión.

Mal podría importar un reconocimiento, cuando en el escrito de Vedoya, se dice que Furnus «crece que dichos herederos ocupaban indebidamente una *gran zona* de campo *fiscal, entre los expresados límites*».

Su ubicación, en caso de confirmarse su existencia, forzosamente debía ser entre ambos campos, del lado donde no hubieran límites naturales, donde ya estaba *ocupado de hecho* por el Sr. Furnus, como resultó en Agosto de 1883, en que Scheffer ubicó, mensuró, deslindó y amojonó, como patriolengo resultante, esa fracción intermedia, así como lo repitió, fundado en más antecedentes científicos, el Sr. Carlevaro en 1884 y con la autoridad del Tribunal competente, lo resolvió, en 1893, el Excmo. Gobierno.

Si en 1882 Furnus *ocupaba de hecho* ese campo, que *linda* con el de «Puntas», *sin permiso* de Lagraña, y lo denunciaba como *fiscal*, diciendo su apoderado que Furnus, por reconocimientos privados que había hecho é informes que había recibido de personas competentes, creía que había, *dentro de los límites expresados*, que ocupaban los Lagraña como de propiedad, una gran área



de campo fiscal, es evidente que tales expresiones no podían significar otra cosa sinó que los Lagraña se atribuían la propiedad de esos campos fiscales; es decir, que siendo dueños del campo «Rincón», que se decía lindaba con el campo «Puntas», cuyos límites eran desconocidos, se consideraban propietarios de los excedentes que existían dentro de los límites dados á su propiedad.

Además, fíjese V. S. que el poder otorgado por Furnus, era para que pidiera la remensura del campo titulado «Chañar» de propiedad de Lagraña y solicitara en compra el patriolengo que resultare, sin determinar límites ni referirse á ocupación alguna, como le ha agregado su apoderado.

Además ¿qué puede importar para la contraria ese reconocimiento, que pretende encontrar en tales expresiones, en el caso de que fuera lógico así deducirlo, si queda ya comprobado, por confesión de parte y con declaraciones de testigos, libres de toda excepción, que antes y durante el año 1882, Furnus *ocupaba materialmente* ese campo, con tres mil vacas más ó menos y sin permiso de nadie?

En breve veremos que esta ocupación continuó por 10 años, *sin que jamás* Lagraña *reclamara* de Furnus la entrega de ese campo, aun cuando no podía gozar de sus simpatías ni consideraciones, quien había denunciado en compra los patriolengos que usurpaban desde tanto tiempo y mostró tanto empeño al sostener esa gestión durante diez años.

XI.

FURNUS COMPRÓ HACIENDAS DE LAGRAÑA EN 1882



Del certificado expedido por el Secretario Sr. Oderigo (f. 250) consta la liquidación de la Sociedad «Lagraña, Furnus y Pozzi», así como que el Sr. Javier Lagraña ofreció en venta los ganados (ovinos, no) al Sr. Furnus, quien los aceptó y abonó por ellos la suma de 15117,70 \$ oro.

El Sr. Lagraña, contestando las posiciones 5 y 23, reconoce ser cierto que vendió la referida hacienda al Sr. Luis Furnus.

¿En qué fecha se hizo la venta?

El Sr. Lagraña manifestó que no recordaba.

El certificado no la consigna, porque involuntariamente se ha omitido pedir lo necesario para acreditarla con toda exactitud.

Sin embargo, vamos á determinarla con otras constancias de autos.

En la pregunta 4, formulada por Furnus al Dr. Labougle, para que dijera si para facilitar la entrega que del campo tenían que hacerle los Lagraña, el Sr. Furnus les compró la parte de haciendas que les correspondía en la sociedad etc., contestó que supo que se había comprado esa hacienda, porque era público y notorio.

El Sr. Lagraña, contestando la posición 23, (primera repregunta) dijo que no recordaba si la venta fué antes ó después de entregado el campo á Labougle.

De la segunda parte del certificado del Sr. Oderico, resulta que por transacción de 26 de Agosto de 1882, la parte Lagraña se comprometió á entregar el campo «Puntas», donde estaba la sociedad, al Dr. Labougle, dentro de tres meses: es decir, antes del 26 de Noviembre de 1882.



De la pregunta y contestación 3 del Dr. Labougle, al interrogatorio de Furnus, resulta que él, entendiéndose con Furnus, le permitió estar en su campo «Puntas» un año más, hasta Octubre del 83 (contestación de 1 á 6) dando por recibido el campo, de parte de Lagraña, para cumplir la transacción de referencia.

Esto no está contradicho por las evasivas de Lagraña, al contestar las posiciones 6, 7 y 24 (segunda repregunta) que dada la naturaleza de la pregunta y la forma de la contestación deben tenerse por confesas.

Hay más: en el escrito de demanda se halla transcrito el recibo otorgado por el Sr. Javier Lagraña, referente á esa venta y fechado en Setiembre 22 de 1882 y si bien es cierto que omití su reconocimiento expreso, también es verdad que el silencio de la parte demandada, á su respecto, importa su reconocimiento presunto y mucho más cuando está confesada la verdad del hecho y lo que solo se busca averiguar es la fecha de la venta.

Dados estos antecedentes, y teniendo presente que la venta de las haciendas necesariamente ha debido ser anterior á la entrega, por parte de Lagraña, del campo «Puntas» al Dr. Labougle, debemos concluir que de autos resulta suficientemente acreditado que la venta hecha á Furnus de esas haciendas que correspondían á la sucesión de Lagraña, en la sociedad rural establecida en «Puntas del Chañar», fué hecha en Setiembre de 1882.

¿Qué cantidad de haciendas se compró?

Según el certificado del Sr. Oderigo, el Sr. Furnus pagó 15,117.708 \$ oro.

El precio por cabeza solo resulta del recibo transcrito en la demanda, á que acabo de referirme, donde se indica 6 y 3¼ \$ oro cada una.



Hecha la reducción da 2340 cabezas.

Luego, deduciendo las 1500 de capital, queda una ganancia de 740 cabezas, que es lo que correspondió también al socio industrial Sr. Pozzi, porque las ganancias se dividían por partes iguales entre los tres socios.

Con la compra hecha por Furnus, al otro socio capitalista, resultaba propietario de las 3000 cabezas introducidas como capital, por él y Lagraña, más dos partes de las ganancias; es decir, 1480 cabezas, que le hacían un total de 4480 animales vacunos.

Luego, desde Setiembre de 1882, la Estancia «Puntas» perteneció exclusivamente á los Sres. Furnus y Pozzi.

A Furnus le correspondían 4480 animales.

A Pozzi le correspondían 740 id.

Que hacían un total de 5220 animales vacunos, sin contar los ovinos, etc.

XII

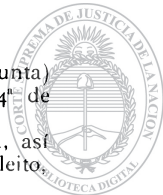
LAGRAÑA ENTREGA «PUNTAS» Á LABOUGLE

EN 1882

POR INTERMEDIO DE FURNUS

La consecuencia inmediata de la compra hecha por Furnus, era la entrega por Lagraña del campo «Puntas» á Labougle, porque fué el medio de facilitar dicha entrega, que tenía que hacerse necesariamente dentro de los tres meses designados en la transacción de 26 de Agosto de 1882.

El hecho de la entrega de ese campo de parte de Lagraña á Labougle es cierto, como lo reco-



noce tanto Lagraña (posición 5ª y 2ª repregunta) como el Dr. Labougle (pregunta 2ª, 3ª y 4ª de Furnus).

La duda está en la fecha de la entrega, así como la importancia, á los efectos de este pleito, en la forma de la misma entrega.

En cuanto á la fecha, es indudable que fué dentro de los tres meses de la transacción, es decir, antes del 26 de Noviembre de 1882.

Si observamos las preguntas 3ª y 6ª de Furnus con las contestaciones del Dr. Labougle, que declara que dió *un año* de plazo á Furnus, quien le entregó el campo en Octubre, evidentemente concluiremos que la entrega fué en Octubre, lo que también es verosímil, porque debió seguir á la venta de haciendas hecha por Lagraña á Furnus y que fué en Setiembre, según lo acabamos de ver.

¿En qué forma se hizo la entrega?

El Sr. Javier Lagraña, encargado por sus coherederos, en aquella época, para liquidar la sociedad referida, como la liquidó, y hacer entrega del campo al Dr. Labougle, interrogado á este respecto, en la posición 6ª, contestó que no podía precisar la fecha ni el año ni el plazo que dieron para la entrega.

Interrogado en la posición 7ª, si era cierto que la entrega no fué material y directa, sino que el Dr. Labougle se dió por recibido del campo en razón de haberse entendido con Luis Furnus, que acababa de comprar las haciendas, contestó que no recordaba.

Tratándose de un hecho que es personal al que absolvía posiciones y que dada su importancia no le era permitido no recordar cómo había hecho la entrega, mi parte formuló la 2ª repregunta para que dijera como era cierto que



no podía precisar la forma material en que hicieron la entrega del campo «Puntas» al Dr. Labougle, etc., y confesó el absolvente que no podía precisar la forma en que había sido entregado el campo.

Y esta forma la encontramos en la terminante declaración del Dr. Labougle, que, dada su intervención en esos hechos, hace plena fé, aparte de que se halla corroborada por otros antecedentes, que surgen de detalles de otros hechos acreditados en autos.

Con sus contestaciones afirmativas y categóricas á las preguntas 3ª y 7ª del interrogatorio de Furnus, el Dr. Labougle declara que para cumplir la transacción celebrada con Lagraña dió por recibido el campo de Lagraña y se entendió directamente con D. Luis Furnus, á quien permitió continuara ocupando ese campo «Puntas» con sus haciendas, un año más, al cabo del cual (en Octubre de 1883) el Sr. Furnus le entregó el campo (pregunta 6 de Furnus) que desde entonces ocupa él.

Véase también la contestación del testigo Sr. Puga, á la pregunta 15 del interrogatorio de Furnus.

Téngase también presente, que el silencio de la contraria, respecto de este hecho alegado en la demanda, según el artículo 100 inc. 1 del Código de Procedimientos, importa su reconocimiento.

Y más que todo, están las contestaciones evasivas del Sr. Lagraña y su confesión final de que no puede precisar la forma material en que hizo la entrega del campo.

Resumen: resulta comprobado en autos que, en Octubre de 1882, los señores Lagraña entregaron el campo «Puntas del Chañar», al



Dr. Labougle, por *intermedio* del Sr. Luis Furnus, que continuó ocupándolo con sus haciendas (inclusive las compradas á Lagraña) hasta un año después, Octubre de 1883.

XIII.

«PUNTAS», «SAN LUIS» Y «PAIRIRÍ» EN 1883.

Interrogado el Sr. Lagraña respecto al hecho de que Furnus, después de comprarle las haciendas, *continuó* en la misma Estancia «Puntas», dijo que no le constaba; negativa completamente falsa, desde que la entrega que hizo él á Labougle tenía el antecedente de la compra de haciendas y continuación de Furnus en esa Estancia, y mucho más cuando el Sr. Lagraña, para ir á su Estancia del «Rincón», donde va y está continuamente, tiene necesidad de pasar á distancia de 300 metros del edificio de la Estancia «Puntas», atravesando todo el campo de Labougle, después el «San Luis» (donde comía ese rodeo «Tagüe» del que dijo en la posición 8 que no recordaba) después el «Pairirí» etc., siguiendo el camino marcado con una línea roja en el plano de Sánchez, quien señala dos, no habiendo mas que uno.

A pesar de esta negativa, sobran elementos de prueba, que vamos á examinar, separando los referentes á cada uno de los tres campos ocupados por Furnus durante ese año (1883).

El Dr. Labougle, que recibió de Lagraña el campo «Puntas», en Octubre de 1882, siendo su propietario, declara al contestar las preguntas 3 y 7 del interrogatorio de mi parte, que es cierto que cedió á D. Luis Furnus la ocupación de su



campo por un año más y que se lo devolvió en Octubre del 83, permitiendo aún á Pozzi que estuviera unos meses más en un pedazo lindero al campo «Chañar».

El Sr. Puga, contestando á la pregunta 15 del interrogatorio general de Furnus, contestó que sabe, por referencias de Furnus y Labougle, que se entendieron directamente, y, en cuanto á la permanencia de las haciendas en la Estancia, porque ha presenciado y visto allí esas haciendas.

En el número siguiente, se comprobará, con otras declaraciones, que esas haciendas se trasladaron al «San Luis» cuando Furnus estableció su Estancia allí, lo que prueba que continuaron en «Puntas», después de la compra á Lagraña.

Es, además, de sentido común que así sucediera, porque 5220 vacas (fuera de yeguas, ovejas, etc. que habían) no se arrancan de una Estancia ya establecida, de un momento á otro, y lo natural es presumir que continuaban hasta que se *probara* que habían sido trasladadas.

Estos antecedentes hacen plena fé al respecto y mucho más cuando los Lagraña *no lo niegan*.

Y si Furnus *continuó* con todas las haciendas que constituían ese establecimiento, desde que compró la parte de Lagraña y no se separó de Pozzi hasta 1886 (como lo veremos), ocupando por un año más ese campo «Puntas», es de toda evidencia que también continuó la ocupación del campo lindero (San Luis) hasta el «Paniagua», como ya quedó comprobado que lo tenía desde antes y durante el año 1882 (IX).

Y más evidente resulta si se tiene presente que para desocupar el campo «Puntas», Furnus trasladó sus haciendas á ese campo «San Luis» y avanzó en su ocupación hasta llegar á «Pairiri».

Fíjese V. S. en la pregunta 5 de Furnus y



contestación del Dr. Labougle y verá cómo se hizo la entrega de ese campo.

Aun más: toda la defensa de Lagraña, respira, por todos sus poros, esa ocupación del San Luis, como que fué la base de las gestiones por desalojo contra Pozzi, si bien la atribuyen á éste, en virtud del permiso gratuito y no á Furnus.

Ya quedó probado que la ocupación de 1882, fué sin permiso, y como el alegado se data desde mediados del 83, tenemos entonces que Lagraña admite que la ocupación del «San Luis» («Paniagua» como ellos llaman) llegó hasta mediados de 1883 *sin permiso*.

Si fué Furnus ó Pozzi el ocupante irá aclarándose cada vez más.

Por el momento, ya tenemos que Furnus era el Administrador de la Estancia, bajo cuyas órdenes estaba su yerno y socio industrial Sr. Pozzi; que Furnus (no Pozzi) compró y abonó la parte que correspondió al otro socio capitalista, Sr. Lagraña; que en virtud de esta compra, Furnus tenía en Setiembre de 1882, en esa Estancia, 4480 animales vacunos (fuera de otros) y Pozzi sólo 740; que Furnus y no Pozzi se entendió directamente con el Dr. Labougle, quien permitió á Furnus continuara ocupando un año más su campo, con la misma Estancia allí existente; que mediante la intervención de Furnus, los Sres. Lagraña dieron por entregado el campo «Puntas» al Dr. Labougle en Octubre del 82; que Furnus denunció en compra, en Setiembre de ese año, los excedentes fiscales que existían en ese campo «Chañar»; que Furnus nunca pidió permiso á Lagraña para ocupar parte alguna de campo, etc., etc.

Y todo esto, Sr. Juez, eran hechos públicos y notorios, que constaban perfectamente á los Srs. Lagraña, por la intervención que tuvieron.

Continuemos:

Furnus, afirmé, ocupaba en 1883, con haciendas de su Establecimiento, el campo llamado «Poziri» que como ya quedó indicado, es el próximo al arroyo que lleva ese nombre y está señalado en los mapas, supuesto que en realidad no hay campo así llamado especialmente, sinó que, á falta de otro modo de designación, se emplean el de los arroyos.

Una sola pregunta y respuesta basta á acreditar este hecho.

La posición 11, formulada al Sr. Lagraña, dice: «diga como es cierto que desde el año 1883, durante 2 ó 3 años, las haciendas que tenía Pozzi en su Establecimiento, llegaban á pastar hasta el arroyo «Pairiri» y aun hasta la manga de palo á pique, único potrero que las detenía por ese lado.»

Contestó el absolvente Sr. Lagraña: «que es cierto que las haciendas del Sr. D. Carlos J. Pozzi, parte de ellas, *pastaban hasta el arroyo «Pairiri» durante el tiempo que el Sr. Pozzi ocupaba ese campo, por cesión gratuita del absolvente.*»

Y ¿qué más podemos exigir después que el absolvente no sólo confiesa que es cierto el hecho que se le pregunta, referente á la ocupación, sinó que agregar, estableciendo la verdad de ese tan costoso permiso gratuito, la confesión de que se refería á ese campo «Pairiri»?

Esta es la verdad pura, ocultada hasta ese momento en que se la confiesa desnuda y espontáneamente, después de causar tantos perjuicios, con sus maliciosas, absurdas é insistentes pretensiones, desde 1880 hasta la fecha.





Nada vale la enmienda que después se ha pretendido hacer en la posición 14, diciendo que el permiso se refería al campo que llegaba hasta el «Paniagua», porque la confesión hecha al contestar la posición 9 la contradice, y su resultante es aclarar más la verdad de la confesión contenida en la contestación á la posición 11, así como evidenciar la mala fé del proceder de la contraria, que, desde 1889, ha fundado en la mentira sus pretensiones, acreditadas y aducidas aún hoy en estos autos.

Es cierto, pues, que las haciendas del Establecimiento «San Luis», parte de las cuales pertenecía á Pozzi, (que continuó siendo socio de Furnus y viviendo en la Estancia y al frente de la misma) llegaban en ese año 1883 hasta el arroyo «Pairirí» y aún hasta la manga de palo á pique que está más al Oeste de ese arroyo.

Observando que el campo «San Luis» tiene solo dos leguas y que ese Establecimiento, en Setiembre de 1882 y por tanto en 1883, tenía 5220 animales vacunos, fuera de los yeguarizos y ovinos que existían, es evidente que se ocupaba más campo que el «San Luis», que era imposible contuviera el doble de haciendas de lo que es dable colocar.

Y como eran campos abiertos, es natural que los animales buscaran holgura aun sin permiso, y para comer á sus anchas iban, llegaban y pasaban el «Pairirí», cosa que lo hacían ya en 1882 (contestación de Espíndola á la 5 pregunta de Furnus) sin haber tantas apreturas, como para ellos hubieron en 1883, cuando se trasladaron á esos campos los que quedaron en «Puntas».

Y así lo hacían en 1882 por libertad y lo repetían en 1883 por necesidad.

Tales haciendas continuaron ocupando esos



campos, «San Luis» y el lindero hasta «Pairiri», con posterioridad á ese año, por dos ó tres más, hasta 1886 inclusive, como resulta confesado por Lagraña al contestar la posición 11; así como de las declaraciones de los testigos Puga, Valenzuela y Aguirre, al contestar la pregunta 9 de Furnus, resulta acreditada la continuación de la ocupación del «San Luis», por el Sr. Furnus, hasta 1892, cuya verdad la comprobaremos más en detalle, en otros números de este alegato, como pasamos á hacerlo.

XIV.

FURNUS TRASLADÓ HACIENDAS Y SE ESTABLECIÓ EN «SAN LUIS» EN 1883

El Dr. Labougle, contestando afirmativamente las preguntas 5, 6 y 9 de mi parte, declaró que el Sr. Furnus fué desocupando, en Agosto y Setiembre de 1883, el campo «Puntas del Chañar», al mismo tiempo que él lo iba ocupando con alambradores, haciendas etc., hasta Octubre siguiente, en que le entregó definitivamente el campo, que desocupó, replegando todas sus haciendas hacia el lado del «Rincón del Chañar» y estableció su Estancia en el campo contiguo al del declarante.

El mismo Sr. Javier Lagraña, contestando la posición 18, confiesa la verdad de este hecho, diciendo que le consta que se trasladaron las haciendas al campo lindero (que él llamaba «Panigua»), agregando, para no perder la costumbre, que fué por Pozzi y en razón de la cesión gratuita.

Confirman estas declaraciones las de los testigos Sres. Puga y Valenzuela, contestando á la pregunta 8 del interrogatorio de Furnus (f. 352),



La declaración de los testigos Puga y Aguirre, que dan razones satisfactorias de sus dichos, contestando la pregunta 7, comprueban también que esa Estancia de Furnus se llamó «San Luis», desde que se la estableció en ese campo, es decir desde 1883.

Los testigos Valenzuela y Espíndola declaran que no saben el año, pero dan á entender que sabían que así se llamaba, como sucede con otros testigos presentados por la parte de Lagraña y que excuso citar por la poca importancia del punto, porque no es cuestión de nombres, al menos del «San Luis», porque sí, lo es, respecto del «Paniagua».

El Sr. Lagraña, al contestar la posición 19, afirma que Pozzi construyó una población (en el campo lindero á «Puntas», cuando el absolvente le prestó (dice) esa fracción de campo en 1883).

Las declaraciones de los testigos Puga, Valenzuela y Aguirre, contestando las preguntas 10, 11, 12 y 13 del interrogatorio de mi parte, prueban que Luis Furnus en persona andaba dirigiendo los trabajos para la construcción de la población, corrales, etc. ordenando y disponiendo todo, porque era considerado y obedecido como patrón principal, así como hacía las ventas de haciendas, compra de suministros, enseres y útiles para el Establecimiento.

Nada de extraño tiene esto, si se considera que Pozzi era su yerno, tratado siempre al igual que sus hijos, su socio, que le reconocía su carácter de administrador, tanto por su mayor capital social, cuanto por su edad, su parentesco, su mayor experiencia, su genio comercial etc. etc.

Observe V. S. que el testigo Aguirre manifestó que, por lo que ha visto allí, creía que Pozzi solo era mayordomo y consideraba á Furnus como patrón (pregunta 12).



Teniendo presentes los demás hechos, ya examinados y comprobados, cuyo resumen he hecho en el número anterior, hablando de si el ocupante era Pozzi ó resultaba ser Furnus, podemos dar por terminado este punto, porque ya está evidenciado que quien trasladó las haciendas era su propietario, el Sr. Furnus; quien devolvió el campo á Labougle, al mismo tiempo que estableció su Estancia en «San Luís.» aun que Pozzi corriera más de cerca con todo ello, en razón de que era el encargado inmediato de la Estancia y vivía allí.

Pasemos á otros hechos sucedidos ese mismo año y que precedieron inmediatamente á la traslación y establecimiento definitivo de Furnus en el «San Luis.»

XV.

EL PERMISO GRATUITO DE 1883

He dicho en la demanda que «procurando los medios de cumplir con el Dr. Labougle, para entregarle su campo antes que ese año terminara (1883) y no encontrando otro donde introducir el exceso de haciendas que ya no cabían en «San Luis». Pozzi se dirigió á la Sra. de Lagraña, solicitando le cediera, de su campo «Rincón del Chañar.» la fracción baldía lindera á «San Luis.» etcétera.

La prueba de la verdad de tal hecho, resulta de todo lo alegado por Lagraña desde 1880, porque se basan exclusivamente en tal circunstancia, tanto en sus gestiones contra Pozzi, como en su defensa actual.

Pero, siendo éste el punto capital y esencial



de esta cuestión, al menos en orden á la defensa que hace la contraparte, necesito hablar poco y concretar mucho, porque, en este caso, la contraria ha practicado aquello de *á río revuelto ganancia de pescadores*.

La prueba del hecho la tenemos en concreto en la carta de f. 10, suscrita por la señora de Lagraña y reconocida á f.26o.

Ella acredita que en 4 de Junio de 1883, dicha señora escribía á Pozzi, diciéndole «con respecto al pedido que V. me hace de *ocupar el Pairiri*, prestado ó arrendado»... que no le era posible.

Agregué que posteriormente Pozzi se había dirigido en igual sentido á Javier, quien le concedió el permiso.

En efecto, en la posición 11, este señor confesó categóricamente que su permiso se refería al «Pairiri» (se entiende al campo que llega hasta ese arroyo) hasta donde pastaban las haciendas en esa época.

Y si alguna duda queda, se desvanece observando la fecha y el contenido de la carta á que se refieren las últimas posiciones, de la que resulta que en 3 de Julio de 1883, Javier Lagraña le dice á Pozzi: «Hablé con Manuel respecto al arrendamiento del campo y me contestó lo mismo que te contestó mamá... Pero, como ya te dije aquí, por un año estate tranquilo no más, que nadie te ha de molestar.»

Esto que está de acuerdo con las constancias de la carta de la señora de Lagraña y con la confesión hecha al contestar la posición 11, contradice la contestación á la posición 14, en la que atribuye el permiso al «San Luis,» y niega que supiera entonces la negativa de la madre y en cuyo contenido debe darse, en consecuencia,



por confeso el Sr. Lagraña, pues la falsedad de su contestación es manifiesta.

¿Puede exigirse prueba más fehaciente para acreditar que el permiso concedido por Lagraña á Pozzi se refería al campo que está sobre el arroyo «Pairiri» y no al que está sobre la línea de Labougle?

Este campo contiguo al de Labougle estaba ocupado por Furnus, sin permiso alguno, desde antes y durante el año 1882 y continuó ocupándolo con las mismas haciendas, durante el año otorgado por Labougle, y se estableció allí, trasladando paulatinamente el Establecimiento, durante ese año, y ¿á qué título, con qué objeto iba entonces á pedir autorización á Lagraña, para ocupar lo que tenía ocupado desde años atrás, sin pedirles permiso ni reconocerles la propiedad, supuesto que desde Setiembre de 1882 lo había denunciado como patriolengo y lo había solicitado en compra.

Observe V. S. los testimonios que constituyen el título de propiedad de Furnus y verá que en Octubre de 1882, el Gobierno resuelve: aceptar la denuncia y ordena se proceda, *previo saneamiento de la propiedad* «Chañar» de Lagraña á la mensura, deslinde y amojonamiento de los patriolengos *adyacentes*, comisionando al efecto al Delineador del Departamento Topográfico, que lo era el Sr. Scheffer.

Examine ahora V. S. los testimonios presentados por la parte de Lagraña y que corren de f. 508 y encontrará: la comunicación de Scheffer á la señora de Lagraña, la contestación de ésta y otra del Sr. Sánchez (apoderado de dicha señora desde Octubre del 82) en el mes de Febrero de 1883: la notificación hecha, respecto de la remensura á practicarse, á la misma señora,



en Marzo del 83; un escrito de Sánchez, oponiéndose á la denuncia; otro escrito de Abril 21 del 83 ofreciendo dar cumplimiento al decreto que ordena la exhibición de los títulos del «Rincón», á los efectos de la mensura, y la vista del Fiscal en Julio 5 de 1883.

Se nota acá que la parte de Lagraña omitió pedir testimonio del auto que recayó en esta petición; pero, salvemos la omisión, volviendo á los títulos de Furnus.

En éstos, á continuación del último testimonio que estábamos viendo, viene otro de la resolución del Gobierno, de fecha Julio 26 de 1883, que dice al final: «Se resuelve: No ha lugar á lo solicitado por la parte de los herederos de don Manuel Ignacio Lagraña á f. 33 y cúmplase la resolución de 31 de Octubre de 1882; dirijase oficio al Sr. Juez de 1^a Instancia, solicitando los títulos de propiedad del «Rincón del Chañar» *ad effectum-vivendi*, para que el agrimensor haga el extracto de los títulos, en lo pertinente para la mensura, etc.

A continuación está el testimonio de las diligencias del Sr. Scheffer, que acredita que empezó sus operaciones el 7 de Agosto del 83 y las concluyó el 17 del mismo mes, consignando, al final de ellas, las razones que tuvo para proyectar la ubicación del patriolengo resultante, allí donde lo deslindó, expresando que «el denunciante hace cerca de siete años, ha poblado en la parte de afuera, que linda actualmente en el campo de la señora de Labougle y en donde tiene su hacienda aquerenciada hace tiempo.»

Y, en tales circunstancias ¿era lógico pensar que Furnus ó su socio Pozzi, recabaran de Lagraña el permiso para ocupar ese campo comprendido entre la línea de Labougle y el arroyo «Paniagua»?



Basta pensar que este campo no tiene sino dos leguas y que en esa oportunidad había allí 5.220 vacas y por lo menos 2.000 ovejas, á que se refiere el contrato social y algunos yeguarizos más, indispensables para el funcionamiento de la Estancia, para comprender que el permiso citado tenía que referirse necesariamente á la fracción contigua, que llega hasta el «Pairirí» ó manga de palo á pique, situada algo más allá, campo completamente despoblado y baldío, porque los Lagraña no tenían en su Estancia «Rincón,» que dista seis leguas y que la constituyen como quince leguas de campo, más de 5.000 vacas.

Era materialmente imposible que el campo «San Luis» contuviera esa cantidad de haciendas, así como tampoco era posible impedir que fueran á pastar hasta el «Pairirí», desde que no había límites naturales ó artificiales, que separaran ambas fracciones de campo.

De hecho, las haciendas, comprimidas en San Luis, iban hasta el Pairirí sin pedir permiso á nadie y aún contra la voluntad de sus dueños, que las recogían frecuentemente.

De los mismos términos que usa el Sr. Javier Lagraña, en la carta reconocida últimamente: «estate tranquilo no más que nadie te ha de molestar», se comprende perfectamente que *de hecho* ya se ocupaba ese campo.

El objeto del permiso no podía ser otro sino regularizar la ocupación forzosa, que se hacía de esa fracción de campo, que se reconocía era propiedad de Lagraña.

Por consiguiente, dadas las circunstancias de hecho, que dejo bien comprobadas, tales como la ocupación en 1882, la denuncia, su tramitación y la mensura, la entrega del campo á Labou-



gle, la traslación del Establecimiento al «San Luis,» la extensión del campo, el número de haciendas, etc.; la confesión hecha en la posición undécima, la carta de la señora de Lagraña y las últimas posiciones del Sr. Javier, no pueden dejar la menor duda de que el permiso gratuito, tantas veces invocado, se refirió al campo bañado por el arroyo «Pairirí.»

Sin embargo, la parte Lagraña sostiene, desde 1889, que dicho permiso no se refirió al campo comprendido entre el «Paniagua» y el «Pairirí,» sinó entre el «Paniagua» y la línea de Labougle.

Para poder apreciar con mayor exactitud el verdadero significado de los términos usados por las partes, me he propuesto seguir, en lo posible, el orden cronológico, para ir determinando dicho significado, con relación á todas las circunstancias, que rodeaban los actos á que ellos se referían.

Por esto, dejaré para tratar en su lugar oportuno lo referente á ese cambio que pretenden hacer los señores Lagraña desde 1889, sobre ambas fracciones de campo.

Cambio que han conseguido hacerlo con eficacia ante el Juzgado Federal de Corrientes, prevalecido de la mala defensa hecha por la parte de Pozzi, en razón de la creencia de que bastaba tener derecho evidente para impedir que se dictaran sentencias que los negaran ciegamente.

Así como el Dr. Sánchez en 1883, presentó un enorme escrito sosteniendo doctrinas jurídicas incubadas para uso personal de su cliente en 1862, cuando las circunstancias eran radicalmente opuestas, así también el mismo Dr. Sánchez, patrocinando á la misma parte Lagraña y con el mismo objeto de apropiarse campo ajeno, sostiene desde 1889, que el permiso dado para ocupar un campo es bueno para hacer desocupar otro.



Y como debe correr en esta ocasión la misma suerte que en la primera, á pesar del triunfo transitorio que ha podido conseguir, mediante ciertas circunstancias favorables, voy á colocar cada cosa en su lugar, para hacer la luz, consultando la oportunidad, que tanto rehuye en esta cuestión la contraria, porque comprende que sus locas pretensiones sólo han podido prevalecer entre gallos y media noche.

Dejando, así, correr las cosas, como queda consignado, sin otra novedad, durante el año 1883 y parte del 84, que la discusión consiguiente en el expediente de denuncia, en que el Departamento Topográfico se expide en contra de la ubicación proyectada por el Sr. Scheffer, pasemos á ver lo que sucedió en este año (1884), que tenga referencia con la posesión que se discute.

XVI.

MENSURA DE CARLEVARO

EN 1884

Durante este año, los señores Furnus y Pozzi continúan tranquilamente establecidos en la Estancia «San Luis,» ocupando, con sus haciendas, todo el campo comprendido desde la línea de Labougle hasta el arroyo «Pairiri» ó manga de palo á pique, ya citada, como el único cerco que detenía los animales por ese lado (posición 11 á Javier.)

En ese año, el único acto notable de posesión, que hay que agregar á los ejecutados por el señor Furnus, es la operación de mensura, deslinde y *amojonamiento* practicada por el agrimensor



Carlevaro, á su solicitud y costa y por mandato del Gobierno, en razón de la denuncia que tenía interpuesta y de las observaciones hechas por el Departamento Topográfico á la mensura del Sr. Scheffer.

La parte de Lagraña, ha exhibido los testimonios corrientes á f. 531 vta. y siguientes que acreditan las citaciones hechas por el señor agrimensor.

En los títulos de Furnus, corre el testimonio íntegro de todas las operaciones practicadas por el Sr. Carlevaro, en el mes de Noviembre de dicho año.

Me refiero á sus constancias, así como á la protesta formulada por el Sr. Javier Lagraña en 3o de Diciembre de ese año, en la ciudad de Curuzú-Cuatiá (cuyo testimonio ha exhibido á f. 532) que acreditan la realización de tal operación, cuya importancia, como acto posesorio, haré resaltar más adelante.

Desde ya quiero hacer notar á V. S. dos circunstancias:

1ª La ausencia de la realización de actos posesorios, de parte de Lagraña, sobre esa fracción de campo.

2ª El conocimiento, que ellos han tenido de toda esa intervención de Furnus, en todos los hechos que quedan estudiados.

El Sr. Lagraña, queriendo quizá confirmar lo manifestado por el Dr. Labougle, al contestar la séptima pregunta formulada por Furnus, de que ellos habían cortado maderas en 1883, dijo, en su contestación á la posición 16, que habían hecho cortar en 1883 y que han seguido cortando hasta hoy.

Pero, la falsedad de su declaración quedó en el acto descubierta al contestar la segunda parte de la misma posición, en la que confesó que no



podía precisar ni la clase de madera ni la fecha, ni quién cortó.

Y tan falsa era esta su afirmación, que, contestando la posición 15, no había podido invocar otro acto de posesión que la construcción del alambrado divisorio del campo «Puntas», sin hablar de los cortes de maderas que dijo después que siempre había hecho.

Bien dicen, Sr. Juez, que para sostener una mentira se necesita de ciento, y, así, para indicar siquiera un acto de posesión, tuvo, el señor Lagraña, que afirmar falsamente que ese alambrado lo hicieron construir en sociedad con el doctor Labougle, cuando, en el pagaré agregado á f. 549, exhibido al formular á éste la 9ª pregunta y que se halla suscrito por el mismo absolvente, se dice que pagará al Dr. Labougle cantidad de pesos, importe de la medianería que le corresponde abonar «por el cerco de alambre que él ha construído.»

Pasemos á otro año, ya que en éste nada más sucede.

XVII.

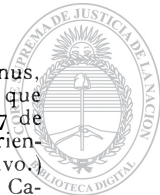
INVENTARIO DE BIENES

EN 1885

Como en el anterior, también en este año continúa la ocupación tranquila por Furnus y Pozzi de esos mismos campos.

Y lejos de que esta posesión sea interrumpida, un nuevo suceso viene á hacérsola recordar durante este año.

Con motivo del fallecimiento de la señora Cás-



tula G. de Furnus, esposa de don Luis Furnus, se practicó el inventario *judicial* de los bienes que correspondían á dicha sucesión, con fecha 7 de Octubre, como consta en los testimonios corrientes á f. 3o3, é hijuela de f. 74 (Emb. preventivo).

De los primeros, resulta que el Escribano Capará, juntamente con los tasadores Insaurrealde y Cáceres, inventariaron, con respecto al Establecimiento del Chañar, los siguientes bienes muebles: 138 chapas zinc, 3 puertas, 2 ventanas, 33 tigras, etc. y como semovientes: 38o6 vacas de cría. 7oo novillos, 25oo ovejas, bueyes, caballos, etc.

De la hijuela, fs. 74, resulta que se adjudicaron al cónyuge supérstite, Sr. Furnus, un rancho ubicado en ese campo del Chañar, muebles y las haciendas que se detallan.

Se observa (y la contraria subraya de punzón. el párrafo pertinente del certificado por él exhibido) que en la adjudicación aparece un *rancho* «no obstante no estar expresamente inventariado».

Del mismo certificado, resulta que el tal rancho estaba implícitamente inventariado. y creo que eso basta, porque lo que interesa es su existencia en el haber de la sucesión referida.

Indudable es que la palabra «rancho» no aparece en el inventario; pero, ¿no están expresadas cuántas puertas, ventanas, tigras, chapas de zinc, etc. tenía?

Lo que interesa á mi parte es simplemente la constancia de que, en ese campo «San Luis», existían, en ese año 1885, los bienes muebles y semovientes que se detallan, como de pertenencia de Furnus: es decir, en ese momento, de la sucesión de la Sra. de Furnus, que se liquidaba judicialmente.

También interesa consignar la fecha en que se aprobó la cuenta particionaria y de adjudica-



ción, 26 de Octubre de 1886, porque entonces terminó, como era natural, la sociedad que allí, en esa Estancia «San Luis», tenía Furnus con Pozzi.

Después de la liquidación, Furnus quedó, pues, con las haciendas, muebles y rancho existentes en ese campo y que le fueron adjudicados, según consta en la citada hijuela.

Quizá si hubieran puesto el rancho como inmueble, se prestara á menos observaciones; pero, como se discutía respecto al campo fiscal en que estaba construído, lo más propio es que hicieran lo que han hecho: detallar los materiales que valían algo.

Observe V. S. el número de haciendas allí existentes, y eso, que el certificado sólo consigna las de pertenencia de la sucesión de la Sra. de Furnus, y es fácil comprender que se continuaba ocupando siempre más campo que las dos leguas que tiene el «San Luis».

Durante este año tampoco Lagraña hace acto alguno que importe posesión.

Ni chista siquiera!

XVIII

CARTA DE POZZI AL DOCTOR GÓMEZ

EN 1886

Los primeros meses de este año trascurrieron sin novedad alguna que afectara ni en pro ni en contra la ocupación, que tranquilamente continuaban, de los mismos campos referidos, los propietarios del Establecimiento «San Luis».

Sólo en 19 de Junio el Dr. Gómez se dirige al



Sr. Pozzi pidiéndole desocupara el campo que le había cedido el Sr. Javier Lagraña, en razón de haberlo él arrendado.

Pozzi le contesta, en Junio 24 de 1886, en los términos que consigna el testimonio corriente á fs. 182.

Mucha importancia da la parte Lagraña á dicha carta, como que sostiene que en ella Pozzi se reconoce ocupante, por permiso de Javier, del campo que se le reclamó en 1889.

Pregunto: ¿á qué campo se refería esa carta escrita en 1886?

Observando sus términos, resulta claro que se refiere á la parte del campo, *cedido* por Lagraña y ocupado con haciendas de la sociedad, cuya liquidación estaba aún pendiente del Tribunal de Goya.

Para darle su verdadero significado y precisar su alcance, debe tenerse presente, que, según lo ya examinado, la Estancia de Furnus y Pozzi ocupaba *dos* fracciones: la una, desde la línea de Labougle hasta el «Paniagua», ocupada antes y durante 1882, sin permiso de nadie, y la otra, desde el «Paniagua» hasta el «Pairirí», ocupada desde 1883, en adelante, pero con autorización del Sr. Lagraña recién desde Julio del 83, y que la liquidación (que empezó con la muerte de la señora de Furnus, en Enero 31 de 1885) de esa sociedad, se terminó recién en Octubre de 1886 y, por tanto, estaba aun pendiente, como refiere la carta, en el mes de Junio de su fecha.

Ahora, cuál era, en 1886, «la parte del campo que el Sr. Lagraña me tiene cedido» como dice Pozzi.

Solamente careciendo de sentido común, ignorando el significado de los vocablos ó prescindiendo de la mente del que los usa, podría afirmarse



que el Sr. Pozzi, al escribir esa carta, se refería á la parte del campo linderá á Labougle, y que no fué cedida por Lagraña, ni por nadie.

¿Cómo podía referirse Pozzi á esta fracción, en su carta escrita en 1886, cuando existía la denuncia de Furnus desde 1882, las mensuras de 1883 y 1884, el inventario judicial de los bienes de su esposa en 1885, y su intervención directa con Labougle y aun con los mismos Lagraña, á quienes compró sus haciendas, con las mismas que luego se estableció en ese campo, poniendo su nombre á la Estancia?

Aun cuando Pozzi, en realidad, se hubiera referido á esa fracción linderá á Labougle, nada significaría, porque en nada podría afectar los derechos de Furnus, para cuya disposición no estaba facultado.

Pero basta leer donde dice *cedido*, para concluir que se refería al «Pairirí,» cuya ocupación cedió Javier, y no al «San Luis,» á cuyo respecto jamás se le hizo el honor de pedirle permiso para ocuparlo, como ya queda probado hasta la evidencia en el Capítulo XV.

En la carta se dice también que el campo cedido fué posteriormente arrendado al Dr. Gómez: pero, es evidente que con ello Pozzi sólo hacía alusión á referencias del mismo Dr. Gómez.

¿Sabía Pozzi entonces cuál era el campo arrendado al Dr. Gómez?

Ni aun hoy, Sr. Juez, es posible averiguarlo!

El Sr. Javier Lagraña, contestando la primera posición, para relacionar el campo cedido con el arrendado, dijo que era la fracción comprendida dentro de los límites de Labougle y el arroyo «Paniagua:» quiere decir: exclusivamente el «San Luis.» que, según las diligencias de mensura, tiene *dos* leguas y un pequeño pico.



De acuerdo con esta declaración, están formuladas las preguntas 6 y 8 para los Dres. Gómez y Labougle y 8 del interrogatorio general.

Según esto, lo reclamado en 1886, y á que se refiere la carta de Pozzi, ya citada, es la fracción comprendida entre la línea de Labougle y el «Paniagua.»

Y ¿cómo se explica que ocupando Pozzi en 1886 hasta el «Pairirí,» que hacía un total de *cuatro* leguas más ó menos, no se le reclamaba la fracción comprendida entre el «Paniagua» y el «Pairirí» y sí, la otra lindera al campo «Puntas?»

La explicación de esto la encuentra V. S. en un anacronismo en que inocentemente ha incurrido la contraria!

Las mismas armas (el permiso gratuito) que se hicieron valer en 1886 para que Pozzi desocupara el «Pairirí,» se han hecho lucir en 1889 para conseguir el desalojo del «San Luis.» Se cobró dos veces una sola deuda. En la primera el pago fué voluntario, en la segunda, violento.

Pero hay más: el Dr. Gómez contradice á este respecto al Sr. Javier Lagraña y también á sí mismo.

Contestando la pregunta 6, formulada por Lagraña, afirma haber arrendado á la señora viuda de Lagraña una fracción del campo «Chañar.» que *comprendía* la parte que ocupaba Pozzi; lo que, en castellano, quiere decir que lo que ocupaba Pozzi era una parte de la fracción del campo que arrendó, ó, más claro, que la fracción arrendada era *mayor* que la ocupada por Pozzi.

Contestando después la primera pregunta formulada por Furnus, dice que «realizó un contrato de arrendamiento con la señora Florentina C. de Lagraña, de la fracción de campo que ocupaba Pozzi»; es decir, *igual*.



Contestando á la séptima pregunta del mismo interrogatorio agrega: «ateniéndome solamente á mis recuerdos. puedo decir que eran tres leguas»: es decir, *menor* que la ocupada entonces por Pozzi, que alcanzaba á cuatro leguas.

Por consiguiente, según Lagraña eran dos leguas y según el Dr. Gómez, el arrendatario, eran cinco, cuatro y tres; pero nó dos!!

¿Cómo se escribirá la verdad en la historia, señor Juez?

Así como se escribió la sentencia que ordenó el despojo!, podría ocurrirsele contestar á cualquiera que supiera que en aquel juicio habían prestado declaración. á solicitud de Lagraña, el testigo anterior y el siguiente, señor Acuña, quien, respondiendo á las repreguntas 7. 8 y 9 formuladas por Furnus, dice que el arrendamiento de referencia fué en 1884 (de las preguntas 8 y 10 de Lagraña á Gómez, consta que fué en 1886) que cree era de tres á cuatro leguas. que era expresamente el campo que ocupaba Pozzi, cuya extensión no le consta. pero que se referiría al permiso de Lagraña, que, á su vez. se referiría al ocupado por Pozzi, que se refería al arrendado por Gómez ,etc.. etc....!

Si á este *mare magnum*. agregamos lo confesado por Javier Lagraña, al contestar la posición 11 de que su permiso llegaba hasta el Pairirí. lo afirmado en las posiciones 14 y 15 de que sólo eran las dos leguas que llegan hasta el Pania-gua. y lo aseverado en la posición 9 de que fué su señor padre quien permitió la ocupación de este campo. forzosamente convendrá V. S. en que ni ellos mismos se entienden.

Tal es el revoltijo que hicieron triunfar en Corrientes, señor Juez. á fin de sacar como ganancia del pescador, unas leguitas de campo fiscal!



Por suerte, sobran otros elementos de prueba, que harán la luz empañada un momento con tanta falsedad. dicha tan categóricamente.

Pasemos á otra cosa más seria.

XIX

«PAIRIRÍ» SE DESOCUPÓ AL EMPEZAR 1887

Como ya quedó observado en el capítulo XVII, el número de animales que se inventariaron en San Luis en 1885, como pertenecientes á la sucesión de la señora de Furnus, era excesivo para que dicho campo pudiera contenerlos, siendo forzosa aún entonces la ocupación del contíguo hasta el Pairirí.

Esta ocupación continuó durante el 86, como nadie la ha negado y aun la reconoce el señor Lagraña en la posición 11, y se comprueba también, como ya queda explicado, con las cartas cambiadas entre Pozzi y Gómez, de las que resulta que en Junio, Pozzi casi hacía depender la desocupación de ese campo, de la liquidación de la sociedad que allí tenía con la sucesión Furnus.

Ya se ha visto que esta sucesión se liquidó, en Octubre de ese año, con la aprobación de la cuenta de división y adjudicación formulada por el doctor Martínez.

Entre los bienes pertenecientes á la sucesión de la señora de Furnus, figuraba un campo en el Sauce, á que se refiere la pregunta 11 de Lagraña.

Con la liquidación referida, que lo era también de la sociedad rural con Pozzi, resultó adjudicado el campo del Sauce á cuatro herederos, en las cuatro fracciones que consigna el plano de Sánchez, que V. S. puede observarlo y que lle-



van los nombres de José Furnus (la adjudicada á José Luis Furnus), Cayetano Furnus, Luisa Pozzi, (la adjudicada á María Luisa Furnus, casada con Adolfo A. Pozzi) y José Pozzi, (la adjudicada á Maria Inés Furnus, casada con Carlos J. Pozzi).

Con esta adjudicación hecha á favor de la esposa de D. Carlos J. Pozzi y la compra que en esa oportunidad hizo éste del campó señalado en el plano de Sánchez con el nombre «F. de Barrientos» lindante al Norte con el campo Rincón, arroyo Pelado de por medio y á que se refiere el testigo Samuel Acuña, al contestar la séptima repregunta de mi parte, Pozzi pudo trasladar todas las haciendas que le correspondieron en esa liquidación, tanto de la sociedad como de algunas adjudicadas á su esposa, á dichos campos, donde estableció las dos Estancias que conserva hasta hoy.

Como esa traslación no se hace en un día, es evidente que, mientras vinieron los testimonios de Goya, se mandaron deslindar las fracciones con el Agrimensor, se hicieron los preparativos necesarios para todo Establecimiento de esa clase, pasaron algunos pocos meses y con ellos los dos últimos que quedaban del año 1886, desocupándose efectivamente la fracción referida, del Panigua al Pairirí, en los primeros meses del año 1887.

Como nadie ha negado este hecho, afirmado en la demanda, ni se ha vuelto á pretender jamás por Lagraña que tal campo se ocupara después por Pozzi ó Furnus, es excusado que insista sobre esta circunstancia de que esa fracción fué desocupada totalmente en los primeros meses del año 87.

El Sr. Lagraña confiesa, en su contestación á la posición 11, que las haciendas pastaban hasta



el Pairirí, *durante* el tiempo que Pozzi ocupaba ese campo por cesión gratuita del absolvente.

Ese permiso, según la misma posición, que habla de 2 ó 3 años, y las cartas cambiadas con Gómez, que acusan que, en Junio del 86, se hablaba de algunos meses más para desocupar, es evidente que comprendía dicho año de 1886 y aún, probablemente, algunos pocos meses de 1887: lo que coincide con el tiempo materialmente necesario para hacer las traslaciones referidas, después de las adjudicaciones de Octubre, ya citadas.

Luego, no puede haber duda de que el campo comprendido entre el Paniagua y el Pairirí se desocupó en los primeros meses de 1887.

XX.

AÑOS 1887 Y 1888.

Lagraña guarda silencio absoluto durante estos dos años íntegros, en lo referente á la cuestión sub-judice. Luis Furnus, entre tanto, ya solo, continúa tranquilamente la posesión de San Luis, ocupándolo con las haciendas que se le adjudicaron en la testamentaria de su esposa y que, según la hijuela agregada á fs. 74. (Emb. prevent) eran 1768 animales vacunos, 78 yeguas, 2207 ovejas, muebles, carros, el «rancho», etc., etc.; es decir, el plantel íntegro de la Estancia, con rancho, muebles y animales más que suficientes para ocupar toda la fracción llamada San Luis.

Esta ocupación, durante esos años, lejos de negarse, la contraria la confirma con su actitud posterior; pues los señores Lagraña, hacen



incapie en que el que lo ocupaba (diciendo era Pozzi) se negaba á entregarlo, lo que significa reconocer que ellos no lo ocupaban.

Las adjudicaciones hechas al señor Furnus, prueban que era él quien ocupaba, así como era él quien tenía la intención de poseer, supuesto que él lo tenía denunciado en compra, desconocía todo derecho á Lagraña y seguía constantemente urgiendo la resolución correspondiente ante el gobierno de Corrientes.

Todo esto le constaba á Lagraña: primero, porque son hechos públicos y notorios y segundo, porque, para ir á la Estancia «Rincón», se cruza completamente ese campo, como lo han hecho muchas veces, supuesto que sus actuales propietarios estaban y están continuamente allí.

Por otro lado, á la demandada correspondería la prueba de los hechos, que pudieran haber alegado en contra de lo que dejo expuesto.

XXI

LAGRAÑA DEMANDA Á POZZI ANTE EL JUEZ DE PAZ

1889

Al empezar este año, una circunstancia aparentemente favorable hace que despierten nuevamente los señores Lagraña, pero ya con su bagaje de falsedades, en mala hora inventadas, para encubrir la resurrección de sus usurpadoras pretensiones.

Cuando Furnus quedó solo en la Estancia San Luis, vivía en la ciudad de Mercedes, de donde se trasladó, á fines del 87, á esta Capital.

Su edad y otras atenciones, que reclamaban su



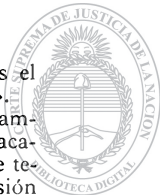
presencia. ya en Mercedes. donde tenía la Estancia Payubre (Lantelme, como la designa el plano de Sánchez) ya en esta Capital, donde tenía su familia (pues, casó en segundas nupcias con la señora Cecilia Lantelme, cuya testamentaria se liquidó después, por ante el juzgado del doctor Pizarro, Secretaría, hoy de Ventura Lima (hijo). en la que consta los bienes que tenía á su cuidado, por parte de ella y otros intereses. no le permitían ir con la frecuencia debida á su Estancia San Lais.

Como era natural. tenía necesidad de alguien para el cuidado de ella, y así lo hizo, encargando de su administración á su yerno Pozzi, quien acababa de establecerse en el campo (F. de Barrientos) que he citado y cuya proximidad puede V. S. notar observando el mapa del señor Sánchez, pues, la comunicación entre ambas Estancias se hacía fácilmente por el paso del arroyo Pelado, llamado «Curupicay», como se indica en este plano.

En tales circunstancias, en Febrero 5 del 89, el señor Javier Lagraña, por sí, su Señora madre y hermanos, ante el Juzgado de Paz de Curuzú-Cuatíá, entabló demanda contra don Carlos J. Pozzi y «pedía el desalojo del campo que *actualmente ocupa* y de propiedad de la sucesión de don Manuel I. Lagraña, cuyo campo manifestó el exponente haberle cedido por tiempo indeterminado para ocuparlo» etc.

Presente al acto el señor Pozzi manifestó: «que él no era allí más que un encargado del señor Luis Furnus, que dice ser dueño del campo, quien tenía en todo caso que ver al respecto.»

Estos son párrafos literales del acta labrada en aquella oportunidad por el señor Juez de Paz y cuyo testimonio es el que corre á f. 90 (Embargo prev.) debidamente autenticado.



Como V. S. observa se demandó entonces el desalojo del campo que «actualmente ocupa».

Como la demanda no podía referirse ni al campo del «Sauce» ni al de «Barrientos», que acababa Pozzi de ocupar como dueño, sino que tenía por antecedente «la propiedad de la sucesión Lagraña» y el «permiso gratuito», es evidente que se refería á los campos del «Chañar.»

Y ¿cuál era el campo de los del «Chañar» ocupado por Pozzi en Febrero de 1889?

Pues, exclusivamente el «San Luis,» porque la otra fracción, propiedad de Lagraña y la del permiso, había sido desocupada dos años antes, y por eso su contestación fué rigurosamente exacta: «no era más que un encargado del señor Furnus, que dice ser dueño del campo».

Transcribo literalmente esta contestación de Pozzi, porque más tarde, ante el Juzgado Federal, la parte de Lagraña le agregó, falseando la verdad, un párrafo: «si bien era cierto que yo le había permitido la ocupación del campo, era también cierto» etc., etc., que ni fué dicho ni consta consignado en el acta que testimoniada he exhibido.

Fíjese bien V. S., que, en esa fecha, el único campo del «Chañar» ocupado por Pozzi, era el «San Luis,» en donde estaba como encargado de la Estancia de Furnus, como ya quedó comprobado.

La demanda fué contra Pozzi y quedó en nada como merecía.

Contestando la comunicación que de este hecho le hizo Pozzi, el señor Furnus le dirigió el telegrama corriente á f. 11, cuyo original solicité se pidiera al Juez de Goya, como se pidió, pero sin remitirse, porque se me avisó que los originales se enviaban, para su archivo, á la ciu-



dad de Corrientes, de donde no lo pedí por evitar una diligencia que ya la creo superflua: pues su objeto era acreditar el ánimo por parte de Furnus, y este resulta ya más que evidenciado con tantos otros antecedentes, y en, especial, durante este año. si así se quiere, con las constancias del expediente sobre denuncia en compra de ese campo fiscal.

XXII.

DEMANDA ANTE EL JUEZ FEDERAL EN 1889

En estos autos tiene V. S., casi un testimonio íntegro del expediente seguido por los señores Lagraña contra Pozzi, ante el Juzgado Federal de Corrientes, sobre el desalojo, que causó el despojo, origen de este pleito.

A f. 264, corren los testimonios del escrito de demanda de los herederos de don Manuel Ignacio Lagraña, del de contestación de Pozzi y de una carta suscrita por Furnus, exhibida con la contestación,

A f. 544, corre un testimonio de un auto consentido, que se dice recayó al pie de aquel escrito de contestación presentado por Pozzi.

A f. 276 existe agregado un pliego con las posiciones absueltas por Pozzi y de las declaraciones de testigos, presentados por la parte de Lagraña.

A f. 182, corre el testimonio de la carta dirigida por Pozzi al Dr. Gómez, en Junio de 1886, el de la sentencia dictada por el Dr. Lujambio y el de la diligencia de despojo.

A f. 86, (Emb. prev), corre la protesta formulada por José Luis Furnus, en la que están



transcriptas las notas dirigidas al comisario ejecutor del despojo.

Y á f. 263, un certificado del Secretario del Juzgado Federal de Corrientes, haciendo constar que ni Luis Furnus ni sus herederos han sido citados á estar á derecho en el referido juicio.

He citado las fojas, en donde se encuentran agregados los testimonios que reproducen aquellos autos, sólo para evitar la repetición, en esta oportunidad, de todas sus referencias, que debo estudiar extensamente en Capítulo separado, al rever, en este juicio ordinario, lo hecho en aquel sumario.

Y concretándome, por el momento, á hacer observar sus constancias, en cuanto se refieran á un hecho que afecta la posesión que examinamos, mencionaré simplemente el detalle pertinente.

En el escrito de demanda, se afirma que Pozzi pidió en 1883 y Lagraña le concedió la ocupación de «una parte del campo «Rincón del Chañar,» en el paraje que linda con la propiedad de la señora Labougle.»

Que en virtud del permiso «referido el señor Pozzi es un tenedor precario de la fracción de campo que ocupa» (en 1889) y, en consecuencia, entablan contra él el interdicto de precario ó desalojo, dicen; no sin hacer mención de la demanda entablada ante el Juzgado de Paz de Curuzú Cuatiá y de la contestación dada por Pozzi.

Sin esperar el juicio verbal que correspondía decretarse, el señor Pozzi presentó un escrito repitiendo lo que diez meses antes había dicho ante el Juzgado de Paz: que él no era, en el campo de referencia, sinó encargado de los intereses de Luis Furnus, quien era el verdadero poseedor



y contra quien debían dirigir su acción, citando como actos posesorios de Furnus, las mensuras, poblaciones etc., así como la denuncia en compra de ese campo fiscal y acompaña una carta suscrita por él, cuyo testimonio está en autos á f. 270, en la que el señor Furnus se titula dueño de ese campo, invoca su posesión de muchos años, encarga á Pozzi el cuidado de su Estancia, habla de las «mentiras y engaños de los Lagraña, que porfían para quedarse con lo ageno» etc.

Esta carta tiene fecha cierta desde su presentación en juicio, y aunque no conte en autos el día fijo, necesariamente es anterior al 24 de Abril de 1890, que es la fecha del auto del Juez Federal, Dr. Lujambio que no hizo lugar á lo solicitado, y que testimoniado corre á f. 544 y 545,

En oportunidad haré notar el valor jurídico que estos antecedentes tienen en la cuestión subjudice.

Como V. S. ve, ya estamos en 1890 y lejos de alegarse algún hecho que importe posesión de parte de Lagraña y la no posesión de Furnus, se confirma más la de éste con la nueva constancia en juicio, en términos bien claros, que él ocupaba y continuaba la posesión de ese campo, lindero á la propiedad de Labougley y del que se titulaba dueño único, exclusivo, etc.

¿Alegará Lagraña que, en esa oportunidad, no tuvieron nuevo conocimiento de dichas pretensiones de Furnus?

Si me hubiera faltado pruebas para acreditarlo así, en lo referente á los hechos anteriores á 1890, hubiera probado la posesión á contar desde esta fecha, por que las constancias de estos autos es la prueba más fehaciente que puede exigirse.

Veamos otra prueba también concluyente de la

posesión de Furnus y del conocimiento que de ella tenía Lagraña.



XXIII

FURNUS NOMBRA Á PUGA MOYORDOMO

DE SAN LUIS

Según consta auténticamente en el documento agregado á f. 290, el señor Luis Furnus, con fecha 12 de Abril de 1890, nombró mayordomo de su Establecimiento «San Luis», en «Puntas del Chañar» 3^a Sección de este Departamento, (C. Cuatiá) al señor Francisco Puga, en reemplazo del señor Carlos Pozzi, que administraba dicho establecimiento hasta la fecha y á quien se le notificó, por el Juez de Paz, que «debía hacer entrega al Sr. Puga de todos los ganados y demás existencias» de la citada Estancia.

Se observa, que el Juez de Paz de entonces fué el Sr. Ricardo Quiroz, que prestó declaración en el juicio radicado ante el Juez Federal y quien fué propuesto en este juicio como patrocinante de Lagraña, en las declaraciones de testigos residentes en Curuzú-Cuatiá.

¿Lagraña tuvo conocimiento entonces de este nombramiento hecho por Furnus?

Sí, señor Juez. Así lo acredita la pregunta 8, formulada por Lagraña al testigo Sr. Puga, y que corre á f. 367 vta., en la que no sólo se le pregunta tal circunstancia sino si también fué mandatario de Furnus, con poder público, es decir, en acto público.

Por consiguiente, queda acreditado que Pozzi dejó de ser encargado de la Estancia San



Luis en Abril de 1890 y que entró Puga á administrarla á nombre del señor Furnus.

Del mismo documento resulta que entonces el señor Luis Furnus «estaba domiciliado en la ciudad de Buenos Aires.»

¿Se ha alegado por Lagraña la ejecución de algún acto que importe posesión de su parte?

Absolutamente ninguno, y, al contrario, consta en todas partes que no entraron á ocupar ese campo hasta Agosto de 1892.

XXIV

FURNUS CONTINÚA POSESIÓN TRANQUILA EN 1891

Como se observa fácilmente, los señores Lagraña, sin alegar ni practicar acto alguno, que afecte la posesión de Furnus, se concretan exclusivamente á las gestiones iniciadas contra Pozzi, ante el Juez Federal, sin tomar ni aún entonces, medida alguna para modificar ó neutralizar los efectos que necesariamente debían producir esas constancias, ya en juicio, de su ocupación y demás pretensiones.

Es cierto que bien sabían ellos que nada podían hacer contra Furnus!

Este, entretanto, continuó tranquilamente ocupando el campo con sus haciendas, y como ya, en esa época, las había vendido casi todas á sus hijos, que estaban poblando el campo del Sauce, es natural que algunos de ellos continuaron utilizando dicho campo, con esas mismas haciendas ó con otras que adquirirían y trasladaban de un lado á otro, según las operaciones que realizaban con ellas, como los acredita la



misma parte demandada con sus preguntas 11 y 12, que prueban que José Luis, tenía el campo de la sucesión W. Fernández, así como, con sus otros hermanos y hermanas ó cuñados, el campo del Sauce, como se ve en el mapa de Sánchez.

Aunque nadie niegue tal posesión que viene de tanto tiempo atrás, he querido acreditar la ocupación, siempre de parte de Furnus, en todos los años, para evitar toda clase de dudas ante la afirmación constante de Lagraña de que era Pozzi el poseedor y no Furnus, á cuyo respecto se han limitado siempre á negar su posesión, sin comprobar, en realidad, hechos concretos que así la establecieran.

Contestando, el testigo Espíndola, la pregunta 18 del interrogatorio de Furnus, tendente á comprobar que en Abril de 1891, el señor José Luis Furnus, hizo llevar, desde su campo de Marote (el de la sucesión de W. Fernández, á que se refiere la pregunta 11 de Lagraña) al «San Luis.» como 500 animales vacunos, dijo que él había ido á encaminar el ganado; así como el testigo Ibarrola (contestando la repregunta primera de Furnus, que se refiere á lo anterior) dijo que lo sabía, porque cuando él llegó á la Estancia Marote, donde iba cada recogida, porque tenía sus caballos allí, ya las haciendas iban en marcha.

Se comprobó también y de una manera auténtica, que en los Registros de la Receptoría de Rentas de Curuzú Cuatiá, pertenecientes al año 1891, consta que el señor Luis Furnus hizo las manifestaciones correspondientes, para el pago del impuesto sobre las haciendas, que tenía en la tercera sección del departamento (es decir, en «Puntas del Chañar», como resulta del acta judicial del 12 de Abril de 1890, ya citada), como



puede V. S. comprobarlo, observando las repreguntas de Furnus al testigo señor Arévalo, actual Receptor de Rentas, y el documento de fs. á que se refiere la segunda repregunta citada.

Esta misma pregunta debió formularse al testigo Alfonso, conductor de esas haciendas, pero, por creerlo innecesario, mi parte desistió de varios testigos, como consta á fs. 388.

Finalmente, observe V. S. la pregunta 9 del interrogatorio de Furnus y verá que tres testigos mayores y libres de toda excepción, como dice la ley, afirman que don Luis Furnus continuó ocupando, con sus haciendas, ese campo San Luis, hasta 1892, y ¿cómo, dicen, que les consta?

Al testigo Puga, también ocupante de parte del campo «Puntas» hasta 1883 (pregunta 17, interrogatorio de Furnus), le consta por haber sido mayordomo de la Estancia San Luis, desde el 12 de Abril de 1890 (capítulo XXIII) hasta el fallecimiento del señor Furnus, en 1º de Julio de 1892 (los autos sucesorios tramitaron por la misma Secretaría actuarial).

Es cierto que este testigo fué tachado por la parte de Lagraña, como resulta de la manifestación consignada á fs. 368, fundándose en las contestaciones dadas á las repreguntas 7 y 8 formuladas por su parte.

Pero, dados los fundamentos de la tacha, lo único que resulta en claro es la convicción que tenía la contraria de la gravedad de tal testimonio.

El señor Puga es pariente en cuarto grado por afinidad de los señores Furnus y por tanto no se halla comprendido en las disposiciones del artículo 207, inciso 1 del Código de Procedimientos, que sería el pertinente.



El segundo fundamento es su contestación, á la repregunta 8. que se refiere á la circunstancia de haber sido encargado del establecimiento San Luis y haber sido apoderado del señor Furnus. Tampoco es feliz este fundamento. por cuanto el inciso 2 del artículo citado, exige que sea dependiente ó sirviente del que lo haya presentado. al prestar declaración.

De las mismas preguntas, resulta que fué dependiente del señor Furnus. que murió en 1892 y no lo es hoy de los herederos Furnus. que son los actores.

Por consiguiente. su declaración está exenta de tacha. y tiene sumo valor. por la ilustración del testigo. respecto á estos asuntos. en los que ha actuado personalmente.

El testigo señor Valenzuela dice. que le consta porque ha visto y ¿qué fé merece tan lacónica respuesta. tratándose de actos realizados en tan dilatada época?

Observe V. S. sus respuestas á las repreguntas formuladas por Furnus (fs. 379) y verá que el testigo conoce esos campos desde hace 57 años: desde el 39. después de la batalla de Pago Largo y ha estado muchas veces en las citadas Estancias y conoció á ciencia cierta y por constancia personal. todos los actos sobre los que ha recaído su declaración. tanto contestando á la parte de Furnus. como á la de Lagraña.

El testigo Aguirre manifestó que le constaba por ser vecino de allí. siendo entonces puestero de Vedoya. Confirma su conocimiento con las declaraciones y razones dadas en sus demás contestaciones: en especial. á las 5 pregunta del interrogatorio de Furnus. en la que se dice que ha andado por esos campos desde antes de poblar Madariaga y durante 15 años.



Por último. también comprueba concluyentemente la posesión de Furnus, durante este año y el primer semestre del 92. el acto mismo del despojo. al que ya llegamos, á Dios gracias.

XXV

FURNUS POSEÍA «SAN LUIS» EN AGOSTO 17

DE 1892

No necesito, señor Juez. de más justificativos que las constancias del testimonio de fs. 187. exhibido por la parte de Lagraña. referente á la diligencia, en que el comisario ejecutor de la orden de desalojo, dictada por el Juez Federal de Corrientes. contra el señor Pozzi. da cuenta del cumplimiento de su misión. para dejar perfectamente comprobado que, el día del despojo, aún continuaba la posesión de Furnus.

Dice el comisario Cuenca: «habiendo dicho el señor Pozzi..... que no era él quien actualmente ocupaba el campo. y que los ganados. que existen en el campo. los había vendido al señor José Luis Furnus..... le dí conocimiento al señor Furnus..... quien contestó que se consideraba dueño del campo, haciendas y casas. y por cuyo derecho se resistía al desalojo del campo. lo mismo que se resistía á recoger las haciendas; entonces procedí á ejecutarlo con los elementos de la fuerza..... y una vez reunidas todas las especies de ganados, que poblaban el campo y que son de propiedad del señor Pozzi, lo mismo que procedí haciéndome cargo de un ganado, que se encontraba en pastoreo, del señor Furnus, introducido el día 13 del corriente y que



fueron traídos de otro campo, y una vez puestos todos en maza. les intimé á sus dueños tomaran posesión de ellos..... y no habiendo querido. los señores Pozzi y Furnus. recibir dentro del campo sus haciendas. procedí á ponerlas en la vía pública.....; las especies de ganados que fueron sacados del campo de los señores Lagraña y que son de propiedad de los señores Pozzi y Furnus. son:..... 1216 ganado vacuno, 206 yeguas, 2000 ovejas»..... etc.

Por consiguiente, resulta bien comprobado este hecho: del campo «San Luis», se sacaron el día del despojo, 1216 vacas, 206 yeguas, 2.000 ovejas, etc., cuya propiedad se atribuyó en ese acto el Sr. José Luis Furnus. que estaba presente en dicho Establecimiento, así como manifestó se consideraba dueño del campo y de la casa.

Resulta evidente que los señores Lagraña no ocupaban ese campo. con anterioridad á esa fecha. así como que estaba ocupado por el señor José Luis Furnus. que fué también desalojado. echándose á la vía pública. haciendas de su propiedad. como no ha podido menos de reconocerlo y así consignarlo el señor Cuenca. aunque haya agregado ciertos detalles. que demuestran un deseo de favorecer á la parte de Lagraña. ó eludir responsabilidades que preveía. en razón de las arbitrariedades cuya ejecución se le ordenaba y de cuya ilegalidad tenía conciencia.

Por mi parte. es completamente indiferente que se afirme que Pozzi era ocupante solo ó con José Luis Furnus. en la época del despojo y que parte de esas haciendas fueran de su propiedad. así como las que se reconocen ser de Furnus. hubieran sido introducidas pocos días antes. etc.. porque ya tiene acreditado suficientemente en autos. que el poseedor era don Luis Furnus



y después de su muerte sus herederos, entre los que se cuenta la señora María Inés Furnus, esposa del señor Carlos Pozzi, quien, por consiguiente, ha podido ocupar ese campo, en esa oportunidad (y volvemos á las oportunidades, que olvida Lagraña) en el carácter de heredero de Furnus, representando la posesión de Furnus y no la posesión, ni la ocupación, ni la propiedad de Lagraña, que jamás ha tenido Pozzi, sobre ese campo, en nombre de ellos.

El carácter de Pozzi, en esa oportunidad, era muy distinto al anterior al 1º de Julio del 92. En la época del despojo, hoy mismo en este juicio, interviene por los derechos de su esposa María Inés Furnus, heredera de Luis Furnus.

Debo, entretanto, hacer resaltar algunas falsedades que contiene la diligencia del despojo, suscrita por el señor Cuenca.

En primer lugar, se observa que la fecha de la diligencia del Comisario ejecutor, 19 de Agosto, no es la del despojo, que fué el día 17, lo que significa que ha demorado dos días antes de extenderla, probablemente previa consulta con los interesados en eludir responsabilidades, que lo era, en primera línea, el Jefe Político (interino, á ese efecto) como resulta del cambio que hizo en los términos de las órdenes dadas y que se hallan transcritas en la protesta de fs. 86, (embargo preventivo) formulada por José Luis Furnus.

En segundo lugar, se observa la falta de constancia respecto de los muebles y demás enseres, que hizo sacar de la casa de la Estancia.

En tercer lugar, ha omitido consignar que, habiendo ido á cumplir la primera nota de fecha Agosto 12, observó personalmente que Pozzi no ocupaba parte alguna del campo Chañar, y que,



habiéndole justificado Furnus, en presencia de testigos, con la exhibición del certificado correspondiente, que todas las haciendas eran de su propiedad, dió cuenta al Jefe Político, quien le reitiró la orden, variando sus términos, á objeto de proceder al despojo en la forma que se observa en la protesta citada y se realizó por dicho Comisario.

Finalmente, se nota también la tendencia clara de consignar reiteradamente que las haciendas desalojadas, las que no estaban en pastoreo, eran de propiedad del señor Pozzi y que éstas habían sido llevadas, con fecha 13 de ese mes y pertenecían al señor Furnus.

El Comisario consigna su afirmación, introducida, no de cuenta propia, sin decir cómo ha sabido tales cosas.

Entre tanto, de las referencias del capítulo precedente, resulta que Furnus ocupaba con sus haciendas, durante el año anterior, dicho campo desalojado.

Se acreditó que, en Abril de ese mismo año 91, se llevaron, por cuenta y orden de José Luis Furnus, desde su campo de Marote al San Luis, como 500 animales vacunos.

El testigo señor Escalada (fs. 369), contestando á la pregunta 19 del Interrogatorio de Furnus, dijo: que el día del desalojo se encontró presente y sirvió de testigo á una protesta y que José Luis Furnus manifestó, en ese acto, que él era el propietario de esas haciendas, presentando al Comisario un certificado, justificando la propiedad de las haciendas: pero que no le constaba que todas fueran de él. Agregó después, contestando á la repregunta de Furnus, que le constaba por haber visto y leído el certificado en presencia de las personas que estaban presentes.



Los otros, que estaban presentes, eran los señores Agapito Calera y el escribano Pastor Pintos, que fueron también presentados como testigos por mi parte y después se desistió, por creerlo ya innecesario, atento el resultado general de las otras declaraciones y, además, porque el punto principal, sobre el que debió versar sus declaraciones, se hallaba ya consignado en las protestas de Furnus.

Observe V. S. que esa protesta se formalizó en la misma Estancia «San Luis», estando presente también el Comisario Sr. Manuel Cuenca.

En ella se consigna, que Furnus invocó la posesión del campo y casa desde 1882, la propiedad de los ganados arreados á la vía pública, muebles, etc.; se expresa que Pozzi, contra quien se dirigía la orden, anteriormente había retirado todos sus intereses del citado campo, como ha visto el señor Comisario presente», quien, finalmente, manifestó, en presencia de los testigos instrumentales, que no quería firmar, como no firmó.

El testigo Ibarrola, contestó á fs. 383. la misma pregunta 19: «que sabe y le consta porque fué conductor de las haciendas desalojadas por el Comisario Cuenca y vió que esas haciendas tenían las dos marcas de don José Luis Furnus»; que él mismo, llamado por Furnus, había llevado y traído esas haciendas; que eran 800 animales, según recuento que hizo antes de llevarlos y que no volvió á contar los que trajo (que fueron 1216, según consigna el Sr. Cuenca).

En Abril del 91, se llevaron 500, en Agosto del 92, 800; son 1300 animales; es decir, que se sacaron algunos menos de los que se llevaron.

Lo esencial es que queda comprobado que todas esas haciendas fueron llevadas por José Luis Furnus, en Abril del 91 y en Agosto del 92.



Esto lo ha acreditado en forma mi parte, y ¿qué hechos se han alegado y probado por parte de Lagraña, que destruyan su significado?

Ninguno, señor Juez. Para ellos, basta su afirmación de que las haciendas eran de Pozzi. Lo dicen ellos, el Comisario Cuenca y qué más?

Furnus afirma que las haciendas son suyas, y lo prueba, como queda expresado.

Lagraña afirma que son de Pozzi, y ¿cómo prueba su acerto? Absolutamente de ninguna manera, porque no sólo no han solicitado diligencia alguna á ese efecto, sinó que ni siquiera el señor Pozzi, al practicarse el desalojo, ha estado en posesión de ellas, pues se entendieron exclusivamente con Furnus, quien estaba en el campo en posesión inmediata y actual de esos intereses, cuya propiedad se atribuyó y comprobó en el acto, exhibiendo los certificados correspondientes y formulando, finalmente, la protesta que dejó á salvo sus derechos tan arbitrariamente violados por los mismos encargados de hacerlos respetar.

Confirmando todo lo dicho hasta este momento, respecto de la posesión, que tuvo Furnus, desde antes de 1882 hasta Agosto de 1892, comprobaremos la ausencia de actos posesorios por parte de Lagraña.

XXVI.

ACTOS POSESORIOS DE LAGRAÑA DE 1882 Á 1892

Es curioso, señor Juez, observar cómo se hace mentir tan fácilmente á los testigos.

En lugar de averiguarles la verdad, se formulan interrogatorios con el objeto exclusivo de con-



vertirlos en testigos falsos y que resultan ser más falsos cuanto más complacientes.

Comprobemos:

La pregunta 4 para el testigo Dr. Gómez, que es igual á la 5 para el Dr. Labougle é idéntica á la 6 del interrogatorio general, y que fué formulada como pregunta á todos los testigos presentados por la contraria y como repregunta á todos los presentados por mi parte, está concebida en estos términos: «Diga si sabe y le consta que la familia de Lagraña ha tenido *siempre* la posesión del campo Rincón del Chañar, en toda su extensión, hasta *lindar* con las Puntas del Chañar, sin permitir posesión de parte de persona alguna extraña á la familia.»

Y como si esto de «siempre» no bastara, en la pregunta siguiente, se requiere: «que diga si sabe y le consta que esa posesión la ha tenido la familia de Lagraña, desde mucho antes del mes de Agosto de 1892 como después hasta ahora.»

En primer lugar, es imposible que haya testigo que afirme que sepa y le conste que *siempre* han estado en posesión, cuando tienen esa propiedad desde 1781.

En segundo lugar, su extensión (del «Rincón del Chañar») se refiere á la que le corresponde según los títulos ó incluyendo el campo fiscal?

En tercer lugar, se afirma incidentalmente que tal campo «Rincón» linda con el de «Puntas.» lo que es completamente falso, sin poder afirmarse hoy (1896) tal cosa, después de la mensura de 1884 y su aceptación, por el Gobierno, en 1893.

En cuarto lugar, «permitir posesión» es un absurdo, porque significa desposesión propia, que siempre es contraria á la voluntad del poseedor, y porque la distinción entre ocupación y posesión, requiere cierto grado de cultura intelectual muy poco común.



En quinto lugar, preguntar á un testigo si es cierto que alguien tiene la posesión, cuando precisamente ese es el punto dudoso, discutido, litigioso, sujeto al fallo judicial, es pedirle que, anticipándose á la sentencia, falle el testigo á su favor! Habráse visto caso más original, en el que los testigos fallen antes que el Juez?

Y peor aun, señor Juez, cuando la pregunta, incomprensible y mentirosa en los detalles, es falsa en el conjunto.

Las preguntas interrogan afirmando (!) si es cierto que «la familia Lagraña ha tenido siempre la posesión del campo» de referencia (cualquiera que sea) mucho antes del mes de Agosto de 1892.» etc.

Y, sin embargo, interrogado el mismo que la formuló para que enunciara los actos de posesión que la familia de Lagraña ha ejecutado, desde 1882 á 1892, sobre esa fracción que linda con las «Puntas del Chañar», se ha visto obligado á falsear la verdad, para poder invocar siquiera uno solo!!

Al contestar la posición 15. el señor Lagraña dice: «que los herederos de D. Manuel I. Lagraña, han ejercido actos de posesión, al construir el alambrado que divide las propiedades de éstos con el Dr. Labougle, en sociedad con este último». Faltó en esto á la verdad porque, según el documento de fs. 549, suscrito por el absolvente, el alambrado fué construido exclusivamente por Labougle y después cobró la mitad de su valor á Lagraña, quien se apresuró á pagar, para poder invocar hoy siquiera un acto de posesión!

Y con estos antecedentes ¿cómo es posible que los testigos contesten afirmativamente, como les insinúan las preguntas, sin incurrir en falsedad?

Y ésta es la razón, bien explicable, señor Juez.



porque los testigos presentados por la parte de Lagraña y aun el mismo Dr. Labougle, que han contestado afirmativamente estas preguntas, se han visto atados después, al dar la razón de sus dichos, y peor han ido, cuanto más han pretendido sostener sus afirmaciones, como ha sucedido al Dr. Gómez y á los señores Acuña y Rodríguez, cuyas mismas declaraciones evidencian completamente su falso testimonio.

Interrogados estos testigos, para que digan, que enumeren los actos de posesión practicados por Lagraña, sobre el campo lindero á «Puntas», el Dr. Gómez cita exclusivamente el permiso que (se dice) Lagraña dió á Pozzi, para ocuparlo (contestando á la pregunta 1ª formulada por mi parte fs. 297).

El Dr. Labougle (séptima repregunta de mi parte) cita este mismo permiso: el pago de la medianería del alambrado y la compostura posterior, y un corte de maderas en 1883.

El Sr. Acuña, (repregunta 10 de mi parte) manifiesta que no sabe, porque no ha estado ninguna vez en el campo en esa época, y esto luego de contestar afirmativa, categórica y hasta enérgicamente las aludidas preguntas.

El testigo señor León Martínez (repreguntas 1ª y 2ª de mi parte) contesta que no sabe porque no ha estado ninguna vez en ese tiempo.

El testigo Guillermo Rodríguez (2ª repregunta de Furnus, dijo que lo único que sabía era el desalojo, mandado ejecutar por Lagraña contra Pozzi, en el año 1892.

En cuanto á los actos citados, tenemos que: el alambrado fué construído, como ya vimos, por el doctor Labougle exclusivamente, y no importaría acto de posesión, aunque lo hubiera sido en sociedad; lo del permiso dado á Pozzi



(aunque esto no es acto material de posesión) está sujeto á la resolución judicial y constituirá acto de posesión, si se declara que Pozzi era ocupante á nombre de Lagraña y no constituirá absolutamente nada, si se resuelve que no ocupaba en nombre de Lagraña sino de Furnus, y que éste era el poseedor; lo del corte de maderas, quedó ya eliminado con la contestación del señor Lagraña á la posición 16, segunda parte.

Total de actos posesorios ejecutados por la familia Lagraña, sobre el campo «San Luis», desde 1882 á 1892: *O*

Y no necesitábamos cavilar mucho para convencernos de esto.

Las preguntas 7 á 10 del Interrogatorio de Lagraña y contestación á esta última del Dr. Gómez, así como á la pregunta 4 formulada por Furnus. la pregunta 7 de Lagraña al Dr. Labougle, la contestación del escrito de demanda ante el Juzgado Federal: la contestación á la presente demanda; todas las defensas, en fin, de Lagraña, se basan en que ellos no han ocupado, no han realizado acto alguno material, que importe ocupación ó posesión, en sentido restrictivo, sobre ese campo lindero al de Labougle, desde antes de 1882 hasta Agosto de 1892, precisamente porque alegan que ocupaba Pozzi, con permiso de ellos, quienes, de esa manera, conservaban la posesión.

Todo se hace jirar sobre la ocupación de Pozzi y principalmente sobre el permiso, en cuya virtud dicen tuvo esa ocupación.

Niegan la posesión de Furnus, imitando lo que hace el aveztruz cuando se esconde: mete la cabeza en cualquier agujero, dejando todo el cuerpo en descubierto, pero como él no vé cree que está oculto.



Por eso es que la parte Lagraña tiene formulada, á este efecto, otra pregunta igualmente ridícula como las anteriores.

La 11 para el Dr. Gómez, y 10 para el Dr. Labougle y para los demás testigos, dice: «diga si sabe y le consta que jamás Luis Furnus, ni ninguno de sus hijos, después de su fallecimiento, ocupó, del campo Rincón del Chañar, fracción alguna».

¿Quién es el testigo que haya andado siguiendo, como la sombra al cuerpo, á Furnus y sus herederos, durante estos 10 años invocados, para que pueda afirmar que le consta lo que se le pregunta?

La prueba de un hecho negativo no se exige, según elementales nociones del derecho procesal porque generalmente, no puede establecerse.

Tal pregunta solo sirve para evidenciar la falsedad de ciertos testimonios presentados con el propósito, no de constatar la verdad, sino de defender los intereses de una parte.

El Dr. Gómez, Diputado Nacional, según lo hace constar reiteradamente la contraria, contestó: «*me consta* que no ocupó ninguna fracción del campo Chañar, ni don Luis Furnus ni ninguno de sus hijos, con excepción de la parte que ocupó Pozzi».

Formulada por mi parte la pregunta 5 de f. 296, para que exprese el Dr. Gómez ¿cómo le consta? contestó: «*no me consta* ni he oído referencias de que Furnus ó sus herederos hayan ocupado nunca ese campo».

Luego: le consta que no ocupó, porque no le consta que haya ocupado!!!

Y ¿cómo podía constarle un hecho negativo y menos si, como dice contestando la pregunta 8, «no ha estado nunca en dicho campo?»



«Pobre patria en manos de mi hijo Eustaquio!»

Igual cosa le sucede al testigo Acuña, que dice sabe que no lo ocupó, no obstante no haber estado allí, en esa época, ninguna vez, y eso que él distingue lo que es la ocupación y lo que es, «la posesión, es decir, la propiedad!!»

Hasta este momento, creo haber comprobado satisfactoriamente dos cosas:

1º Que Lagraña no ha ocupado ni ha practicado acto alguno de posesión material, en el campo «San Luis,» desde antes de 1882 hasta Agosto de 1892.

2º Que Furnus lo ha ocupado, con haciendas de su propiedad, durante esa época, titulándose públicamente poseedor y propietario de dicho campo, en virtud de su denuncia en compra, aceptada desde Octubre del 82.

Corresponde pasar al estudio del derecho aplicable al caso; pero, como también Pozzi ocupó ese campo y aun cuando él diga que fué en nombre de Furnus, Lagraña sostiene que fué en el suyo, necesito examinar, antes de pasar á estudiar estas relaciones jurídicas, entre Pozzi y Lagraña, con que encabezaré el estudio jurídico, referente á la ocupación de Furnus, la prueba rendida á efecto de acreditar cuál es el campo Paniagua, del que se ha hecho caballito de batalla últimamente.

XXVII.

CAMPO «PANIAGUA»

En la demanda se menciona, como un justificativo precioso y elocuente de la posesión que



invoco, el hecho de que, en el mapa de la provincia de Corrientes, publicado por el Instituto Geográfico Argentino, en 1889, se señala el campo indicado como de propiedad de Luis Furnus. Esto prueba que semi-oficialmente se ha sabido el hecho positivo de la ocupación ó pretensión, etc. de Furnus.

He depositado en Secretaría el atlas que lo contiene, y V. S. puede observar, en sus primeras páginas, la intervención oficial con que se ha hecho esa publicación, así como los antecedentes que sirvieron especialmente de base para la confección del mapa.

Todo ello da más importancia y significado á las referencias que en él se consigna.

En el escrito oponiendo excepción, la parte de Lagraña dijo, á este respecto, que era esto, «sin duda, un título original de creación fantástica de los actores.»

Sin embargo, señor Juez, como la contraria anda más por las nubes que mi parte, parece que le gustó la fantasía y nos presenta un cartapel y un librejo para probar qué cosa?

Que su autor, el Agrimensor don Zacarías Sánchez, hermano del representante de Lagraña, el que hizo la mensura del «Rincón del Chañar,» al gusto y paladar de sus dueños, ignoraba, en 1893, cuando publicó su mapa, que el Gobierno de Corrientes había aprobado la mensura de Carlevaro, como debe constar en la oficina pública de donde ha recojido los datos oficiales, según él, allí consignados en su mapa.

O es que también éste es hecho por cuenta y orden de Lagraña?

Qué prueba?

Una cosa se observa, y es que no consta allí demarcada la propiedad San Luis.



Volvemos á la prueba negativa. Si no consta, será porque ha ignorado su existencia quien trazó el mapa, que, por otra parte, no tiene carácter oficial alguno y se notan algunas inexactitudes, á simple vista, que quitan todo valor, que pudiera tener, aunque sea por su tamaño.

Por ejemplo, el campo del Sauce, propiedad de Furnus desde 1883, se dividió oficialmente en cuatro fracciones, correspondientes á cuatro hijos de Furnus y sin embargo, aparecen en el mapa de Sánchez, dos de ellas con el nombre de Pozzi.

El campo «F. de Barrientos» es propiedad de Pozzi desde 1886 y tampoco se consigna así.

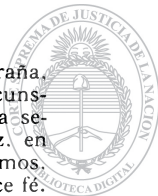
El campo de Lantelme está fraccionado oficialmente y corresponde á Queirolo y Amaral, desde 1891 y tampoco se expresa así.

No hay más que un camino que, pasando cerca de la Estancia «Puntas.» cruza el «San Luis» y aproximándose al arroyo «Paniagua», cuyas puntas toca, hacia el «Rincón del Chañar» y sin embargo, Sánchez señala dos paralelos, arbitrarios y sin objeto alguno ostensible.

Pero, lo que más hace desconfiar que haya sido trazado bajo la influencia de Lagraña, al menos en la parte pertinente, es el curso marcado al arroyo «Paniagua»: pues, le da, á la curvatura que forma, una dirección completamente contraria á la que en realidad tiene y se halla bien indicada en el plano del señor Carlevaro.

Con esta modificación, al parecer sin importancia, se pretende nada menos que hacer aparecer dentro de los actuales límites del San Luis, ese campo llamado Paniagua, del que Pozzi dijo, en 1890, que, en parte, se la había permitido ocupar por Lagraña.

Este error, al parecer insignificante, pero que casualmente afecta un punto capital de la dis-



cusión, favoreciendo los intereses de Lagraña, quienes, coincidiendo, han hecho de tal circunstancia su tabla de salvación, le quita toda seriedad y valor al trabajo del señor Sánchez, en cuanto se refiere á la cuestión que litigamos, pues ni como simple carta geográfica merece fe.

Sin embargo, la presentación de ese mapa, por la parte de Lagraña, prueba que no es tan fantástico el ir á buscar antecedentes ilustrativos, aún en las obras semi-oficiales de la importancia del mapa arreglado por el Instituto, en el que se consigna el nombre de Furnus, en el lugar que corresponde al «San Luis,» que, aunque anterior, aparece más exacto que el trazado por el señor Sánchez.

Pero, veamos cuál es el campo «Paniagua» y cuál su importancia de este pleito?

V. S. ha observado que, en la carta de la señora de Lagraña, donde se hace referencia, por primera vez (Junio de 1883) á estos campos ó mejor dicho, á estos diversos parages del campo Chañar, se dice «Pairirí», y aunque no expresa que sea arroyo ó campo, como se habla de ocupación, de arrendamiento y aún de disponer del campo, es lógico deducir que se trata de un campo Pairirí.

En la carta de Julio del mismo año, reconocida en las últimas posiciones del señor Javier Lagraña, que la escribió, no se expresa el nombre del campo aludido, pero bien se comprende que se refiere al mismo del que hablaba su señora madre.

A cuál se llamaba entonces campo «Pairirí?»

Existe un arroyo «Pairirí.» como se designa en los mapas; pero, no se indica cuál sea el campo así llamado.

Sin embargo, como las partes hablan de cam-



po, debemos averiguar á qué campo tenían ellas la intención de referirse cuando usaban tales expresiones?

La posición 11 y la contestación del señor Javier Lagraña, lo explican satisfactoriamente: el campo que llegaba hasta el arroyo «Pairirí;» se comprende observándolo del lado de las «Puntas.»

No aparecen en autos otros documentos, en que se hagan referencias á esos campos, hasta la carta dirigida por Pozzi al Dr. Gómez en 1886, en la que no se dá el nombre del campo de que se habla.

En la demanda iniciada por Lagraña contra Pozzi, ante el Juez de Paz, tampoco se designa el nombre del campo aludido: se habla del que actualmente ocupa, sin designar cuál era.

Recién en la demanda iniciada ante el Juzgado Federal, se determina el campo, diciendo que es la fracción que linda con la propiedad de Labougle, pero tampoco se le da nombre alguno, aún cuando se afirme que es parte del «Rincón del Chañar.»

Por primera vez, aparece aplicado á campo ese nombre «Paniagua» por don Carlos Pozzi, absolviendo posiciones en Marzo 8 de 1890.

Aunque la expresión usada por Pozzi fué clara, empleándola en el carácter de defensa, como no explicó, con la precisión material suficiente á confundir una mala interpretación, cuál era el campo á que él se refería, tanto Lagraña, como el juez doctor Lujambio, que solo necesitaban pretextos, la aplicaron al que reclamaba Lagraña, diciendo era lindante con la propiedad de doña Flora L. de Labougle, y, por tanto, considerándola como la confesión del permiso invocado y referido á dicha fracción.

Por tal motivo, hoy, que se trata de rever



aquel juicio y que llega la ocasión de precisar con toda exactitud cuál es el campo «Paniagua». los señores Lagraña no pierden la más mínima oportunidad. que se les presente. para buscar testigos que afirmen «si saben y les consta que la fracción del campo «Rincón del Chañar». que linda con «Puntas del Chañar». es la llamada «Paniagua» y que «Pairirí» se encuentra algo más adentro, en dirección al Rincón», que es la cuarta pregunta para el doctor Labougle y la quinta del interrogatorio general.

Como V. S. ve, esta pregunta es tan sugestiva y capciosa como las anteriormente examinadas, porque, tratando de averiguar cuál es el campo «Paniagua». indica que es el que linda con «Puntas» y de paso le envuelve incidentalmente la confesión de que ese campo es una fracción del «Rincón», por donde viene éste á lindar con «Puntas». y, por tanto. á no existir el «San Luis», que resulta llamado «Paniagua».

Se pregunta. además, si Pairirí está más adentro; pero. no se dice si se habla del arroyo ó del campo así llamado.

En esto, también, se evidencia la confusión. en que sistemáticamente incurre la parte contraria.

Para determinar cuál es el campo «Paniagua». es necesario recurrir á las informaciones de los testigos conocedores de esos lugares. y para saber á que campo daba Pozzi ese nombre. al usar esa expresión. es indispensable tener presente las diversas circunstancias que le rodean en esa época y que han contribuido, en su mente, á determinarlo é indicar el campo. á que él se refería. con tales vocablos.

Es sabido que las expresiones son simples traducciones de las ideas del que las usa. y es



absurdo tomar un vocablo y aplicarlo á una cosa distinta de aquella. á que se refería el que lo usó.

Yo llamo «San Luis» al campo que linda con «Puntas», y ¿se le permitiría á Lagraña. que al contestar la posición 15. dijo que «no conoce ese punto llamado «San Luis». que atribuya mis referencias á la provincia de ese nombre ó al Rey de Francia?

Si Pozzi llamó entonces. y no antojadizamente. «Paniagua» al campo que está al Oeste del arroyo del mismo nombre y va hasta el Pairirí. ¿por qué se ha de referir lo que dijo. respecto de ese campo. á otro distinto. aunque en realidad hubiera aplicado mal el nombre?

No es cuestión de vocablos la que discutimos, sino de cosas materiales. de inmuebles. que tienen existencia cierta y se distinguen en fracciones bien definidas.

Pero. por suerte. en el presente caso. el nombre dado por Pozzi fué aplicado al campo así llamado desde medio siglo hace.

Obsérvese en el plano de Carlevaro. que hace fé por haber sido aprobado oficialmente. la verdadera situación de los dos arroyos llamados «Paniagua» y «Pairirí.»

¿Qué dicen los testigos de Lagraña?

El Sr. Arévalo. como el Dr. Labougle. no saben.

Los otros testigos contestaron afirmativamente la pregunta 5 del Interrogatorio de f. 386. en la siguiente forma:

El Sr. Acuña contestó: «que sabe y le consta que la fracción esa citada es el Paniagua; no conoce la ubicación del Pairirí: «que estando á visitar los rodeos del Sr. Pozzi. que entonces ocupaba el campo. hoy de Labougle. vió varios



tajamares sobre un zanjón ó arroyito,» que Pozzi le dijo era el Paniagua.

Para mejor comprender la falsedad de esta declaración, debe tenerse presente que el rodeo, á que ha podido referirse, no puede ser otro que el llamado Tagüé (Cap. IX. Interrogatorio de Furnus, pregunta 5) que se paraba á 200 metros de la Estancia Puntas y de donde quedan como á seis ó siete kilómetros, hacia el Sud Oeste, las puntas del arroyo Paniagua, como se ve en el plano referido.

Entretanto, contestando á la pregunta 11, formulada por mi parte, hace nacer tal arroyo del «frente Norte de la Estancia de Labougle y no á mucha distancia, sin precisar ésta y sigue su dirección al Oeste más ó menos; que en esa época habían varios tajamares (ninguno) sobre ese arroyo; que no sabe á que arroyo cae, ni lo demás de la pregunta,» en la que se le pedía, entre otros detalles, dijera cuáles eran los límites del campo que al declarante le conste se llame campo Paniagua.

Mucho discurso, pero... nada!

León Martínez (f. 396) en cambio, deja ver su sinceridad en cada palabra, en cada contestación.

Antiguo capataz de Lagraña, contesta afirmativamente las preguntas referentes á posesión de la familia, propiedad de Labougle, si son linderas, etc., pero, se refiere á los dichos de su patrón y á la época en que fué su empleado, pues desde 1882 á 1892, no ha estado allí ninguna vez (repregunta de Furnus) ni puede, por consiguiente, enumerar los actos de posesión de Lagraña.

Hasta en su contestación 5 resulta su sinceridad, al hacer corregir lo que por el Juzgado se había consignado mal, y por tales razones, su declaración merece plena fé.



En esta pregunta, que es la pertinente al punto que hoy tratamos, dice: «que él no conoce campo llamado Paniagua y sí sólo un paraje así llamado:» que en él existían unas *taperas*, conocidas por Paniagua cué; que esto lo sabe, por que ha estado en esos campos, como dijo antes y conoce personalmente.

«Tapera» se dice á las ruinas de poblaciones, y «Paniagua cué» (guaraní) significa: que fué de «Paniagua».

Contestando á la repregunta última de mi parte, para que dijera «dónde estaba situada la tapera de Paniagua», dijo: «que estaba de este lado de un arroyito que sale del Chañar, cuyo nombre no sabe y que no recuerda que distancia hay ni del arroyito ni del Chañar, porque hace mucho que las ha visto».

La verdad de la declaración se observa en los detalles, señor Juez, y vea V. S. cómo los distingue el testigo al declarar sobre algo que puedo saberlo, contrariamente á la forma vaga con que se expresó, en sus otras declaraciones, sobre hechos imposible de conocerse, por el que no es interesado.

El conoció esos campos, pero hace mucho que los ha visto, tiene razón al no poder precisar las distancias de las taperas al arroyito ni al Chañar.

No sabe el nombre del arroyito y es lo más natural que no lo supiera, porque en la época que él lo vió y andaba por allí, ese nombre no estaba generalizado, porque fué Pozzi quien lo vulgarizó, desde que estuvo en la Estancia Puntas, cuando al hacerse las recogidas del rodeo Tagüé, ordenaba fueran á buscar y traer las haciendas, que comían sobre el arroyo y campo Paniagua, donde estaba el puesto Chamorro de la Estancia Puntas.



Por esta misma razón, es cierto lo que dice el testigo Martínez, que él no conoce campo llamado Paniagua y si sólo un parage: el lugar en donde estaban las taperas de Paniagua.

Agrega, también, que éstas estaban de este lado de un arroyito.

A qué lado se refiere: de que lado se considera que está él?

Si consideramos que en la ciudad de C.-Cuatiá prestó su declaración y nos atenemos al significado literal, resultaría que las taperas están al Este del arroyito: pero si tenemos presente que el testigo se estaba refiriendo á una época muy anterior, tal vez 20 años atrás, cuando él vivía y trabajaba en la Estancia Rincón, desde cuyo punto de vista miraba las cosas y más en especial las referentes á esos campos, entonces debemos necesariamente concluir que ha significado que estaban al Oeste, como es realmente la verdad, según resultará comprobada con otras declaraciones.

Viene en seguida el testigo Francisco Gutiérrez que prestó una declaración manifiestamente falsa.

Contestando la pregunta 5 del interrogatorio referido, dijo: «que sabe y le consta todo el contenido de esta pregunta, porque conoce personalmente, por haber estado allí *de paso*».

A la pregunta 3 de mi parte: si conoce Paniagua cué y donde está, dijo: «que conoce, que está en las Puntas, es decir, que es el campo que linda con Puntas, hoy de Labougle, y á la pregunta 4ª, si sabía donde estaba la población llamada «Paniagua cué» y si oyó decir que fue habitada por un señor Paniagua, contestó que no sabe. Tampoco sabe el límite Oeste del campo que él llama Paniagua, aunque á renglón seguido, dice que muchísimas veces y continua-



mente ha cruzado ese campo; pero que «nunca habló con nadie», y, que por referencias, sabe que se llama Paniagua, aunque no recuerda quién le ha dicho, y finalmente, dice que el arroyo Paniagua está un poco mas allá del San Luis y que ha visto el arroyo.

Como una muestra más de las agallas de este testigo, observaré que en sus contestaciones á la pregunta 11 de la contraria y á las repreguntas 2 de mi parte, dijo: que sabe y le consta, porque conoce personalmente, que los señores Furnus tienen el campo del Sauce; que nunca ha estado allí, que sólo pasó el año pasado, que no habló con nadie en el campo y que éste estará á cuatro leguas más ó menos del Sauce.

V. S. puede observar en el mapa de Sánchez y verá que linda con el éjido del Sauce, que la forma una legua cuadrada de tierra; luego, está á 20 cuadras de distancia.

El testigo Guillermo Rodriguez, aunque poco ilustrado, coincide con el testigo Martinez, al contestar la pregunta quinta citada. Dice: «que sabe que dentro del campo Rincón del Chañar, que linda con el que fué de D. Robustiano Lagraña, existe un parage llamado Paniagua, que lo sabe por oídas.

Repreguntado para que determine dónde está el parage llamado Paniagua y si sabe por qué toma ese nombre, dijo: «que sabe por haberlo oído decir, que Paniagua se llama el parage comprendido desde el arroyo Pairirí, hasta la línea del campo de Labougle: que ignora porque se llama así.»

Finalmente, viene la declaración del testigo señor Gauna, quién á (f. 407 vta.), 5ª pregunta de Lagraña y repregunta de Furnus sólo sabe que el Pairirí está más adentro que el Paniagua.



que éste es un accidente del arroyo Chañar, y que ha oído decir sobre el origen del nombre, que era porque existía allí una población de un Paniagua, en este pequeño accidente.

Por consiguiente, de los testigos de la contraria tenemos el siguiente resultado:

Señor Arévalo y Dr. Labougle, ignoran.

Señor Acuña y Gutiérrez, falsos.

Señor León Martínez, muy verídico.

Señor Rodríguez y Gauna, verídicos, pero poco ilustrados.

Examinemos las declaraciones de los testigos de Furnus, en lo pertinente al punto que estudiamos.

El Sr. Carlevaro, lo ignora.

El Sr. Espíndola, contestando (f. 361) á la pregunta formulada por mi parte, para que diga porqué se llama Paniagua, contestó: «que no sabe porqué le llaman arroyo Paniagua; al que tiene de por medio el arroyo del mismo nombre.»

El Sr. Puga, contestando (f. 336 vta.) á la pregunta 4ª de Lagraña referente al campo Paniagua, contestó: «que sabe que la fracción del campo Rincón del Chañar, que linda con el campo San Luis, es la llamada Paniagua, y que el arroyo Pairirí se encuentra más al Rincón; que esto le consta por haberlo oído decir á antiguos vecinos de ese paraje.»

Y contestando á la pregunta formulada por mi parte, para que diga porque se llama Paniagua el arroyo y campo así llamado, contestó: «que sabe por referencias de antiguos vecinos, que toman el nombre de un antiguo vecino y poblador de ese lugar que se llama Paniagua.»

Los señores Escalada y Aguirre lo ignoran también. El testigo Ibarrola, contestando á f. 385



vuelta, la repregunta 4ª de mi parte, inquiriendo por qué se llama Paniagua el arroyo y cuál es el campo, contestó: que el nombre viene de antiguo, ignorando porqué se llama así; «que siempre he oído que ese punto se llama «Paniagua cué»; que cree que el campo llamado Paniagua es el que está de este lado del arroyito, hasta dar con el campo de Labougle; é interrogado enseguida si sabe dónde está la antigua población ó puesto de Paniagua, al que se le decía «Paniagua cué», dijo que sabe, porque ha pasado por allí y ha visto que estaba situado en una abra del otro lado del arroyo Paniagua y como á quince ó veinte cuadras del arroyo Chañar: que allí estaba el puestito, al que le decían «Paniagua cué».

Como al final viene el postre, así le corresponde el turno al testigo Sr. Valenzuela, que nos da la clave de todas las declaraciones anteriores.

Interrogado (f. 379 vta.) para que diga á qué campo se llama Paniagua y si sabe porqué lleva ese nombre el campo y el arroyo así denominados, contestó: «que el campo llamado Paniagua está del otro lado del arroyo de ese nombre, como quien va al Pairirí, y que tanto el arroyo como el campo de referencia, toman ese nombre de un antiguo poblador de ese lugar, llamado Juan Tomás Paniagua: que esto lo sabe porque conoció personalmente á dicho Paniagua y ha estado en casa de él, que estaba del otro lado del arroyo».

Repreguntado en seguida, «si conoció el puesto Chamorro de la Estancia Puntas del Chañar, antes de ocupar Labougle este campo: dónde estaba ese puesto y á qué distancia de él quedaba la antigua población de Paniagua, contestó: «que conoció el puesto Chamorro, que distaba como tres cuadras de la casa de Paniagua y que esta-



ba situado del otro lado del arroyo Paniagua, como quien va para el Pairirí».

La situación del puesto Chamorro está marcada en el plano de Sánchez, aunque sin nombre: es el punto negro al O. del arroyo Paniagua.

Formulada por Lagraña, á este testigo, después de estas declaraciones, la célebre pregunta de si la fracción del Rincón, que linda con Puntas, es la llamada Paniagua y que Pairirí se encuentra más adentro, le contestó: «que sabe que el campo á que se llama Paniagua, está del otro lado del arroyo del mismo nombre, en dirección al Pairirí y que Pairirí se encuentra más adentro del arroyo Paniagua hacia el Rincón, y que esto sabe porque conoce esos campos desde 1889, según ya lo mencionó».

Pero, como en los banquetes, señor Juez, hay más de un postre, coronaremos éste con la declaración más lacónica, pero más elocuente y decisiva que se haya prestado respecto de este punto.

El Sr. Lagraña, formuló á este mismo testigo, otra repregunta, que no necesita contestación y que dice así: «si sabe y le consta quién era el dueño del «Rincón del Chañar» cuando Juan Tomás Paniagua *poblaba* ese campo.»

Y si Paniagua poblaba ese campo, que está del otro lado del arroyo, como quien va para el Pairirí y al que ha dejado su nombre, para perpetuar su memoria; ¿porqué la parte Lagraña sugiere á sus propios testigos, al igual que á los extraños la afirmación de que se llama «Paniagua» la fracción de campo que linda con «Puntas»; es decir, la que está del lado opuesto al paraje que aun ostenta las taperas de «Paniagua»?

Se animará aún después de esto la contraria á escupir al cielo, repitiendo lo dicho en el nú-



mero 10 de su contestación á la demanda, que, «lo que es de todo *falso* y no pasa de ser una verdadera *superchería* del actor es que entre los campos «Rincón del Chañar» y «Puntas del Chañar», estuviera ese «San Luis», su creación fantástica. La fracción que existe entre esos campos no es otra que Paniagua?»

Yo creo que así, Sr. Juez y V. S. verá que cuanto menos razones encuentren que exponer, con mayores y más finos calificativos, de la clase de los transcritos. llenará los claros.

Y qué más se puede exigir, si cada uno da en la medida de lo que tiene!

Ahora, veamos á qué campo llama «Paniagua» el Sr. Pozzi, en sus posiciones de Marzo de 1890.

Se le insinúa (f. 480) que confesara como era cierto que el Sr. Javier Lagraña le permitió ocupar, en 1883, la parte de campo «que linda con la propiedad de doña Flora L. de Labougle», así como que en esa fecha «ocupó esa parte del campo» etc., etc., contestó: «es cierto que el Sr. Lagraña le cedió un *retazo* del campo denominado «Paniagua» gratuitamente, sin determinar lindero, no recordando en qué fecha, y que lo ocupó la sociedad Furnus y Pozzi, con las haciendas que *pasaban* el «Paniagua» por ser campo abierto».

Se le preguntó en seguida: si en Julio ó Agosto del año próximo pasado (1889) alambró, sin permiso del Sr. Lagraña, la parte del campo que éste le había permitido ocupar, contestó: «que es incierto que el declarante haya alambrado el campo á que se refiere y agrega que el Sr. Furnus mandó alambra el campo, que dice ser de su propiedad *contiguo* al de «Paniagua».

Preguntado si escribió al Dr. Gómez, pidiéndole un plazo para desocupar, etc. dijo: «que es cierto que escribió al Dr. Gómez, pidiéndole un



plazo; que lo hizo igualmente con el Sr. Furnus, con respecto al campo del que le puso en posesión».

Si el campo que Furnus dice ser de su propiedad (que no era otro que el «San Luis», como ya quedó ampliamente demostrado) era «contiguo al Paniagua» y éste «lo ocupó la sociedad Furnus y Pozzi, con las haciendas que pasaban el Paniagua» (el arroyo se entiende), es evidente que el *retazo* de campo denominado «Paniagua» por el Sr. Pozzi, no era otro que el que está pasando el arroyo, del otro lado y contiguo al «San Luis».

No debe olvidarse que esta declaración la prestaba el Sr. Pozzi en 1890, después de tres años de haber desocupado ese campo «Paniagua», cuya ocupación le permitió Lagraña, siendo, en esa época, simple encargado del Establecimiento «San Luis», que tenía el Sr. Furnus en ese campo lindero á la propiedad de Labougle.

Dadas estas circunstancias, bien conocidas de Lagraña, era evidente que Pozzi, al hablar de campo denominado «Paniagua», se refería al contiguo al «San Luis», cuyo deslinde estaba definitivamente hecho desde 1884.

Y, así, hay identidad completa entre la designación de Pozzi, en sus posiciones, y las indicaciones de los testigos, referentes al campo llamado «Paniagua».

¿Cuáles son los límites precisos?

Esto constituye una dificultad de hecho, dada la situación precisa de los arroyos «Paniagua», «Pairirí» y «Chañar», sus cursos, la situación de las Estancias, la misma configuración del terreno, que hacía más conocida y transitada la parte próxima al Chañar y no al Pelado, la oblicuidad de las líneas divisorias del «San Luis» con «Rin-



cón» y «Puntas». y hasta la razón y motivo de la denominación dada á ese campo.

Lo natural es que se designen las poblaciones con los nombres de los pobladores y luego se vaya aplicando tales nombres al paraje, al arroyo, á cualquier accidente natural notable, hasta que, con el andar del tiempo, se aplique al campo mismo. como resulta evidente en el caso actual.

Y siendo campos baldíos. extensos. despoblados y sin deslindes. ¿cómo podríamos fijar cuáles eran los límites del campo llamado «Paniagua» en 1883?

Algunos testigos han dicho la más pura verdad: no han conocido campo sinó sólo paraje llamado «Paniagua». como tal vez ni hoy mismo haya quien llame ni sepa cuál es el campo «Pairirí», á que se referían Pozzi y la señora de Lagrãña en la carta de f. 10.

Pero, estando ocupando el campo «Puntas» y el contiguo hasta el arroyo «Paniagua» en 1882 y primer semestre de 1883, bien se comprende lo que quiere decirse. cuando la señora de Lagrãña escribe esa carta, diciendo: «con respecto al pedido que V. me hace de ocupar el «Pairirí», prestado ó arrendado»: así como cuando don Javier. en la carta á que aluden las últimas posiciones. le decía á Pozzi: «hablé con Manuel respecto al arrendamiento del campo y me contestó lo mismo que te contestó á vos mamá.... pero como te dije.... estate tranquilo». etc.

No podemos designar sinó límites vagos. hasta el arroyo «Pairirí» más ó menos.

Así se entendía y se ocupó. como ya vimos. hasta algo más allá. hasta una manga de palo á pique. que existe al Oeste de ese arroyo y que es el único cerco que las detenía por ese lado.

Y por el lado opuesto. hacia el Este. cuál era



el límite del campo. cuya ocupación se solicitó y concedió?

Ni más ni menos, siquiera, puede determinarse. porque sobre el mismo «Paniagua». que era el único accidente natural notable. que por ese lado existía, estaba, hacia el Oeste. del otro lado, como dicen, el Puesto Chamorro, perteneciente á la Estancia Puntas. como lo confesó el señor Lagraña en la posición 9ª y cuya situación se marca en el plano del señor Sánchez.

Este paraje ó lugar donde existía el Puesto Chamorro, que. según el testigo Valenzuela. distaba como tres cuadras de las ruinas de la población de Paniagua. estaba ocupado ya, con las haciendas de Furnus y Pozzi. antes y durante 1882 y parte del 83; luego. no podía referirse á él el permiso solicitado y concedido en Julio de 1883 al señor Pozzi.

Pero, vino la mensura de Scheffer en Agosto de 1883 y la de Carlevaro en Noviembre de 1884 y desde entonces quedó amojonada la actual y definitiva línea divisoria de los campos «San Luis» y «Paniagua». arrancando. por rara coincidencia, desde la desembocadura de éste en el Chañar. dejando exclusivamente el lugar donde estaba la población del Puesto Chamorro y las taperas de «Paniagua». dentro del campo «San Luis» y sobre la misma línea amojonada, quedando. por consiguiente, casi todo el campo ocupado por el Puesto, fuera de la línea; es decir, para el lado del campo Rincón».

En virtud de esto, cuando en 1887 se desocupó la fracción de campo cedida por Lagraña, que llegaba hasta el «Pairirí». se dejó libre también el campo en que pacían las haciendas del Puesto Chamorro.

Quedó también comprobado (núm. 14 de la



contestación á la demanda: pregunta 7 para los doctores Gómez y Labougle; demanda de Javier contra Pozzi; contestación dada por Pozzi á la posición 2 de 1890, etc.) que en 1889 el señor Furnus cercó esa línea divisoria.

Luego, es evidente que cuando en 1890 el señor Pozzi hablaba del campo llamado «Paniagua», no podía referirse á otro sinó al contíguo al que Furnus decía ser de su propiedad («San Luis»).

Y aun más; su claridad y precisión ha ido más allá de lo que humana y lógicamente ha podido usar, porque, pensando que una mínima parte de esa fracción, comprendida materialmente desde el arroyo «Paniagua» hasta el «Pairirí», quedó dentro de la línea del «San Luis», ha dicho que el señor Lagraña le cedió un retazo del campo llamado «Paniagua», lo que significa que él entendía que el campo «Paniagua» empezaba desde el arroyo mismo, lo que era lógico, desde que á muy corta distancia del arroyo, estaban las taperas que daban nombre á esos arroyos, paraje y campo.

Por consiguiente, queda completamente probado y con toda minuciosidad, que se llama «Paniagua» el campo que queda al otro lado, al Oeste del arroyo del mismo nombre: designándose así, en razón de haber habido un antiguo poblador de ese nombre, cuyas taperas, es decir, las ruinas de su población existen á corta distancia y hacia el Oeste del arroyo del mismo nombre, siendo el límite Oeste de dicha fracción de campo, más ó menos, el arroyo Pairirí, nombre que también se ha aplicado en la carta de fojas 10 á esa misma fracción llamada después, por Pozzi «Paniagua».

Dada la extensión de este minucioso y mo-

lesto examen de los hechos, se hace necesario, para mayor claridad, antes de pasar á estudiar el derecho, concretar los puntos principales, haciendo un resumen.



RESUMEN

DE LOS

HECHOS PROBADOS

Del examen prolijo que acabamos de hacer, en los capítulos anteriores, resultan alegados y probadas, en estos autos, los siguientes hechos de importancia capital y esencial, para la acertada resolución de ese litigio.

A

LAGRAÑA NO OCUPÓ «SAN LUIS»

DESDE ANTES DE 1882

HASTA AGOSTO 17 DE 1892

En el Capítulo XXVI, examinamos los actos posesorios que se dicen ejecutados por Lagraña, en el San Luis, durante ese término, y sólo encontramos:

1º Invocado por el señor Javier Lagraña (posición 15 fs. 348), la construcción del alambrado divisorio de la propiedad «Puntas», que, según





el documento de fs. 549, fué construído exclusivamente por el doctor Labougle, quien cobró después la parte correspondiente á la medianería, á los señores Lagraña, que le pagaron, así como una compostura posterior del mismo (contestación de Labougle á la pregunta 7 de Furnus fs. 557 vta.), lo que evidentemente no constituye acto de posesión;

2º Atribuído por el Dr. Labougle é invocado por el Sr. Lagraña, (posición 16, fs. 348 vta.) el corte de maderas en 1883, que resultó incierto, según el mismo Lagraña (idem) y el testigo Puga (pregunta 16 de Furnus, fs. 365);

3º Atribuído por el Dr. Gómez (pregunta 2ª de Furnus fs. 296 y 297), el permiso dado por Lagraña á Pozzi, lo que es materia de discusión en este juicio y V. S. va á tener que declarar que dicho permiso no se refería al «San Luis» sinó al «Paniagua»;

4º Atribuído por el testigo Guillermo Rodríguez (2ª repregunta de Furnus fs. 407), el desalojo mandado ejecutar contra Pozzi, que, como veremos, en lugar de acto de ocupación ó posesión es más de despojo.

Y nada más, lo que hace un total de *CERO*, que resulta ser la comprobación matemática de la exactitud del epígrafe.



FURNUS OCUPÓ «SAN LUIS»

DESDE ANTES DE 1882

HASTA AGOSTO 17 DE 1892

Como es natural, este punto es el polo opuesto del anterior.

Del examen hecho en el Capítulo IX, resulta probado que Furnus ocupaba, sin permiso de nadie, antes y durante el año 1882, el campo comprendido entre el de «Puntas» y el arroyo «Paniagua», al Oeste del cual estaba el «Puesto Chamorro», perteneciente á la Estancia Puntas.

Del Capítulo X, resulta que Furnus, en Setiembre de 1882, denunció en compra los patriolengos que resultaren en los campos del *Chañar*, denuncia que fué aceptada, y, en cuya virtud, se mensuró y deslindó, en 1883 y definitivamente en 1884, como excedente fiscal, el campo «San Luis», del cual se otorgó título de propiedad á favor de Furnus en 1893, como más detalladamente resulta del Capítulo IV.

Del Capítulo XI, resulta que Furnus, en Setiembre del 82, compró la parte que correspondía á los herederos Lagraña, en la sociedad que tenían Furnus y Lagraña, como capitalistas,



y Pozzi como industrial, en el campo «Puntas del Chañar», que continuó ocupándolo solo con Pozzi; éste con 740 vacas y él con 4480.

Del Capítulo XII, resulta que el Dr. Labougle, en Octubre de 1882, dió por recibido el campo «Puntas del Chañar», de parte de los Lagraña, en virtud de haberse entendido directamente con Furnus, (que acababa de comprar la parte de Lagraña) permitiéndole la ocupación del campo «Puntas», por un año más.

En los Capítulos XIII á XV, se ha demostrado ampliamente que, en 1883, Furnus ocupaba: 1° el campo «Puntas», que acabó de desalojar en Octubre, entregándolo al Dr. Labougle; 2° el campo «San Luis», donde trasladó sus haciendas, edificó poblaciones y estableció su Estancia, y 3° el campo contiguo, hasta el «Pairirí», sin permiso hasta el mes de Julio y con el permiso de Lagraña dado á Pozzi, su yerno y socio, desde dicho mes en adelante.

Resulta, también, que en Agosto de ese año 1883, se practicó la mensura del Sr. Scheffer.

Según el Cap. XVI, en 1884 se practicó la mensura del Sr. Carlevaro, que deslindó y amojonó el campo llamado «San Luis», por cuenta de Furnus y en virtud de la denuncia en compra que, de ese campo fiscal, tenía hecha al Gobierno de Corrientes, que aceptó y aprobó dicha operación en 1893.

Del Cap. XVII, resulta que en 1885 se levantó judicialmente el inventario, como perteneciente á la testamentaría de la señora Gutiérrez de Furnus, de los semovientes, muebles y materiales que constitufan el rancho de la Estancia «San Luis» y que fué adjudicado á fines de 1886, al heredero Luis Furnus, así como fué disuelta la sociedad con Pozzi.



En el Cap. XX, se acreditó que Furnus continuó siempre ocupando tranquilamente el campo «San Luis» en 1887 y 1888.

En el Cap. XXI, consta que, cuando Lagraña demandó á Pozzi, en Febrero de 1889, ante el Juzgado de Paz, Pozzi le contestó que no era más que encargado de Furnus, que sedecía dueño del campo, que ocupaba entonces y que debían entenderse con él.

Según los Caps. XXIII y XXIV, Furnus continuó la posesión tranquila del «San Lus», durante esos años de 1889 á 1891. habiendo nombrado, en Abril de 1890, mayordomo de su Estancia «San Luis» al Sr. Puga en reemplazo de Pozzi, resultando también probado que manifestó haciendas y pagó impuestos correspondientes en Receptoría.

En el Cap. XXV, se probó que José Luis Furnus, en nombre de los herederos de Furnus, ocupaba el «San Luis», en Agosto de 1892. fecha del despojo, entre otras haciendas, con las llevadas allí en Abril de 1891 y á principios de Agosto de 1892. y cuya propiedad acreditó en el acto del despojo, ante el comisario executor, exhibiéndole el correspondiente certificado.

Por consiguiente, también resulta acreditada en autos una ocupación del campo «San Luis» de parte de Furnus, de más de *diez años* de duración, en la forma que indica el epígrafe, cuya exactitud queda, así, establecida.

«PANIAGUA» ES EL CAMPO COMPRENDIDO

ENTRE

EL «SAN LUIS» Y EL ARROYO «PAIRIRÍ»



De lo expuesto extensamente en el Cap. XXVII, resulta que, tanto la información de testigos antiguos y bien ilustrados al respecto, cuanto el reconocimiento mismo de la parte contraria, no dejan la menor duda de que al Oeste del arroyo designado con el nombre de *Paniagua*, en los mapas ó planos exhibidos, poblaba hace medio siglo, un señor Juan Tomás Paniagua, quien dejó su nombre á ese arroyo, al paraje ó lugar en que vivió y más tarde al campo mismo.

Su límite Este, es natural que sea el arroyo del mismo nombre. á pocas cuadras del cual y del «Chañar», estaba la población que fué de Paniagua.

En cuanto á su límite Oeste, se ignora, por que va hasta el arroyo Pairirí, llamándose también, como es consiguiente y costumbre, campo Pairirí, al que está próximo á este arroyo, y al que se refirieron: la Sra. de Lagraña y el Sr. Pozzi, en la carta de f. 10 y el Sr. Javier Lagraña, en la de f. 444, reconocida á f. 445.

Queda también comprobado que Pozzi, en sus posiciones de 1890, llamó «Paniagua» al campo lindero al «San Luis» (según la línea dada por Carlevaro en 1884) y que va hasta el arroyo «Pairirí».

A los efectos de este pleito, el campo llamado «Paniagua» y también Pairirí, es, pues, el que expresa el epígrafe.



LAGRAÑA CEDIÓ Á POZZI, EN 1883, EL «PAIRIRÍ»

DESOCUPADO, CON EL «PANIAGUA»,

HASTA LA LÍNEA DEL «SAN LUIS», EN 1887.

En el Cap. XV, quedó acreditado, sin haber lugar á duda alguna, que, estableciéndose Furnus y Pozzi en el campo «San Luis», á donde iban trasladando sus haciendas, que no cabían, Pozzi solicitó permiso de la señora de Lagraña, para ocupar el Pairirí (carta de f. 10). el que no le fué concedido.

Un mes después, el Sr. Javier Lagraña concedió el mismo campo negado por su señora madre (carta f. 444) y que ya se ocupaba, en esa época, con las haciendas que se trasladaban de las Puntas.

Resulta, así, que el campo cedido por don Javier fué el comprendido entre el ocupado por Chamorro (Puesto de la Estancia Puntas) y el arroyo «Pairirí»; es decir, el campo al cual Pozzi y mi parte llaman «Paniagua» desde 1890, con el límite Este dado por Carlevaro en 1884.

Del examen hecho en el Cap. XIX, resulta también probado que dicho campo «Pairirí ó Paniagua» (pues, ambos nombres se usaron y pueden usarse, según los antecedentes recordados), se desocupó, por Pozzi, en los primeros meses de 1887, cuando se disolvió la sociedad con Furnus (por la liquidación de la testamentaria de su esposa) y empezó á poblar los campos de Barrientos y Sauce, en donde aún conserva sus Estancias.

Luis Furnus quedó siempre ocupando exclusivamente «San Luis», ya mensurado, deslindado y amojonado desde 1884 y alambrado en 1889.



E

FURNUS FUÉ DESPOJADO DE «SAN LUIS», EN 17 DE AGOSTO DE 1892, EN VIRTUD DE ORDEN JUDICIAL DIRIJIDA CONTRA POZZI Y FUNDADA EN EL PERMISO DADO EN 1883, REFERENTE AL CAMPO «PAIRIRÍ» Ó «PANIAGUA», DESOCUPADO EN 1887.

Del estudio hecho en el Capítulo XXV, resulta que está comprobado en autos que, en la fecha del despojo, el campo de referencia estaba ocupado con haciendas, cuya propiedad, así como del campo, casas, etc. invocó y acreditó José Luis Furnus, con quien se entendió exclusivamente el desalojante.

De las constancias de los testimonios allí citados, así como de la protesta de fs. 86 (emb. prev.), consta, también, que la orden judicial iba dirigida contra Pozzi y no contra Furnus.

En el Capítulo siguiente, trataremos más en detalle, y, especialmente, bajo su faz jurídica, lo referente á ese juicio, en el que se ordenó el *despojo*, origen de este pleito.

DERECHO

JUICIO DE DESALOJO CONTRA POZZI



Tanto el nombre, como el procedimiento observado en el pleito que por desalojo siguió Lagraña contra Pozzi, desde 1889, ante el Juzgado Federal de Corrientes, demuestran que fué un juicio sumario, un interdicto.

En los §§ V y VI del escrito de fs. 55, mi parte examinó el alcance jurídico del art. 579 del Código de Procedimientos, llegando á la conclusión de que lo resuelto en el juicio sumario, deja siempre á salvo el derecho á discutirlo en juicio ordinario.

Esta es la razón de la iniciación de este pleito en la presente forma y excuso repetir en esta oportunidad lo dicho entonces. que V. S. hará el bien de tenerlo presente.

Hoy, en este juicio ordinario, volvemos sobre lo hecho en aquel juicio sumario: la justicia de la sentencia que ordenó el desalojo, está en discusión y, en tal virtud, la debo examinar á la luz de los antecedentes que resultan definitivamente alegados y probados en estos autos.

Una razón más principal hay aún.

Aquel interdicto se siguió contra el señor Pozzi únicamente, mientras que este juicio lo ini-



ciaron todos los herederos de Luis Furnus, que no fueron jamás citados, ni oídos, ni intervinieron en aquel litigio, como resulta del certificado de fs. 263 vta., expedido por el Secretario Actuario en aquellos autos.

Esto es evidente y basta.

Examinemos lo alegado, probado, resuelto y ejecutado en este «interdicto de desalojo ó de precario».

La demanda (cuyo testimonio corre á fs. 264) se inició en Noviembre de 1889 y en ella se dijo:

1º «Que el Rincón del Chañar.... *linda* por un costado con la propiedad de doña Flora L. de Labougle.

Según vimos en el cap. IV, el campo «San Luis», que separa ambas propiedades, fué definitivamente mensurado, deslindado y amojonado por el señor Carlevaro en 1884.

Luego, no ha podido decirse, cinco años después, sin incurrir en falsedad, que el Rincón *linda* con Puntas.

2º Que Pozzi le pidió y Lagraña le permitió ocupar una parte del Rincón, «en el paraje que linda con la propiedad de la señora de Labougle».

También falso, según queda comprobado en el cap. XV, del que resulta que el permiso se refirió al campo que va desde el «Paniagua» hasta el «Pairirí».

3º Que Pozzi es un tenedor precario de la fracción de campo que ocupa y, por consecuencia, dicho interdicto procede contra él y así se entabla la acción «contra el referido don Carlos Pozzi».

Se acreditó plenamente que el permiso se refirió al campo «Pairirí ó Paniagua» (cap. XV y XXVII) que se desocupó al empezar 1887 (cap. XIX).



¿Qué campo ocupaba Pozzi en la fecha de la demanda?

Exclusivamente el «San Luis», como encargador de la Estancia de Furnus (cap. XX á XXIII) y por tanto era tenedor precario, pero respecto de Furnus, no de Lagraña, como se lo manifestó el mismo Pozzi, en Febrero de ese año, ante el Juzgado de Paz, como se expresa en la misma demanda que examinamos, lo que prueba el conocimiento que de tal circunstancia tenía Lagraña, al demandar á Pozzi el «campo que ocupa.»

4º Que requerida la entrega del campo, para traspasarla al Dr. Gómez, á quien habían arrendado, Pozzi se resistió después de escribir una carta al Dr. Gómez, reconociendo el permiso y pidiendo plazo etc., etc., etc., y que esto sucedía en Febrero de ese año 1889, y que entablaba la acción contra Pozzi, porque tenían que entregar el campo al Dr. Gómez etc., etc.

Confusión maliciosa y falsa porque cuando Pozzi escribió la carta al Dr. Gómez en 1886, (Cap. XVIII), ocupaba el campo desde Paniagua hasta el Pairirí, objeto del permiso, mientras que en 1889, ya no tenía ese campo, y la carta jamás se refirió al «San Luis», en donde estaba entonces á nombre de Furnus.

Además, era falso que tuvieran, en 1889, que entregar campo alguno al Dr. Gómez, cuando, según las preguntas 8 á 10 del interrogatorio de Lagraña á ese testigo y las declaraciones de éste, el contrato de arrendamiento se rescindió en el año 1886.

5º. Que, haciendo constar de paso que en Julio ó Agosto de ese año 89, Pozzi, contra su voluntad y sin consultarles, hizo alambrados en el campo, concluye diciendo que entablan «el inter-



dicto de desalojo ó de precario, que es un interdicto restitutorio, que puede contarse en el número de los interdictos recuperando possessionis, lo que es un par de absurdos, desde que el juicio de desalojo es distinto del interdicto de precario, que no es recuperando possessionis.

Total: cuatro falsedades y un par de desatinos jurídicos, fueron la base de la demanda iniciada por Lagraña contra Pozzi, ante el Juez Federal de Corrientes.

Pero, veamos la luminosa prueba producida por el actor y que, sometida á la sana crítica, fué considerada suficiente por el señor Juez Federal.

Consisten en (véase el Cap. XXII):

1º La carta de Pozzi al Dr. Gómez, que se refería, no al campo ocupado por Pozzi en 1889, sinó al ocupado en 1886, cuando fué escrita, y el cual se desocupó totalmente á principios de 1887, como ya se ha visto en los capítulos XVIII y XIX.

2º Las posiciones absueltas por Pozzi, que ya hemos visto se referían claramente al campo llamado «Paniagua» (cap. XXVII).

3º Las declaraciones de varios testigos: dos de los cuales, el doctor Gómez y el señor Acuña, son convencidos de falso testimonio, como resulta de la simple lectura de sus declaraciones en 1890 y las actuales. Los demás, sabios en no presentarse hoy, son de la misma medida, según puede verse fácilmente leyendo sus declaraciones y teniendo presente la verdad de los hechos hoy bien comprobados.

4º Y finalmente, también acompañaron entonces los títulos de propiedad del «Rincón del Chañar», en donde consta que linda con la propiedad de Labougle!

Y no obstante todo este cúmulo de inexacti-



tudes, se dictó sentencia, condenando á Pozzi á desalojar la fracción de campo que linda con Puntas!

Se dirá, tal vez, que la falsedad resulta visible y evidente hoy, pero que el Juez Federal entonces, tuvo que fallar, según lo alegado y probado en autos, no estando obligado á saber la verdad que la parte de Pozzi no acreditó.

Pero, á esto contestaré que, según las mismas constancias de las autos, que tuvo presente el Juez doctor Lujambio y haciendo completa abstracción de lo alegado y probado hoy, no era posible dictar tal sentencia, si se hubiera juzgado con el criterio imparcial y recto que deben usar los magistrados, que tienen la augusta misión de dar á cada uno lo que es suyo.

En el mismo escrito de demanda, Lagraña decía: «varias veces le he pedido el desalojo del campo; pero, el señor Pozzi ha guardado siempre silencio, resistiendo de esta manera mi pedido».

Algo más adelante, agregaba: «Pozzi, al tener conocimiento de nuestro contrato con el señor Gómez, escribióle una carta».... la que prometió presentar, como la exhibió después, cuyo testimonio corre á f. 182. y en la que V. S. observa lleva la fecha Junio 24 de 1886.

«Exijí (continúa la demanda) el desalojo á fin de cumplir nuestro contrato con el Dr. Gómez; pero, el Sr. Pozzi no quiso desalojar el campo y me obligó á demandarlo ante el Juzgado de Paz de Curuzú-Cuatí».

«Esto sucedía en Febrero del corriente año (la demanda es de Noviembre del 89).... el señor Pozzi contestó.... no era allí más que un simple encargado de don Luis Furnus, que dice ser dueño del campo, con quien en todo caso debía entenderse la demanda».



Por consiguiente, de solo las manifestaciones hechas por Lagraña en su demanda y la carta exhibida por ellos, resulta:

1° Que el contrato con el Dr. Gómez fué en 1886;

2° Que las exigencias de desalojo del campo á fin de cumplir ese contrato y las varias negativas de Pozzi fueron desde 1886 en adelante;

3° Que demandado, en Febrero del 89, el Sr. Pozzi manifestó que allí solo era encargado de Furnus, que se decía dueño del campo.

Luego, aun en la fecha de la demanda ante el Juzgado de Paz, el Sr. Pozzi, con sus negativas de 1886, ya habría adquirido la posesión en contra de Lagraña, aun cuando hubiera sido antes tenedor precario respecto de ellos.

Silenciar esta circunstancia ó resolver en sentido contrario, significa simplemente ignorancia de la disposición legal contenida en el art. 2458, del Cód. Civil.

Pero aun más: Pozzi manifestó que Furnus se decía dueño del campo en el que él sólo era encargado. Luego, el verdadero poseedor, á cuyo nombre tenía la cosa, que se negaba á desocupar desde 1886, era otra persona, que no aparecía citada ni oída en juicio.

Prescindir de esta circunstancia es también acusar ignorancia de lo dispuesto en los artículos 2464, 2465 y 2467 del Código citado.

Legalmente, pues, no ha debido dictarse aquella sentencia, aun teniendo presentes, exclusivamente las constancias del escrito de demanda y la carta al Dr. Gómez, exhibida por Lagraña.

Si la misma demanda, bien interpretada jurídicamente, contenía los motivos que autorizaban su rechazo ¿con qué objeto iba á seguirse un juicio perdido al iniciarse, cuando es regla vul-



gar del derecho procesal, que, en rebeldía de una parte, la otra sólo adquiere lo que solicitare si fuera justo? (art. 434 del Código de Procedimientos de la Capital y 185 de la ley Nacional).

Si después de esto observamos la prueba testimonial producida, la que se refiere al permiso gratuito acordado á Pozzi en 1883, veremos que en nada modifica esos hechos contrarios, consignados en la demanda, por el mismo interesado.

Peor aún si examinamos las posiciones absueltas por el Sr. Pozzi, quien confesó que el permiso de Lagraña se refería al campo «Paniagua», que está contiguo al que Furnus decía ser de su propiedad, el cual, según el mismo Lagraña, estaba ocupado por Pozzi, quien había dicho, al demandársele su desalojo, era simple encargado de Furnus.

Estos hechos fundaban perfectamente, ante cualquier criterio imparcial y en presencia de las disposiciones legales recordadas, el rechazo de la demanda, y si el Juzgado no lo hizo así, no fué porque se ignoraran ó se olvidaran tales disposiciones, sino porque no se quizo aplicarlas, como luego resultará evidenciado.

El Sr. Pozzi presentó un escrito recordándolas y acompañó una carta del señor Furnus, confirmando su carácter de mero encargado suyo.

La contraria exhibe hoy un testimonio de un auto del Dr. Lujambio, de Abril 24 de 1890, en el que se resolvió no hacer lugar á la petición del demandado Sr. Pozzi, y un certificado al pie, haciendo constar que fué consentido, sin duda con el propósito de alegar hoy que no se tomó en consideración, tal escrito, por el Juzgado.

A mi parte nada le importa eso, desde que bien manifiesto resulta que sólo se atendió lo favorable á Lagraña, aun cuando no fuera justo.



Para la moral del cuento, me basta hacer observar al Juzgado que ese escrito, cuyo único objeto fué, á más de cumplir lo dispuesto en el artículo 2464 del Código Civil, recordar algunas disposiciones legales, que se presumen legalmente sabidas y no olvidadas y especialmente por los que están para administrar justicia, quedó agregado en autos, formando parte de las constancias que ha tenido presentes el Juzgado al dictar aquel fallo.

Y tan presentes las tuvo el Juez, que hasta las extractó en los resultandos de su sentencia, para mayor escarnio de los derechos, cuya violación ordenaba, fundado en los considerandos más absurdos y anti-jurídicos que imaginar se puede.

Su primer considerando, dice: «que se ha comprobado en autos que el Sr. Lagraña cedió gratuitamente al Sr. Pozzi el *campo en cuestión*».... y esto resulta, no solamente de las afirmaciones y pruebas de la parte demandante, sino *especialmente* de la *confesión* del demandado..... donde dice que es cierto que el Sr. Lagraña le cedió un retazo del campo denominado «Paniagua».

¿Determina el Juez cuál era el campo en cuestión?

Sólo lo hace en la parte dispositiva, indicando precisamente aquel campo que Pozzi, en la parte de su confesión omitida por el Juez, dijo que era contiguo al Paniagua y que Furnus decía ser de su propiedad y en el que él decía (según la demanda) era simple encargado de éste.

¿Cómo se explica que el Juez Federal funde su considerando «especialmente en la confesión del demandado», como lo afirma, para condenarlo á una cosa distinta de la confesada y cuando esta confesión hace la distinción clara de ambas cosas?



Sólo se explica por ignorancia ó malicia, y el Juez Dr. Lujambio, no es ignorante.

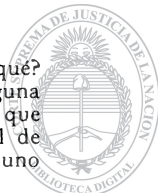
El segundo considerando es un galimatías jurídico, especialmente escrito para ayudar las pretensiones de Lagraña.

Como curiosidad jurídica y para un pequeño salaz del espíritu (!) voy á transcribirlo:

«Que siendo su posición (de Pozzi) la de un *comodatario precario* (1-!), no puede eximirse de la obligación de *restituir* la cosa, que recibió en préstamo, al comodante, alegando que éste *perdió* la posesión (!-2) ó que *no la tuvo* nunca (!-3), porque Farnus hace ocho años *está* en posesión de esos campos; lo cual, si *fuera cierto*, no es un motivo ni una razón que funde su negativa (!!!-4), desde que no le es permitido ampararse de derechos que no le son propios, para eludir la obligación que contrajo de *devolver* la cosa á aquél que gratuitamente se la prestó, para que la usara hasta que le fuera pedida (!!-5). Que constatado como queda el *préstamo* entre Lagraña y Pozzi, es *evidente* que aquél tenía la *posesión* del campo en cuestión (!!-6) porque de lo contrario Pozzi no se lo hubiera pedido ni Lagraña hubiera podido hacerle la tradición de él, *como lo hizo éste* (!!!-7), además del *título de propiedad*, agregado á estos autos, que da el *derecho de posesión* (!!!-8) al demandante; y, por consiguiente, el *interdicto de desalojo es procedente* (¿y el de *precario*? !!!!!-9).

El arte debe exhibirse desnudo: me abstengo de comentarios.

«Por estos fundamentos, fallo (dijo el Juez Dr. Lujambio): condenando á don Carlos Pozzi á la restitución del campo que el señor Lagraña le cedió en préstamo..., entre los siguientes límites: Flora Lagraña de Labougle»....



Pozzi apeló y no mejoró el recurso, por qué?

Porque no creía que no fuera cierto, alguna vez, lo que decía el Dr. Damianovich de que «los jueces no tienen ningún interés, sino el de la justicia, que es precisamente dar á cada uno lo que es suyo».

Porque jamás pensó que, no teniendo él el campo que se le obligaba á entregar, se llegaría hasta despojar violentamente á Furnus, del que ocupaba como propietario y poseía públicamente desde *ocho años* antes, como dice la misma sentencia!

Cómo se cumplió aquel fallo, lo tiene V. S. en el testimonio que sigue al de la sentencia aludida, en el que se transcribe la diligencia del comisario ejecutor, así como en la protesta de fs. 86 á 89, en la que constan las notas respectivas etc. á todo lo cual ya he hecho referencia en el capítulo XXV, y de lo que resulta que el desalojo ordenado contra Pozzi, se cumplió con el despojo efectivo de Furnus, que no fué citado ni oído ni parte, en ese juicio.

Resulta, así, comprobado hasta la evidencia la falta de fundamentos de hecho, en aquel juicio seguido contra Pozzi y la carencia absoluta de razón legal, para darle la solución que tuvo, y mucho peor aún, la ejecución.

Se falsearon los hechos, por el mismo Juez que tenía el deber de apreciarlos á la luz de la sana crítica, se torció la ley, por el mismo que, haciendo profesión de interpretarla prácticamente, estaba obligado á saberla y aplicarla como corresponde, y se despojaron, á terceros extraños, de sus derechos, bien conocidos por el mismo investido de autoridad pública para asegurar su inviolabilidad.

Todo aquel juicio es una iniquidad, una ofensa

á la Justicia, que hasta por honor á la civilización, que sin ella no puede haber, V. S. debe repararla.

Es cierto que el despojo efectuado á la sombra de la autoridad judicial, debe ser considerado, por una razón de orden público, como una inocente desposesión, porque los jueces no pueden ser sospechados de cometer tales violaciones del derecho: pero, cuando la rectitud de un Juez, como en el presente caso, resulta comprometida, los llamados á desagraviar la ofensa hecha á la inviolabilidad y seguridad de los derechos, también se encuentran más obligados á juzgar tales actos injustos con mayor severidad, haciendo cargar todas sus consecuencias, aún las remotas, sobre los culpables ó los que se han hecho responsables de ellas.





DERECHO DE POSESIÓN



ACCIÓN POSESORIA POR RESTITUCIÓN

Se ha dicho, en el § VII del escrito de f. 55, cuál era la acción promovida en este juicio, y evitaré repeticiones refiriéndome á lo allí consignado y á sus referencias.

«Fundo mi acción (decía entonces) en la posesión que teníamos yo y mis hermanos, de un inmueble; posesión que reunía todos los caracteres legales exigidos por el Código Civil, para habilitarme á entablar esta *acción posesoria* en los términos del art. 2473, y *por restitución* (2487) porque hemos sido desposeídos.

«Fundo mi acción en la posesión amplia, completa, con todos los requisitos legales que constituyen el *derecho de posesión*», que, según lo expuesto en el § VI, es la base de la presente acción.

¿Debo acreditar que la posesión, en ciertas condiciones, es un derecho?

En el § X del citado escrito de f. 55, quedó así demostrado y solo mencionaré, á mayor abundamiento, lo expuesto: por el Dr. W. Escalante, en sus «Lecciones de Filosofía del Derecho», en el capítulo de la posesión; por Ihering, en el capítulo «La posesión. Teoría simplificada», de sus «Cuestiones jurídicas», tradu-



cidas por Adolfo Posada, y por mí, en el informe in-voce, pronunciado en este mismo asunto ante la Excma. Cámara.

¿Necesito recordar también, que el derecho de posesión es la base de la presente acción posesoria?

En el § XII del mismo escrito, quedó también comprobado, que ésta no es más que el ejercicio judicial de aquél.

En consecuencia, debo concretarme á examinar si los actos de ocupación ejecutados por Furnus, en el campo San Luis y que ya quedan comprobados ampliamente, tienen el significado y reúnen las condiciones legales necesarias, para que constituyan el derecho de posesión, invocado como fundamento de esta acción.

El art. 2373 del Código Civil, dice que «La posesión se adquiere por la aprehensión de la cosa, con la intención de tenerla como suya»....

El 2374, agrega: «La aprehensión debe consistir en un acto que, cuando no sea un contacto personal, ponga á la persona en presencia de la cosa, con la posibilidad física de tomarla».

El 2382, dice que la posesión de inmuebles, no consintiendo el actual poseedor, en su transmisión, se toma «por la ocupación ó por el ejercicio de actos posesorios....»

Y el 2384 indica que «Son actos posesorios de cosas inmuebles: su cultura, percepción de frutos, su *deslinde*, la *construcción* ó reparación que en ellas se haga, y, en general, su *ocupación* de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en alguna de sus partes».

Como la posesión invocada y probada por Furnus comprende diez años largos, ¿qué necesidad hay de averiguar si antes de esa época, Lagraña fué ó nó poseedor de esa fracción de campo llamada San Luis?



La verdad es que no se ha invocado ni probado que hubieran ejercido jamás acto alguno de ocupación ni posesión sobre ese campo, fuera de la mensura de Caballero y las gestiones que se hicieron ante el Juzgado de Corrientes, á ese respecto, por el año 1858 y meses después, desde cuya fecha durmieron esas gestiones.

Por esto es que admito y parto siempre de la hipótesis de que ellos hubieran sido poseedores antes de 1882. lo que, en realidad, no se ha discutido y mi parte ni admite ni niega, en esta oportunidad, porque carece de objeto.

Ante estas disposiciones legales, aplicadas más de una vez por los Tribunales, tanto de la Capital como Federales y que, aunque tengo á la vista, no voy á molestar á V. S. con sus citas, y lo comprobado en los diversos capítulos, cuyo resumen encontrará en el XXVIII, letra B. ¿puede negarse que Furnus haya ocupado y ejecutado actos posesorios, durante más de diez años continuos, en ese campo San Luis?

En él construyó poblaciones, corrales, tajamares, alambrados, mangas de ramas, etc., desde 1883 por lo menos, como reconoce en las posiciones el mismo señor Javier Lagraña, confesando que aun existen algunas de estas cosas.

En él tuvo su Estancia, con ganados vacunos, yeguarizos y ovinos, (en parte comprados á Lagraña) desde 1882 hasta el despojo, sin interrupción alguna.

En dicho campo se han practicado, por cuenta de Furnus, en 1883 y 1884, dos mensuras, que *deslindaron* y *amojonaron* el actual campo San Luis.

La *ocupación* material, la ejecución de actos posesorios, resulta, pues, perfectamente comprobada en autos.



Sólo nos falta examinar si ellos son capaces de constituir el derecho de posesión.

¿Cuáles son las condiciones que, según la ley, deben llenar los actos posesorios acreditados para que proceda la acción posesoria por restitución, ejercitada en estos autos?

El art. 2473 del Código Civil, establece: «El poseedor de la cosa no puede entablar acciones posesorias, si su posesión no tuviere á lo menos el tiempo de *un año*, sin los vicios de ser *precaria, violenta ó clandestina*».

Basta enunciar estas condiciones, en presencia de los antecedentes, que quedan comprobados, para observar la circunstancia de que queda evidenciado su amplio cumplimiento.

La primera condición: un año.

De autos resulta, que se ha empezado la prueba de la posesión de Furnus desde antes de 1882.

Si la ley sólo exige el año anterior al 17 de Agosto de 1892, creo que no hay necesidad de fijar en qué día y mes, antes de 1882, empezó la posesión.

Se ha justificado plenamente la posesión de más de diez años; el décuplo de lo que la ley requiere.

Aun más: no sólo no se ha alegado de contrario ni probado, que la posesión anual precedente á Agosto de 1892, haya sido interrumpida, como preve el art. 2481 del Código Civil, sino que de autos resulta que esa posesión de Furnus, ha sido continua, sin la más mínima interrupción, durante la referida década.

Además, el doctor Vélez, en la nota á ese art., dice: «La posesión que ha durado un año no puede ser interrumpida por actos aislados,



puede serlo solamente por una posesión de un año igualmente no interrumpida».

Si la demandada ni siquiera ha alegado la ejecución de actos aislados, menos podría haberla tenido durante el año necesario para interrumpir la posesión anual de Furnus.

Como el derecho aplicable es sumamente claro, voy á ser breve, concretándome á las referencias principales y decisivas.

A este respecto, recordaré las disposiciones de los artículos 2445 y 2446, á fin de evidenciar que Furnus continuaba siendo siempre el poseedor, aunque en los últimos años permaneciera continuamente en esta capital y continuara su posesión, por medio de otros: Pozzi, Puga ó sus hijos.

La segunda condición: no sea precaria.

El art. 2480 prescribe terminantemente que: «la posesión, para dar derecho á la acciones posesorias, no debe ser precaria sinó á título de propietario».

Aunque el Dr. Vélez, en la nota á este artículo, dice, que «la palabra *precario* tiene hoy una significación más extensa que la que le daba el D. Romano», sin indicar con precisión cuál es el alcance que él le da, sin hacerlo tampoco los Dres. Llerena y Segovia, que han comentado estas disposiciones y lo que tendrá que deducirse de un estudio extenso de los diversos contratos que tienen relación con esta materia, creo que, en lo pertinente á la cuestión *sub judice*, las disposiciones de los arts. 2351 y 2352 del Código Civil, nos definen perfectamente lo que importa tal condición.

La primera establece que «habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, por sí ó por



otra, tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad».

La segunda, «el que tiene efectivamente una cosa, pero *reconociendo* en otro la propiedad, es simple tenedor de la cosa y representante de la posesión del propietario, aunque la ocupación repose sobre un derecho».

Se deduce de esto, que se llama posesión precaria á la simple tenencia ó posesión de hecho, á la ocupación material que tiene aquél que reconoce en otro la propiedad y se considera representante de la posesión del propietario; es decir, que la ocupa en nombre de otro y para otro.

Luego, aquel que tiene una cosa, no para otro, sino para sí: no considerándose representante de otro sino con el fin de aprovecharla para sí, sin permiso y aun en contra de la voluntad del que él sepa que es verdadero propietario, ya no es poseedor precario, sino á título de dominio, porque tiene la intención de apropiarse el beneficio ó provecho, que pueda sacar de la posesión de la cosa.

El se cree, en tal caso, propietario del uso y goce de la cosa, lo que es el objeto exclusivo de la posesión, y hace que ésta ya no sea precaria.

Y si agregáramos al poseedor no sólo la intención de apropiarse de los beneficios de la posesión, sino de la cosa misma, en propiedad absoluta, con mayor razón no será precaria tal posesión.

Y aquí tenemos el *animus domini*, que es la segunda condición esencial, requerida en el poseedor, para que su posesión no sea simple tenencia, posesión de hecho, sino que, con otras



condiciones, pueda constituir la posesión de derecho; es decir, el derecho de posesión.

En el § X del escrito de fs. 55, se habla de este punto, y no creo necesite ampliaciones.

En tal concepto, dados los antecedentes comprobados en autos, ¿puede decirse que la posesión de Furnus haya sido precaria?

Absolutamente, nó:

1º Porque los testimonios referentes á la denuncia hecha ante el Gobierno de Corrientes en 1882, la aceptación de éste, perfeccionando el contrato de compra-venta de los terrenos fiscales resultantes, la mensura, deslinde y amojonamiento practicados, en consecuencia, en 1883 y 1884, de ese campo poseído por Furnus y que resultó ser patriolengo, y toda la discusión y tramitación posterior hasta 1893, fecha en que se otorgó el título de propiedad, demuestran que Furnus se consideraba propietario de ese campo (y de lo cual tenía conocimiento Lagraña, desde 1883 por lo menos, hasta el acto mismo del lanzamiento por la fuerza pública en 1892), así como hoy sus herederos continúan considerándose tales.

2º Porque tal intención, tanto de poseer para sí, como de considerarse dueño del campo, además de las referencias de los autos que acabo de citar, consta, de una manera fehaciente, en actos públicos, ante el Juzgado de Paz de Curuzú-Cuatíá en 1889 y en los autos de desalojo contra Pozzi en 1890, etc.: es decir, desde más de tres años antes del despojo, teniendo Lagraña conocimiento perfecto de ello.

3º Porque ni Luis Furnus ni sus herederos,



jamás han pedido permiso á los señores Lagraña. ni éstos han pretendido haberlo otorgado, para ocupar ó utilizar parte alguna de campo y menos el San Luis. á que se refiere este juicio, cómo resulta de la posición 3ª y contestación de fs. 343 y 346 vta. y las preguntas 11 y 10 de los interrogatorios de fs. 489, 550 y 387 de la contraria.

Respecto del permiso invocado por Lagraña al contestar á fs. 347 vta. la posición 9 de fs. 344. ya se demostró su falsedad en el Capítulo IX.

4º Porque la contraria. á quien incumbe la prueba. respecto de tal vicio. ni ha alegado ni ha intentado probar absolutamente nada al respecto.

Es cierto que alegan que dieron permiso á Pozzi. haciendo de ello la base de la demanda de desalojo: pero. ya quedó demostrado en diversos Capítulos. que el permiso no sea refería al San Luis. Además. Pozzi no es heredero de Furnus sino desde un mes y medio antes del lanzamiento. habiendo dejado de ser su socio desde 1886. es decir. seis años antes.

Aun en la hipótesis de que Lagraña hubiera dado permiso á Pozzi para ocupar el San Luis y. por consiguiente. á título precario. y después hubiera pasado la tenencia ó posesión de ese campo á Furnus. éste tendría la posesión. porque tal acto de Pozzi habría importado la desposesión de Lagraña. según lo dispuesto en el art. 2458 y sus concordantes del Código Civil. como ya también se ha hecho notar en el Capítulo XXIX.

En consecuencia, la posesión de Furnus no era precaria sinó á título de propietario.



La tercera condición es que no fuera violenta, así como la cuarta, que no haya sido clandestina.

Los arts. 2365 á 2371, 2478 y 2479 del Cód. Civil, con sus notas del Dr. Vélez y comentarios de los Dres. Segovia y Llerena, definen lo que se entiende por violencia y clandestinidad en la posesión, que, á los efectos del ejercicio de las acciones posesorias, no deben existir durante el año que la ley exige.

Siendo evidente la falta de estos vicios, desde que de autos resulta que la ocupación empezó diez años antes, á vista y paciencia y sin oposición de Lagraña y con las mismas haciendas compradas por Furnus á ellos, y que ese campo San Luis se cruza íntegro, de Este á Oeste, al ir hacia la Estancia Rincón, como lo cruzan sus propietarios infinidad de veces todos los años, voy á concretarme simplemente á hacer notar que estos vicios relativos al poseedor anterior, han debido ser opuestos como excepción, por la parte demandada, en el presente juicio.

No habiéndolo hecho, ni alegado absolutamente nada que importe tachar de viciosa la posesión de Furnus, corresponde considerarse legalmente, como en realidad lo ha sido, exenta de estos vicios.

Lagraña se ha concretado á cerrar los ojos para negar la existencia de todo, no sólo de la posesión de Furnus, sinó hasta del mismo campo San Luis, como puede observarlo V. S. en las posiciones absueltas hace una semana, en



que el señor Lagraña sostiene que no conoce ese campo San Luis, aunque, á renglón seguido, confiesa que ha sacado maderas, destruido y construido corrales, etc., etc.

No hay peor ciego que el que no quiere ver.
V. S. hará de oculista en el presente caso!

Tenemos, así, acreditada plenamente la posesión de Furnus, en sus dos elementos esenciales: el *corpus* y el *animus*, constitutivos del *derecho de posesión*.

Queda, también, comprobado que esta posesión reúne todas las condiciones requeridas por ley, para que, siendo tal derecho de posesión, la parte Furnus puede ejercitar la correspondiente *acción posesoria*, con el objeto de obtener la restitución de la posesión, en su plenitud y libertad», como dice el art. 2487 del citado Código.

Queda, en consecuencia, ampliamente probado el primer extremo, que el art. 2494 del mismo Código exige, para la procedencia de la acción *sub-judice*.

Dicho artículo dispone: «El demandante debe probar su posesión, el despojo y el tiempo en que el demandado lo cometió».

Los dos últimos extremos, como ya se han examinado extensamente en los Caps. XXV y XXIX, se hallan comprobados por la misma parte demandada, que ha exhibido en autos los testimonios corrientes de f. 182 á 189, referentes al juicio de desalojo que motivó el despojo de Furnus, en 17 de Agosto de 1892.

Es cierto que la parte de Lagraña ha formulado algunas preguntas, para establecer que los



señores Furnus tienen campos en el Sauce y próximo á Cúruzú Cuatía, quizá para agregar hoy que las haciendas desalojadas fueron introducidas, al San Luis, algunos días antes del lanzamiento, como ya se indica en la diligencia del comisario; pero, como ese hecho aislado no podría fundar el derecho que invoco, lo traigo á colación, como prueba evidente, de que la posesión anterior de Furnus continuaba hasta el despojo.

La parte contraria, que talvez procuraba desautorizar ó anular el significado de la intervención directa, personal y exclusiva de José Luis Furnus, que invocaba, en el acto del despojo, la posesión de diez años, ha pretendido probar un hecho, la última traslación de haciendas, que justamente viene á dar mayor importancia á la ocupación, coronando la larga serie de actos posesorios que ha invocado y probado mi parte.

Resulta, así, justificado con lujoso exceso, todos los extremos legales, que correspondían acreditarse por mi parte, para que procediera la presente acción.

La demandada, alucinada con la secular propiedad de la familia y confundida con esta rara acción posesoria, ejercitada en juicio ordinario, que no entra en sus libros, no ha alegado ni opuesto ni probado el más mínimo acto que afecte, en realidad, la posesión invocada.

Acostumbrados á hacer creer á todo el mundo que el *Chañar*, desde *el rincón* hasta el Morcorotá, era propiedad de la familia, se han engañado á sí mismos, teniendo como hecho cierto lo que solo fué aspiración injusta, un propósito interesado, una pretensión ilegal, usurpadora de terrenos fiscales.

Y aun cuando el doctor Labougle les dió la



primera lección, para sacarlos de esta alucinación. parece que continúan en el limbo, contentándose con invocar la propiedad de la familia, sin alegar ni probar acto alguno posesorio por su parte.

Y qué más pueden hacer?

Invocan sus títulos seculares y propalan la propiedad y posesión indiscutible de la familia, para continuar gozando de los campos *fiscales*, encerrados entre límites naturales (!!) mientras no vengan sus dueños á quitarselos á pedazos.

Y cuando llegan, qué hacen?

Pues, protestar, pleitear, aunque sea en retirada; quemar el último cartucho. hasta que los Tribunales hagan justicia y les manden entregar lo ageno, como sucedió con Labougle y sucederá hoy con Furnus.



DAÑOS Y PERJUICIOS

En el escrito de f. 142. se amplió la demanda en oportunidad legal, haciéndola comprensiva de los daños y perjuicios allí enumerados.

La parte contraria observa tal ampliación, en los números 39 y siguientes de su escrito de f. 190.

Muy poco debo agregar á lo ya dicho, por mi parte, al final del escrito de f. 203, para fundar la procedencia de tal ampliación.

Las observaciones de la contraria son completamente insustanciales y no merecen los honores de la refutación.

En ella se funda, sin embargo, una excepción de falta de personería, porque, se dice, que el poder que se ha conferido por el Dr. Furnus, por sí y sus hermanos, se ha limitado á facultar *sólo* para el juicio sobre restitución de la posesión y no para los objetos de la ampliación.

Basta leer las cláusulas del poder corriente á f. 125, que dice es con el objeto de que «tome intervención en el pleito que tiene promovido contra los herederos de don Manuel Ignacio Lagrãa, sobre restitución de la posesión, cuyo ex-



pediente tramita... Para lo dicho y *sus incidencias* le confiere el presente con facultad».... la segunda parte del art. 2494, que hace de la indemnización de daños y perjuicios una consecuencia forzosa de la acción posesoria, es decir, un accesorio legal, un *incidente* directo, y lo dispuesto en el art. 17 del Cód. de Procedimientos, que establece que «se entenderá también que comprende la facultad de intervenir en los incidentes de lo principal» para convencerse de que entran en las facultades conferidas al Sr. Goyeneche el entender en la determinación de los accesorios, daños y perjuicios, á que se refiere el art. 2494 citado.

Una prueba más de ello es que al conferirse el aludido poder, ya se había pedido, por el poderdante, en el escrito de f. 55, 4º *otro sí*, que aún cuando *esa condenación era de mandato imperativo de la ley*, se declarara expresamente tal responsabilidad, que haría efectiva en el juicio correspondiente.

Por lo demás, entiendo que esa ampliación no tenía otro objeto, que dejar definida esta parte de la condenación, que debe pronunciar el Juzgado, pues, el art. 2494 citado prescribe *imperativamente* que «juzgada la acción, el demandado *debe ser* condenado á restituir el inmueble, con todos sus *accesorios*, con *indemnización* al poseedor de todas las *pérdidas é intereses* y de los *gastos causados en el juicio, hasta la total ejecución de las sentencias*».

Por consiguiente, si el Juzgado *debe* condenar al demandado, mi parte no necesitaba ampliar su demanda para pedir dicha condenación.

Ha podido concretarse á producir la prueba necesaria para su determinación, partiendo de la base de que «el demandado debe ser condenado»



á abonarla, juzgada la acción posesoria promovida sobre restitución de la posesión simplemente, como una consecuencia natural.

En tal virtud, tenía facultades suficientes para intervenir, á cerca de los objetos de la ampliación, desde que, aun sin ellas, la sentencia de V. S. debe comprender tales puntos.

Procede, pues, el rechazo de la excepción opuesta, en el núm. 51 del escrito de f. 190.

Debe también no hacerse lugar á la petición 2ª del mismo escrito, por ser evidentemente contraria á la prescripción clara, terminante, imperativa del art. 2494 citado.

—

Establecida, así, la procedencia de la ampliación, examinemos los diversos puntos que comprende.

En el escrito respectivo se indicaron:

1º «Los *gastos* causados en el juicio, hasta la total ejecución de las sentencias», los que se traducen en costas y costos.

Estos se fijarán oportunamente, por la liquidación que practicará el Actuario.

Las primeras, los honorarios de Abogados y Procuradores de la parte actora, devengados hasta la fecha, deben ser fijados por V. S. mediante la correspondiente regulación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 del Apéndice del Cód. de Procedimientos, teniendo en cuenta el valor de este asunto y el mérito de los trabajos jurídicos y profesionales, que se han prestado y que constan en todos estos autos.

Para facilitar la tarea de V. S., voy á indicar los trabajos que corresponden á cada uno:

Al Dr. Furnus, que interviene también como



apoderado general de todos sus coherederos, corresponden los siguientes servicios profesionales: fs. 22 á 33, 55 á 81, 85, 95, 129 vta. (Informe *in voce*), 201, 202, 227, 233 y 234, 243 y 244, 295, 315, 347 á 410 (catorce audiencias para posiciones y declaraciones de testigos en C-Guatía) 428, 429, 445 á 447, 552 y el presente alegato.

Al Dr. Rivarola, los escritos de fs. 203 á 217, 222 á 224, 227, 236, 254, 255, 256, 450 y 451, 547 y 548.

Al Dr. Hall, los de fs. 142 á 144 y 246.

Al procurador, Sr. Goyeneche, los de f. 127, 128, 142 á 144, 203 á 217, 222 á 224, 236, 246, 248, 253, 254, 255, 256, 296, 450 y 451, 547 y 548 y 552.

Los que se causaren con posterioridad, deberán determinarse oportunamente.

—

2º Los *frutos* civiles: en este caso, el arrendamiento que ha podido y puede producir el campo, desde la fecha del despojo.

La nota del Dr. Vélez al art. 2329 y el último inciso del 2424, nos dicen que «son frutos civiles, las *rentas* que la cosa produce».

El Dr. Segovia (en su nota 79) al art. 2494 citado) hablando de los *accesorios* que el demandado debe restituir, dice: «y los *frutos*, como poseedor de mala fé».

El Dr. Llerena, comentando la misma disposición, agrega: «respecto de las demás indemnizaciones y restitución de frutos, se estará á lo dispuesto en el art. 2435 y siguientes».

Es indudable que las obligaciones del despojante, en este caso, son las que corresponden al poseedor de *mala fé*, como lo indican estos au-



tores, basados en la misma disposición del art. que comentan. así como en la del art. 2442.

Fuera de esto, *en el hecho*. resulta de autos que *no pueden ser de buena fé* los que, desde 1858. pretenden usurpar un campo sabiendo perfectamente que era ageno. fiscal; los que, durante diez años. han intervenido oponiéndose. sin derecho alguno, á la denuncia en compra de ese campo fiscal; los que, falseando hechos y torciendo el derecho, con plena conciencia de su falsedad, demandaron á Pozzi, sobre desalojo de un campo, que no le habían dado y que bien sabían que hacía diez años que Furnus poseía. ocupándolo con su Estancia. no pueden ser de buena fé los que, en el acto mismo del desalojo han conocido la oposición de Furnus al lanzamiento. así como su protesta. precursora de este juicio. y aun más, Sr. Juez, su misma *actitud actual* respira *mala fé* por todos sus poros.

En tal concepto. el art. 2439 es el aplicable. y dispone que «está igualmente obligado á indemnizar al propietario de los *frutos civiles*. (ó alquileres. como dice el Dr. Segovia en la nota 158). que habría podido producir una cosa no fructífera. si el propietario hubiese podido sacar un beneficio de ella: como sucedía. en este caso. en que había una Estancia. con más de mil vacas. ovejas. yeguas. etc., etc.

«Este artículo, agrega el Dr. Llerena. se refiere á los alquileres de la cosa, regulados por el tiempo que ha durado la posesión».

Los Lagraña despojaron á Furnus. como resulta de autos. en 17 de Agosto de 1892. y aun continúan en posesión. como surge de las contestaciones dadas á las posiciones de f. 343. etc.

¿Cómo se fijarán esos frutos civiles?

¿Cómo se determinará el monto de esos alqui-



leres ó arrendamientos. desde que así se dice, cuando se trata de campos?

Muy fácilmente. Sr. Juez.

La misma contraria. que se ha empeñado en producir tanta prueba favorable á mi parte, facilitando la tarea, también ha fijado el monto de esos arrendamientos. alquileres ó frutos, en que *debe ser condenado* á pagar.

Según el acta labrada por el Sr. Juez de Paz de C. Cuatiá. consignando la demanda promovida ante él. en Febrero de 1889, por el señor Francisco J. Lagraña. por sí y en representación de sus coherederos. contra Carlos Pozzi. consta que el señor *Lagraña estimó* el valor del arrendamiento del campo. que entonces se demandaba á Pozzi y que no era otro que el San Luis. sobre el que se litiga hoy. en *un mil pesos mqn.. mensualmente.*

Un testimonio del acta corre á f. 90 del expediente sobre embargo preventivo. agregado á estos autos.

En aquella época. el premio del oro era sumamente bajo. de modo que tal estimación equivalía á pesos oro. y quizá. por esto. en un momento de inspiración sincera. la contraria. en el núm. 39 de su escrito de f. 190. consigna su duda respecto de «si será en papel de curso legal ó en oro sellado» lo que deben pagar.

Si la contraria. para levantar un cargo de conciencia. á título de arrepentimiento por las injustas pretensiones anteriores. quiere pagar á *oro* no tengo inconveniente en recibirlo: pero. conste que tengo instrucciones de recibir simplemente á papel y de aceptar la fijación del monto hecho por ellos mismos. renunciando al mayor valor que tienen los arrendamientos de esos campos. por su valorización actual y depreciación del papel.



Por tanto, á V. S. pido que al formular la resolución sobre este punto, condene á los demandados á abonar, por razón de *frutos civiles*, la cantidad de *un mil pesos mensuales*, desde la fecha del despojo hasta el día en que se devuelva el campo, sobre cuya posesión se litiga.

—

3º los *productos*, que en este caso son las maderas que los señores Lagraña han hecho cortar en el campo, para llevar á otros lados, así como para construir corrales, casas, alambrados, etc., según todo lo ha confesado categóricamente, al contestar las posiciones 21, 22 y 5 de f. 343 y 445, respectivamente, el Sr. Javier Lagraña.

Confesada la extracción de productos, su obligación de indemnizarlos surge evidente de la disposición del art. 2437, que dice: «cuando el poseedor de mala fé ha dispuesto de objetos muebles, sujetos á la restitución, como accesorios del inmueble, está obligado á bonificar al propietario el *valor íntegro*, aunque él no hubiese obtenido sinó un precio inferior».

¿A cuánto asciende el valor de todas las maderas cortadas, en esas dos leguas de campo, desde Agosto de 1892 hasta la fecha: es decir, durante cuatro años?

Para determinarlo, se ha formulado la posición 5ª de fs. 445, teniendo en cuenta el subido valor de las maderas, de que se sacan los postes para corrales, alambrados, casas, etc., que son de ñandubay, así como la cantidad aproximada que ha podido sacarse, según los objetos para que fueron destinadas, que según confiesa el Sr. Lagraña eran para exportarlas, para corrales, que tienen varios cientos de metros de



cercos por pequeños que sean, entrando diez postes más ó menos por metro y de tres metros de altura, así como los que han podido emplear en el alambrado, casas, etc.

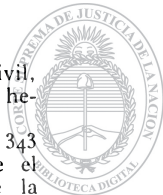
En mérito de estos antecedentes, mi parte ha estimado equitativamente y como mínimo, el valor total de esas maderas, cortadas durante cuatro años, en el campo San Luis, de dos leguas cuadradas de extensión, en la suma de **cinco mil pesos** mon. nac.

Observe V. S. la contestación del Sr. Lagraña y verá que es completamente esquivia, manifestando que no conoce el campo San Luis ni puede contestar á cerca de la estimación hecha; y, sin embargo, no pudiendo negar lo que ya había confesado antes, disimula la evasiva diciendo que las maderas fueron cortadas en el campo que linda con el de Labougle!

Llámesele como quiera, la cuestión es que confiesa que cortaron las maderas, sin atreverse á negar que lo han hecho por valor de cinco mil pesos.

Corresponde, pues, que V. S. en vista de estas constancias de autos y lo dispuesto en el art. 133, *in-fine*, del Código de Procedimientos, le tenga por confeso, en el contenido de la expresada posición, y, en consecuencia, condene á la demandada á abonar dicha cantidad, en el concepto de indemnización por los **productos** extraídos del campo.

4° **Los deterioros** sufridos en la casa construida por Luis Furnus en el campo San Luis y que hoy existe en ruinas y cuyo valor deben indemnizar los Lagraña, de acuerdo con lo dis-



puesto en los arts. 2435 y 2436 del Código Civil, así como las otras destrucciones que hayan hecho en el mismo campo.

De las posiciones 19 y 20 del pliego de fs. 343 y sus contestaciones (fs. 350), resulta que el Sr. Javier Lagraña dijo que la población de la Estancia estaba «en el mismo estado de conservación» que el día del desalojo, lo mismo que los tajamares y el alambrado, y que, respecto á corrales, existían otros, así como las mangas de ramas, existían las que no se habían quemado.

Formulada la posición 6ª de fs. 445, con el fin de determinar el valor de estos deterioros, el señor Lagraña se ha limitado á confesar que para reponer la casa, etc., bastarían *quinientos* pesos.

La estimación hecha en tres mil pesos, es sumamente equitativa: pues sólo las maderas que tenían los corrales valían mucho más que los quinientos pesos referidos.

Dada la respuesta evasiva á este respecto, debe también V. S. tenerla por confesa y, en consecuencia, condenar á la demanda á abonar la cantidad que he indicado, como la indemnización correspondiente á esos deterioros.

5º Las *pérdidas* y *gastos* causados con motivo del desalojo, en haciendas y muebles: los que también son á cargo de la demanda, en virtud de la disposición recordada del art. 2494.

Para determinar el monto de estas indemnizaciones, se formularon las preguntas 7 y 8 de las posiciones de fs. 445, que fueron negadas por el señor Lagraña.

En esta oportunidad, observo que, al desistir



mi parte de las declaraciones de varios otros testigos que tenía designados y que fueron retirados por la morosidad y lentitud con que se producían esas diligencias de prueba, en el Juzgado de Paz de Curuzú-Cuatíá, ha quedado producida una sola declaración, la del testigo Ibarrola, que aunque bien ilustrado al respecto, como consta de sus contestaciones de fs. 383 á 385, es singular y, por tanto, no hace plena prueba.

Sin embargo de ser de sentido común que, al efectuarse el desalojo, se hayan hecho gastos para la conducción de haciendas y muebles, así como causado perjuicios por razón del estropeo de las primeras y pérdidas de terneros, etc, cumple á la lealtad del proceder de mi parte, que, en contraposición á la contraria, busca la verdad, le sea ó no favorable, de declarar que considera improbados estos perjuicios y, en tal virtud, me abstengo de formular la petición que correspondería á cerca de la condenación á este respecto.

Con igual sinceridad, y con un criterio completamente equitativo, se han hecho, por mi parte, las estimaciones que se dejan mencionadas, en los diversos puntos referentes á estos daños y perjuicios.

PETICIONES



A mérito de los hechos que resultan probados en estos autos y de las consideraciones legales expuestas, V. S. se ha de servir, y, así lo pido:

1º Condenar, á la parte demandada, á *restituir* á los actores, dentro del término de treinta días, el campo llamado «San Luis», cuya posesión se litiga y cuya extensión, límites y ubicación precisa constan en los títulos de propiedad de Furnus, ya exhibidos, y de donde fueron desalojados, en 17 de Agosto de 1892: todo, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho.

2º Condenar, á los mismos demandados, á *pagar*, á los actores, dentro del término de diez días, las indemnizaciones, á que se refiere el art. 2494 del Código Civil, y que consisten:

a) en el valor de los *honorarios*, que V. S. se servirá regular y el de los *gastos*, que ordenará se liquiden por Secretaría:

b) en el valor de los *frutos* civiles ó arrendamientos, á razón de *un mil* pesos *mensuales*, á contar desde la fecha del despojo, hasta el día en que se haga la restitución de la posesión del campo;

c) en el valor de los *productos*, que fijará V. S. en los *cinco mil* pesos que he indicado;

d) en el valor de los *deterioros*, que V. S. fijará en los *tres mil* pesos referidos.

e) en los demás *gastos* y *costas acrecidas*, *hasta la total ejecución de la sentencia*, como dice el art. 2494 del citado Código.

CÁSTULO L. FURNUS.



SENTENCIA

DE

1^{ra} INSTANCIA







Y vistos:—Los presentes autos, de los que resulta: A fs. 22 se presenta el doctor Cástulo L. Furnus, por sí y en representación de sus hermanos José Luis, Cayetano, María Inés Furnus de Pozzi, María L. Furnus de Pozzi, y Nemesio Furnus y Aquino, como herederos de don Luis Furnus, entablado demanda contra los herederos de don Manuel Ignacio Lagraña, por la devolución de la posesión de un campo, fundándose en los siguientes hechos: Que en el Departamento de Curuzú-Cuatíá (Provincia de Corrientes) existe un campo, cuyo croquis presenta;—Que la fracción denominada «Rincón del Chañar» es propiedad de los señores Lagraña, como herederos de don Manuel I. Lagraña, la denominada «Puntas del Chanar» es propiedad de la señora Flora Lagraña de Labougle y, en medio de ambas, existe otra pequeña fracción de campo que llama «San Luis», por ser el nombre usado desde varios años atrás y cuya posesión es el objeto de este juicio;—que esas fracciones no tenían sus límites señalados (refiriéndose á los naturales); pues, recién el año 1885, el doctor Labougle tiró la línea a b.—Como antecedentes de la cuestión dice: que en 11 de Mayo de 1876, se constituyó una sociedad, para la cría de ganados, entre los socios capi-



talistas Manuel J. Lagraña y Luis Furnus, y cio industrial, Carlos J. Pozzi, estando establecido, por la cláusula tercera del contrato, que celebraron, que el socio Lagraña proporcionaba el campo, con poblaciones y demás enseres, que ya existían en él, cuyo campo es conocido con el nombre de «Puntas del Chañar», con una área de cuatro leguas cuadradas etc. —Que este campo y la Estancia que en él existía, pertenecieron á don Robustiano Lagraña y después de fallecido, se apropió su primo don Manuel I. Lagraña, quien fué condenado en 1882, á devolverlos á doña Flora Lagraña de Labougle, en el pleito que le promovió: que la sociedad mencionada había prosperado de tal manera, hasta el extremo que el año 1881, no cabían las haciendas en el campo «Puntas del Chañar» y entonces don Luis Furnus averiguó que el campo baldío contiguo era fiscal, tomó posesión de él, lo denunció en compra al gobierno de Corrientes y lo ocupó, con sus haciendas primero y después, con las de la sociedad: que en 1882, el gobierno aceptó su propuesta en compra y nombró al delineador del Departamento Topográfico, señor Scheffer, para determinar su área y límites:—que por esa época, falleció en esta Capital el socio señor Lagraña, y don Luis Furnus compró á sus herederos, la parte que tenían en la sociedad, entendiéndose con el señor Francisco J. Lagraña, que tenía autorización de sus coherederos:—que esa sociedad continuó así, entre Furnus y Pozzi, ocupando ambos campos con sus haciendas, y aún algo más, porque estas pacían hasta el arroyo llamado «Pairiré» (1).

(1) La sentencia dice «Paniagua», siguiendo un error de copia que se salvó en el escrito de réplica.



de propiedad de los señores Lagraña, como que corresponde al «Rincón del Chañar»;—que los Lagraña tenían que entregar el campo «Puntas del Chañar» á la señora de Labougle. en Diciembre del mismo año, pero como el doctor Labougle se entendiera directamente con Furnus, dándole algún tiempo para que desocupara el campo, se dió por recibido de parte de Lagraña:—que más tarde, el año 1883 ú 84, el Dr. Labougle entró en posesión de su campo, replegando Furnus sus haciendas hacia el campo fiscal, donde edificó una casa y estableció su Estancia, denominándola «San Luis». donde permaneció tranquilo:—que el año 83, procurando los medios de cumplir con el doctor Labougle, para entregarle su campo, antes que terminara ese año, y por no haber otro donde pasar las haciendas, que no cabían en «San Luis», fué que el señor Pozzi se dirigió á la señora de Lagraña, pidiéndole le cediera, de su campo «Rincón del Chañar», la fracción baldía, lindera á «San Luis», llamada Paniagua ó Pairirí, quien le contestó, por carta fecha 4 Junio 83, que no le era posible acceder á su pedido, porque la testamentaría de su esposo se hallaba en trámite, y había menores;—que posteriormente, habiéndose dirigido al Sr. Francisco J. Lagraña, obtuvo de éste permiso para ocupar, por tiempo indeterminado y gratuitamente, el campo denominado «Paniagua», que linda con «San Luis», sin estar separado con línea divisoria natural ó artificial;—que en el año 85, falleció su señora madre Cástula Gutiérrez de Furnus, liquidándose su testamentaría, ante el Juzgado de Goya el año 86, y entre los bienes dejados, aparece la Estancia, esto es, las haciendas y la casa edificada en «San Luis»: en cuya oportunidad se li-

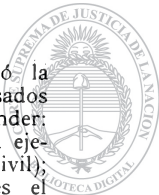


quidó la Sociedad Furnus y Pozzi, correspondiéndole á la sucesión la mitad de las haciendas, las que fueron adjudicadas al heredero don Luis Furnus, junto con la casa y muebles que había en la citada Estancia;—que estando pendiente esta liquidación, fué cuando los señores Lagraña pidieron á Pozzi desalojara el campo, que Francisco Javier le había permitido ocupar, dirigiéndose, con tal motivo, por Pozzi al Dr. Gómez, unas cartas fechadas en 24 y 30 de Junio del 86, en la que aceptaba un plazo que se le dió para cambiar sus haciendas, una vez terminada dicha liquidación: cartas que se referían al campo «Paniagua» hasta «Pairirí»; pero, como no se expresaba así en ellas, fueron maliciosamente presentadas tres años más tarde, por los Sres. Lagraña, al Tribunal de Corrientes, expresando que se referían al campo fiscal, poseído por Furnus;—que en esa época, Pozzi trasladó sus haciendas á otro campo, que le había correspondido á su esposa María Inés Furnus, quedando solo D. Luis Furnus, con sus haciendas, en el campo «San Luis»;—que retirado éste de sus negocios, quedó su yerno Pozzi y su hijo José Luis, en el referido campo, á título de simples tenedores, porque aquél era quien tenía el ánimo de ser propietario, desde que lo había comprado al Gobierno de la Provincia;—que las ventas y traslaciones de las haciendas, que habían en «San Luis», permitieron desocupar completamente el campo contiguo (desde «Paniagua» hasta el «Pairirí»), que había sido cedido por Francisco Javier Lagraña: — que la mensura practicada por el Sr. Scheffer, inclusa, en el campo fiscal, la fracción «Paniagua», pero la posesión de Furnus no comprendía ese paraje y se limitó á lo que más tarde se deslindó, como fiscal, por el Agrimensor Carlevaro, cuya



mensura, aprobada últimamente por el Gobierno, es la que ha servido para expedir los títulos de propiedad, á favor de los herederos de Furnus; —que una parte de esta misma fracción, es la que el año 89 se encerró con un alambrado constituido por orden de Furnus, siguiendo más ó menos la línea marcada y amojonada sobre el terreno por el Sr. Carlevaro:—que los herederos de Lagraña obtuvieron el desalojo del campo fiscal, á pretexto de habérselo cedido Francisco J. Lagraña al Sr. Pozzi, por tiempo indeterminado, siguiendo, al efecto, un juicio ante el Juzgado Federal de Corrientes, y entrando en posesión de él el 17 de Agosto de 1892, de cuyo acto protestaron D. José Luis Furnus y D. Carlos J. Pozzi, como lo acredita el testimonio de escritura que presentan:— que, como un justificativo más de la posesión que invoca, puede mencionarse que en el mapa de la Provincia de Corrientes, publicado por el Instituto Geográfico Argentino en 1889, se señala el campo ya mencionado como propiedad de su causante, L. Furnus. Cita los artículos 2469, 2473, 2475, 2478 á 2482, 2487, 2490 al 94 y 2501 del Código Civil y 66 y 579 del Cód. de Proeds. y pide se condene, á los herederos de D. Manuel Ignacio Lagraña, á devolver la posesión que actualmente tienen del campo, con costas. Corrido traslado á f. 35, fué opuesta por los Sres. Francisco Javier, Cipriano M., Rodolfo M., y D^a. Florentina Cabral de Lagraña, á f. 47, la excepción de incompetencia de jurisdicción y la prescripción de la acción de despojo: retirada esta última, por el escrito de f. 53, fué rechazada, por el suscrito á f. 98, la de incompetencia, siendo confirmada por la Excelentísima Cámara, á f. 132.

A fs. 142, D. Edelmiro Goyeneche, como apo-



derado de los herederos de Furnus, amplió la demanda por los daños y perjuicios causados por la desposesión, los que deben comprender:

- a) Todos los gastos causados hasta la total ejecución de la sentencia (art. 2494 del Cód. Civil);
- b) los frutos civiles, que en este caso es el arrendamiento que ha podido y puede producir el campo, mientras dure la desposesión, aceptando la estimación de un mil pesos moneda nacional mensuales, que hicieron los demandados el año 89; c) los productos, que consisten en las maderas que han sacado del campo; d) deterioros sufridos en la casa construida por Luis Furnus, en el campo «San Luis», que hoy existe en ruinas, así como las otras destrucciones que hayan hecho; y, e) los gastos y pérdidas causados en el hecho del desalojo violento, en haciendas y muebles. Solicita sean condenados los sucesores de Lagraña al pago de dichos perjuicios. A fs. 190 D. Carlos F. Sidders, contestando, por la sucesión de Lagraña, dice: que el campo «Rincón del Chañar» perteneció al causante, D. Manuel Ignacio Lagraña, quien lo heredó de su señora madre D^a Rosalva Acosta de Lagraña y ésta á su vez lo había heredado de su causante D. Juan Baltazar Acosta, de donde resulta una propiedad y posesión, en nombre de la familia, que lleva más de un siglo de existencia, sin interrupción alguna, y sin haber consentido ni reconocido jamás posesión extraña, de la más mínima parte de ese campo, el que linda, por su frente, con el denominado «Puntas del Chañar», hoy propiedad de la Sra. Flora Lagraña de Labougle, y se prolonga, hacia el Oeste, hasta terminar en la *confluencia* de los arroyos Chañar y Pelado; y que jamás han oído que el causante Luis



Furnus poseyera una fracción de ese campo lindante con Puntas del Chañar ni menos que la denominaran «San Luis». nombre que les es desconocido; que según consta de las actuaciones que acompaña, el año 58 el Sr. Lagraña, en nombre de su Sra. madre, se presentó al Juez de Goya, solicitando la mensura de ese campo, designándose, con tal objeto, al agrimensor Caballero, y efectuando la operación fué citado el lindero D. Robustiano Lagraña, que era el propietario del campo Puntas, hoy de la Sra. Labougle, asistiendo aquél al acto: lo que demuestra que, sin oposición alguna, la propiedad y posesión del Rincón se extendía, el año 58, hasta lindar con el campo Puntas; que el señor Lagraña hizo presente al agrimensor, que *había* un *excedente* en el fondo, en la *confluencia* de los arroyos mencionados, excedente que fué medido, según consta de la mensura y planos adjuntos:—que el señor Lagraña, fundándose en los títulos de propiedad, sostenía que el campo Rincón había sido comprado *ad-corpus*, y solicitó que se le otorgara la escritura de ese excedente, gratuitamente, petición que quedó sin resolver por haberse opuesto el fiscal:—que se ha practicado nuevamente otra mensura, por el agrimensor Sánchez, quien ha ubicado, como Caballero, el exceso en el fondo, habiendo el fiscal reconocido que él corresponde á los señores Lagraña, por haber sus antecesores comprado *ad-corpus*, mensura que ha sido aprobada por el Departamento Topográfico:—que es cierta la sociedad entre Furnus, Lagraña y Pozzi, y que Lagraña figuraba como dueño del campo Puntas; pero, que no es cierto que entre los campos «Rincón y Puntas del Chañar, estuviera el San Luis», siendo lo único que existe el llamado Paniagua; que



es incierto lo que se afirma, por los actores, que hayan ocupado, como poseído, entrado á ocupar, etc., el campo de la referencia: que á pedido de Pozzi, Francisco Javier Lagraña le permitió ocupar gratuitamente la fracción llamada Paniagua, lindando con Puntas, y como es negara á desocuparla, fué desalojado por orden del Juez Federal; que el Dr. Labougle *hizo* alambrar la parte del campo que linda con el Rincón del Chañar, que figura en el plano con las letras C D. y sus representados abonaron la mitad de su importe, lo que no hubieran efectuado si no hubieran sido linderos del campo Puntas; que respecto al alambrado que se señala con las letras a, b, no es tal, sinó una enramada que hizo Pozzi, cuando entró á ocupar el Paniagua, gratuitamente; que D. Luis Furnus, al presentarse, el 23 de Setiembre de 1882, denunciando el excedente fiscal en el campo Rincón, manifiesta que se halla ocupado por los Lagraña, y que tiene por linderos los arroyos Chañar, Pelado y Barrancas y al Norte, que es su frente, linda con la propiedad de la señora Flora Lagraña de Labougle: que el hecho, pues, afirmado por los actores, de que poseen lo denunciado, es incierto, pues hasta ignoraban el verdadero sitio donde se hallaba el excedente; que recién, al practicar la mensura del Sr. Scheffer, por orden del Gobierno, y ser citados para presenciar la operación, fué que tuvieron conocimiento de la denuncia oponiéndose á dicha mensura, en más de un escrito presentado por el Dr. Sánchez, á nombre de la sucesión de Lagraña; que dicho perito encontró un excedente y lo ubicó al frente, lindando con el campo Puntas, en oposición con la mensura del Sr. Cabañero, del año 58, que lo ubicó en el lado opuesto.



es decir, en la confluencia de los arroyos Chañar y Pelado: que el Departamento Topográfico desaprobó la operación de Scheffer, por lo que el Sr. D. Luis Furnus solicitó se practicara otra y se designó al agrimensor Carlevaro, quien citó al Sr. Francisco Javier Lagraña, para que asistiera á la operación. á la que se opuso nuevamente por la protesta que lleva fecha 3o Diciembre del 84; que esta mensura pasó á la oficina de Tierras, por haberse excusado el Departamento Topográfico, y la rechazó, pues ubicaba el excedente también al frente del campo, como el Sr. Scheffer; que si bien es cierto que el campo Puntas del Chañar, estaba escriturado á nombre de Manuel Ignacio Lagraña, pertenecía á su primo Robustiano Lagraña, y después de fallecido éste, fué escriturado á favor de su señora hermana y heredera Da. Flora Lagraña de Labougle: que, en cuanto á la ampliación, niega que la posesión, que actualmente tienen sus mandantes, ocasione daño ni infiera perjuicio alguno á los actores: que los pedidos que contiene el escrito de fs. 142, no deben ser materia de este juicio, que sólo se ha iniciado para obtener la posesión: que el apoderado Goyeneche ha introducido, en el juicio posesorio, la acción de daños y perjuicios, en la cual no había pensado la parte actora, porque el poder presentado es especial para la restitución de la posesión, razón por la cual opone la excepción, que autoriza al inc. 2º del art. 84 del Código de Procedimientos. Por lo expuesto, solicita, que la acción y pedidos de los actores, que formulan el escrito fs. 142, no sean materia de este juicio y se tenga por opuesta la excepción referida, debiendo, oportunamente, rechazarse la acción, con especial condenación en costas.



Corrido traslado á los actores. de los documentos presentados, fué evacuado por el escrito de fs. 103, diciendo: que ya tiene manifestado y reconocido que el campo «Rincón» del Chañar, á que se refieren los títulos de propiedad y las diligencias de mensura del agrimensor Caballero, pertenece á los Lagraña, quienes lo poseen íntegro, según se cree; que la sucesión de Furnus no pretende derecho alguno sobre el campo «Rincón» pero, sí. sostiene que el exceso fiscal, usurpado un tiempo por Lagraña, es hoy propiedad particular de aquella, por compra hecha al fisco, existiendo, en el incidente sobre embargo preventivo, los títulos de propiedad de Furnus, referentes al campo que hoy se llama «San Luis»; que de las constancias del título otorgado á favor de Furnus, resulta evidente que el campo, á que se refiere este litigio, sobre posesión, así como aquel título, es completamente distinto, es otro diferente del «Rincón del Chañar», á que se refieren los títulos de Lagraña, las diligencias de mensura de Caballero y las mismas actuaciones de desalojo contra Pozzi, que en testimonio se acompaña. Aduce otras consideraciones y termina solicitando se resuelva de acuerdo con lo solicitado en la demanda y ampliación.

A f. 218 vta. se recibió la causa á prueba, habiéndose producido la que expresa el certificado del Secretario, corriente á f. 568, sobre cuyo mérito han alegado ambas partes, á f. 569 y f. 653, llamándose en seguida *Autos* para sentencia.

Y considerando:

Respecto de la excepción de falta de personería, en el apoderado Sr. Goyeneche, que la acción deducida por los herederos de Furnus



se funda también en la disposición del art. 2494 Código Civil. que los pedidos que formula dicho apoderado. en la ampliación de f. 142. reconocen como base la misma disposición legal; que. además. la sustitución de poderes corriente á f. 125. le faculta para intervenir en las incidencias del juicio; por ello. y lo que establece el art. 17 del C. de Procedimientos, se declara inadmisibile dicha excepción.

Considerando: que. según resulta de las mismas manifestaciones de la parte demandante Manuel I. Lagraña ocupó todo el campo Chañar. inclusive el excedente fiscal. En efecto, á f. 574. se dice que en la mente de Lagraña existió el propósito de hacer una sola propiedad de todo el campo Chañar.... Para realizar esta idea. se apropió y dispuso del campo Puntas. que. por confusión de límites. formaba de hecho uno solo con el Rincón.

Además. confirman este hecho. las declaraciones de f. 551. pregunta 5:—491. pregunta 4 y 58. ¿Cómo perdió Lagraña esa posesión?

Nada han dicho expresamente las partes. ni se ha explicado cómo la adquirió Furnus. Sin embargo. examinando atentamente la prueba. se encuentran elementos suficientes para establecer la verdad de lo ocurrido.

En 1876 Lagraña. Furnus y Pozzi celebraron el contrato agregado á f. 219. para la explotación de un negocio de haciendas. Lagraña proporcionaba el campo Puntas del Chañar. para que se estableciera la Estancia.

Según resulta de f. 369 (2ª repretª. Interrgtº de f. 376) f. 402. 491. 405. 408. 531. 371. 368 y 391 vuelta. ese campo linda con el San Luis, formando las tres fracciones, Puntas. San Luis y Rincón, una sola unidad geográfica, encerrada entre varios arroyos.



En el año 1882, la sucesión de Lagraña tuvo que entregar á Labougle el campo Puntas: vendió á Luis Furnus la parte que le correspondía en las haciendas de la sociedad Lagraña, Furnus y Pozzi, quien las replegó hacia el campo San Luis, para desocupar la Estancia perteneciente á Labougle. (V. posc. de f. 346, preguntas 5 y 6; declaración de f. 551: preg. 7, 8 y 9 del Intrg. de f. 547).

La ocupación y población del campo San Luis por Furnus ó su yerno Pozzi, ha sido reconocida por Lagraña á f. 347 y está probada por los testigos, en sus declaraciones de f. 376, 491, 551, 355 á 385 y el inventario de f. 304 vta.

La sucesión demandada sostiene que esa ocupación fué concedida gratuitamente: que Furnus no era, por lo tanto, poseedor, sinó mero tenedor y los testigos de f. 297, 376, 491, 551 y 369, declaran en ese sentido: y el mismo don Luis Furnus, presentado al Gobierno de Corrientes, f. 511 vta., en el año 1882, reconoce que Lagraña ocupa todo el campo, inclusive la parte fiscal. Transcribiré la parte pertinente: «Que en el Departamento de C. Guatía, existe un extenso campo denominado Chañar, propiedad de los herederos Lagraña. Este campo es un gran Rincón, limitado por los arroyos Chañar y Pelado... etc. ocupando los herederos de Lagraña, toda la parte comprendida entre los expresados límites como de propiedad».

Ante todo, debe observarse que los antecedentes expuestos hacen recaer todo el *onus probandi* sobre la parte demandante. La sucesión Lagraña ha demostrado su posesión anterior á la de Furnus, posesión perfecta con ANIMUS DOMINI.

¿Qué acto ha ejecutado Furnus para quitársela?

El hecho de haber poblado el campo, estable-



cido su Estancia, en las circunstancias especiales de este caso, no es suficiente para probar el *animus*, porque se explica, dadas las relaciones de amistad y negocios existentes, que Lagraña consintiera en una ocupación, que no le causaba perjuicios. Y toda la prueba de Furnus, se reduce á constatar que tenía la materialidad de la posesión. En efecto, del inventario de fs. 304 vta., resulta que, en Octubre de 1885, habían animales de Furnus en la Estancia.

El testigo de 364, contestando las preguntas, 10, 11 y 17, dice que Furnus dispuso la construcción de la casa de la Estancia, cortó maderas é hizo tajamares, alambrados, etc., que también le permitió al declarante ocupara una parte del campo Puntas. Este testigo ha sido tachado, á fs. 368, por ser pariente y empleado de Furnus, tachas comprendidas en las del art. 207, inc. 1 y 2 del Código de Procedimientos, y comprobada por la misma declaración del testigo. El de fs. 371, afirma la anterior deposición (preguntas 10 y 11), los de fs. 355 á 385, declaran que Furnus tenía haciendas en San Luis.

Pero, no era esta ocupación material, reconocida por los demandados, lo que debía probar la parte actora, sinó el *animus*, el elemento moral de la posesión, lo que le da un carácter peculiar, que no puede deducirse, en este caso, de la tenencia y disposición de la cosa, porque había un poseedor anterior. A este respecto, debe observarse que la pública voz y fama atribuía la posesión, como propietario de esos campos, á la sucesión demandada. Así lo dicen los testigos de fs. 297, 368, 388, 391 vta., 399, 401 vta., 405 y 407 vta.

La parte demandante no ha conseguido destruir la prueba concluyente y decisiva de la su-



cesión Lagraña, que, con arreglo al art. 2445 del Código Civil, conservaba su posesión por la sola voluntad de continuar en ella, aunque el poseedor no tenga la cosa por sí ó por otro. La voluntad de conservar la posesión se juzga que continúa, mientras no se haya manifestado una voluntad contraria». Y por sí solo los actos materiales de ocupación, no satisfacen los extremos del art. 2455 ni pueden servir de base para fundar el ánimo de poseer. Habría sido necesario algún acto público y notorio, suficientemente explicito, que afirmara, de una manera indudable, la intención.

La denuncia del campo fiscal, que á primera vista parece revestir ese carácter, contiene el reconocimiento expreso de la posesión de Lagraña, como se ha visto anteriormente.

Que, dada la conclusión, á que arriba el Juzgado, respecto de la acción posesoria, es evidente que no pueden prosperar los daños y perjuicios, que son consecuencia de ésta.

Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 2455 y 2447 del Código Civil y demás, citados en este pronunciamiento, fallo: absolviendo, á la sucesión de don Manuel Ignacio Lagraña, de la presente demanda, promovida por la sucesión de Luis Furnus, sin costas, por no haber mérito para imponérselas á la parte vencida (Art. 221 del Código de Procedimientos).

JUAN A. GARCÍA (hijo).

Ante mí:—

Julio R. Guyot.

EXPRESIÓN
DE
AGRAVIOS







EXCMA. CÁMARA:

.....
.....
.....
Que no es ofendiendo la reconocida ilustración é integridad de V. S. que voy á ser extenso en esta expresión de los serios agravios que causa á mis derechos la sentencia recurrida.

Lo hago así, obligado por un fallo que viola las terminantes disposiciones legales que, en mira del interés público, prescriben la forma de dictarse; que contiene resultandos manifiestamente erróneos, en presencia de las numerosas constancias de autos, y se basa en consideraciones jurídicas completamente equivocadas.

Dada la importancia del asunto y el interés, que ambas partes litigantes, hemos demostrado tener, la sentencia nula é injusta de que recurro, no cumple los elevados propósitos del legislador, que inviste de autoridad pública á los jueces, para que administren justicia, en la forma digna que corresponde, tanto á su elevada misión, cuanto á la magnitud del debate científico de que se han hecho objeto los no menos dignos derechos de mi parte, puesto al amparo de su rectitud y competencia.

Por qué razón este litigio ha de venir á que



V. S. lo resuelva en primera y única instancia?

A la resolución dictada por el Inferior, ni el nombre de sentencia le corresponde, aunque Escriche diga que así se llama «porque el Juez declara lo que siente, según lo que resulta del proceso»; pues, es muy poco lo sentido, en presencia de lo mucho discutido y consignado en autos, que legal y lógicamente obligaba á ser más sensible.

No es con una plumada lijera como puede resolverse esta cuestión. imitando á Alejandro que cortó el nudo gordiano, porque no sabía desatarlo.

Hay infinidad de hechos falseados por Lagraña, que dificultan la busca de la verdad y que me han obligado, al procurar establecerla, á ser muy extenso en mis exposiciones, á fin de facilitar la tarea de mis Jueces.

La parte jurídica tampoco es sencilla, pues las cuestiones sobre posesión son arduas y mucho más en la forma radical, en que la he planteado y he procurado ilustrarla con mis humildes fuerzas, para desvanecer errores comunes existentes al respecto.

El Juzgado no ha entrado en este laberinto edificado por Lagraña para ocultar la verdad, que en su fondo brilla con claridad innegable y donde V. E. debe llegar, para ver la justicia de mis pretensiones.

He probado diez veces mi derecho de posesión y el Juzgado no ha considerado en su fallo una sola vez siquiera ni mi posesión ni mi derecho.

NULIDAD

Cuál es el objeto de este pleito?

Basta leer lo consignado en la f. 22 y vta., la petición V, de fs. 33 vta. del escrito de demanda,



los § 2, 7 y 8 del escrito de fs. 55 y los Cap. I á VI y XX de mi alegato, fuera de todas las otras referencias de los autos. para percibir claramente cuál es la cuestión capital y esencial sujeta á resolución.

El 17 de Agosto de 1892. fecha del despojo, tenía Furnus la *posesión anual*. exenta de vicios, que constituye el derecho de posesión. en que se basa esta acción posesoria, por restitución del campo San Luis?

Para fijar mejor esta cuestión principal, en el párrafo final del Cap. VI del Alegato, dije: «Debo empezar por hablar de la sociedad «Lagraña Furnus y Pozzi», desde cuya disolución se ha hecho arrancar la posesión á probar, para dejar bien evidenciada la posesión *anual* anterior al despojo, que es la que funda la presente acción posesoria, y que no podrá menos de considerarse probada, si acredito la posesión de Furnus desde *diez años antes*, como en realidad la tuvo».

De los testimonios de fs. 182 á 189 y 86 á 89 (Emb. Prev.), resulta que el despojo fué en Agosto 17 de 1892.

Para fundar la acción posesoria promovida, sólo necesito *un año* de posesión, según el art. 2473. concordante con el 2493 del Código Civil, y como debe ser continua (2481. Not. del doctor Vélez) es evidente que debo referirme á la posesión anual anterior al despojo: es decir, desde Agosto 17 de 1891 á Agosto 17 de 1892.

Todo lo demás ha sido traído á colación, como *antecedentes*, según expresamente lo indiqué en mi demanda (fs. 23). á mayor abundamiento.

La sentencia aludida, examina la posesión de ese año, que es el único y exclusivo punto pertinente?



Absolutamente nó.

Sólo habla de 1882, se refiere á algunos hechos de 1883 y á penas cita el inventario de 1885.

Y nada más.

Yo pruebo (V. Alegato. Cap. XXVIII-B) diez años de posesión, porque quiero alejar toda duda respecto de mi derecho y de la justicia de mis pretensiones; pero, al Inferior le ha sucedido como al que de súbito mira directamente un poderoso foco de luz: no ve ni la luz ni el cuerpo que la produce, sinó unas manchas oscuras flotando sobre un fondo límpido.

En el caso *sub-judice*, mis derechos resultan tan brillantes como el sol y por eso, ofuscado no ha visto más que el *solo ánimo de Lagrana*, vagando invisible, desde 1882 hasta..... sobre el campo San Luis, que reconoce estaba *ocupado por Furnus*.

La última referencia de la sentencia recurrida (inventario de 1885) está, pues, seis años atrás del objetivo de este pleito, á cuyo respecto no dice una sola palabra.

La litis contestación es la raíz y la base de todo juicio (dice la nota 17 de la Instituta del doctor Hall, tom. I pág. 319) Ley 10. Tít. 4, y 3 Tít. 10, part. 3: art. 103 y 212 del Código de Procedimientos. Es un cuasi contrato celebrado implícitamente entre las partes, que no permite al Juez, sin el consentimiento de ambas, resolver sobre otros hechos que los alegados en la demanda y contestación. «El Alcalde de la sentencia sobre aquello que fué la demanda e non sobre otra cosa» dice la Ley 2, Tít. 13, lib. 2, F. R. Igual cosa disponen las leyes 15 y 16, Tít. 22, Part. 3: 10. Tít. 17, lib. 4, Rec. Cast.; 2, Tít. 16, lib. 11, Nov. Rec.; según



las cuales la sentencia debe ser dictada según lo alegado y probado conforme á la demanda y contestación sobre el pleito.

Gregorio López. en la glosa 1 de la Ley 16. Tít. 22, part. 3. dice: «Sententia debet esse conformis libello in tribus: in re, causa et actione. Et si Judex pronuntiat ultra petita, sententia est ipso juro nulla».

El Código de Procedimientos, aceptando estos principios de la legislación española, prescribe, en su art. 216. que: «La sentencia definitiva debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo á las acciones deducidas en el juicio.... y el 217 dice.....- consignará separadamente lo que resulte respecto de los hechos alegados por las partes y hará mérito de cada uno de los puntos pertinentes de derecho. fijados en la discusión.

Aparte de que la sentencia *reconoce* en general la *ocupación de Furnus* y no entra en detalles. sin duda porque la encuentra tan evidente, creo no ha debido omitir tomar en consideración otros hechos importantísimos posteriores á la denuncia. que le ha traído dudas explicables desde que se refieren precisamente á la época del cambio de la posesión.

El Juzgado nada dice de las mensuras de Scheffer en 1883 y de Carlevaro en 1884, de la discusión seguida á su respecto en Corrientes, del significado del inventario de 1885. de las declaraciones de Gómez y de Lagraña sobre negativa de entrega del campo que dice arrendó el primero, de las adjudicaciones judiciales en 1886. de la ocupación continua de Furnus en 1887 y 1888. en oposición al *silencio absoluto* de Lagraña: las manifestaciones hechas en juicio por Pozzi. de que Furnus era



el poseedor, en Febrero de 1889 y principios de 1890; la exhibición en juicio, ese año, de una carta de Furnus, que terminantemente negaba todo derecho á Lagraña; la construcción de alambrados hechos *contra la voluntad* de Lagraña, según estos lo manifestaron entonces en juicio; el nombramiento de Puga como mayordomo de la Estancia San Luis en 1890; la ocupación efectiva y oposición resistente hecha por él mismo, á título de poseedor y propietario, en el acto del despojo, y la *no citación ni demanda* formulada en ningún tiempo *contra* Furnus ó sus herederos, respecto á esa posesión, para lo cual *no existía permiso* alguno, como lo prueba el no haberse alegado ni pretendido que existiera nunca.

Nada de todo ésto, que *cada uno* por sí solo constituye un *acto posesorio* bien caracterizado, ha sido tomado en cuenta por el Inferior.

Y ¿qué dice del significado jurídico, de cada uno de ellos, de que he hecho mérito expresa ó implícitamente, desde que algunos de esos elementales puntos de derecho, no quise tocarlos, porque creía ofender la competencia del Juzgado?

Todos ellos, hechos y derechos, brillan por su ausencia.

Acaso habrá creído el Juzgado que la acción posesoria promovida tiene como fundamento la posesión de diez años, que he invocado y probado?

Y que no encontrando el *animus domini* bien definido y visible, como quiere, en un principio (1882) ya no era posible tenerlo, ni permitido manifestarlo después (hasta 1892)?

Pero los arts. 2456, 2473, 2481, 2493 y, en la peor de las hipótesis, el 2450 del Código Civil, no dejan la más mínima duda de que se requie-



re sólo *un año* , contado desde cualquier acto exterior que importe exclusión del poseedor anterior, y aún en el caso de que se haya poseído en su nombre.

Por esta razón, hay absoluta necesidad de examinar los actos posesorios, que se han ejecutado en cada uno de los años transcurridos, no olvidando tampoco que una posesión anual no puede ser interrumpida por actos aislados, sino por otra posesión anual, (nota de Vélez al artículo 2482 de C. C.), aunque en este caso la posesión de *Furnus* jamás fué interrumpida.

El inferior no ha hecho este examen en su sentencia, cuya desproporción, entre la relación de los hechos y los considerandos, evidencia que está muy lejos de corresponder á la magnitud del debate.

En tales circunstancias, queda evidenciado este hecho: la cuestión capital y esencial, el objeto directo de este pleito, la posesión anual, de 1891 á 1892, no ha sido resuelta por el Inferior.

Irá á resolverla V. E. en esta única instancia? No es posible ni legal.

El art. 267 del Cód. de Procedimientos, prescribe que «El Tribunal no podrá fallar en segunda instancia sobre ningún capítulo que no se hubiese propuesto á la decisión del Inferior».... y V. E. tiene resuelto en el fallo que se consigna en la ser. I. tom. 7, pág. 164, que «la sentencia sólo puede recaer sobre los mismos puntos que han sido sometidos al Inferior y sobre los cuales se ha pronunciado».

Procede, pues, evidentemente, la nulidad de la sentencia, porque ha sido «pronunciada con violación de la forma y solemnidad que prescriben las leyes» (237 C. de P.)

Existe jurisprudencia constante á este respecto:



pues V. E. así lo tiene declarado en muchísimos casos, entre los que pueden observarse especialmente los siguientes fallos: Ser III. Tom. 9, pág. 306; Ser. IV, Toms. 6, 7 y 13, págs. 233, 370 y 376 resp., Ser. V. Tom. 3, pág. 227 y Ser. VI, Tom. 4, pág. 255, etc.

Aún más: cuando la nulidad es manifiesta y sustancial puede ser declarada de oficio por el Superior, como lo ha consagrado la Jurisprudencia de la S. C. P. en los fallos que se consignan en la Ser. II, Tom. 1, págs. 213, 221, 330 y 346; Tom. 9, pág. 208 y 214; Ser. I. Tom. 1, pág. 408 y Tom. 6, pág. 173.

V. E. mismo, así ya lo tiene establecido en los fallos que se registran en la Serie I. Tom. 8, pág. 9; Ser. II, Tom. 1, pág. 180 y 214; Tom. 2, pág. 21; Tom. 4, pág. 128; Serie IV, Tom. 4, pág. 107, y Tom. 5, pág. 23, etc.

Se impone, pues la nulidad de la sentencia recurrida, que pido á V. E. quiera así declararla, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 240 del citado Código de Procedimientos.

APELACIÓN

En la hipótesis de que V. E. no creyera procedente la nulidad, voy á fundar el recurso de apelación también interpuesto.

Y como la sentencia del Inferior, no sólo no toma en cuenta los hechos producidos, ni examina su significado, sinó que contiene apreciaciones equivocadísimas de derecho, que no armonizan con la naturaleza jurídica de la acción promovida, voy á estudiar por parte sus fundamentos, á fin de restablecer la verdad, en los detalles de ciertos hechos, desvanecer los errores



jurídicos que contiene, y aclarar los fundamentos de derecho de la acción sub-judice.

De propósito he suprimido esta ampliación en mi alegato, tanto por la extensión á que había llegado en el examen de los hechos, cuanto por considerar innecesaria la exposición del derecho, porque creía que surgía espontánea y claramente.

Pero, convencido de mi equivocación, suplo aquella omisión, protestando que está muy lejos de mí la idea de ofender con ello la alta ilustración de V. E., que soy el primero en reconocer.

Como pido la nulidad de la sentencia, quiero exponer todas las consideraciones que tengo pensadas y hechas, pidiendo disculpa á V. E. por la extensión de mi exposición, aunque no me es agena la idea de evitar con ello la demora en las consultas de autores, cuyas opiniones he citado, en lo pertinente, con toda fidelidad.

I.

El primer «considerando», como dice la sentencia, expresa: «que, según *resulta* de las mismas manifestaciones de la parte demandante, don M. I. Lagraña *ocupó* todo el campo Chañar, inclusive el exedente *fiscal*».

Para apoyar este aserto se transcribe un párrafo impertinente de mi alegato (fs. 574) donde dice que: «en la *mente* de Lagraña existió el propósito de hacer una sola propiedad de todo el campo Chañar..... Para realizar esta idea, se apropió y dispuso del campo *Puntas*»..... en lugar de citar lo que he manifestado á fs. 640, de que, probando nuestra posesión de diez años, era indiferente averiguar si Lagraña tenía ó no antes la posesión del campo fiscal y que, sin admitirlo ni negarlo en realidad, porque no estaba en dis-



cusión en este pleito, admitía y partía de la hipótesis de que Lagraña hubiera sido poseedor antes de 1882.

El Juzgado cita la declaración del Dr. Labougle (de f. 551 á la pregunta V.) en la que dice que Lagraña siempre (sin fijar época) ha estado en posesión, sin tener en cuenta que ese testigo, al contestar la última repregunta (f. 557) no supo enumerar los actos posesorios que hubiera ejecutado Lagraña.

Apoya también su afirmación en la declaración prestada por el Dr. José R. Gómez. al contestar las preguntas 4 y 5 del interrogatorio de f. 489, cuando este testigo fué tachado por mí de falso testimonio, lo que se evidencia con solo leer sus declaraciones de f. 297, preguntas 2 y 6, fuera de las demás contradicciones, que he hecho notar en el alegato. á f. 607 vt., 615 in-fine y vt., f. 617, y sobre lo que insistiré mas adelante.

Estos testigos nada conocen en concreto sobre la posesión de Lagraña, el primero, porque sólo va de visita á su Estancia Puntas, y el segundo, porque *nunca ha estado* en el campo. Son testigos de oídas simplemente.

No es cierto, pues, que con «prueba concluyente y decisiva». . . «la sucesión Lagraña haya demostrado su posesión anterior á la de Furnus, posesión perfecta, con animus domini.»

Soy yo quien la admito, porque, en mi concepto nada importa á la resolución de la cuestión sub-judice, que haya sido Lagraña ó el Gobierno ó cualquiera el poseedor anterior,

Se trata de mis acciones posesorias, basadas en mi posesión, que es lo único que interesa probar y no de la posesión de Lagraña, que ninguna acción ejercita en este juicio.



Y como la posesión es exclusiva, probada la mía quedan excluidas todas las demás.

De cualquier modo, restablecida estrictamente la verdad, solo quiero que conste que soy yo quien admito que hayan tenido la posesión anterior á 1882.

II

¿Cómo perdió Lagraña la posesión?, pregunta el Juzgado.

Y contesta, afirmando que «nada han dicho expresamente las partes ni se ha explicado cómo la adquirió Furnus»!—

¿Cómo se explica esto, cuando mi escrito de demanda tiene doce fojas, el de contestación á la excepción opuesta, que explica la acción promovida, ocupa cincuenta sellos impresos, in folio, el de f. 203 lleva catorce y mi Alegato noventa fojas escritas á máquina; total, ciento sesenta y seis sellos ó trescientas treinta y dos páginas, sin contar los documentos agregados y declaraciones de testigos?

O yo no me doy cuenta de lo que escribo ó el Inferior, al ver la extensión de mis escritos, ha pensado en aquello de quien mucho habla más miente.

¿Nada he dicho sobre el objeto directo de este litigio?

Basta leer ligeramente cualquiera de mis escritos citados, para convencerse de lo contrario y de la sinceridad de mis esfuerzos para facilitar el estudio de estos voluminosos autos, y de los numerosos hechos que allí constan.

No lo hice por ofender la ilustración del Juzgado, sino porque, no debiendo compartir con



él mi defensa, tengo el deber y el derecho de exponer todas mis razones, sin pretender suplir sus deficiencias con la competencia del magistrado que debe juzgarme.

Su misión es examinarlas, para admitirlas ó rechazarlas.

Y como esta materia, según dice León Wodon, interpretando bien la opinión uniforme de los autores, «forma incontestablemente la porción más difícil y árdua del derecho civil moderno», soy extenso en mis exposiciones, con el noble propósito de ayudar á pensar, ya que por insuficiencia de nuestra naturaleza errare humanum est.

Una prueba elocuente de esto nos ofrece la sentencia que examino.

En el párrafo siguiente, el mismo Juzgado se encarga de referir cómo perdió Lagraña y adquirió Furnus esa posesión!

Dice: «*En el año 1882*, la sucesión Lagraña tuvo que entregar á Labougle el campo Puntas, *vendió á Luis Furnus* la parte que le correspondía en las haciendas de la sociedad «Lagraña, Furnus y Pozzi, *quién las replegó hacia el campo San Luis*, para desocupar la Estancia perteneciente á Labougle».

«La *ocupación y población* del campo San Luis por Furnus ó su yerno Pozzi ha sido *reconocida* por Lagraña y *está probada* por los testigos... y el inventario...»

En el subsiguiente párrafo, agrega que «la sucesión Lagraña ha demostrado su *posesión anterior á la Furnus*»... lo que significa que Furnus tenía la *posesión posterior* á la de Lagraña, y que necesariamente se refiere al año 1882 que acaba de mencionarse.

Este es el hecho principal en discusión y el Juz-



gado reconoce su verdad en conjunto; pero, incurriendo en errores de detalles, más tarde saca consecuencias inexactas, como voy á demostrarlo.

En el primer párrafo citado, se encuentra un pronombre relativo *quien*, y en el segundo, la disyuntiva *ó* que dejan las oraciones completamente anfibológicas.

Cuál es el *antecedente* de *quien*?—Furnus ó Pozzi?—Literalmente parece que es Pozzi, cuyo nombre precede inmediatamente al relativo; pero, lógicamente resulta que no puede ser sinó Furnus, porque él compró las haciendas y, como dueño, era natural que él las trasladara, personalmente ó por medio de sus subalternos.

Quién ocupó y pobló el campo San Luis?—Furnus ó Pozzi?—El Juzgado no lo determina, se refiere á los dos indistintamente.

Pero, si se tiene presente que eran de Furnus las haciendas compradas á Lagraña y trasladadas al San Luis, para desocupar la Estancia de Labougle, cedida por un año más á Furnus, es también evidente que la ocupación y población le correspondían, aunque no hubiera andado personalmente en el corte de maderas, construcción de la casa, corrales, tajamares, etc., como resulta comprobado en autos, según lo reconoce el mismo Inferior.

Nada tendrían de extraños estos vicios de construcción gramatical, si el examen más prolijo del párrafo siguiente, no evidenciara que ellos son causas de la conclusión equivocada á que arriba el Juzgado.



III.

Continúa el Inferior: «La sucesión demandada, sostiene que *esa ocupación fué concedida* gratuitamente, que *Furnus* no era, *por lo tanto*, poseedor, sinó mero tenedor, y los testigos de f. 297, 376, 491, 551 y 369 declaran en ese sentido».

Combinándose hechos contrarios es natural que la consecuencia no sea exacta.

Aunque el nombre Pozzi antecede á *quien*, como forma parte de la razón social, cuyas haciendas compró Furnus, éste es el antecedente lógico del relativo; pero, si se observa «la declaración de f. 551, pregunta 9 del Interrogatorio de f. 547», que cita el Juzgado, se encuentra explicado el uso de la disyuntiva *ó* y la confusión que basa la errónea consecuencia deducida.

Parece que el Juzgado ha usado esa redacción, considerando á Pozzi como antecedente lógico del relativo *quien*.

En efecto: el doctor Labougle dijo que fué Pozzi quien intervino en esa población y traslación, y, como el antecedente debe preceder al relativo, es estrictamente gramatical considerar como tal á Pozzi, de donde resulta que la expresión usada por el inferior, quiere decir que Pozzi «las replegó al campo San Luis para desocupar la Estancia perteneciente á Labougle».

En el hecho material así fué, porque Pozzi ayudó personalmente á efectuar la traslación; pero, como no tratamos de la materialidad del hecho, sinó de la posesión, debemos ligar tales actos con la intención del que los producía, del que los había ordenado, que evidentemente no era otro que Furnus.



Y haciéndolo, no es indiferente decir que Furnus **ó** Pozzi ocupó y pobló ese campo, porque al hacerlo así se sientan las bases de la inexactitud que contiene el párrafo transcrito al empezar este número.

Las premisas comprenden á Pozzi y la consecuencia recae sobre Furnus.

El permiso alegado por Lagraña se refiere á Pozzi y á otro campo, como lo veremos nuevamente, mientras que la ocupación, población ó posesión de Furnus, se realizaba en San Luis, sin permiso ni autorización ni reconocimiento de nadie.

La consecuencia deducida de la redacción gramatical no armoniza tampoco con el sentido dado por Labougle á su contestación, porque ese testigo, en cuya declaración se apoya el inferior, había dicho, al contestar la pregunta 7 y las anteriores del interrogatorio citado, que él se entendió directamente con Furnus, en todo lo referente á la ocupación del campo Puntas, que le había cedido por un año más, después de darlo por recibido de parte de Lagraña, que acababa de venderle las haciendas, que se replegaron después al San Luis, etc. etc: de donde resulta que, según Labougle, la intervención de Pozzi sólo era material, como la de cualquiera de los otros empleados.

Observe V. E. cómo de este *antecedente* embozado del relativo *quien*, ligándose con el segundo término de la disyuntiva citada, resulta que Lagraña *ha reconocido* la ocupación y población del campo San Luis *por Pozzi*, á quien se refiere ese permiso gratuito invocado en autos y citado por el Inferior, y, sin embargo, se saca como consecuencia «que *Furnus* no era, *por lo tanto*, poseedor sinó mero tenedor»!!



La gravedad del uso de esta anfibología, en dos premisas seguidas, se percibe al punto, si se tiene presente que Furnus es el verdadero antecedente del relativo quien, porque fué él quien trasladó sus haciendas, así como la ocupación del San Luis fué hecha por él mismo.

La consecuencia lógica, que ha debido deducir el Juzgado, desde que á él *no se refería* el permiso gratuito aludido *ni Lagraña alegaba relación de derecho de ninguna clase con Furnus*, concretándose á negar en absoluto su posesión, era que Furnus no fué mero tenedor, sino *verdadero poseedor*.

Esta es la conclusión lógica á que forzosamente debe llegarse; pero, así como Lagraña, para desalojar á Furnus, promovió un juicio contra Pozzi, el Inferior liga el permiso de Pozzi, referente á otro campo, con la ocupación de Furnus, sobre San Luis, y saca, á título de consecuencia, que Furnus era allí mero tenedor!

La anfibología usada es manifiestamente impropia é inexplicable.

Para fundar la afirmación de que la ocupación y población del campo San Luis, *por Furnus* ó su yerno Pozzi, ha sido *reconocida por Lagraña* y está probada por los testigos y el inventario, el Inferior cita la f. 347, en primer término.

En ella se encuentra la contestación dada por el señor Javier Lagraña á la posición tercera de f. 343 (en la que se le preguntaba si era cierto que ni Luis Furnus ni sus herederos jamás habían pedido permiso, al absolvente ni á sus coherederos, para ocupar ó utilizar parte alguna del campo de su propiedad llamado Rincón del Chañar) afirmando «que uno de los herederos de Luis Furnus, el señor Pozzi, ocupó el cam-



po San Luis cedido gratuitamente por el absolvente».

Si se tiene presente que el invocado permiso fué dado en 1883 y que Furnus murió en 1° de Julio del 92, y por tanto, que Pozzi (es decir mi hermana María Inés) recién fué su heredero después de su muerte, se comprende perfectamente que la contestación de Lagraña es afirmativa respecto del contenido de la pregunta, es decir, que no existía permiso solicitado ni dado á Luis Furnus ni á sus herederos después de su muerte.

Esta negativa está de acuerdo con la actitud que han asumido siempre, negando en absoluto que Furnus hubiera ocupado parte alguna de ese campo (§ 10 del escrito de contestación á la demanda, f. 190; preg. 11, interrrog. 489; preg. 10 interrrog. 550 y de 386), y, por consiguiente, mal podían reconocer la existencia de permiso alguno, desde que negaban la ocupación misma.

(Todo esto, referente al permiso en sí, prescindiendo de que se refería á otro campo, no al San Luis.)

La afirmación, pues, en que se basa el Inferior, de que «la sucesión demandada sostiene que *esa ocupación fué cedida* gratuitamente», es falsa con *respecto á Furnus*, porque Lagraña siempre ha sostenido que el permiso fué dado á Pozzi y que éste era el ocupante y no Furnus.

Así lo afirmaron en 1889, cuando lo demandaron ante el Juzgado de Paz, (fs. 90, Embrg. Prev.) lo repitieron ante el Juzgado Federal (f. 264), lo dicen en la contestación á la demanda (f. 190, § 11) y en la posición tercera citada.

Si ellos hubieran alegado la concesión de permiso á Furnus, ya hubieran tenido buen cuidado de demandarlo por la entrega del campo que tanto ambicionan!



A pesar de todo esto, el Juez á *quo* no ha podido menos que *reconocer* la verdad del hecho de la *ocupación de este campo por Furnus*, como expresamente lo ha declarado *probado* refiriéndose á las declaraciones de testigos, inventario de fs. 304 vta., á la construcción de la casa de la Estancia, de corrales, tajamares, al corte de maderas, á la población del campo, á la materialidad de la posesión.

IV

Con toda extensión he estudiado las constancias de autos al respecto, como se observa en los veintiocho capítulos primeros de mi Alegato, y tan innegable es lo que resulta de ellas, que el Inferior, para desautorizar el significado lógico y legal de lo que él mismo declara probado, ha necesitado afirmar, de su sola cuenta, que «el hecho de haber poblado el campo, establecido su Estancia en las circunstancias especiales de este caso, no es suficiente para probar el *animus*, porque se explica, dadas las relaciones de amistad y negocios existentes, que Lagraña *consintiera en una ocupación* que no le causaba perjuicio», olvidando que Lagraña murió en Febrero de 1882 (v. f. 190. § XXVI) y que los muertos no dan permiso de ninguna clase!

Nos referimos (concretándonos á la única época que estudia la sentencia) á la *ocupación de Furnus, posterior* á la muerte de Lagraña, (Febrero del 82) y *anterior* al permiso dado á Pozzi, (Julio del 83) para ocupar el Pairirí.

Por lo demás, el inferior dice «se explica» que Lagraña «consintiera».

Y ¿cuándo Lagraña ha explicado eso, ni ha



alegado que consintiera (ha debido decirse permitiera) esa ocupación á Furnus.

Nunca. Son explicaciones gratuitas dadas por el Juzgado, que con su competencia quiere suplir lo que sin duda eree que son claros de la defensa contraria.

Sin embargo, en este caso, su protección es contraproducente, porque precisamente el consentir actos de terceros, que ocupen la cosa y gocen de ella, durante un año, importa la pérdida de la posesión de aquel que deja que el tercero la usurpe, según dispone el art. 2456 del Código Civil.

Esa explicación gratuita dada de oficio, supongo con el noble propósito de suplir una insuficiencia de la defensa contraria, importa en realidad invocar un hecho que, no por inadvertencia no ha alegado la contraria, sino porque es la mayor de las numerosas falsedades invocadas en estos autos. Y si el Juzgado ha tomado esta idea del final de la contestación de Lagraña á la posición 9 de fs. 344, al consignarla en su sentencia, acredita que no ha leído lo expuesto por mí al principio del capítulo IX de mi Alegato. Y si lo ha hecho porque ha creído ver allí un principio de la justicia de la resistencia de Lagraña, es porque le han nacido dudas respecto de la moral del proceder de mi señor padre, al desposeer á Lagraña en 1882, sobre la que debo hacer una observación, aunque, según la última parte del art. 2473, la buena fé no es requerida para el ejercicio de la acción posesoria, ni para la adquisición de la posesión.

Manuel I. Lagraña, propietario del Rincón del Chañar, á la muerte de su primo Robustiano, que dicen lo fué de Puntas, dispuso de este campo, y así quedaba todo el campo Chañar entre



límites naturales, correspondiendo todo á Lagraña, según ellos decían.

A la muerte de Manuel Ignacio, sus herederos, vencidos en un litigio al respecto, tuvieron que entregar en 1882 el campo Puntas al doctor Labougle.

Quedó entonces descubierto que Lagraña usurpaba una gran extensión de campo fiscal.

Mi padre que lo *ocupaba de hecho*, y admito que hubiera sido con la tolerancia de Lagraña, denunció en compra, al Gobierno, la existencia de esas tierras fiscales.

La forzosa consecuencia de su denuncia fué el *desconocimiento* de todo derecho de Lagraña, sobre ese campo, desde que se reconocía que era ajeno, *fiscal*.

Lagraña, ante esta actitud de Farnus, pudo haber iniciado, dentro del año correspondiente, la acción de despojo ó la que creyera procedente.

No lo hicieron, y perdieron así todo derecho.

La actitud de mi padre, que denunciaba al Gobierno y solicitaba comprar, de *acuerdo con sus leyes*, esas propiedades del fisco, usurpadas por Lagraña, podrá merecer un reproche de los usurpadores descubiertos de pretender quedarse con lo ajeno, pero nó de las personas honradas.

V

Hay más, ¿porqué el Inferior, de plano y sin examen, admite como cierto lo que dice que «la sucesión demandada sostiene que esa ocupación fué concedida gratuitamente», siendo ésta la cuestión más discutida, como que tiene importancia decisiva en este pleito?



Hablamos de la ocupación del campo San Luis, y el permiso aludido ¿se refería á ese campo? No examinar este punto es desconocer la raíz de este pleito.

Admitir ó rechazar á ciegas cualquier afirmación que las partes hayan hecho al respecto, importa no haber leído los capítulos XV, XVIII y XXVII de mi Alegato.

En el primero, pruebo de una manera incontestable que *el permiso gratuito*, tantas veces invocado por Lagraña, *se refería al campo Pairirí* y fué concedido por Javier Lagraña á Pozzi en Julio de 1883, como resulta de las cartas agregadas á f. 10 y 44 y de la posición 11 de f. 34 vuelta, absuelta por Lagraña á f. 347 vta.

En el segundo, pruebo que la carta dirigida por Pozzi al Dr. Gómez, en Junio 24 de 1886, se refería á ese mismo campo Pairirí.

En el tercero, acredito concluyentemente que el llamado campo Paniagua, por Pozzi, en sus posiciones de 1890, al que refirió el permiso invocado por Lagraña, no es otro que el mismo campo Pairirí, hacia la parte que linda con el San Luis, mensurado, deslindado y amojonado desde 1884.

He producido una prueba, allí examinada, abrumadora al respecto, de la que resulta perfectamente comprobado que el campo, cuya ocupación gratuita se permitió á Pozzi en 1883, por Lagraña, *no es* el San Luis, *sinó el contiguo* hacia el Rincón.

En autos consta, pues, evidentemente todo lo contrario á esa afirmación del Inferior.



VI

Agrega el Juez que «los testigos de de f. 297, 376, 491, 551 y 369, declaran en ese sentido», de que «Furnus no era poseedor, sinó mero tenedor».

Estas citas, sólo demuestran la falta de examen de esas declaraciones de parte del Juzgado.

Las de fojas 297 y 491, corresponden al testigo Dr. José Rafael Gómez, cuya declaración evidencia su falso testimonio.

En efecto, en las preguntas 4 y 5 de f. 489 se le interroga si Lagraña ha tenido siempre la posesión del campo Chañar, hasta lindar con Puntas, antes y después de 1892, contestó afirmativamente, dando como razones de sus dichos: la «pública notoriedad», el haber sido su señor padre encargado proveedor del establecimiento Rincón, y por haberle referido el doctor Labougle que se entendió con los Lagraña para una cuestión de alambrados. Sin embargo, al contestar la pregunta 12, ya no afirma, dice «que cree que lo declarado es público»; al contestar la pregunta 6, de f. 296, dice que el padre murió en 1872 (20 años antes de la época á que se refiere la pregunta); lo del alambrado queda desmentido con las constancias del documento de f. 549.

Hay más, interrogado por mí, á f. 296, pregunta 2ª para que enumere prolijamente los *actos de posesión* ejecutados por Lagraña en el San Luis desde 1882 á 1892, *no enumera ninguno*, excusando sus respuestas con referencias impertinentes al objeto de la pregunta; alude al



permiso gratuito y al arrendamiento hecho por él, concluyendo por decir que **no le constan** otros actos de posesión ejecutados por Lagraña, pero que es del dominio público que han poseído todo el campo Chañar!

Preguntado por Lagraña si la ocupación permitida á Pozzi, era la del campo lindero á Puntas, apoya toda su declaración en la carta que le fué dirigida en 1886, cuando en el capítulo XVIII de mi Alegato, demostré que era falso que se refiriera á ese campo, sinó al Paniagua ó Pairirí.

Interrogado por mí (á f. 296, pregunta 8) para que diga cuántas veces y cuándo estuvo en el campo, sobre cuya posesión declaraba, contestó (á f. 298) «que no ha estado nunca en dicho campo»!!

Finalmente, interrogado por Lagraña (pregunta 11) para que diga si es cierto que «jamás don Luis Furnus, ni ninguno de sus hijos, después de su fallecimiento, ocupó del campo Rincón del Chañar fracción alguna», contesto: **«me consta que no ocupó»....**

Interrogado por mí (f. 296, preg. 5) para que expresara cómo le constaba, contestó (á f. 297 vuelta): **«no me consta ni he oído** referencias de que Furnus ó sus herederos **hayan ocupado nunca ese campo»!!**

Semejante declaración puede tener valor legal?

Si fuera prestada por alguna persona inculta, casi serían torables algunas de sus contradicciones, por excusarse con la ignorancia del significado de los términos: pero, tratándose de un distinguido médico, actual Diputado al Congreso Nacional, as político del anterior y actual partido gobernante en Corrientes, no es posible que esas inexactitudes se digan sinceramente.



La f. 376. es un interrogatorio formulado por Lagraña, y el Juzgado no puede invocarlo en apoyo de sus asertos!

La f. 551. corresponde á las declaraciones del Dr. Labougle, que he examinado hace poco y de las que resulta que Furnus fué verdadero poseedor, porque se entendió con él etc.

La f. 369. corresponde al testigo Escalada, que si bien dice que Lagraña permitió ocupar á Pozzi el campo San Luis, agrega, tanto en la repregunta segunda, como en la séptima, *que sabe porque así se lo manifestó el Sr. Javier Lagraña.*

Las mismas declaraciones de los testigos citados por el Inferior, están, pues, en contra de su resultando.

VII

Y ¿qué explicación cabe en la apreciación que hace el Juzgado de la tacha del testigo Sr. Puga?

«Este testigo ha sido tachado á f. 368. dice el Inferior, por *ser pariente y empleado* de Furnus, tachas comprendidas en las del art. 207, inc. 1 y 2 del Cód. de Proceds. y comprobada por la misma declaración del testigo».

El testigo declaró (repregunta 7 y 8 de Lagraña) que «es pariente en *cuarto* grado por *afinidad* con los Furnus, porque está casado con una prima de ellos» y que *fué encargado del Establecimiento San Luis. de Furnus. en 1890* y también fué su apoderado con poder especial.

Luis Furnus murió en Julio de 1892; el testigo prestó declaración en Julio de 1896. cuatro años después.

El art. 207 inc. 1 establece, como tacha rela-



tiva, el «ser el testigo pariente.... por *afinidad* dentro del *segundo* grado del litigante que lo haya presentado».

El inc. 2. dice: «ser, *al prestar declaración*, dependiente ó sirviente del que lo haya presentado».

Las tachas deben, pues, desestimarse en razón de las mismas disposiciones legales en cuya virtud las admite el Juzgado.

VIII

En la sentencia, se afirma también que el mismo Luis Furnus, «en 1882, reconoce que Lagraña ocupa todo el campo, inclusive la parte fiscal». Transcribe unos párrafos del escrito de denuncia presentado por el señor Vedoya, en representación de Furnus, ante el Gobierno de Corrientes.

En el Cap. XI de mi Alegato trato al respecto extensamente.

Fuera de las otras observaciones que allí hago, ¿cómo destruye el inferior mi objeción de que el uso impropio de tales vocablos ó expresiones no pueden prevalecer sobre el significado lógico, intrínseco del acto mismo?

Las palabras se emplean para traducir las ideas, los pensamientos.

En el caso de que la redacción gramatical contradiga el significado propio del acto, ¿á cuál debe darse preferencia?

Es natural que á lo intrínseco y no á la forma.

El Juzgado nada dice: se limita á transcribir un párrafo trunco, y tomándolo literalmente, afirma que importa el reconocimiento de esos derechos, cuya negación es el objeto directo, el fin primordial de la denuncia misma!



Y si agregamos que el Juzgado formula tal aserto, precisamente al examinar la *intención* de Furnus, el segundo elemento de la posesión, tendremos que convenir en la existencia de un contrasentido, desde que se declara la ausencia de la intención después de despreciarla, dando preferencias á la letra, á los signos materiales, por los que ella se manifestaba.

El Inferior no ha tomado, pues, en cuenta lo expuesto en esa parte de mi Alegato, ni ha meditado sobre estas consideraciones.

Suponiendo, por otra parte, que Furnus, en esa denuncia reconociera en realidad la ocupación ó posesión que tuviera Lagraña hasta esa época, no puede negarse, como hace la sentencia, que, por lo menos á partir de esa fecha, quedaba manifestada de una manera «pública y notoria, suficientemente explícita, que afirmara de una manera indudable», como lo quiere el Inferior, la *intención* de Furnus de negar todo derecho á Lagraña.

Y si alguna duda abrigaba respecto de su verdadero significado jurídico ¿por qué no ha examinado los numerosos *actos posteriores*, hasta llegar á la posesión de 1892, que es la que basa esta acción posesoria?

IX

Finalmente, antes de pasar á tratar de los errores jurídicos, que la sentencia contiene, voy á hacer notar que el Juez *a quo* también observa «que la pública voz y fama atribuía la posesión, como propietaria de ese campo, á la sucesión demandada. Así lo dicen (agrega) los testigos de fojas 297, 368, 388, 391 vt., 399, 401 vt., 405 y 407 vt.»



El Juzgado apoya su afirmación en los dichos de tres testigos falsos: Dr. Gómez (f. 297) que queda examinado: Sr. Acuña (391 vt.), cuya falsa declaración he hecho notar en mi Alegato (f. 615 vt., 621) y más que todo resulta de la simple lectura de las contestaciones dadas á las preguntas formuladas por mí, y Gutiérrez (f. 401 vt.), cuya falsedad he hecho observar á f. 622 de mi Alegato. También en las de otros muy poco ilustrados, que manifiestan lo han oído decir á los mismos interesados, que parece son los autores de esas especies, que la voz pública hacía circular.

No obstante esa voz pública, de la que participaba el mismo Furnus en su denuncia, según se ve, preguntado al respecto el mismo *interesado*, señor Javier Lagraña, *no supo indicar un solo acto posesorio* que, durante los diez años de que tratamos, hayan ellos ejecutado sobre el campo San Luis!

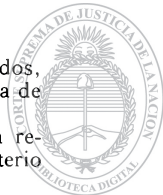
El interesado desmiente, así, esa «pública voz y fama», que hace circular todo lo que cualquier mal intencionado quiera comunicarle, porque tiene por base la chismografía social.

Opongo, á esa afirmación del Inferior, la posición 15, de fs. 348 vta., y todo lo observado por mí en el Cap. XXVI del Alegato.

X

Hasta hoy he tratado de los hechos, á que se refiere la sentencia, cuidando demostrar la verdad no establecida del todo por el Juzgado.

Fácilmente observará V. E. que la ocupación del campo San Luis por Furnus, desde 1882, surge evidente, imponiéndose con la fuerza in-



contrastable de los hechos ciertos. consumados, que rompen las ligaduras con que la mentira de Lagraña quiere ocultarla.

El mismo Juzgado se ha visto obligado á reconocerlo, á pesar del raro é inexplicable criterio usado.

Pero, hay una objeción más: se niega la *intención* de Furnus, su *animo domini*, al ocupar *diez* años el campo, en las circunstancias que lo hizo!

Para fortalecer la negativa, el Juzgado establece, que: «ante todo, debe observarse que los antecedentes expuestos hacen recaer *todo el onus probandi* sobre la parte demandante».

Agrega que «no era la ocupación material, reconocida por los demandados, lo que debía probar la parte actora, sinó el *animus*».

Y no habiéndolo probado, «no era poseedor sinó mero tenedor».

Admitida la posesión anterior de Lagraña, pregunta: «que acto ha ejecutado Furnus para quitársela?»

Según el Juzgado, habiendo un *poseedor anterior*, «*del hecho de haber poblado* el campo, *establecido su Estancia*..... de *haber animales* de Furnus en ella..... tener la *materialidad* de la posesión....., la *ocupación material*..... la *tenencia* y *disposicion* de la cosa.... de los *actos materiales de ocupación*. NO SE DEDUCE, NO SON SUFICIENTES para probar el *animus*, porque el poseedor anterior, según el art. 2445 del Código Civil, conserva su posesión por la *sola voluntad* de continuar en ella, aunque el poseedor no tenga la cosa por sí ó por otro. La voluntad de conservar la posesión se juzga que continúa mientras no se haya manifestado una *voluntad contraria*».



«Habría sido necesario *algún acto público* y notorio, suficientemente explícito, que afirmara de una manera indudable la *intención*».

Tales considerandos del Juzgado importan nada menos que exigir que la *intención*, el *ánimo* sea una *cosa*, que el alma de Furnus fuera *material*!

Y no solo parece que el Juzgado exige que la voluntad sea una cosa material, sino que le atribuye una resistencia enérgica, desde que sostiene que la voluntad de Lagraña ha sido más poderosa que los numerosos hechos contrarios ejecutados por Furnus, durante diez años!

Dar eficacia al solo ánimo de Lagraña, en contraposición á los *actos* de Furnus, negando que los hubiera ejecutado con intención, es olvidar la naturaleza racional del hombre, cuyos actos se presumen siempre libre y voluntarios, al revés de los irracionales, que se consideran instintivos.

El Inferior considera, así, racional á Lagraña é irracional á Furnus!

Y tratándose de la posesión, significa no tener en cuenta la naturaleza jurídica de tal institución de derecho, y, con más razón, estando en el deber de tenerla muy presente, desde que, como dice el señor Adolfo Posada, «en general, puede afirmarse que la noción de la *posesión*, distinta por un lado de la mera *tenencia* y por otro de la *propiedad*, es una noción jurídica difícil y que, como tal, no puede encontrarse en el derecho positivo, sino después que la cultura llega á cierto grado».

—

Vamos por partes.

Todo el *onus probandi*, corresponde á Furnus?



NO. Es elemental en derecho procesal, que, corresponde la prueba á aquél que alega un hecho en su favor.

Yo reconocí la posesión de Lagraña, anterior á 1882. Están exentos de probarla, aun cuando no está ella en discusión.

Alegué en mi favor que, desde ese año en adelante, Furnus tuvo la *ocupación* del campo San Luis.

Me correspondía la prueba y, según lo reconoce el mismo Juzgado, *está probada* en autos tal ocupación.

El Inferior dice que falta la *intención*.

Me correspondía probarla?

No, porque *está incluida* en la ocupación misma, porque *esos hechos materiales de ocupacion, son las manifestaciones exteriores de la intención*, porque son actos voluntarios, libres, de una persona capaz, y porque existe en mi favor una presunción, *hominis et de jure* de que poseo para mí.

Esa ocupación de Furnus forzosamente ha sido voluntaria, intencional, porque no puede pensarse que haya sido instintiva.

Y si fué intencional, su propósito no ha podido ser sinó poseer *para sí* ó poseer *para otro*.

Como el hombre tiene el derecho, la libertad de utilizar los elementos que encuentra á mano, en sentido de procurar el mejor cumplimiento de su destino, es natural que sus actos tiendan principalmente á conseguir un beneficio propio y no para otro; por cuya razón la libertad se presume y no la obligación.

A quien alega la existencia de ésta, que es una limitación de la libertad, corresponde probarla.

Por esto, en el caso sub-judice, la presunción de tener la intención de utilizar la cosa para sí,



es inherente á la ocupación misma, á su goce material.

A Lagraña le correspondía probar que Furnos no poseía para sí, sino para ellos.

Esa presunción surge de la simple lectura de las disposiciones legales, contenidas en los artículos 2373 á 2375, 2394, 2412. etc. del C. Civil, y está establecida expresamente en el art. 2363, que dispone que «el poseedor no tiene obligación de producir su título á la posesión..... *El posee porque posee*».

«El poseedor no tiene obligación de dar á conocer el título ó causa (nota del Dr. Vélez al art. 4012) de su posesión, ni el instrumento que la comprueba, salvo el deber de exhibición cuando sea procedente en derecho.»

«La posesión es una manifestación de la libertad humana, que, á lo menos *prima facie*, merece el respeto y la protección de la ley. Esta presume que el poseedor tiene siempre un título para poseer y no puede complacer la curiosidad indiscreta ó maliciosa de cualquiera que desee conocer la causa de esa posesión.» (nota 27 del Dr. Segovia al art. citado).

«El poseedor, que invoca la prescripción, debe probar que su posesión no es precaria?», pregunta Baudry-Lacantinerie (en el núm. 270, página 158—en el tomo de la Prescripción, de su tratado de Derecho Civil Francés), «O bien, por el contrario, toca á su adversario probar que su posesión es precaria, que no tiene valor bajo el punto de vista de la prescripción?»

«Para ayudar á resolver estas cuestiones, que, en la práctica, ofrecen grandes dificultades, la ley acepta presunciones que están ya admitidas y desarrolladas por d'Adjenté y por Dunod. Por una parte, según el art. 2230.... «Se *pre-*



sume siempre poseer *para sí* y á título de propietario, si no se *prueba* que se ha empezado, á poseer *para otro*». Esta disposición es considerada por Ihering, como una de las mejores y más felices de nuestra legislación. «Los autores del Código dice, se adherían aún al dogma, que es preciso, para la posesión, una voluntad de poseer particular; pero, la presunción que han establecido les ha hecho escapar á todos los peligros prácticos. Ellos han demostrado así un conocimiento de las dificultades de la teoría corriente y un buen sentido práctico, que yo nunca sabría alabar bastante.»

«Este artículo, en mi concepto, está más arriba de todo lo que la literatura ha producido, en nuestro siglo entero, sobre la distinción entre la posesión y la detentación».

«Existe, así (agrega en el párrafo 371 siguiente) en favor del poseedor una presunción de no ser precario, *que le exime de toda prueba*. Pero, esta presunción es susceptible de ser destruída por una prueba contraria; se puede probar la existencia de un título que dé á la posesión el carácter de posesión precaria».

Bigot-Prameneu, un expositor de los motivos del Código Napoleón, dice que «la detentación no puede ser á la vez para sí y para otro».

Inclusio unius, exclusio alterius, dice un adagio romano—y «dos posesiones iguales y de la misma naturaleza, no pueden concurrir sobre la misma cosa», agrega el art. 2401 del Código Civil.

Por consiguiente, el dualismo es insalvable: Furnus ocupaba para sí ó para otro.

La presunción lógica y legal es que Furnus ocupaba para sí, y Lagraña, á quien correspondía probar lo contrario, *no ha alegado ni ha probado que poseyera para ellos*.



Y no se diga, como la sentencia, que Furnus era mero tenedor, porque, según los arts. 2352, 2461, 2464 y 2465, es requisito esencial. *indispensable*, para ser tal, que se ocupe á *nombre de otro*, que se *reconozca* la posesión de aquel á cuyo nombre se ocupe.

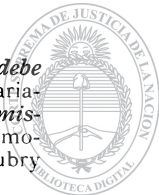
Por otra parte, la tenencia involuntaria, ni para sí ni para otro, no es considerada en derecho, porque es un simple hecho material, sin significado jurídico, como que se refiere más á los hechos de la naturaleza ó los instintivos de los animales, que á los voluntarios del hombre.

Por consiguiente, para que Furnus fuera *mero tenedor*, como afirma la sentencia, era necesario que Lagraña hubiera *alegado* y *probado*, como le correspondía, que poseía *para ellos* ó *en su nombre*, ó que *reconocía* su posesión. (El Inferior alega que este reconocimiento se ha hecho en el escrito de denuncia: pero, se equivoca al dar preferencia á la letra sobre el espíritu de tal acto, fuera de los numerosos posteriores que cada uno por separado constituye un acto posesorio bien definido, como veremos en breve).

Lagraña no alegó ni probó tal cosa y conste que le correspondía la prueba, porque Furnus no puede ser obligado á probar una negación: que no reconoció los derechos de aquél.

Furnus era, pues, *poseedor* desde que *probó* la *ocupación* material, que *exteriorizó su intención* de poseer *para sí*.

Es sabido, que «la adquisición de la posesión se opera por el concurso de los dos elementos que la constituyen. En otros términos: la posesión de una cosa corporal se adquiere, desde el momento que existe, para la persona, la posibilidad actual y exclusiva de obrar materialmente sobre la cosa (corpus) y que manifieste la intención de tenerla como suya (animus)».



«La *intencion* de tener una cosa para sí *debe* manifestarse por un *acto exterior*. Ordinariamente este acto consiste en la *aprehension misma*, por cuyo medio se materializa de cierto modo la intención de apropiarse la cosa». Aubry y Rau, tom. 2, pág. 179.

El art. 2458 del Cód. Civil, dice que: «se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa á nombre del poseedor, *manifiesta por actos exteriores* la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa y cuando sus actos producen ese efecto.»

Luego, en concepto del doctor Vélez, la intención resulta de los actos que impiden disponer de la cosa; por consiguiente, estos actos implican la existencia de aquella intención.

Y nótese que si el codificador no exige intención de poseer para sí, bastándole que sea contraria al otro, es porque la disyuntiva es inevitable: ó para sí ó para otro.

El poder del acto, como manifestación de intención suficiente para causar la desposesión, se observa también en las disposiciones de los art. 2455 y 2456.

Todos los autores notables, si bien se observa, están conformes en esto.

Dice Baudry-La Cantinerie: «La distinción que hemos hecho del *animus* y del *corpus* existe más bien en la teoría que en la práctica. La verdad es que la *intencion* de guardar la cosa á título de propietario *se manifiesta por los actos mismos que constituyen el elemento corporal de la posesion*. El *corpus* no se presenta, en realidad de los hechos, en estado aislado, independientemente de todo elemento intelectual; *los actos de aprehension* que hemos indicado *revelan* al mismo tiempo la existencia del *ani-*



mus domini, en aquél que se ha puesto en posesión». (Obra citada § 226, pág. 135).

Y no podría ser de otra manera, desde que la intención es un acto puramente interno, que no es conocido de los otros sinó por sus manifestaciones exteriores.

La ley sólo tiene en cuenta éstas y deduce la intención que las guía, atribuyéndoles el significado que les corresponde, según la manera general, el orden lógico de producirse.

La *ocupación material* de Furnus, reconocida por el Inferior, acredita, pues, *ipso facto* el *animus*.

Veamos su confirmación en una aplicación inmediata:

XI

El Juzgado dice que, habiendo un poseedor anterior, su sola voluntad basta para conservar la posesión, siendo necesaria una manifestación pública y notoria de la intención, para que el *corpus* cause su pérdida.

No es cierto. La sola voluntad *basta* para conservarla *mientras* la cosa continúe desocupada.

Y la sola *ocupación basta* para hacerla perder, cuando no se la reclama dentro del año.

Furnus ocupó San Luis desde 1882, como lo reconoce el Inferior, hasta 1892, sin que jamás Lagraña le haya exigido, ni judicial ni extrajudicialmente, desocupar ese campo, *alegando haberlo ocupado en su nombre*.

El autor citado, Baudry La Cantinerie (número 228) dice que: «Para la conservación de la posesión, es una regla tradicional que el *animus* basta: *animo retinetur possessio*. Desde el mo-



mento que tengo siempre la intención de ser propietario y poseedor, yo conservo la posesión, aun cuando yo no tenga la posibilidad de usar materialmente de la cosa. *siempre que otro no se tome mi lugar y no posea durante más de un año* (C. C., art. 2243. C. de P., art. 23). Mi posesión conservada por la sola intención, podrá carecer de continuidad y no ser susceptible de servir á la prescripción, pero no por eso dejará de existir».

«La posesión legal de un inmueble, una vez adquirida, se conserva por la sola intención del poseedor. *mientras no sufra interrupción por el hecho de un tercero*. ó que ella no sea voluntariamente abandonada».

Cita estos fallos: (cass. 12. Febr. 1880. S. 92-1-132. Cass. 20 Mayo 1851. S. 51-1-182, D. 51-1-260; 27 de Oct. 1891. S. 92-1-25, D. 92-1-432; 30 Nov. 1892. S. 93-1-8; D. 93-1-147. Pothier, núm. 54 S. Dunob. pág. 17; Troplong núm. 263 y 264; Aubry y Rau, II. pág. 84. § 170; Laurent, XXXII. núm. 269).

En el Número 233 agrega: «La pérdida de la posesión puede ser forzada. Así, un tercero se apodera de nuestra heredad, sin nuestro conocimiento, ó bien expulsa y echa afuera á aquél que la ocupaba en nuestro nombre, ó en fin, nos impide entrar á ella: nuestra posesión se encuentra *perdida* si no nos hacemos restituir por medio de la acción posesoria; esta acción puede ser ejercitada durante *un año*; resulta que la posesión no está definitivamente perdida sinó cuando la ocupación del bien haya *durado más de un año*».

«Todavía mejor, (dice Aubry y Rau, en el § 179) la posesión no se pierde por el solo hecho de que un tercero se apodere del inmueble. Según



nuestro Derecho, ella no se pierde sinó en tanto que la ocupación de un tercero haya *durado más de un año*. Art. 2243. Cuando el *anterior poseedor ha dejado pasar ese término sin entrar en goce ó sin promover la acción para hacerse reintegrar*, debe ser considerado como que *ha perdido* la posesión, sea que haya conocido ó ignorado la usurpación, y *esto, aunque él haya manifestado*, por actos jurídicos, por ejemplo, por el *pago de contribución, la intención de mantenerse*».

Lagraña invocó, como actos posesorios, el pago del impuesto de contribución directa y el de *una cuenta* de alambrados construídos por Labougle.

El sabio Mr. Laurent, en el tom. 32, § 270, pág. 280, nos dice: «El principio que la posesión se conserva por la sola intención, recibe todavía una excepción. Pothier le añade esta restricción: *siempre que un tercero no haya usurpado la posesión*. Es decir, que la *intención es insuficiente*, si *de hecho*, el poseedor está *imposibilitado* para ejecutar un acto de posesión».

«Cuando se dice que la sola intención basta para conservar la posesión, se supone que el poseedor *puede*, si lo quiere, ejecutar actos de posesión; pero si un tercero se ha apoderado de la heredad y la posee, el antiguo poseedor no puede ejecutar actos de posesión: desde entonces su *voluntad es impotente é ineficaz*».

«Esto es evidente, cuando se trata de la prescripción, puesto que una posesión, que el poseedor ha perdido por la usurpación de un tercero, es una posesión interrumpida, no puede servir de base á la prescripción».

«La Corte de Cassación ha aplicado la doctrina tradicional á la acción posesoria. Ella sienta



primero, en principio, que la posesión, una vez adquirida, no se conserva por la sola intención sino cuando esta *posesión intencional* no sea contrariada *por la posesión real* de un tercero: El hecho es, que los habitantes de una comuna habían hecho numerosos actos de posesión, sobre ciertos terrenos baldíos: ellos habían llevado á pacer sus animales allí: habían establecido caminos, tomado tierras y extraído materiales, mediante un canon en provecho de la comuna».

«Esta posesión era suficiente para dar las acciones posesorias? Aquél que se pretendía propietario del terreno sostenía, por su parte, que había conservado la posesión *pagando los impuestos*». «La posesión *intencional* estaba, pues, en conflicto con la posesión *real*: cual debía prevalecer?»

«La de los habitantes de la comuna, dijo la Corte; porque ellos habían hecho públicamente, á título de propietarios, á la vista y sin ninguna oposición del pretendido propietario, todos los actos de posesión y *recojido todos los productos de que eran susceptibles los terrenos litigiosos*; el pago del impuesto, por aquél que se decía propietario, no constituía sino una posesión intencional, *impotente* en presencia de una posesión real, que le era contraria».

Agrega (en la pág. 282, II parte, § 270). «La posesión se pierde también, á despecho del poseedor, cuando un tercero se apodera de su heredad. Acabamos de decir (núm. 270) que la intención sola no basta para conservar la posesión, *cuando la cosa está usurpada por un tercero*. El antiguo poseedor debe tener el cuidado, en este caso, de *promover la acción posesoria dentro del año de turbación*; será res-



tablecido entonces en su posesión y se considerará no haberla perdido nunca: pero si él no actúa en el año, las *acciones posesorias pertenecerán al nuevo poseedor*, y el antiguo habrá perdido todas las ventajas concernientes á la posesión: aun cuando la recobrara más tarde, no podría prevalecerse de la antigua posesión, puesto que ella ha sido interrumpida....»

En el núm. 272, menciona un caso práctico, análogo al que motiva este juicio, á cuyo respecto dice: «L.... objetó que, habiendo adquirido la posesión, *la conservaba por la sola intencion*. Esto es plantear mal la cuestión: no se niega que haya tenido la posesión, se alega que la ha perdido: la Corte de Cassación dice que es principio en el antiguo derecho, que la posesión se pierde *solo corpore*, cualquiera que sea la persistencia de la intención, *cuando un tercero se haya puesto en posesion real* del inmueble: la legislación moderna ha confirmado esos principios. En efecto, resulta del art. 23 del Cód. de Procedimientos, combinado con el 2229 del Cód. Napoleón, que la acción posesoria no procede sino cuando ha sido promovida dentro del año de la turbación por aquél que, *después de un año* por lo menos, *esté en posesion pacífica, pública, continua, no interrumpida, no equivoque y á título de dominio*; por consiguiente, *en el caso sub-judice*, L.... *había perdido esta posesion*; lo que es decisivo»!!

Maynz dice á este respecto (§ 86, pág. 700, Vers. Española, 1887)... «desde el momento en que alguno nos pone en la *imposibilidad física* de disponer de la cosa, hemos perdido la posesión. Importa poco que lo haga con la intención de tener la cosa para sí mismo ó con cualquiera otra intención. Pero, es esencial que el acto que verifica implique la desposesión para nosotros.



Por el solo hecho de que un tercero tenga nuestra cosa, no se puede afirmar de que hayamos perdido el poder físico sobre ella. Esta consecuencia solo tendrá lugar cuando la cosa sea ocupada con la sola intención de impedirnos disponer de ella, y que esta intención se haya hecho *constar* y se haya *ejecutado por un acto exterior*».

«Para que realmente se pierda la posesión, es preciso, además, que habiendo tenido conocimiento de la ocupación hecha por el tercero, hayamos *consentido en ella*.»

En este mismo orden de ideas se expresan Moulrón, Namur, Molitor, Wodon, etc., citados por los doctores Segovia y Llerena, en sus notas y comentarios á los artículos pertinentes.

Y no puede ser de otra manera desde que, completamente de acuerdo con la doctrina expuesta por estos autores, nuestro Código Civil contiene disposiciones legales terminantes al respecto.

El mismo artículo 2445, citado en su apoyo por el Inferior, nos da el fundamento legal contrario á su conclusión: lo que importa autorizar á pedir su *revocatoria por sus mismos fundamentos!*

El Inferior ha tomado al pie de la letra lo consignado, *en general*, en el primer inciso de ese artículo, sin tener en cuenta que, en el segundo, se establecen las condiciones ó limitaciones correspondientes.

En efecto, en el primero se dice que «la posesión se retiene y se conserva por la sola voluntad de continuar en ella»... y en el segundo, que esta «voluntad de conservar la posesión se juzga que continúa, *mientras no se haya manifestado una voluntad contraria*.»



Admitida la posesión anterior de Lagraña, la presunción legal es que su voluntad de conservar la posesión continuó, *hasta* que «*se haya* manifestado una voluntad *contraria*».

Por quién?

Por Lagraña ó por otro: nadie más.

Lagraña podía hacerlo, de acuerdo con el artículo 2454, abandonando voluntariamente la posesión, y sobre ello no hay dificultad, ni es el caso.

El otro, Furnus en este caso, ¿cómo tendría que manifestar su voluntad contraria?

El Inferior dice que- «Habría sido necesario algún *acto público* y notorio, suficientemente explícito, que afirmara de una manera indudable la intención».

¿Cuáles son los modos de manifestarse la intención?

El lenguaje, en sus diversas formas, ó los actos exteriores, hechos, acciones.

¿Qué quiere exigir el Juzgado al decir un «acto público y notorio?»

¿Se refiere á un hecho ó acción del individuo, ó á la constatación que se hace ante un oficial público, etc?

Como el Juzgado expresa que «de la tenencia y disposición de la cosa», de la «ocupación material», de la «materialidad de la posesión, que Furnus tenía», etc, *no puede* deducirse su intención, el animus, es evidente que, en concepto del Juzgado, esa intención contraria de Furnus ha debido manifestarse verbalmente ó por escrito, haciéndose constar en forma auténtica, en una escritura ó instrumento público.

Tal exigencia es completamente contraria á las disposiciones terminantes del art. 2447, que declara *insuficiente*, para hacer perder la posesión,



la sola *manifestacion de la voluntad* de poseer á nombre propio.

Ese es también el motivo de las disposiciones de los arts. 2353 y 2354. que prescriben que por la sola voluntad no puede cambiarse ni la causa ni las cualidades de la *posesion*. (V. Maynz § 84. III y nota de los Dres. Vélez y Segovia y sus referencias).

Tampoco se armoniza con su naturaleza jurídica.

La doctrina y la ley requieren el *corpus* y; el *animus* unidos para adquirirla y por eso no admiten la manifestación de la intención. del *animus*. sinó *por medio del corpus*.

Tampoco basta el *corpus* sin el *animus*. «La simple declaración de la voluntad no es suficiente, según el Derecho Romano, para hacer adquirir la posesión: es preciso la *manifestacion real de la voluntad: adipiscimur possessionem*. dice un juista romano. *corpore et animo. neque per se animo* (simple declaración de la voluntad) *neque per se corpore* (mera proximidad en el espacio)». (Ihering. Cuestiones jurídicas. pág. 124).

Es su *union* lo que caracteriza la posesión, como institución jurídica distinta de la tenencia: es la intención materializada. *exteriorizada en el acto mismo*, que, á su vez, es realizado no instintivamente, sinó guiado, dirigido por esa intención.

La manifestación, pues, exigida por el Juzgado, es lfrica, es el *animus* solo, es el *alma sin cuerpo* en que encarnarse: así como los hechos materiales de ocupación, que se niega hayan sido ejecutados con intención, son como el *cuerpo sin el alma*, que le da vida.

La posesión es como un *cuerpo vivo*, y la vida, el alma, se manifiesta por los movimien-



tos exteriores del cuerpo mismo, así como la falta de movimiento acusa la ausencia del alma.

Por eso es que el art. 2458, exige que el que quiere quitar á otro su posesión «manifieste.... la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, por actos exteriores.... que produzcan ese efecto.

Así resulta claro como la luz, que esa voluntad contraria, á que se refiere el segundo inciso del art. 2445, citado por el Inferior, no puede manifestarse *legalmente* sinó por hechos materiales «por actos exteriores, que produzcan el efecto de privar al poseedor de disponer de la cosa».

Dos condiciones esenciales se requieren, pues: el *hecho* y su *efecto excluyente*.

Los actos, que reúnan estos requisitos, son manifestaciones *legalmente suficientes de la intención* de privar al poseedor de su posesión.

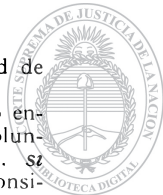
Y al privarle de ella, presumirá la ley que no es para sí, en beneficio propio del que ejecuta tales actos?

Nadie come para que otro dijera, sinó á fin de procurar mantener su propia vida.

Y «la ocupación material, la tenencia y disposición de la cosa», que reconoce el Inferior que tenía *Furnus*, ¿no son actos exteriores que produzcan ese efecto de excluir al anterior poseedor?

Negar esto, es no observar que en autos consta acreditado en forma fehaciente, como lo indiqué en el Cap. XXVI de mi Alegato, que, como *efecto de la ocupación de Furnus, La-graña no ha podido efectuar acto alguno posesorio*, en el referido campo, desde 1882 hasta 1892.

Para terminar sobre este punto, citaré unos párrafos de Ihering, tomados de su original «Teoría de la Posesión». Cap. XII-4.



«Suponiendo en el poseedor la voluntad de adquirir, esta voluntad, debe probarse?

«No, ciertamente. La relación de hecho encierra en sí misma la presunción de la voluntad del poseedor, *sufficit ad probationem*. *si rem corporaliter teneam*. Después de las consideraciones, en las cuales me he detenido antes, no tengo necesidad de insistir sobre la relación íntima que existe en estos casos citados, entre la cosa que se adquiere y la manera de adquirirla.... La posición de la cosa, que debe proporcionarle la posesión, debe ser la que habitualmente tiene en la vida las cosas de la misma especie».

«Si la posesión es la exterioridad de la propiedad, (teoría de Ihering-Cap. XIII) debemos declararla perdida cuando la cosa ha llegado á encontrarse en una posición en desacuerdo con la manera y forma regulares, bajo las cuales el propietario tiene costumbre de servirse de ellas. Aquí también puede ser posible reproducir el estado originario: para nuestra teoría no basta eso, porque un propietario, que tiene algún aprecio por la cosa, no se contenta con esta simple posibilidad y se cruza de brazos, sinó que se mueve y restablece lo más pronto posible la relación perturbada. Hé ahí la línea de conducta del poseedor que quiere conservar la posesión. Lo que tiene que hacer, su interés se lo dicta, y esta circunstancia precisamente es la que hace que se le reconozca como aquél á quien la cosa pertenece. El interés atestiguado en el hecho, por la manera de servirse de la cosa, de cuidarse de ella, de protegerla y asegurarla, es el indicio del verdadero propietario, quien quiera que no muestre este interés y se desligue de algún modo de la cosa, pierde la posesión, porque aunque él sea



y permanezca propietario. no es activo y visible como tal: y la posesión consiste precisamente en esto, la parte visible de la propiedad, la diligencia del propietario es una condición indispensable de la posesión».

«El propietario ausente tiene noticia de que otro ha tomado posesión de su casa. qué hará? Tomará inmediatamente las medidas necesarias para echar al ocupante. Y si no lo hace, por temor ó pereza? En ese caso *pierde la posesión*. Porqué? Porque ha dejado su derecho así, porque en el momento en que se esperaba ver surgir á aquel, á quien la cosa importa, no se ha mostrado como tal: en el instante crítico, no se ha hecho visible como propietario».

XII

Y después de todas estas consideraciones formuladas por los sabios autores, cuyas opiniones he transcrito, para dar completa autoridad á mis conclusiones, se dudará del alcance y de la aplicación que corresponde al caso sub judice, de la disposición legal contenida en el art. 2456, que dice: «Se pierde también la posesión cuando se deja que alguno la usurpe, éntre en posesión de la cosa y goce de ella durante un año, sin que el anterior poseedor haga, durante ese tiempo, acto alguno de posesión, ó haya turbado la del que la usurpó?»

Si el Inferior hubiera meditado sobre todas estas consideraciones, que se encuentran en los textos mismos que sirven para la enseñanza en nuestra Facultad, ¿habría sostenido que Lagraña mantuvo su posesión *solo animo*?



V. E. me permitirá que diga que si tal hubiera sucedido, habría dudado de la sinceridad del Juzgado.

Y si Lagraña *perdió su posesión* y no había otro *ocupante* que Fúrnus, quien la adquirió?

Los frutos de ese campo, en sus diversas formas: procreo de haciendas, engordes en invernadas, cortes de maderas, construcción y uso de sus casas, corrales, alambrados, tajamares, sementeras, frutas, aves, peces, flores, el aire, etc., etc., durante *diez años*, fué *exclusivamente* percibido, usado y consumido por Fúrnus y ¿necesita éste probar que lo hizo para sí?

Alguien pretende que fué en su beneficio?—

Absolutamente nadie: ni Lagraña siquiera!

La contraria, única que alega derechos sobre el *campo*, se limitó á negar, junto con *su existencia*, la *ocupación* misma de Fúrnus.

Y, sin embargo, el Interior dice que «no era la ocupación material la que debía probar la parte actora, sinó el *animus*!»

¿Cómo acredito mi intención sin probar los actos materiales que la traducen y exteriorizan?

Lo evidente es difícil de probar, por lo mismo que se ve material ó mentalmente.

Y cuando alguien no quiera ver, qué haremos? Conducirlo de la mano, para que palpe los detalles, á fin de que se forme la idea del conjunto.

Y cuánto trabajo requiere esto?

¡Tal es la razón que me ha obligado á ser minucioso y más extenso de lo que era necesario!

Y si lo fuí, tratándose de los hechos, porque se habían falseado por Lagraña, á fin de obtener el despojo; V. E. observará que el derecho aplicable fué expuesto sucintamente, en el Cap. XXV de mi Alegato.



Con todo ello, observará también V. E., con la simple lectura de ese capítulo y los considerandos de la sentencia recurrida, que el Interior no ha tenido en cuenta ninguno de los fundamentos jurídicos allí mencionados: lo prueba el hecho de consignar en la sentencia apreciaciones jurídicas que, tras de equivocadas, son manifiestamente contrarias á principios legales, elementales allí invocados.

Examinando las condiciones requeridas por ley, para que la *posesión* funde la *acción posesoria* sub-judice, dije que, según el art. 2473 del C. Civil eran:

«La primera condición: *un año*».

Hice presente entonces que había probado *diez años* no interrumpidos: «el décuplo de lo que la ley requiere».

Porque, en realidad, es indudable é indiscutible en derecho, que la posesión anual es la primera condición de la posesión como derecho y del ejercicio de las acciones posesorias.

Y qué dice la sentencia al respecto?

Absolutamente nada.

«La segunda condición: *no era precaria*».

Fundado en varias disposiciones legales allí citadas, sostuve: a) que se llama posesión precaria á la simple tenencia; b) que el que tiene una cosa para sí, desconociendo todo derecho á otro, tiene el *animus domini*, que le constituye en verdadero poseedor y no mero tenedor ó poseedor precario, y c) que la prueba de ser la posesión precaria incumbe al que alega tal vicio.

Qué dice la sentencia?

Respecto de a), que Furnus era «mero tenedor» pero no precario, porque no poseía para Lagrña ni para otro; - de b) «que no era la posesión material lo que debía probar la parte ac-



tora, sinó el *animus*» haciéndolo constar en «un acto público y notorio», y de c) que «todo el *onus probandi*» correspondía á Furnus!

Y por qué razones?

Porque, sí.

La tercera condición: *no violenta*.

La cuarta condición: *no clandestina*.

Las expliqué, sosteniendo que correspondían ser alegadas como excepciones por Lagraña, á quien incumbía la prueba de la existencia de esos vicios, porque la posesión se presume siempre de buena fé y con justo título (art. 2362 y 2363).

Qué dice la sentencia?

Nada, sinó que me corresponde «*todo el onus probandi*».

Agregué que quedaba «acreditada plenamente la posesión de Furnus, en sus dos elementos esenciales: el *corpus* y el *animus*, constitutivos del *derecho de posesión*» así como las demás «condiciones requeridas por la ley».

«Resulta, así, justificado, dije, con lujoso exceso, todos los extremos legales que correspondían acreditarse por mi parte, para que procediera la presente acción».

Quise excederme en los detalles y explicaciones, para evidenciar la justicia y honradez de mis pretensiones, evitando la más mínima duda en el ánimo de mis Jueces, porque comprendo que no basta ser honrado y tener derechos, sinó también hay que exponerlos y defenderlos.

Y por qué no prospera esta acción evidentemente procedente para mí?

Según la sentencia (leída en presencia de la verdad constante en autos) porque Lagraña, como **poseedor anterior á 1882** (según hipotéticamente, sólo á los efectos de este pleito, admití) **mantuvo,**



por la sola voluntad (que se *presume* tuvieron), la posesión del campo San Luis (denunciado en compra ese año al Fisco por Furnus) durante los mismos diez años, cuya ocupación y población continua y excluyente de Lagraña (á quien no se ha reconocido derecho alguno, ni ha ejecutado actos posesorios de ninguna clase) probó haberla tenido Furnus, aunque (se dice) como mero tenedor (á nombre de nadie), como ocupante material, sin adquirir la posesión, porque no hizo constar su intención en un acte público y notorio (más que las constancias de un juicio contencioso administrativo, seguido por Furnus con Lagraña, durante esos diez años, sosteniendo que ese campo era *fiscal*, como *fué declarado y vendido* á Furnus, según sus títulos que corren agregados en autos. (Incidente sobre embargo preventivo).

Traducido, así, fielmente el significado de la sentencia, en cuanto á sus fundamentos para rechazar la presente acción, cualquier palabra más al respecto ofendería el elevado criterio de V. E.

XIII

Para terminar, V. E. me permitirá tratar dos puntos más:

Uno, indicando ligeramente el significado jurídico de los actos de ocupación, que he probado, á efecto de demostrar que son actos posesorios bien caracterizados.

Otro, transcribiendo, á título de ampliación de los fundamentos jurídicos de la posesión como derecho, es decir, del derecho de posesión, lo expuesto por mí en el informe *in voce*, que tuve el honor de que V. E. escuchara, y una cita más de Ihering.



En los veintisiete primeros capítulos de mi Alegato, traté in-extenso lo referente á todos los hechos que resultaban probados en autos.

No repetiré tanto detalle.

En el Cap. XXVIII-A, hice referencias á la no ejecución de actos posesorios de parte de Lagraña; pero, como á su respecto, no me corresponde la prueba negativa, y Lagraña, no ha producido ninguna, excuso también tratar nuevamente este punto.

Ese es el efecto inmediato de la posesión que tuvo Furnus, cuya prueba la ha suministrado el mismo Lagraña, desde que el hecho de haberla pedido judicialmente, implica que no la tenía (Jur. Civ. Ser. 2, tom 6, pág. 106).

Tampoco repetiré lo que ya queda dicho en el citado capítulo, en las letras C, D y E y sus referencias, á cerca de cuál es el campo Paníagua ó Pairirí, cedido por Lagraña á Pozzi, en 1883 y que sirvió de causa al despojo en 1892.

Hablaré de los actos de ocupación, ejecutados por Furnus, cuyo resumen se hace bajo la letra B, y considerándolos en sus principales hechos, si es posible año por año, por creerlo innecesario más en detalle, después de lo dicho.

En primer lugar, afirmé, y probé que, antes y durante 1882, ocupaba Furnus el campo San Luis.

Pero, dejando los detalles de la ocupación, los hechos más importantes por su significación jurídica, son: *a*) la compra de las haciendas hecha á los herederos de M. I. Lagraña, por Furnus, en Septiembre de ese año; *b*) la denuncia de ese campo fiscal, su solicitud en compra y aceptación del Gobierno, y *c*) permiso dado por Labougle á Furnus, después de darlo por recibido de Lagraña, para ocupar Puntas un año más.



Significan: *a*) y *c*) que Lagraña no tenía que ver absolutamente nada, ni directa ni indirectamente, con las haciendas, ni con el campo que ocupaba, y *b*) desconocimiento fehaciente y determinante del carácter de propietario de Lagraña sobre ese campo, y, por lo tanto, como poseedor, desde que estaba ocupado ya material é íntegramente por Furnus, sin permiso de nadie.

Los hechos probados, ya mencionados, á que se refieren *a*) y *c*), me excusan repetirlos, correspondiendo, además, la prueba contraria, si se quisiera desvirtuar su significado, á Lagraña, no á mí.

Sólo, pues, debo decir cuatro palabras sobre *b*).

A su respecto, el Inferior, transcribiendo un párrafo del escrito de denuncia en compra del campo fiscal, presentado por Vedoya, como apoderado de Furnus, ante el Gobierno de Corrientes, en 1882, dice que Furnus «reconoce que Lagraña ocupaba todo el campo, inclusive la parte fiscal», que esa «denuncia contiene el reconocimiento expreso de la posesión de Lagraña», y saca la consecuencia de que Furnus fué, desde entonces, mero tenedor, hasta...

A lo dicho en el Cap. X de mi Alegato y número VIII de la presente Expresión de Agravios, sólo agregaré que aun cuando dando preferencia á la letra, á la imperfecta redacción gramatical del escrito de denuncia, sobre su propio significado intrínseco, se admitiera que en tal escrito se hacía el reconocimiento, á que se refiere el Juzgado, nunca podría referirse sinó á la posesión anterior á la fecha de la denuncia, porque es evidente que tal acto público y notorio importaba el *desconocimiento* de todo derecho *posterior* de Lagraña, sobre ese campo desde que se le denunciaba y sostenía era propiedad fiscal, habiendo sido admitida tal oferta de compra.



Tal acto, cuando de hecho ya ocupaba Furnus, sin permiso alguno, el referido campo, manifestaba de una manera evidente su intención de poseerlo para sí.

Por lo menos, pues, *desde esa fecha* los actos materiales ejecutados por Furnus, eran realizados con la intención manifiesta de privar á Lagraña ó á cualquier otro de disponer de la cosa, y necesariamente producían ese efecto, dada la naturaleza de tales actos: la ocupación y población con numerosas haciendas, con una Estancia, etc.

Y si se observa que desde esa fecha en adelante (ni tampoco con anterioridad), jamás Lagraña hizo reclamo alguno á Furnus, debe admitirse que al cabo de *un año* estaba *adquirida la posesión* por éste.

Pero, para condescender con las exigencias del Inferior, admito, en hipótesis, que tal denuncia fuera un reconocimiento formal, amplio y terminante de la posesión de Lagraña, aun con posterioridad á esa fecha.

Y también, dejando de lado la ocupación, en que continuaba Furnus y el establecimiento definitivo de su Estancia en ese campo, donde replegó todas sus haciendas, al desocupar y entregar, en Octubre del año de 1883, el campo Puntas qué importancia tiene, como acto posesorio, la mensura de Scheffer, practicada en Agosto de 1883, en virtud de haber celebrado Furnus con el Gobierno el contrato de compra-venta del campo fiscal?

Y en análogas circunstancias ¿qué significa la mensura practicada en Diciembre de 1884 por el Señor Carlevaro, á petición y á costa *exclusiva* de Furnus y por la cual se mensuró, deslindó y *amojonó definitivamente* el referido



campo fiscal, cuyo título de propiedad se nos expidió después, previa aprobación de esa operación de mensura, deslinde, etc?

El art. 2384, que he invocado oportunamente, menciona, entre los actos posesorios, «su deslinde».

Y para justificar plenamente tal carácter de acto posesorio, me basta citar los fallos de la S. C. N. que se registran en la Ser. 2, tom. XVI, pág. 443 y Ser. 3, tom. V, pág. 288. (301, 330 y 375 (consdos. 1-383 y 6-393).

Y si se tiene presente que tales operaciones se realizaron en virtud de una denuncia en compra, como campo *fiscal*, estando *ocupado y poblado con una Estancia de propiedad del denunciante, á cuya solicitud y costa* se han ordenado y *practicado*, tendremos que convenir que son actos posesorios perfectamente definidos y de los que la ley requiere como característicos de la posesión.

Debe observarse también que, desde la mensura de Schefer hasta la de Carlevaro, había transcurrido *más de un año*, así como desde esta última hasta las adjudicaciones hechas en 1886, á Furnus, de las haciendas, muebles, etc, del San Luis, cuyas existencias se hizo constar en el inventario judicialmente levantado en 1885, como bienes pertenecientes á la sucesión de mi señora madre.

¿Qué prueba más satisfactoria y concluyente puede producirse, que tal inventario judicial, en el que se hace constar la existencia de una Estancia, que poblaba y ocupaba ese campo?

El art. 2384 dice que «son actos posesorios de cosas inmuebles: su cultura, percepción de frutos, su deslinde, la construcción ó reparación que en ella se haga y, en general, su *ocupación*



de cualquier modo que se tenga, bastando haberla en algunas de sus partes».

Como percepción de frutos, está la ocupación misma con animales que usan y consumen lo que los campos producen.

Se comprobó la construcción de casas, corrales, tajamares, etc.

Con los testimonios que constatan las adjudicaciones hechas en la sucesión de mi señora madre, en 1886, se acredita que mi señor padre quedó dueño exclusivo de todas las existencias, casa, construcciones, semovientes, muebles etc, con que se ocupaba el campo San Luis.

Su ocupación continuó tranquila durante los años 1887 y 1888, sin haber ningún hecho notable que mencionar fuera de los actos ordinarios y propios del funcionamiento de una Estancia: que son actos posesorios bien caracterizados.

Aun más: la voluntad, de que tales actos fueran con la intención de poseer para sí, excluyendo, por consiguiente, á Lagraña, se manifestaba en forma siempre auténtica, en las gestiones que se hacían en Corrientes, á fin de que se aprobara la mensura de Carlevaro y se le otorgaran los títulos de propiedad de este campo.

Furnus poseía á título de Dueño no sólo la posesión, sinó también la propiedad misma.

Tales pretensiones de Furnus, que definen siempre mejor los actos materiales de posesión que ejecutaba con su ocupación del campo, se han hecho constar también en juicio, llevándolo al conocimiento directo é indubitable de Lagraña.

Cuando éste demandó á Pozzi, ante el Juzgado de Paz, en Febrero de 1889 (v. Cap. XXI Alegato), Pozzi contestó á Lagraña, que él no era allí (en el campo San Luis) más que un en-



cargado de Furnus, que se decía dueño del campo y con quien debía entenderse.

Cuando al fin de ese mismo año, se le demandó de nuevo ante el Juez Federal, se repitió la misma contestación, exhibiendo una carta de Furnus, que basta leerla (f. 264 en testimonio) para eliminar toda duda al respecto.

Unida á tales manifestaciones de voluntad, en actos públicos y notorios, como requiere el Inferior, en actuaciones judiciales, iban los actos materiales de la ocupación en que continuaba Furnus.

Del año 1890, hay una constancia más: el nombramiento de Puga, como encargado de la Estancia de Furnus, en San Luis: hecho reconocido por Lagraña, tanto de la existencia de la Estancia misma, como del nombramiento referido, al formular la repregunta 8 de f. 368 (V. actuacs. f. 290).

Esta ocupación de Furnus, continúa, sin interrupción de ninguna clase, durante los años 1891 y 1892, hasta el mes de Agosto, fecha del despojo, como se comprueba en los Cap. XXIV y XXV de mi Alegato.

Y si *Lagraña jamás ha pretendido que Furnus hubiera ocupado con su permiso ni en su nombre, ni ha iniciado gestión alguna contra él, en ninguna época* y conocía desde 1882 su ocupación y sus pretenciones contrarias á los derechos que podrían tener, desde que intervinieron en las gestiones que había promovido en Corrientes, sobre compra de ese campo que sostenía era fiscal, ¿cómo pudieron, á pesar de estos actos posesorios, mantener la posesión por el solo poder de una voluntad, que no se ha manifestado en forma alguna?

Es cierto que la ley *presume* que la voluntad



de poseer continúa mientras no se haya manifestado una voluntad contraria, mientras dure desocupada la cosa.

Pero también es verdad que la misma ley presume y establece que esa voluntad desaparece, si no se manifiesta á defender su posesión *dentro del año*, cuando un tercero ocupa la cosa y dispone de ella excluyéndolo de hecho.

Saliendo la Ley á la defensa del despojado, presume que lo fué contra su voluntad de poseer y por eso le mantiene su posesión por un año más, confiriéndole acciones correspondientes, pero á condición de que salga en su defensa dentro de ese año.

Y si no lo hace, la ley *presume que ya no tiene voluntad*, y entonces da las acciones al nuevo poseedor, porque el hecho de haberse mantenido en la ocupación *durante el año*, es una prueba de que tiene voluntad de poseer para sí.

Se requiere, pues, solo *un año de posesión*.

Y, sin embargo, el Inferior establece que Lagraña mantiene la posesión nada menos que por *diez* años!

Y la prescripción para adquirir la posesión y perder las acciones posesorias, dónde queda?

Es cierto también que han invocado un *permiso* dado á Pozzi en 1883, pero refiriéndolo al campo San Luis es una falsedad dolosa, porque *se refería al campo Pairiri* ó Paniagua, que es el contiguo al San Luis, como lo demostré en los Caps. XV y XXVII de mi Alegato.

Lagraña, tenía conciencia de la existencia del patriolengo desde 1858 y por eso mandó hacer la mensura de Caballero, ubicándolo en el fondo, para defraudar al Fisco.

De modo que cuando entregó Puntas á Labougle, bien sabía que el campo fiscal quedaba en des-



cubierto y mucho más cuando mi señor padre, en el Escritorio de su casa en Curuzú-Cuatí, comunicó entonces al señor Javier Lagraña su resolución de denunciarlo en compra, y hasta le ofreció cederle sus derechos, no sé en qué condiciones.

Tal es la razón porque Lagraña jamás hizo gestión alguna contra Furnus, respecto de ese campo.

Pero, parece que en 1889, viéndose continuamente á Pozzi en la Estancia, observando que la carta dirigida por Pozzi en 1886 al Dr. Gómez, no determinaba el campo Pairirí, á que, en realidad, se refería, alentados con los negocios que se hacían en esa época y por las facilidades que ofrecía una situación política, cuyo as de oro era el Dr. Gómez, poseedor de la carta é interesado en obtener esos campos en arrendamiento, como dice, intentaron una *aventura* judicial, que hasta hoy no les ha salido mal, mediante la audacia desplegada y las influencias varias puestas en juego.

Sólo así se explica que haya nacido este largo litigio, en el que no ha podido aún hacerse la luz.

Pero, mis esfuerzos, por exhibir la verdad, deben ser al fin coronados, con el reconocimiento de mis pretensiones, porque me asiste el derecho y la justicia, y V. E. no permitirá que la ultrajen impunemente las falsedades de que se valen los porfiados usurpadores de terrenos de propiedad fiscal, hasta 1893.

Y digo terreno de *propiedad fiscal*, con mayor razón hoy que tengo conocimiento de que *once días* antes de dictarse la sentencia del Inferior, mediante gestiones de Lagraña, un Juez de Corrientes acaba de declarar que la venta del



Rincón fué *ad-mensuram* y que, en consecuencia, existía *excedente fiscal*.

Parece que esta resolución se ha obtenido en un juicio de remensura, en el que consta la de Caballero, y, á título de salvar sus errores y deficiencias, la practicada en 1883. peor aún que la primera, por el Señor Sánchez, hermano del representante y Abogado de Lagraña.

Y sabe V. E. qué se hace con el *excedente fiscal* que según ellas resulta?

El mismo Juez, ya *incompetente* para entender en este asunto, por no corresponder á su jurisdicción, *violando todas las leyes de tierras* de la Provincia y usurpando atribuciones propias del Poder Ejecutivo, que es el único competente para la enagenación de las tierras fiscales, vende implícitamente, ese excedente fiscal, á Lagraña, al precio que tuvieron en 1781, y cuyo total alcanza á *diez* pesos moneda nacional!

Ahí tiene V. E. cómo se administra justicia en Corrientes!

Los mismos Jueces aparecen (porque olvidan que no basta ser honrado, sinó que hay que aparecerlo también, porque ni con las apariencias deben autorizar sospechas) aparecen digo, como cómplices de fraude, é involuntariamente hacen pensar, á los que ven de lejos estas cosas, si más que el Juzgado les convendría un manicomio ó una cárcel!

Si tendré razón de venir á poner en manos de los Jueces de la Capital mis importantísimos derechos é intereses, por tanto tiempo discutidos!

Al menos, aunque mis pretensiones fueran rechazadas, tengo la convicción íntima de que se me darán razones que abonen la sinceridad de mis Jueces.



XIV

Sólo me resta ahora transcribir el INFORME IN VOCE, á que he hecho referencia, porque contiene el desarrollo de la teoría del *derecho de posesión*, que sirve de base á la *acción posesoria* promovida, complementando el estudio de las prescripciones legales que he hecho, en el escrito de f. 59 y en el Cap. XXX de mi Alegato.

Y con ello, terminaré esta ya larga exposición, porque son numerosos los autores que pueden ilustrar al respecto, entre los cuales se encuentra el sabio jurista alemán, Rodolfo Von Ihering, que, en sus «Cuestiones Jurídicas» traducidas por el Señor Posada, en el Capítulo de «La Posesión. Teoría simplificada», párrafo VI, concreta su teoría, probando que *«la posesión es un derecho»*.

.....

(El informe aludido corre impreso en un primer folleto).

CÁSTULO L. FURNUS.



R É P L I C A







EXMA CÁMARA :

Que la exhibición del testimonio de que se me corre traslado, confirma plenamente lo que tengo dicho al respecto, á en mi expresión de Agravios.

Un Juez revendiendo á Lagraña, en 1896, un excedente de tierra pública, por *diez* pesos moneda nacional de curso legal, cuando el Gobierno, única autoridad competente, vendió á Furnus, de acuerdo con las leyes vigentes desde 1869, ese excedente de tierra fiscal, por *treinta y un mil seiscientos* pesos moneda nacional!!

Y aun se tiene el coraje (diré, para no usar los vocablos emponzoñados de la contraria) de decir enfáticamente que los títulos otorgados á Furnus, por el Gobierno de Ruiz, quedarán como papeles inservibles!

Allá lo veremos!

Excmá. Cámara, un solo argumento encuentro, á esta altura de la cuestión, que me es contrario y me preocupa: la discusión y comprobación demasiado extensas y minuciosas que he hecho.



Es mía la culpa?

No. Yo hubiera usado de concisión si la parte de Lagraña no hubiera sido tan temeraria, como V. E. lo observa hoy mismo que, después de la sentencia que declara probada la ocupación, por blación, etc., de Furnus, aun afirman que Furnus *nunca ocupó*, para decir en seguida que éramos *intrusos*, que hacíamos *pastar haciendas* en el campo, que fuímos *expulsados* en 19 de Agosto de 1892 (sin ser citados ni oídos en juicio alguno) que ellos «jamás han reconocido que Furnus poseyó nada, cuando *desde* la denuncia de 23 de Septiembre de 1882 *hasta* la demanda que originó este litigio, *han considerado al causante Furnus y á su sucesión como usurpadores!!!*

En verdad, Furnus era USURPADOR, pero no como Lagraña que pretendía apropiarse indebidamente el campo, sustrayéndolo del dominio del Fisco, sinó con el propósito sano de devolver esa propiedad á su dueño, á quien compró legalmente por su justo valor.

Lagraña quiere tapar el cielo con un harnero. Exhibe testimonio de una resolución contraria á sus absurdas pretensiones, porque en ella se declara que la venta del Rincón del Chañar no fué *ad-corpus* sinó *ad-mensuram* y, por tanto, que en esos campos existía excedente *extra-mensuram*, fuera de sus títulos y cuya venta se hace implícitamente, en la segunda parte de esa resolución.

V. E. tiene declarado en el fallo Ser. 2. Tom. 2. pág. 491, que el Juzgado no puede hacer declaración sobre ubicación que afecte el dominio, y que, terminado el juicio de mensura, los que pretendan tener títulos sobre el terreno deben iniciar nuevo juicio.



Tratándose de excedente fiscal, nadie sino el Gobierno es quien puede venderlo, de acuerdo con las leyes vigentes.

Pero, esto se refiere á la propiedad, de que no tratamos, y ¿qué dice ese documento respecto de la posesión que litigamos?

Nada menos significa. Excmo. Cámara, que Lagraña jamás pudo ser poseedor del excedente fiscal, desde que la posesión, fundada en título, comprende solo la extensión del título, y ellos nunca han alegado, ni sostenido que, por otras causas, como dice el art. 2411 del Cód. Civil, hubiesen adquirido, *corpore et animo*, la posesión del excedente, de lo que está fuera de la mensura, fuera de sus títulos, exclusivamente invocados por ellos, para probar su posesión de lo que no está comprendido en ellos. (V. Llerena, art. 2411).

Lagraña suministra con esa resolución, por ellos consentida, la prueba contraria á su pretendida posesión del excedente de campo fiscal, que fué definitivamente mensurado por el Gobierno, según constancia de mis títulos de propiedad y con intervención de Lagraña, previa ubicación del campo llamado Rincón del Chañar, en la extensión de sus títulos, que siempre he reconocido y respetado, porque mis pretensiones versan sobre el excedente fiscal contiguo.

Después de tanto disparate no es extraño que invoque hasta su propia inacción como prueba de posesión!!, olvidando ó ignorando que precisamente su abstención, por un solo año, es lo que convierte la mera ocupación en verdadera posesión!

La dirección contraria, careciendo de algo mejor, usa del insulto para quienes no tiene el honor de conocer, sin duda pensando triunfar con sus gracias.



Porqué no me acusa criminalmente, si soy calumniador?

Por es mencallo, decía Sancho....

Para no agravar más el *solo* argumento contrario á que me he referido y que V. E. apreciará debidamente, terminaré pidiendo disculpas por las molestias que la contraria me ha obligado á causarle, distrayendo sus recargadas atenciones.

Resuelva V. E. de conformidad con lo que tengo solicitado, que será justicia. etc.

CÁSTULO L. FURNUS.

INFORME

I N V O C E







EXCMA. CÁMARA:

1. Muy poco, quizá nada, debiera agregar á lo que ya tengo dicho, porque, á más de los elementos jurídicos de mi acción, los hechos que constituyen mi posesión, no de uno, sinó de diez años continuos, han sido expuestos en su verdad real, tales como son, porque no concibo que tengan varios colores, doble existencia ó más de un significado.

Todo está discutido y probado con exceso.

Y aun más, no encuentro un solo punto cuya solución ofrezca siquiera mediana dificultad.

V. E. no tiene que resolver ninguna cuestión de derecho.

Sólo necesita interponer su autoridad judicial para establecer en plena luz del medio día que es de día y no de noche, como lo sostiene dolosamente la contraria, que cierra los ojos, no por ceguera, sinó porque no quiere ver, ó, mejor dicho, porque no quiere que otros vean lo que por tantos años ha ocultado.

Es verdad que en primera Instancia perdí esta causa: pero, la razón es tan sencilla, como deplorable, para todos los que no olvidan que la justicia es la más preciosa garantía de los derechos.



Perdí, porque este pléito no se estudia y falla, ni siquiera se leen los autos en dieciocho horas escasas!

Dos dificultades se oponen: una *material*, lo voluminoso de los autos, que exige el sacrificio de algo más que las citadas 18 horas, y la otra *moral*, porque la modesta verdad siempre ha sido más tímida que la audaz mentira.

Yo uso de sinceridad, busco y exhibo la verdad y procuro conservar inquebrantable la moralidad en mis actos y en mis dichos, para no ser injusto, mientras que la contraria, asumiendo una actitud incalificable por dolosa, lo tergiversa todo: adultera hechos materiales, falsea derechos indiscutibles, trastrueca el sentido literal y lógico de los vocablos más vulgares, ofende la corrección del lenguaje propio de las gentes cultas, y faltando al respeto debido á V. E., no guarda ni las consideraciones mismas que nos debemos como hombres y como racionales.

Y ellas han predominado, Excmá. Cámara, ante el Inferior, porque en 18 horas no podía volver la calma al espíritu mareado en ese mar revuelto de impurezas!

Baste saber que por obra y gracia de las agencias contrarias, el Gobierno de Corrientes no ha podido, durante 35 años, disponer del campo fiscal, sobre cuya posesión litigamos.

Hemos seguido once años un juicio, á fin de obtener los títulos de propiedad, y hacen cinco que nos han quitado una posesión de diez años, mediante el juicio de desalojo más herético que registran los anales jurídicos.

En cambio, Excmá. Cámara, no hay un solo antecedente invocado por mí, para fundar esta acción, que no sea la expresión fiel de la verdad real, que me consta desde hacen 15 años y



por eso, al apreciarla con intención sana y honrada, me sugiere la convicción íntima del éxito de mis pretensiones, no obstante la sentencia adversa y esa tergiversación contraria, que V. E. verá convertirse en globitos de jabón, cuando estudie esta causa con el elevado criterio jurídico que corresponde á su ilustración.

2. Aunque nada tengo que agregar en pro de mis pretensiones, creo debo ayudar á salvar las dificultades apuntadas.

A ese efecto, quiero hacer á V. E. una relación rápida aunque fiel de lo alegado y probado por ambas partes: la historia de los antecedentes de esta causa, tales como resultan comprobados en autos. Pero, para asegurar la mayor exactitud, voy á permitirme descartar de una sola vez todo lo hiriente y ofensivo de los escritos contrarios, á fin de razonar con independencia del escozor que naturalmente causa toda palabra injuriante.

En los escritos de contestación á la demanda y á la expresión de agravios, V. E. observará que se me dirijen los siguientes obsequios: «el actor lleva la *audacia*, impulsado por su avidez de apoderarse de lo ajeno.... *superchería* del actor.... *mentira* calumniosa.... *miserable* y *atroz calumnia*.... el actor lleva la audacia de sostener con todo *cinismo*.... ha tenido la *audacia de calumniar* á testigos honorables.... y hasta lanzar contra un Juez la *infamia* de reputarlo digno de un presidio ó de un manicomio»....

Me tratan de calumniador: pero, se guardan muy bien de acusarme!!

Mis afirmaciones son exactísimas y las manten-



go íntegras, así como mis calificaciones de los actos contrarios son estrictamente jurídicas, y hechas, (desde que lo cortés no quita lo valiente) con el debido respeto á las personas y no gratuitamente ofensivas, como los epítetos trascritos, que no he pedido fueran testados, para que V. E. tuviera la muestra de las ideas más selectas de la contraria.

Para que la fuerza de una comparación dé mayor energía á mi pensamiento y pueda ser más rápida y eficaz la eliminación aludida, V. E. me va á permitir una breve anécdota:

Un distinguido caballero, festejaba, con una comida íntima, el cumpleaños de su esposa, que hacía la felicidad de su hogar; alguien exige entregarle un obsequio, que, en una bandeja cubierta con rico paño, le enviaba un falso amigo.

Pasa al comedor, se descubre la bandeja y los concurrentes quedan atónitos ante el obsequio: dos enormes cuernos y una tarjeta del remitente.

El caballero deja la bandeja sobre la mesa, toma otra, sale al jardín, la llena de flores y entregándola al sirviente, le dice la lleve á su amo y le diga que, como cada uno da lo que tiene, él le envía esas flores y conservará los cuernos, con su tarjeta, para que conste su procedencia!

Luego, como cada uno da lo que tiene y el lenguaje es traducción fiel del pensamiento del que lo usa, pido á V. E. que no olvide la procedencia cuando, al recorrer los autos, encuentre esas falsedades, absurdos, expresiones incul-tas, dolo, injurias, etc., referidas, que deleitan á la contraria.

3. Contra la sentencia del Inferior, opuse los recursos de nulidad y apelación, fundados en mi expresión de agravios.



Pienso hoy que, mantener el primero, sólo favorecerá á la parte demandada, porque dilatará la terminación de este juicio, al fin del cual no será difícil que todos los demandados sean insolventes, como ya lo están hoy algunos de ellos.

Las responsabilidades contrarias disminuyen á medida que se aproxima la solución final.

Además, es dudosa la necesidad práctica de tal recurso, desde que V. E., al resolverlo, tiene forzosamente que prescindir de ese sentencia, tan ligera en sus apreciaciones, como equivocada en sus conclusiones.

Desisto de ese recurso, en la inteligencia de suprimir una dificultad más.

APELACIÓN

ANTECEDENTES

4. Y concretándome al de apelación, referiré los hechos en orden cronológico, haciendo presente á V. E. que sólo mencionaré los comprobados, según constancias exclusivas de autos.

En Corrientes, existe una gran zona de campo que tiene de ancho, más ó menos, una legua y media, limitado: al Norte, por el arroyo Pelado, al Sur, por el Chañar, los que se unen al Oeste, y desde cuya confluencia hay más de *diez leguas* hasta el Mocoretá, que la limita al Este.

Esta zona de tierra se divide en tres partes.

La fracción del Oeste, con 7 leguas y 700 varas de fondo, se llama «Rincón del Chañar» y pertenece á la sucesión demandada, desde 1781.

La fracción del Este, con legua y media de fondo se llama «Puntas del Chañar» la compró La-graña en 1857 y pertenece á la Sra. de Labougle, desde 1882.



Otra fracción situada en medio de ambas y con legua y media de Este á Oeste, se llama San Luis, *es propiedad de Furnus* y hace el objeto exclusivo de este pleito, sobre su posesión.

Lagraña niega la existencia de ésta y con un cambio de nombre, pretende hacerla desaparecer; pero, el campo está allí, con la extensión precisa que le dan la mensura y plano, aprobados por la autoridad competente y agregados á mis títulos de propiedad exhibidos.

Alegué que mi Sr. padre, Luis Furnus, tuvo *posesión* de esa fracción intermedia, desde 1882 hasta su muerte, continuándola sus herederos hasta Agosto de 1892, en que fuimos despojados.

Lagraña niega en absoluto la posesión y consiguiente ocupación de Furnus y, para atribuirse ese campo, en propiedad y posesión, alega: 1º que es parte integrante del Rincón, 2º que cedieron su ocupación á Pozzi en 1883, y 3º que el lanzamiento de Agosto 17 de 1892 fué un simple desalojo contra su tenedor precario.

Negué que esa fracción fuera parte integrante del Rincón, porque era campo fiscal, vendido á Furnus el 82, otorgándosele el título de propiedad el 93: sostuve que el permiso dado á Pozzi se refería á otra fracción contigua, llamada Pairirí, desocupada el 86 y, por tanto, que el lanzamiento del 92 era un verdadero despojo de Furnus.

Tal es el resumen de lo alegado.

El objeto de este juicio es recuperar la posesión del San Luis.

Luego, el punto capital y esencial á resolver es si Furnus tenía su *posesión* en 17 de Agosto de 1892.

Sostengo que sí, y nada menos que desde 1882; es decir, desde *10 años* antes de la fecha del despojo!



Y como la ley no requiere sinó *un año* para la adquisición y pérdida: es decir, para la prescripción de la posesión y sus acciones, he dicho siempre que había comprobado, en este juicio, diez veces mi derecho, porque he justificado *diez años de posesión* exenta de vicios.

PROPIEDAD

5. La contraria, sin embargo, no se ha dignado examinar los actos que constituyen la posesión invocada, sinó que, exhibiendo los títulos del Rincón, ha discutido hasta el presente la *propiedad* del San Luis, como V. E. acaba de oírlo.

De ellos resulta que los antecesores de Dn. Manuel I. Lagraña compraron, *al Fisco*, en 1781, el campo llamado «Rincón del Chañar», con 7 leguas y 700 varas de fondo, que llegaba hasta la *confluencia* misma de los arroyos Chañar y Pelado, por todo el ancho del frente comprendido entre los mismos.

De la zona total indicada, quedaba, pues, una fracción de *campo fiscal*, que llegaba hasta el Mocoretá y que tenía como *tres* leguas de fondo.

En 1857: es decir, 76 años después, Dn. Manuel I. Lagraña, compró *al Fisco* el campo llamado «Puntas del Chañar» que queda sobre el Mocoretá, previa mensura del Agrimensor Caballero, quien lo midió, amojonó, le dió una legua y media escasa de fondo, de Este á Oeste, y colocó, en dicho año 57, un mojón de piedra sobre la costa del arroyo Chañar.

Quedaba, así, otra fracción intermedia de legua y media de campo *fiscal*.

Al año siguiente, el mismo Dn. Manuel I. La-



graña. solicitó la remensura de campo Rincón y el Sr. Caballero practicó las diligencias que en original fueron exhibidas por la contraria.

Se observa que el Agrimensor arrancó sus operaciones del mismo mojón de piedra colocado arbitrariamente por él pocos meses antes, mensurando todo como si fuera de Lagraña.

Y la otra fracción de campo fiscal, con una legua y media de fondo, que aun quedaba el año anterior. ¿qué se había hecho?

V. E. habrá oído decir de *bueyes volando*; pero, seguramente nó, de campos, *aunque fueran fiscales!*

¡Lástima que al autor de aquel drama no se le hubiera ocurrido introducir esta novedad en su escena!!

Quedaron atrás sus atrevidas concepciones, sin duda por ser más líricas que esa *traslación misteriosa de dos leguas cuadradas de campo fiscal*, que no era inocente: pues obedecía á un plan de resultados positivos, era una verdadera *superchería*, como tanto usa la contraria.

Desde ese mismo año, Lagraña sostuvo que la compra del Rincón había sido *ad-corpus* y que ese *excedente fiscal*, trasladado *ex-profeso* sobre la confluencia de los arroyos Chañar y Pelado, donde su superficie se reducía á una *cuarta* parte y su valor á un centésimo, le pertenecía como *integrante* de su propiedad!

Esa treta de un *excedente integrante* continúa haciéndose valer hasta hoy mismo; como acaba de escucharlo V. E. en este acto.

—

Entre tanto, en 1882, mi señor padre, de acuerdo con las leyes de tierras, vigentes desde 1869,



que le daban derecho preferente. denunció en compra el excedente fiscal que Lagraña quería evaporar.

El Gobierno, única autoridad competente al respecto, resolvió, en 1893, declarando que el excedente fiscal estaba ubicado, no en el *rincón* del campo, como pretendía fraudulentamente Lagraña, sinó donde debía estar, entre los campos Puntas y Rincón; es decir, la fracción intermedia llamada San Luis, de la que, de acuerdo con el contrato concertado el 82, se nos otorgó *título de propiedad* en 10 de Agosto del 93, pagando nosotros, fuera de los gastos hechos en once años de reñido pleito, 31.600 \$ $\frac{m}{n}$.

La contraria, como digna corona de sus ilícitas pretensiones, sustentadas desde el 57, exhibe hoy el testimonio de la resolución dictada en Noviembre del 96, por el Sr. Juez que intervino en el expediente promovido el 58, sobre remensura del campo Rincón.

En su primera parte, se declara que la venta de ese campo fué *ad-mensuram*, lo que importa rechazar las pretensiones sostenidas por Lagraña, durante 38 años, de que era *ad-corpus* y que el *excedente era integrante* de su propiedad.

En la segunda, el Juzgado olvida las leyes de tierras, así como que toda venta sólo puede ser hecha por el propietario, el Fisco, en este caso, y no por un Juzgado, y permite á Lagraña, después de 26 años de perder todo derecho á la compra de ese campo, de 14 años de adquirir derecho preferente Luis Furnus y 3 años después de otorgárseles el título de propiedad, á pagar un precio proporcional á la venta de 1781, y que importa..... lo creará V. E.?.... ~~diez~~ pesos moneda nacional c/1!!

El hecho de la venta prueba la existencia del campo, y el precio, la medida de la buena fé.



En autos verá V. E. que la parte contraria más de una vez, cándidamente se escandaliza de que alguien pretenda derechos sobre el campo San Luis, diciendo que ello importa una ofensa á la respetabilidad de los títulos que le dan la posesión y la propiedad del Rincón, desde hace más de un siglo!

No comprendo cómo los títulos del Rincón del Chañar puedan dar derecho á apropiarse campos ajenos, aunque sean linderos y fiscales, y menos aún, despues de otorgárseños los *títulos de propiedad* del San Luis, previo saneamiento del Rincón.

Y si se observa que no tratamos de este campo, sinó del San Luis, ni litigamos la propiedad que evidentemente nos pertenece, sinó la posesión, concluiremos que no se distinguen las nociones jurídicas de *ocupación*, *posesión* y *propiedad*, y que tiene razón Adolfo Posada, traductor y anotador de Ihering, al afirmar que tal distinción solo puede encontrarse después que la cultura llegue á cierto grado.

POSESIÓN

8. Y al entrar en lo que hace la materia directa de este pleito, debo recordar, porque el inferior lo olvidó por completo, que la ley sólo exige un año de posesión anterior al despojo; es decir, en el caso sub-judice, desde el 17 de Agosto del 91 hasta el 17 de Agosto del 92.

¿Quién disponía del San Luis en dicho año?

La prueba plenisima de que Lagraña no lo tenía, la encuentra V. E. en el mero hecho de haber seguido un juicio, desde el 89 hasta Agosto del 92, solicitando su entrega.



Quién lo ocupaba entonces?

Yo afirmé que Furnus.

Lagraña dirigió aquel juicio contra Carlos J. Pozzi, sosteniendo que éste lo **ocupaba** con su permiso, siendo, en consecuencia, tenedor precario y ellos los poseedores.

Es sabido que la ocupación se efectúa por hechos materiales.

Me basta preguntar: ¿qué actos ha realizado Pozzi en el San Luis durante ese año?

Lagraña no ha probado uno solo siquiera.

En cambio, para acreditar la ocupación y posesión de Furnus, basta citar las siguientes constancias de autos:

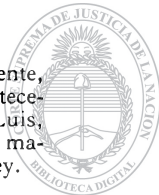
1º el documento de fs. 290, en el que consta que Furnus, en Abril del 90, con intervención judicial, nombró Mayordomo de su Estancia San Luis al Sr. Francisco Puga, en reemplazo de Pozzi;

2º la repregunta 8 (fs. 367 v.) formulada por Lagraña al testigo Sr. Puga, en la que se reconoce la verdad de su nombramiento como «Encargado (dice) del Establecimiento que él denominaba San Luis, ubicado en el Rincón del Chañar»....

3º la diligencia de fs. 187, en la que el Comisario Cuenca da cuenta del desalojo, consignando que José Luis Furnus estaba presente y se opuso en el acto, diciéndose dueño de casa, existencias y campo, habiéndose extraído haciendas que eran de su propiedad, como lo consignó el mismo oficial desalojante y lo comprobé en autos, con otros elementos probatorios.

Esto es decisivo en mi opinión.

Pero, como Lagraña afirma que éramos **intrusos** y que nos ocultábamos tras la sombra de Pozzi, aprovechando de un permiso que le



dieron en 1883, imputándonos, por consiguiente, una infidencia, necesito referirme á los antecedentes de la ocupación y posesión del San Luis, aun cuando es sabido que la buena fé, en materia de posesión, no es requerida por la Ley.

1882

7. Corre á fs. 229 un ejemplar del contrato de sociedad celebrado en 1876 por los señores Lagraña y Furnus, como capitalistas y Pozzi como industrial, estableciendo una Estancia en el campo «Puntas del Chañar», siendo Furnus el administrador.

Entre otros comprobantes, la contestación dada por Francisco Javier Lagraña, á la posición 9 de fs. 344 vta., acredita que: *durante todo el año de 1882*, las haciendas de la Estancia pacían hasta el arroyo Paniagua, donde estaba el *puesto Chamorro*: es decir, en el campo San Luis.

De varias declaraciones de testigos, resulta que existía un rodeo, llamado «Tagüé», como de 3000 vacas, que comían en ese campo.

No se alegó en oportunidad ni se comprobó en autos, que esta ocupación ordenada por Furnus, hubiera sido con permiso de Lagraña, quien había fallecido, en esta capital, en febrero de dicho año. Aun más, la contraria repite siempre que nunca ha permitido ocupación alguna á Furnus.

En Agosto de ese mismo año, por transacción celebrada en un pleito seguido con la Sra. Labougle, la sucesión Lagraña se había compro-



metido á entregarle el campo «Puntas». dentro de los tres meses siguientes.

En Setiembre. Furnus compró á la sucesión de Lagraña todas las haciendas que le pertenecían en la Sociedad. la que quedó disuelta, correspondiendo á Furnus 4480 vacas y á Pozzi 740.

Mediante la referida compra de las haciendas. el Dr. Labougle dió por recibido el campo de parte de Lagraña. y permitió á Luis Furnus. con quien se entendió exclusivamente. que *continuara ocupando un año más* su campo «Puntas».

Por consiguiente. la sucesión Lagraña quedó desligada de toda ingerencia desde Setiembre de 1882.

Como consecuencia. resulta comprobado en autos y sin contradicción alguna. que Furnus *permaneció* y *continuó* con su Estancia en los mismos campos que ocupaba: el llamado «Puntas». cedido por el Dr. Labougle. y el contiguo. hasta el Paniagua. *inclusive el Puesto Chamorro*. en las condiciones que ya lo tenía: sin permiso de nadie.

Aun más: la ocupación del campo llamado San Luis. no sólo se efectuaba *sin permiso* alguno. sino que. desde Setiembre. se realizaba con *desconocimiento expreso* de todo derecho de extraños. desde que. según consta de mis títulos de propiedad. mi Sr. Padre denunció en compra. ante el propietario. el Gobierno. el excedente fiscal que había en esos *campos del Chañar*. cuya existencia y ubicación eran conocidas. á ciencia cierta. desde las mensuras de Caballero en 1857 y 1858.

Sin más novedad transcurrió íntegro el año 82 y el primer semestre del 83. y. ante la ocupación que tenía Furnus de esa fracción intermedia. en la forma indicada y por el tiempo re-



ferido, ¿puede dudarse que haya adquirido legalmente la posesión?

Lo creo indiscutible, desde que tuvo por *más de un año* la ocupación, el *corpus*, y con ella y su *denuncia, manifestó el animo*.

Pero, como en el escrito de denuncia en compra del excedente fiscal, que existía *en esos campos del Chañar, desde la confluencia de los arroyos hasta las Puntas*, el apoderado de Furnus decía que Lagraña los ocupaba como de propiedad, tanto la contraria, como el Inferior, afirman que ello importa el reconocimiento de la ocupación de Lagraña.

Lo que tal afirmación importa, para mi, es el desconocimiento del significado, tanto del hecho, como del vocablo «*ocupación*», y con mayor razón, cuando se le sustituye frecuentemente por el de «*posesión*».

Lo curioso es, que, tanto la contraria (posición y citada), como el Inferior, reconocen que Furnus *ocupaba de hecho, materialmente*, y, sin embargo, encuentran en el uso impropio de aquel vocablo, una prueba de la ocupación de Lagraña.

Según ellos, coexistían dos ocupaciones: una, *real* de Furnus y la otra, *ideal* de Lagraña.

Esta parte no ha ejecutado un solo hecho, un solo acto que realizara esa ocupación ideal.

No le quedaba, así, otro camino que atribuirse la ocupación real de Furnus.

El Inferior le obsequió esa defensa gratuita!

Pero Lagraña no alegó, ni siquiera admitió, que Furnus ocupara en su nombre.

Se ha limitado á invocar aquel supuesto reconocimiento hallado en una palabra incidental de un escrito, cuyo único y esencial objeto era jus-



tamente negar todo derecho á Lagraña, inclusive el de propiedad!

Negó en absoluto la ocupación de Furnus, y, sin embargo, ha reconocido que antes, durante y después de 1882, sus haciendas *estaban* en el campo de referencia!

¿Cómo se explica que Lagraña ocupara el campo sin ejecutar un solo acto material y sin ser por intermedio de Furnus. *materialmente intruso*. como dice. *realmente metido* en él, ya que no quiere decir *exclusivo ocupante*?

Para explicarlo. *sustituye personas. antidata hechos, traslada campos. modifica el significado de los vocablos y destroza la lógica.*

En lugar de Furnus coloca á Pozzi, á quien erige en ocupante sin serlo ni quererlo.

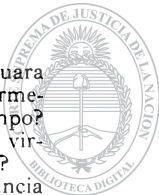
Un permiso dado el 83, lo retrotrae. en sus efectos. á hechos pasados el 82.

Absorbe en la ocupación del Pairiri. permitida á Pozzi en Julio del 83. la ocupación de Furnus sobre el San Luis antes y durante el 82, y porfía siempre en hacer *lindar* los campos «Rincón» y «Puntas». llamando «Paniagua» al «San Luis», para hacer desaparecer esas dos leguas de campo fiscal. que cuestan á Furnus, fuera de los gastos. 31.600 \$ y á ellos, un Juez acaba de venderles implícitamente por 10 \$ $\frac{1}{100}$, so pretexto de que ese *excedente es integrante!!!*

V. E. acaba de oírlo. en este mismo acto, del distinguido Abogado de la parte demandada.

¿Cómo pudo ser Pozzi el ocupante del San Luis en 1882 si consta en autos que Furnus compró la parte íntegra del otro socio capitalista, Lagraña, alcanzando sus haciendas á 4.500 vacas, que permanecieron en el mismo campo?

¿Cómo pudo ser Pozzi, cuando Labougle se entendió directa y exclusivamente con Furnus,



le concedió un año más para que continuara ocupando el campo Puntas. y. por su intermedio. dió por recibido de Lagraña dicho campo?

¿Cómo pudo ser Pozzi ocupante el 82 en virtud de un permiso dado á mediados del 83?

Y Furnus. que hacía en público la denuncia de la existencia del campo fiscal. lo que jamás puede constituir un acto inmoral ó ilícito, y haciendo uso del derecho preferente que le conferían las leyes vigentes desde el 69. lo solicitaba en compra. en condiciones **3.160** veces más ventajosas que las ofrecidas por Lagraña. ¿necesitaba ocultar su ocupación del San Luis tras el nombre de su yerno Pozzi. como pretendió hacerlo Lagraña cuando el Dr. Labougle le exigió rendición de cuentas de su administración de la Estancia Puntas?

Furnus no necesitaba. ni acostumbraba á eludir las responsabilidades de sus actos. porque nunca ha pretendido usurpar derechos ajenos, y lo que hizo con su denuncia era descubrir ante el dueño. ante el Gobierno. la existencia de su propiedad. misteriosa y fraudulentamente trasplantada.

1883

8. Pasando el año 83. resulta que el mentado *permiso* gratuito (tan costoso para Furnus) dado á Pozzi, por Javier Lagraña. y del que han hecho piedra de escándalo en este asunto. se refería. no al San Luis. sino al *Pairirí*.

Me basta citar tres constancias de autos para evidenciar tal verdad:

a) La contestación dada por D. Francisco Javier Lagraña (f. 347 vta.) á la posición 11 de



f. 344, en la que confesó: «que *es cierto* que las haciendas de don Carlos Pozzi, parte de ellas, pastaban *hasta el arroyo Pairirí, durante el tiempo* que el Sr. Pozzi *ocupaba ese campo por cesión gratuita del abscivento*».

b) La carta corriente á fs. 10, fechada en 4 de Junio de 1883, suscrita por la Sra. viuda de Lagraña, dirigida al Sr. Pozzi (no á Furnus, como se dice en los escritos contrarios) y en la que se lee: «con respecto al *pedido* que vd. me hace de *ocupar el Pairirí*, prestado ó arrendado, con pesar le digo»..... que no puedo:

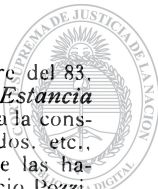
c) La carta agregada á fs. 444, suscrita por F. Javier Lagraña, fechada en 3 de Julio del 83 y dirigida al mismo Pozzi, á quien decía: «Hablé con Manuel respecto del arrendamiento del campo y me contestó lo mismo que te contestó á vos mamá..... Pero como ya te dije aún por un año, estate tranquilo no más que nadie te ha de molestar».

Estas cartas se hallan reconocidas como auténticas en estos autos.

En realidad de verdad, el campo cedido era exclusivamente el *Pairirí*; pero como, con posterioridad, el Agrimensor Carlevaro, *deslinó y amojonó definitivamente*, el actual San Luis, Furnus no tuvo inconveniente en que Pozzi, el 86, entregara á Lagraña también el *retazo del campo Paniagua* que quedaba fuera de la línea de mojones y que era la mayor parte del ocupado hasta entonces y desde antes del 82, con las haciendas del Puesto Chamorro, ya citado.

—

De autos consta también, que, para entregar el campo Puntas, dentro del año acordado por



el Dr. Labougle y que vencía en Octubre del 83, *Furnus estableció definitivamente su Estancia en el San Luis*, disponiendo en persona la construcción de la casa, corrales, alambrados, etc., trasladando paulatinamente el resto de las haciendas, inclusive las de su yerno y socio Pozzi, á quien el Dr. Labougle permitió aun después de Octubre que permaneciera unos meses más ocupando una pequeña parte de su campo.

Como excedían de cinco mil vacas, se ocupó también entonces la parte del campo Rincón, cedida á Pozzi por Lagraña, en el mes de Julio, llegando á pacer las haciendas hasta más allá del arroyo Pairirí.

Se ha acreditado, además, en autos, que Pozzi era yerno de Furnus y su socio, hasta la liquidación de la testamentaria de mi señora madre, y que vivía en la Estancia, encabezando, por tanto, directa y personalmente todos los trabajos, fueran ó nó ordenados por Furnus, que vivía en la ciudad de C. Cuatiá.

En Agosto de ese mismo año, el Agrimensor Scheffer, por orden del Gobierno, practicó la mensura general de esos campos y mensuró y deslindó como patriolengos, las dos tracciones ocupadas por Furnus y Pozzi: es decir, desde Puntas hasta más al Oeste del arroyo Pairirí.

1884

En el año siguiente, el Agrimensor Sr. Carlevaro, mensuró, deslindó y amojonó como fiscal, exactamente el campo San Luis y no habiendo sido observada dicha operación en su parte técnica, y sí, en cuanto á la ubicación, lo que no era de incumbencia del Dep. Topográ-



fico, fué aprobada, sin modificaciones, por el Gobierno de Corrientes, y de acuerdo con ella se nos otorgó el título de propiedad, exhibido por mí.

¿Sabe V. E. cómo pretende negar la contraria el verdadero significado de esas dos mensuras, como actos posesorios, atribuyéndolo, sin embargo, en su favor, á las de Caballero y Sánchez, del 58 y 83?

Dice que aquéllas no son mensuras judiciales realizadas á pedido de un propietario, con el fin de deslindar su propiedad, como fueron éstas!

La malicia de tal argumentación se evidencia, observando que las solicitadas por Lagraña, no fueron con el fin de deslindar su propiedad Rincón del Chañar, *encerrada entre dos arroyos caudalosos*, sinó de apropiarse las dos leguas contiguas de campo ageno, que quedaron al frente, mientras que las mensuras de Scheffery Carlevaro, ordenadas por el Gobierno de la Provincia, tuvieron por objeto deslindar, mensurar y amojonar, á fin de recuperar, esas dos leguas de su campo fiscal, por tanto tiempo ocultas.

El carácter que corresponde á las citadas mensuras, como actos posesorios, está bien definido en la ley y en la jurisprudencia, y ¿se dudará que lo fueran en favor del ocupante Furns, quien las ha solicitado, costeadó y pagado?

Lagraña lo niega, alegando que esas mensuras fueron protestadas.

Pero las protestas, que no pasaron de la Escribanía donde se formularon, no tuvieron ulteriores que impidieran los efectos reales y legales de esos actos.

Con ello transcurre el año 1884.



1885 y 1886

9. Las referencias del certificado de f. 3o3, comprueban la continuación de la *ocupación de Furnus*, durante dos años más, hasta fines de 1886.

Consta allí que se inventariaron *judicialmente*, como pertenecientes á la testamentaria de mi señora madre, en Octubre del 85, los materiales que constituían la casa, los muebles que la adornaban y los semovientes que alcanzaban á 4528 vacunos, 156 yeguarizos y 2500 ovinos.

Según el mismo certificado y la hijuela de mi señor padre (f. 74 de los autos sobre cmb. preventivo), se le adjudicaron (á Luis Furnus, no á uno de sus hijos, como dice la contraria, la casa, muebles y haciendas (1800 vacas, 2200 ovejas, etc.) que ocupaban y continuaban en el San Luis, siendo aprobadas las adjudicaciones en Octubre de 1886.

He invocado el inventario y adjudicaciones, como la prueba plena de la *existencia* de esas haciendas de Furnus *en el campo* referido, durante los años 85 y 86, y como dicha ocupación es imposible que hubiera sido ocultada, ni se ha cometido acto alguno á tal efecto, es evidente que debe considerarse un hecho público, como que era *susceptible de conocerse por los interesados*, que es lo único que requiere la ley.

Para ir á la Estancia Rincón, los señores La-graña necesitan cruzar el campo San Luis, siguiendo el camino marcado en los planos, y cuando lo cruzaban, en tantos años, habrán cerrado los ojos inocentemente?

¡Que la inocencia les valga!



1887 á 1892

10. Y después de acreditar que Furnus ocupó ese campo desde el 82 hasta el 86, qué necesidad tengo de comprobar en detalle que continuaba durante los años 87, 88 y 89, si ya hemos visto que la misma parte de Lagraña reconoce que el señor Francisco Puga fué nombrado, por Furnus, mayordomo de su Estancia San Luis, en Abril de 1890, y que lo fué hasta su muerte en 1º de Julio del 92: es decir, hasta un mes y medio antes del desalojo, en cuyo acto se expulsaron haciendas de José Luis Furnus, que representaba sus coherederos?

La parte contraria jamás se ha dignado detenerse un momento siquiera, á apreciar las referencias de autos al respecto.

Se ha concretado á negar ciegamente la ocupación de Furnus, como si su sola palabra bastara, y, por eso, *no ha alegado, ni menos ha comprobado*, que alguna vez se hubieran sacado esas mismas haciendas, vendidas por ellos, desocupándose, por consiguiente, el campo.

Resulta, así, comprobado en autos, con toda evidencia, que Furnus ocupó con sus haciendas el campo San Luis durante **10** años, teniendo: en 1882, 4480 animales: en 1886, 1946, y en el acto del despojo, 1430, fuera de 2000 ovejas, bueyes, caballos, muebles, etc.

INTENCIÓN

11. Consta también en autos, con toda evidencia, que Furnus, desde la fecha de su denuncia, persistía siempre en su propósito de adquirir la propiedad de ese campo, sosteniendo que era fiscal.



Después de todo esto, es lógico y legalmente admisible exigir todavía un *acto* más *público* y *notorio*, como lo quiere el Inferior, de que la voluntad de Furnus, al ocupar el campo, era excluir á Lagraña ó á cualquier otro?

El Inferior olvida que cuando uno come no es para que otro engorde, salvo embarazo, que creo es lo único que han omitido alegar en pro de esa posesión de Lagraña!

Si Furnus, en realidad, ocupaba el campo, sin reconocer y hasta desconociendo expresamente todo derecho á otro, que no fuera el Fisco, es indiscutible que adquiría la *posesión*, desde que tenía la cosa bajo su poder, *corpore et animo*.

Para mí, es manifiestamente ilegal, ilógica, inexplicable la exigencia del Inferior que quiere una constancia más elocuente aún de la intención de Furnus, que su ocupación de *10* años!

En mi expresión de agravios, demostré que la ley no admite otra forma de *manifestar* tal intención, sinó por hechos materiales, por actos exteriores, y nada más real, material que la ocupación referida.

Y dicha ocupación, no negada por Lagraña, correspondía á Furnus ó á Pozzi?

Para negar, con visos de sinceridad, la ocupación de Furnus, ha debido la contraria empezar por negar la existencia de la Sociedad establecida en 1876 en el campo Puntas, el carácter de socio capitalista de Furnus y, en especial, que Furnus haya sido el adquirente de la parte social de Lagraña, el intermediario de la entrega del campo Puntas al Dr. Labougle, el concesionario de éste por un año más de permanencia en dicha Estancia y el denunciante en compra de ese campo fiscal.



Eliminado Furnus, que rara vez iba personalmente á la Estancia, hubiera sido más fácil á Lagraña aprovechar la circunstancia de que su yerno y socio era el encargado directo del Establecimiento, en donde vivía, para atribuirle la aludida ocupación, como lo ha sostenido, á fin de referir al San Luis el elástico permiso gratuito del Pairirí, y dar, así, á la pretendida posesión de Lagraña una base más positiva que ese *solo animo*, que el Inferior ha visto flotar, como alma en pena, sobre el campo San Luis, durante los diez años en que Furnus lo ocupaba con casa, corrales, tajamares, muebles, haciendas, alambrados, etc., etc.!

En autos corre (f. 270), sin embargo, el testimonio de una carta suscrita por Luis Furnus, en 15 de Marzo de 1885: tiene fecha cierta desde principios de 1890, en que fué exhibida en el juicio promovido por Lagraña contra Pozzi, y constituye, por consiguiente, un acto público y notorio de la constatación de su intención, como exige el Inferior, y cuyos términos no dejan lugar á la más mínima duda sobre sus pretensiones.

En esta carta, se dice único dueño y poseedor: concede á Pozzi que permanezca allí con las haciendas que le correspondan en la liquidación social, con la condición de que le cuide las suyas, y, en especial, la población y el campo, y que no olvide que éste es fiscal, que el Gobierno lo tiene vendido, que él está en posesión desde hace mucho, que nadie tiene más derecho que él y que estará conforme con todo trabajo que haga, menos con los que fueren contrarios á sus derechos.

No está allí claramente expresada la intención de Furnus?



No la conocía Lagraña desde su presentación en juicio?

¿Porqué no la ha tomado en consideración el Inferior, desde que pensaba que los actos exteriores no eran las manifestaciones naturales y legales de la intención?

La *posesión de Furnus*, no de un año, como requiere la Ley, sinó de diez años continuos, surge, en mi concepto, con una evidencia incontestable.

ACTOS POSESORIOS DE LAGRAÑA

12. Y para hacerla resaltar aún más, voy á sombrear el cuadro, haciendo una pregunta: ¿qué actos de posesión ha ejecutado Lagraña en el San Luis durante esa década?

Se han invocado; el pago de la Contribución Directa; el pago de parte del importe de la construcción y compostura de un alambrado, hecho por el Dr. Labougle, en el deslinde de su campo: un contrato de arrendamiento celebrado con el Dr. Gómez y un corte de maderas, que nunca se pudo concretar por Lagraña!

Total: ninguno, porque nada de esto lo constituye.

Y tan cierta es esta afirmación que la misma contraria, en su alegato consignó la siguiente pregunta: «Qué actos de posesión podían, en ese lapso de tiempo (desde el 82 hasta el 92), ejecutar libremente mis poderdantes, cuando entonces estaba ocupado Paniagua por Pozzi, quien se negaba á desalojar por las sugerencias de su suegro?»

Teniendo presente que la contraria llama Paniagua al San Luis, y que coloca á Pozzi en



lugar de Furnus, esta manifestación importa la confesión plena de que *no ha ejecutado acto posesorio alguno en el San Luis*.

Pero, se excusan con la intervención de Pozzi, alegando su permiso: que ocupaba en su nombre.

En autos constan dos hechos *únicos* que establecen relaciones jurídicas entre Pozzi y Lagraña: el permiso de 1883 y la carta de 1886, dirigida al Dr. Gómez.

A qué campo se referían?

El Dr. Gómez comunicó á Pozzi que había arrendado de Lagraña el campo cedido por Javier, sin determinar cuál era, y como le exigía su desalojo, Pozzi, con fecha 24 de Junio, le pidió indicara cuál era el plazo que le concedía «para que yo desocupe (decía) la parte de campo que el Sr. Francisco Javier Lagraña me tiene cedido».

Luego, en 1886 se hacía referencia exclusiva al mismo campo cedido por Javier en 1883.

Hemos visto que, según la posesión 11 y las cartas de fs. 10 y 444, el campo cedido era el Pairirí.

En autos consta que alegué y ha quedado sin contradicción ni observación de Lagraña, que, con posterioridad á Octubre del 86, se desocupó, no sólo la parte del campo Pairirí, cedido por Javier, sino *algo más*: el campo Paniagua, que llega hasta la línea del San Luis.

En consecuencia, la ocupación de Pozzi, en nombre de Lagraña, en virtud del permiso invocado, *terminó el 86* y jamás se refirió al San Luis.



DEMANDAS DE DESALOJO

18. ¿Porqué, no obstante todos los actos posesorios ejecutados por Furnus hasta 1888 inclusive, la parte de Lagraña, que ha tenido conocimiento de ellos, nada ha alegado, ni probado, en juicio ó fuera de él, que signifique que haya considerado *atentatorio* á sus hoy pretendidos derechos de posesión, la referida ocupación del San Luis?

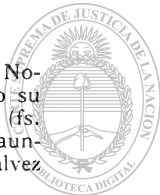
La sucesión Lagraña, ha hecho de la *propiedad* el objeto único de todas sus gestiones anteriores, así como la base principal de su defensa en este juicio.

Recién en 1889, previendo tal vez el resultado desfavorable que traería la denuncia en compra hecha ante el Gobierno, inició un atrevido plan tendente á apoderarse del San Luis, para continuar impidiendo, como lo hacen desde 1858, su disponibilidad por sus legítimos propietarios: el Fisco, antes y Furnus, después.

Por ante el Juzgado de Paz de C. Cuatía, el día 5 de Febrero, el Sr. Javier Lagraña entabló demanda contra Pozzi, por desalojo, decía «del campo que *actualmente* ocupa». (fs. 90 de los autos sobre embargo preventivo).

Nada más exacta que la contestación dada por Pozzi en esa oportunidad: que «él no era allí más que un simple Encargado del Sr. Luis Furnus, que dice ser dueño del campo, con quien tenía, en todo caso, que ver al respecto».

Parece que esta demanda indefinida no hubiera tenido otro objeto que arrancar, por sorpresa, á Pozzi, alguna declaración que sirviera al plan desarrollado más tarde, á la sombra de una situación política favorable, que empezaba á dis-
fiarse entonces.



Lagraña guardó nuevamente silencio hasta Noviembre de ese año, en cuya fecha reprodujo su demanda ante el Juez Federal de Corrientes (fs. 264 á 271), citando la iniciada en Febrero, aunque con el agregado de un parrafito, que tal vez fuera el buscado por sorpresa.

Decía que Pozzi había contestado que «si bien era cierto que él le había permitido la ocupación del campo, era también cierto que actualmente no era allí mas que un simple Encargado»....

Basta leer los testimonios citados, para convenirse de la manifiesta falsedad del agregado: lo que no puede haberse hecho inocentemente.

En esa demanda se desarrolló completamente el plan de ataque á la posesión del San Luis: se sostuvo, como en el presente, que Pozzi era el ocupante y que lo ocupaba en virtud de un permiso dado en 1883: se consignó el sueño dorado desde el 58, aquello de que el Rincón *linda* con Puntas y que ese campo era una fracción del primero, y, por ende, de su propiedad!

14. Toda dificultad se despeja averiguando, cómo determinaba y llamaba Lagraña, en dicha oportunidad, la fracción de referencia?

Consta en autos que solo decía que «en 1883 Pozzi le pidió le permitiese ocupar una parte del mencionado campo Rincón del Chañar, en el paraje que *linda* con la propiedad del Dr. Labougle», y que él accedió al pedido, escribiéndole una carta, «en la que le concedía dicho permiso».

La aludida carta se halla agregada á fs. 444, en ella no se nombra campo y sí, se hace referencia directa al mismo cuya ocupación ó arrendamiento negaba su Sra. madre.

En la carta de esta señora (f. 10), se habla del campo *Pairiri*, que, como resulta de las mis-



mas preguntas formuladas por Lagraña á los testigos. del mapa por ellos exhibido y del plano más exacto. que acompaña mis títulos. queda á una legua y media más al Oeste del San Luis.

Más tarde Lagraña le llama «Paniagua», porque Pozzi dijo. en sus posiciones del 90. que Javier «le cedió un retazo del campo denominado Paniagua».

Lagraña. desde entonces. se apropió este nombre y tan porfiadamente lo refirió al San Luis. que V. E. observará en autos se le repite cien veces. sin detenerse una sola siquiera á estudiar en detalle las preciosas referencias. que no dejan la más remota duda de cuál sea el campo realmente llamado «Paniagua». tanto por los vecinos de esos parajes. cuanto por el mismo Pozzi. que fué el primero que usó ese nombre. en este asunto.

La aclaración de este punto deja descubierta la maliciosa falsedad de toda la argumentación contraria. así como la injusticia de las sentencias citadas. porque es la segunda y más amplia comprobación de que el permiso. en que se basa exclusivamente Lagraña. no se refirió nunca al San Luis.

De las citadas cartas y posición 11. resulta evidente que la señora de Lagraña negó y don Francisco Javier concedió á Pozzi. en 1883. el campo llamado por ellos *Pairiri*. que está. como queda dicho. por la misma contraria. más al Oeste que el Paniagua.

Lagraña no ha alegado ni comprobado la existencia de otra cesión ni de otro campo cedido.

Pues bien. en las posiciones absueltas en 1890. Pozzi concede aún más á Lagraña: incluye en el permiso referente al Pairiri. el retazo del campo llamado por él Paniagua. en razón de su



proximidad al arroyo de este nombre, cuya ubicación, contigua al San Luis, determina claramente, diciendo que fué ocupado con las haciendas «que *pasaban* el Paniagua» (el arroyo, se entiende), y que Furnus había hecho alambrear el campo, que decía ser de su propiedad. «*con-tiguo al Paniagua*».

Esta concesión de Pozzi era debida á que, como ya lo he dicho, cuando, en 1884, el Agri-mensor Carlevaro determinó exactamente el ex-cedente fiscal, deslindó y amojonó la línea divi-soria de los campos San Luis y Rincón, que pasa por la confluencia de los arroyos Paniagua y Chañar, como se observa en el plano agrega-do á mis títulos de propiedad, quedaba dentro del campo San Luis la población del Puesto Chamorro, en cuya proximidad están las ruinas de Paniagua y resultaba fuera de la línea la mayor parte, casi todo el campo ocupado con las haciendas de dicho Puesto.

Y como Furnus limitaba sus pretensiones al excedente fiscal, que alambrió en seguida, es na-tural que cuando Pozzi desocupó el Pairirí, en el verano del 86 al 87, también lo hizo del Pa-niagua, hasta la línea del San Luis, no teniendo inconveniente, en 1890, de referir el citado per-miso también á ese campo. Tal es la razón por la cual siempre he dicho que el permiso se re-fería al Pairirí ó Paniagua.

Si se observan bien las constancias de autos, resulta que Lagraña recién, por primera vez, llamó Paniagua al San Luis, después de la ini-ciación de este pleito, en su escrito de fs. 190, fecha Abril del año 96.

Para salvar los derechos de mi parte, basta la comprobación de que el permiso, dado por Lagraña, se refería al *Pairirí* y que el campo



incluido por Pozzi en dicho permiso, era el *contiguo* á aquel que l'urnus alambró, diciendo ser de su propiedad.

No hago cuestión de nombres, porque me apoyo en la verdad real de los hechos.

Ni tengo porqué hacer alarde quijotesco de defender «la justicia de mi país, atrozmente calumniada», como dice la contraria, porque entiendo que el respeto debido no está en las palabras, sinó en la pureza de las pretensiones que buscan el amparo de la justicia.

Citaré, para concluir este punto, los antecedentes de autos que comprueban cuál es el Paniagua.

En el Capítulo XXVII de mi Alegato, estudié extensamente y en detalle esas referencias.

Allí consta que un antiguo capataz de Lagraña, León Martínez, dijo (fs. 399-núm. 5) «que él no conoce campo llamado Paniagua y sí sólo un paraje, en el que existían unas *ta-peras* conocidas por Paniagua».

El Sr. Valenzuela, conocedor de esos campos desde 1839, declaró: «Que el campo llamado Paniagua está del otro lado del arroyo Paniagua, como quien va al Pairirí, y que tanto el arroyo como el campo de la referencia toman ese nombre de un antiguo poblador de ese lugar llamado Juan Tomás Paniagua», á quien conoció personalmente y ha estado en su casa, que estaba del otro lado del arroyo, como quien va para el Pairirí, como á tres cuadras del Puesto Chamorro, ya citado.

Confirmando el dicho de estos testigos, la contraria preguntó al Sr. Valenzuela, si sabía quién era el dueño del Rincón, «cuando D. Juan Tomás Paniagua *poblaba* ese campo»!

Y si este señor fué poblador de Lagraña, allá



por el año 40. existiendo aún las ruinas de su casa. hacia el Oeste del arroyo. al que dió su nombre. ¿cómo ha podido afirmarse y sostenerse. con sinceridad. que la fracción situada al Este. lindante con Puntas. fuera la llamada Paniagua?

La malicia de tal afirmación se exhibe evidente.

—

15. Y aparte de la cuestión de nombres. ¿cómo ha comprobado Lagraña que su permiso á Pozzi se refería al campo *lindante* con Puntas. como lo ha establecido la sentencia del Juez Federal de Corrientes y lo admite el Inferior?

Lo ha hecho. Excm. Cámara. con testigos complacientes. que han declarado por lo que han oído decir á los mismos interesados y que han resultado tanto más falsos. cuanto más minuciosos. pues una mentira necesita de ciento para encubirla.

Me concretaré á exhibir la falsedad de los dos principales. que también han declarado el 90. en el juicio que motivó el despojo:

Son primos hermanos; muy amigos. correligionarios políticos y partidarios decididos de Lagraña. como lo demuestran sus declaraciones.

El primero. el distinguido Médico Dr. José R. Gómez. actual Diputado Nacional. como lo ha hecho observar repetidamente la contraria. y cuyo nombre. con el del Juez Federal de Corrientes. encabezaban el 90 las invitaciones para la constitución del partido evolucionista. que iba á sostener al Gobernador Ruiz. formaba parte de su Gobierno. tanto en la fecha del despojo. cuanto en la expedición de mis títulos de propiedad. como que fué su Ministro de Gobierno.



hasta el día siguiente de la revolución hecha por los mismos á su propio Gobernador.

Siendo propuesto é interrogado por Lagraña, declaró: en 1890, que entonces era su arrendatario, y en el 96, dijo que había dejado de serlo el 86; el 90 y 96, afirmó que *le constaba* la *posesión de Lagraña*, antes, durante y después del 92, así como que el Rincón *linda* con Puntas, porque era vecino antiguo del Departamento y, *en especial*, por haber estado su señor Padre encargado de atender y proveer el valioso Establecimiento pastoril de Lagraña.

Interrogado por mí, confesó: que su señor Padre había muerto 20 años antes del 92! y que no podía enumerar un solo acto de posesión ejecutado por Lagraña!! Contestando á esta parte, dijo: «*me consta*» que ni Furnus ni sus hijos han ocupado el campo, y preguntándole yo la razón del dicho, respondió: «*no me consta* ni he oído referencias» de que ocuparan.

Y aunque sus respuestas son terminantemente asertivas para Lagraña, funda su declaración en la pública notoriedad!, agregando que *no ha estado nunca en el campo litigado!!*

El segundo, es el hacendado Sr. Samuel Acuña, quien, contestando á Lagraña, declaró: que conoce esos campos del Chañar, por haberlos *frecuentado desde niño*, y *le consta, así*, que el Rincón *linda* con Puntas; que la fracción *lindante* con Puntas *es* el Paniagua; que Lagraña ha poseído *siempre*, antes, durante y después del 92, *todo* el campo hasta *lindar* con Puntas; que en el *verano del 82 al 83*, Pozzi le dijo que Javier le había dado permiso (!) para ocupar el campo contiguo á Puntas, y que *sabe* que *Furnus no ocupó*, porque *él*, que distingue la ocupación y la posesión! reconocía



como ocupante á Pozzi hasta el 92 y como poseedor ó propietario á Lagraña!!

Interrogado luego por mí, confesó: que, desde el 82 al 92 *no ha estado* ninguna vez en esos campos: que no *conoce* ni le *consta* acto alguno de Lagraña que importe ocupación ó posesión del campo: que no *conoce* donde está el campo Paniagua: *hace nacer* el arroyo de ese nombre al frente Norte de la Estancia Puntas, cuando se halla á dos leguas al Sur Oeste, y concluye invocando el testimonio de un señor, que él declara está ya muerto, sin asegurar, dice, si *el finado* guardaría memoria de lo que había oído convensar!!!

Y éstos son los mejores testigos de la contraria!!

Y estos testimonios sirvieron de base á la sentencia del Juez Federal de Corrientes, que condenó á Pozzi á entregar lo que no había recibido ni tenía, así como á la del Inferior, que declara que Lagraña ha probado concluyentemente su posesión, mantenida *solo animo* durante los diez años de ocupación de Furnus!

Y fué el primero de estos testigos, quien, siendo Ministro de Gobierno, nombró á su propio hermano, Gefe Político *ad-hoc*, por sólo los días necesarios para cumplir aquella sentencia de su amigo el Dr. Lujambio, entregando á Lagraña el campo fiscal, ocupado, poseído y comprado por Furnus, desde 1882 y sin ser citado ni oído, ni condenado, en juicio alguno.

Que fè pueden merecer estas declaraciones cuando de las cartas y posiciones citadas, resulta que los *mismos interesados hacen constar que el permiso se refería al Pairiri*, que está una legua más hacia el Oeste del mismo campo Paniagua, que Pozzi y mi parte le *conceden*?



Lo único que evidencia tal circunstancia es que los interrogatorios contrarios, que hacen incurrir en tales falsedades á los testigos, por lo sugestivos y capciosos que son, caracterizan á los demandados como sobornantes.

Circunstancia que atenúa la culpabilidad de los testigos, cuya complacencia resulta, así, haber sido aprovechada abusivamente por la malicia contraria.

16. Por otro lado, cómo puede sostenerse que esa fracción intermedia sea parte integrante del Rincón, cuando el mismo Comisario desalojante, antiguo Mayordomo general de Lagraña, encabezó la diligencia del desalojo, diciendo, en 1892: «*En este paraje denominado Puntas del Chañar*», y en el telegrama de fs. 18, el Sr. Manuel I. Lagraña (hijo) le llamaba, en 1893, «*Puesto Puntas*»?

Un argumento más decisivo que toda esta cuestión de nombres, mal ó bien aplicados, es la mensura de 1884, que demuestra científicamente la existencia del inmueble, á cuya posesión alude este pleito, y que evidencia que los campos Rincón y Puntas *no lindan*.

Solamente á la contraria puede ocurrírsele comprobar, con declaraciones complacientes, de personas que no conocen esas propiedades, un hecho contrario á lo que constata esa operación técnica, oficialmente ordenada y competentemente aprobada por el Gobierno de Corrientes, en la época en que era su Ministro el Dr. José R. Gómez.

17. Lagraña agregaba otra falsedad más en aquella demanda.

Dijo que, habiendo arrendado ese campo al



Dr. Gómez, exigió, varias veces, su desalojo á Pozzi, quien negándose á desocuparlo, le había obligado á demandarle ante el Juzgado de Paz, en Febrero, y que reproducía su demanda, á fin de cumplir el contrato celebrado.

De las constancias de estos autos resulta:

1º No se ha probado en forma alguna que, con anterioridad á Febrero de 1889, se hubiera exigido á Pozzi ni á nadie, una sola vez siquiera, el desalojo del campo San Luis.

Todas las pretensiones de Lagraña, con anterioridad á esa fecha, se referían *exclusivamente á la propiedad*, que invocaban y hacían valer ante el Gobierno, para impedir que esa fracción fuera declarada fiscal, como se declaró después de once años de oposición.

2º Está claramente demostrado que la petición de desalojo, hecha en 1886, á la que alude la carta del Dr. Gómez, se refería al campo contiguo: al cedido por Lagraña y que fué desocupado en el verano de 1886 á 1887.

3º No se ha acreditado la existencia del invocado contrato de arrendamiento, el que parece solo fué un pretexto.

4º En el caso de que hubiera existido, dicho contrato quedó rescindido á los pocos meses de celebrado: es decir, en el mismo año de 1886, como lo afirma el mismo Lagraña, en su pregunta 10 de f. 489.

En consecuencia, resulta falso que Lagraña hubiera formulado exigencia alguna, referente al San Luis, antes de 1889.

Falso también que la negativa de Pozzi del 89 adelante, á cerca del San Luis hubiera sido la causa de la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado con el Dr. Gómez en 1886.

Falso, además, que en 1889, Lagraña tuviera



que entregar campo alguno al Dr. Gómez, ni que éste fuera su arrendatario, desde que el contrato había sido rescindido en 1886.

18. Pero, hay más.—Pongámonos en una hipótesis.

En el supuesto de ser cierto lo dicho por Lagraña, ¿qué efecto jurídico hubiera producido esa negativa de Pozzi en el 86 y el silencio de Lagraña hasta Febrero del 89?

La inacción de Lagraña, durante los dos años de 1887 y 1888, íntegros, en tales condiciones, hubiera causado legalmente la pérdida de su posesión, que sería adquirida por Pozzi, con las correspondientes acciones posesorias, que hubieran hecho siempre improcedente el juicio de desalojo referido.

Pero, en realidad, algo más grave que todo esto había, desde que *un tercero*, Luis Furnus, era el verdadero ocupante y poseedor del campo en cuestión, desde 1882 hasta entonces.

Y si alguna duda pudiera haber quedado respecto de su posesión anterior, se negará que la haya adquirido, desde Febrero de 1889, fecha en que se le hizo saber personal y directamente á Lagraña, como consta del acta judicial de fs. 90 (embargo preventivo), que Furnus era el poseedor y propietario, hasta Agosto de 1893 (3 1/2 años), sin haber sido jamás citado ni oído en juicio, ni molestado en su ocupación real?

Creo que no puede haber dudas, sinó desconociendo la naturaleza jurídica de la posesión.

19. Aun más: Lagraña, en su demanda ante el Juzgado Federal, dice que, en Julio ó Agosto del 89, se construyó, contra su voluntad, un alambrado, y Pozzi, contestándola, alegó que



fué Furnus quien lo hizo construir, porque era poseedor y propietario.

En esa oportunidad, acompañó la ya referida carta suscrita por Furnus.

También he citado el reconocimiento que implica la repregunta 8. al Sr. Puga, sobre si era cierto que fué «Encargado del Establecimiento que él denominaba San Luis», etc.

En autos. á f. 390. corre un certificado de la Receptoría de Rentas de Curuzú-Cuatiá, del que consta que Luis Furnus. en 1891. hizo la manifestación consiguiente para el pago de impuestos sobre haciendas en el San Luis.

En el Capítulo XXIV de mi Alegato, demostré que de autos constaba que en Abril de ese año 1891. José Luis Furnus introdujo haciendas de su propiedad en el campo San Luis; así como del estudio hecho en el Capítulo XXV y en especial del acta del lanzamiento, cuyo testimonio inocentemente acompañó la contraria y corre á f. 187. resulta que, en el acto del despojo, se sacaron haciendas del mismo José Luis, quien invocó entonces su ocupación y posesión de diez años, y alegó la propiedad.

Los testigos intachables de mi parte, declaran contestes, dando razones satisfactorias, que comprueban la posesión de Furnus desde 1882 á 1892.

20. Para la procedencia de esta acción, solo necesitaba acreditar *un año*, y dados los antecedentes relacionados, según constan en autos, ¿se dirá que Furnus no era el *poseedor anual* anterior al 17 de Agosto de 1892?

No obstante todo este cúmulo enorme de hechos perfectamente comprobados, que importan haber justificado diez veces mi derecho, el Infe-



rrior reconoce que es cierto que Furnus ocupó los diez años; pero dice que Lagraña conservó la posesión solo animo!! Y conste que Lagraña niega la ocupación de Furnus, no admite que fuera con su permiso ó en su nombre, así como en autos consta que Furnus desconoció expresamente todo derecho á Lagraña, inclusive la propiedad.

Olvidó el Inferior que la posesión se prescribe al cabo de un año; que la voluntad no conserva la posesión cuando otro ocupa la cosa durante un año; que la simple manifestación de voluntad no basta á causar la desposesión, sino que la intención resulta de los actos exteriores que produzcan la desposesión.

Pertenece á la contraria el honor de haber descifrado la rara argumentación del Inferior que con solo el examen del escrito de denuncia, presentado en Setiembre de 1882, llegó á la inaudita conclusión de que Furnus no pudo ser, no fué poseedor, diez años más tarde, en 1892!

Dice la contraria que examinando el Inferior su significado, concluye que *esta denuncia no es acto de posesión!!*

Un escrito presentado á 80 leguas no es acto de posesión!

¡Y tal fué, en realidad, el maravilloso argumento que determinó la sentencia contraria á mis pretensiones!!

Y si á esto agregamos la frecuente sustitución de los vocablos *posesión*, *ocupación* y *propiedad*; la negativa de la ocupación de Furnus, á renglón seguido de tratarnos de *intrusos* y decir que hacíamos *pastar* nuestras haciendas en el campo y que fuimos expulsados con Pozzi, en Agosto de 1892, etc. dando precisamente como razón determinante de su negativa de nuestra



posesión. el habernos considerado como **usurpadores**, debo confesar que me explico tanto absurdo. sostenido con tanta energía y aplomo. con la ausencia completa de toda noción del significado **gramatical. lógico y jurídico** de los términos hechos, actos etc. designados con tales vocablos.

21. Como epílogo de todo lo alegado y probado en estos voluminosos autos. citaré dos párrafos de la contraria. en los que hace el resumen más breve. completo. terminante y decisivo que puede pedirse de esta cuestión.

En su alegato. como ya dije. se lee: «Qué actos de posesión podían. en ese lapso de tiempo (desde el 82 hasta el 92). ejecutar libremente mis poderdantes cuando entonces estaba ocupado Paniagua por Pozzi. quien se negaba á desalojar por las sugerencias de su suegro?»

En el escrito contestando la expresión de agravios. se agrega: «¿cómo van á tener necesidad de probar mis poderdantes que Furnus poseyó. ya sea para él ó para ellos. cuando jamás han reconocido que Furnus poseyó nada. cuando desde la denuncia de 23 de Setiembre del 82 hasta la demanda. que originó este litigio. han considerado al causante Furnus y á su sucesión como usurpadores!!»

Eso es lo que siempre he sostenido en este juicio y he pedido que así se declarara. no obstante la oposición contraria: que Furnus y su sucesión eran. desde 1882 hasta 1892. **usurpadores**; es decir. que habíamos arrebatado el uso (usus rapere) (art. 2456 Cód. Civil) del campo San Luis. con la única diferencia de que Lagraña lo había usurpado antes con el propósito ilícito de apropiárselo fraudulentamente. y nosotros con el muy loable de adquirir su propiedad de su legítimo dueño.



Y esto mismo es lo declarado por el Inferior, en la sentencia recurrida. llegando á la conclusión de que «la *ocupación y población del campo San Luis. por Furnus.... ha sido reconocida por Lagraña.... y está probada* por los testigos.... y el inventario....»

La «ocupación material». «la materialidad de la posesión». el *corpus*. que la sentencia considera acreditada en forma. se halla. así, eliminada de toda discusión en estos autos; pues, V. E. no debe olvidar que la sucesión demandada pide la confirmación de la sentencia. lo que implica aceptar su conclusión respecto de este extremo legal de la posesión.

Toda divergencia gira. así, sobre el elemento moral de la posesión. el *animus*. cuya existencia es la cuestión única y exclusiva sujeta á la resolución de V. E.

El Inferior. interpretando á la letra la disposición legal del art. 2445. la resuelve negativamente. porque sostiene que habiendo un poseedor anterior. el *animus* no puede deducirse de la tenencia y disposición de la cosa. siendo necesario un acto público. que afirmara de una manera indudable la intención.

En el § X de mi Expresión de Agravios. llegué á la conclusión de que los hechos materiales de ocupación son las manifestaciones exteriores y *legales* de la intención: así como su efecto excluyente es el que causa la desposesión.

Como entiendo que la solución se impone. con sólo enunciar el único punto que debe decidir hoy V. E., he dicho. desde un principio. que nada hay que resolver. fuera de la necesidad de declarar en plena luz del medio día. que es de día y no de noche. como maliciosamente sostiene la contraria. que busca las sombras. para



convencernos de que un *excedente es integrante!*

Lagraña pregunta al final de su escrito de contestación á mi expresión de agravios «cuál será el destino que tendrá la escritura del Gobierno de Ruiz otorgada á Furnus?»

Afirma que «quedará como un papel inservible!», y aún tiene la audacia de concluir exclamando: «¡Tal es el fin de las maquinaciones urdidas con fines ilícitos!», lo que, en presencia de los antecedentes que quedan expuestos, constituye la medida exacta de la temeridad usada por su parte en este asunto.

22. Para terminar, sólo me resta satisfacer una pregunta que espontáneamente se formula el espíritu, luego de apreciar el conjunto de antecedentes de la posesión invocada por mi parte.

¿Cómo se explica, que una posesión realizada en el tiempo y en las condiciones indicadas, haya sido atropellada, en virtud de un mandato judicial dictado en un juicio dirigido contra tercero y referente á otro campo?

Como parece imposible que haya alguien que insista tanto, como la contraria, en sostener y hacer predominar pretensiones tan absurdas, sin tener una razón, si no legal, siquiera moral, que excuse su actitud, cualquiera se siente inclinado á buscarle alguna explicación, so pena de mantener en suspenso el juicio definitivo que debe formular el espíritu.

La razón es, sin embargo, muy sencilla: la sinceridad de Furnus y la malicia de Lagraña, nos han conducido hasta aquí.

No hemos usado ninguna clase de influencias, para hacer triunfar nuestras pretensiones, sino las que corresponden al derecho y la justicia.



No obstante estar en el Gobierno nuestros correligionarios políticos, hemos demorado once años antes de obtener los títulos de propiedad, contemporizando con las exigencias de Lagraña, y, al otorgársenos, hemos querido se consignara que si por cualquier evento, el Gobierno tuviera que responder por evicción, no lo sería en más de lo recibido, pues, no hacíamos negocio, como lo prueba el hecho mismo de haber pagado los gastos que demandaron el saneamiento de esa propiedad fiscal, á más de su precio de venta.

En cambio, la contraria no sólo hace practicar mensuras que desubican su propio campo, para mejor apropiarse tierras fiscales; se opone tenazmente al descubrimiento y venta del excedente fiscal; arrastra en sus temerarias pretensiones la opinión misma del Departamento Topográfico de la Provincia, que deja á un lado la cuestión técnica de su incumbencia, para discutir cuestiones jurídicas que no le alcanzan, y determina, con sus alegaciones y comprobaciones trucas, resoluciones contrarias á todo derecho, como la de Noviembre del 96, sinó que, habiendo perdido la posesión del campo fiscal, para impedir, talvez, su declaración de tal ó tomar de nuevo su posesión real, promueve juicios dolosamente fundados, que se han hecho prosperar mediante declaraciones de testigos falsos, que hubiera solicitado fueran remitidos á donde correspondía si no pensara que con su complacencia son en realidad menos culpables que sus sobornantes.

En la protesta formulada por mi hermano José Luis, V. E. encontrará transcritas dos notas, dirigidas por el Geñe Político ad-hoc, al Comisario Cuenca, ejecutor del despojo:



En la primera, se consigna lo ordenado por el Juez Dr. Lujambio *contra Pozzi* y en la segunda, se eliminan las personas y se ordena la entrega del campo á Lagraña, *prescindiendo de los ocupantes, poseedores y propietarios.*

Para mayor comprensión, voy á permitirme leer ambas notas, á fin de que se observe mejor el atropello cometido.

Dice la primera:

Curuzú-Cuatíá, Agosto 12 de 1892.

Al Sr. Comisario de Frontera Dn. Manuel Cuenca.

2ª Sección.

Con esta misma fecha, se ha recibido oficio del Juez de Paz del Departamento, pidiendo la intervención policial para el desalojo del campo denominado *Rincón* del Chañar, propiedad de los Sres. Lagraña hermanos, *ocupado*, parte de él, por el Sr. *Carlos J. Pozzi*. La nota de referencia tiene procedencia del Sr. Juez Federal de Sección, al que hay que dar el más estricto cumplimiento. Por tanto, para el catorce del mismo mes y año, que será el tercero de la presente, se trasladará al Establecimiento de los Sres. Lagraña hermanos, á prestarles el concurso de la fuerza pública, para hacer efectivo el desalojo inmediato del *campo ocupado por el Sr. Pozzi*, arrendatario, encargado ó lo que fuere.

Saluda á Vd.

Joaquín G. Gómez.
Jefe Político.



La segunda nota dice:

Curuzú-Cuatia, Agosto 16 de 1892.

Al Comisario de Frontera. D. Manuel Cuenca.

2ª Sección.

Por la presente se le reitera la orden, para que inmediatamente proceda, por la fuerza pública á su cargo, al desalojo de una parte del Campo denominado Rincón del Chañar. *comprendido dentro de los siguientes límites:* Flora Lagraña de Labougle y los arroyos «Chañar» y «Pelado» y *que no sea ocupado por los señores Lagraña.* A esta orden dará Vd. debido cumplimiento. é inmediatamente de desalojado el campo que menciono, lo pondrá en posesión á don Manuel Lagraña, que es como lo determina el Juez Federal de Sección. Si *el ocupante* (?) se resiste al desalojo sin hacer uso de la violencia, proceda Vd. como lo determina el cumplimiento de su deber, al recibir una orden Superior y terminante.

Por tanto, ésta le servirá para cabeza del *sumario*, para reflejar en él el proceder de la autoridad, que hará respetar debidamente,

Saluda á Vd.

Joaquín G. Gómez.

Gefe Político.

Y sí V. E. observa (fs. 187) que el Comisario Sr. Cuenca encabezó la diligencia del desalojo ordenado, diciendo: «*En este paraje denominado Puntas del Chañar*»..... así como en la misma protesta se dice que se *previno* al Jefe Político, y el Comisario presente *ha visto* que el *ocupante*, á quién se desalojó, no era Pozzi, sino José Luis Furnus, se explicará claramente



que la razón de haberse dirigido esta segunda nota, reiterando la orden, con los modificativos apuntados, no era otra que coronar, en el hecho, el malicioso plan iniciado desde el 89 contra la posesión del San Luis.

No sé en qué país se usarán procedimientos semejantes á los que lesionaron los derechos de Furnus.

Sólo sé decir, que, huyendo de ellos, he recurrido á los Tribunales de esta Capital, y si bien es cierto que perdí en primera Instancia, porque lo voluminoso de los autos y de la malicia contraria marearon el criterio jurídico del Inferior, lo declaro como parte, como Abogado y como hombre, que espero confiado el fallo de V. E., porque tengo la plena seguridad de que corresponderá á la ilustración, elevado criterio jurídico y honorabilidad que soy el primero en reconocer sinceramente en V. E.

He dicho.

CÁSTULO L. FURNUS.



SENTENCIA

DE LA

Excma. Cámara de Apelaciones

EN LO CIVIL





En Buenos Aires, Capital de la República, á 24 de Setiembre de 1898, reunidos los Señores Vocales de la Excm. Cámara de Apelaciones en lo Civil, en su sala de acuerdos, para conocer del recurso interpuesto en los autos seguidos por la sucesión de Don Luis Furnus, contra Don Manuel I. Lagraña, por devolución de posesión, respecto de la sentencia corriente á fs. 686, el Tribunal estableció la siguiente cuestión:

¿Es justa la sentencia apelada de fs. 686?

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía tener lugar en el orden siguiente: Vocales Dres. González del Solar, Molina Arrotea, Díaz, Giménez y Gelly.

El Dr. **González del Solar**, dijo:

La importancia, que se ha dado á esta causa por las partes y el estudio que han dedicado á las cuestiones debatidas, en los extensos alegatos que han presentado, á la vez que numerosas diligencias de prueba que han producido en la estación oportuna, hacen indispensable que me detenga en la relación de los antecedentes, prescindiendo de aquellos que, en mi opinión, deben considerarse como innecesarios ó extraños á los términos en que fué trabada la litis.

Según se afirma por los actores en su demanda de fs. 22, les corresponde la posesión de un





campo situado en la Provincia de Corrientes, Departamento de Curuzú-Cuatiá, del que han sido despojados por los demandados, en 17 de Agosto de 1892; manifiestan que este campo se encuentra ubicado entre el de los sucesores de D. Manuel I. Lagraña, denominado «Rincón del Chañar» y el de D^a. Flora Lagraña de Labougle, llamado «Puntas del Chañar.» como aparece en el croquis de fs. 22 vta., en el que se designa aquella propiedad con el nombre de «San Luis»: que este campo fué ocupado por su causante Dn. Luis Furnus y denunciado al Gobierno de la misma Provincia de Corrientes, que aceptó la propuesta, ordenó la mensura correspondiente, otorgando después la escritura respectiva de transferencia; que la desposesión ó el despojo á que se refieren en su demanda, se ha consumado en virtud de una orden de desalojo, librada por el Sr. Juez Federal de aquella Provincia, en el juicio seguido por los demandados contra Don Carlos J. Pozzi, ocupante del campo lindero «Rincón del Chañar», no obstante que el poseído por ellos y que se ha confundido con aquel, les corresponde á título de compra, como queda dicho y está reconocido en el mapa de la misma Provincia, publicado por el Instituto Geográfico Argentino en 1889, en el que se le señala como propiedad de su causante.

Relacionando otros antecedentes, que consideran ligados con esta cuestión, exponen también que en Marzo de 1876 se constituyó una Sociedad Rural entre los Sres. Manuel I. Lagraña y Don Luis Furnus, como socios capitalistas, y Don Carlos J. Pozzi, como socio industrial, proporcionando el primero el campo «Puntas del Chañar» con las poblaciones y demás enseres que en él existían:



Que este campo había pertenecido á Don Robustiano Lagraña y fué reclamado por la Sra. Flora Lagraña de Labougle, en el pleito que siguió contra Don Manuel I. Lagraña, quien fué condenado á entregarlo en 1882; que entre tanto la Sociedad Rural establecida había progresado al extremo de no ser suficiente el campo «Puntas del Chañar» para las haciendas que en él existían en 1881. con cuyo motivo Don Luis Furnus averiguó que el campo valdío contiguo era de propiedad fiscal. lo denunció en compra al Gobierno y tomó posesión del mismo. con sus haciendas primero y después con las de la Sociedad. la que se liquidó en 1882. por muerte del socio Manuel I. Lagraña. á cuyos herederos compró Furnus la parte que les correspondía: que continuando Furnus y Pozzi en la misma Sociedad y siendo necesario desalojar el campo mencionado. para entregarlo á la Sra. de Labougle. retiró Furnus sus haciendas. á principios del 84 y estableció definitivamente su Estancia. denominada «San Luis». en el campo Fiscal que había denunciado: que fué en la misma época próximamente y en circunstancias de no tener donde llevar las haciendas que no cabían en el campo de «San Luis». que Pozzi obtuvo particularmente. de uno de los herederos de Lagraña. permiso para ocupar. por tiempo indeterminado y gratuitamente. el campo *lindero* con el de «San Luis». denominado «Paniagua». que no tenía demarcada línea divisoria alguna. continuando así hasta 1885. en que se liquidó la sociedad entre Furnus y Pozzi. viniendo *Furnus* por este hecho y por la venta y traslación de haciendas. á limitar *su ocupación* al campo de «San Luis». que hizo *alambrar* en 1889; que no obstante estos antecedentes. los sucesores de



Lagraña se presentaron ante el Juez de Paz de Curuzú-Cuatíá, pidiendo el desalojo del campo *ocupado por Pozzi*, en el concepto equivocado de considerarlo de propiedad de la sucesión, ocurriendo más tarde ante el Juez Federal, de quien obtuvieron una orden de *desalojo contra Pozzi*, que no era el poseedor del campo sinó Furnus, mediante informaciones falsas y otros hechos á que se hace referencia.

Entrando enseguida á fundar las acciones deducidas, se invoca, por los demandantes, el derecho que acuerda la ley Civil al que hubiese sido turbado ó despojado de la posesión que tenía, por más de un año, sin los vicios de precaria, violenta ó clandestina, así como las del Cód. de Proceds., en cuanto dispone que deben ser ventiladas en juicio ordinario las contiendas judiciales que no tengan señaladas una tramitación especial y las que prescriben que cualquiera que sea la sentencia, que se produzca en el interdicto de retener, debe entenderse que no perjudica las acciones de posesión ó de dominio que puedan corresponder al vencido.

Esta demanda fué ampliada respecto de los daños y perjuicios, cuya indemnización se pide también, en la forma que expresa el escrito de fs. 142.

Los demandados sostienen que el campo «Rincón del Chañar», que perteneció á su causante, linda por su frente con el denominado «Puntas del Chañar» y se prolonga hacia el Oeste, hasta terminar en la confluencia de los arroyos del «Chañar» y «Pelado», afectando más ó menos la forma que indica el croquis señalado por los demandantes á fs. 22 vta., afirman que lo han poseído en toda su extensión: que fué mensurado en 1858 por el agrimensor D. José Caba-



llero; que dicha operación fué practicada sin oposición alguna y que si bien se hizo notar que había un *excedente* en el fondo del campo, en la confluencia de los arroyos «Chañar» y «Pelado», excedente, que fué medido, según consta de la diligencia y plano respectivo, se ha gestionado y se sigue gestionando se les escriture gratuitamente, en razón de que los títulos de propiedad de su causante expresaban que el campo «Rincón del Chañar» había sido comprado *ad-corpus*; reconocen que es cierto que algunos años antes de fallecer Don Manuel Ignacio Lagraña formó la sociedad Rural, que he mencionado, con Furnus y Pozzi, y que es también cierto que Lagraña figuraba como dueño del campo «Puntas del Chañar» que fué ocupado por la sociedad, pero *niegan* que entre el «Rincón del Chañar» y «Puntas del Chañar» se encontrara la fracción «San Luis», á que se refiere la demanda: que esta fracción no es otra que la denominada «Paniagua», encontrándose más hacia el Rincón el «*Pairirí*», cuya ocupación le permitió gratuitamente á Pozzi, uno de los herederos, Don Francisco Javier Lagraña, y sobre la que versó el juicio de desalojo promovido ante el Juez Federal: agregan que la línea C. D. del plano de fs. 22 vta. es la que corresponde á la posesión que han tenido, como lo demuestra el alambrado de esa línea, practicado de común acuerdo con el hijo de la Sra. Doña Flora Lagraña de Labougle y que el que se señala con las letras A. B. no es sinó una enramada construída por Pozzi, cuando entró á ocupar el campo «Paniagua»: después de mencionar otros antecedentes, relacionados con las diligencias practicadas, con motivo de la solicitud presentada por Furnus al gobierno de la Provincia, sobre el *excedente*



fiscal existente en el campo «Rincón del Chañar» y de explicar porqué el causante de los demandados ocupaba el campo perteneciente á la Señora Labougle, de acuerdo con su propietario, terminan por pedir el rechazo de la demanda, ya por lo que hace á la restitución de la posesión pedida en el escrito de fs. 22. como por lo que respecta á la indemnización de daños y perjuicios, alegando también que el apoderado de los demandantes ha carecido de personería para hacer este último pedido.

Resulta de lo expuesto que no se trata, en el caso *sub-judice*, de una acción de reivindicación ni de ninguna de las demás acciones reales que nacen del derecho de propiedad y que la ley autoriza, artículos 2756 al 2758 C. C., como un medio de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de estos derechos, sinó tan solo de la *acción posesoria*, autorizada por el mismo Código, en su artículo 2482, al disponer que el que teniendo el derecho de poseer fuese turbado ó despojado de su posesión, puede intentar la acción real que le compete ó servirse de las acciones posesorias.

Resulta, asimismo, *plenamente comprobado*, por la confesión de los demandados, que en el campo, que les corresponde como herederos de Don Manuel Ignacio Lagraña, *existe un excedente de propiedad fiscal*, excedente que las diligencias de mensuras practicadas por los Agrimensores Scheffer y Carlevaro ⁽¹⁾ *ubican entre los campos* «Rincón del Chañar» y «Puntas del Chañar»: como resulta, finalmente, que si bien esta fracción fué ocupada por los herederos de

(1) El Gobierno de la Provincia, por resolución de Julio 17 de 1893, aprobó la mensura y ubicación proyectada por el Sr. Carlevaro y expidió, á favor de Farnus, los *títulos de propiedad*, que también corren agregados á estos autos.



Lagraña. ⁽¹⁾ considerándola de propiedad de su causante. Furnus primero y sus herederos después, *la han poseído desde 1882 hasta 1892*, en que fueron desalojados, en virtud del mandato judicial, á que han hecho referencias las partes.

La cuestión queda entonces reducida á saber si se ha justificado, por los demandantes, la posesión que sostienen haber tenido en el campo mencionado, como base de su demanda y si ella debe prevalecer, no obstante la que alegan haber tenido también los demandados.

Como ya lo he dicho, *los demandantes han acreditado esta posesión*. Se reconoce así en la sentencia apelada, pero se observa, sin embargo, que ella no reunía los caracteres necesarios para fundar la acción que se ha ejercitado, por cuanto *el hecho de haber ocupado Furnus el campo «San Luis», de haberlo poblado y establecido en él su Estancia, no es suficiente*; como se observaba también, que la sucesión demandada, ha demostrado una posesión anterior á la de Furnus, posesión perfecta, se dice, con *animus domini*.

No es exacto, entre tanto, según lo que resulta de autos.

Independientemente de las pruebas que ofrecen los testigos, que han declarado en esta causa y á que se refieren las diligencias de fojas 222 á 447, es de tenerse presente, que son actos posesorios de cosas inmuebles: su cultura, percepción de frutos, su deslinde, así como las construcciones ó reparaciones que en ella se hagan y, en general, *su ocupación de cualquier modo que se tenga*, bastando hacerla en algunas de sus partes, como lo dispone expresamente el art. 238,4 del Cód. citado.

Es también de tenerse presente que, conforme

(1) Con anterioridad al año 1882.



á lo dispuesto por el artículo 2456, la posesión se pierde cuando se deja que alguno la usurpe. éntre en posesión de la cosa y goce de ella durante un año, sin que el anterior poseedor haga, durante ese tiempo, acto alguno de posesión. ó haya turbado la del que la usurpó.

Un segundo modo de perder, á pesar nuestro, la posesión de una finca, dice Pothier, es cuando la dejamos usurpar por alguno que se ha puesto en posesión de la misma, de la que ha gozado durante un año y un día, sin que durante todo este tiempo hayamos intentado ningún acto de posesión y sin que le hayamos perturbado en su goce: porque, en virtud de este goce de un año y un día, ha adquirido la posesión y, por consiguiente, nos ha hecho perder la nuestra. — Pothier De la posesión y prescripción, N. 76.

Esta es precisamente la doctrina consagrada por el mismo Código Civil, al disponer que el poseedor no puede entablar acciones posesorias si su posesión no tuviese á lo menos el tiempo de un año, sin los vicios de precaria, violenta ó clandestina; que la buena fé no es requerida para estas acciones y que para establecerla, el poseedor puede unir su posesión á la de la persona de quien la tiene, sea á título universal ó á título particular—artc. 2473 y 2474.

Partiendo de estos antecedentes, considero que *no puede ponerse en duda la posesión*, que ha tenido el causante de los demandantes primero y estos últimos después, hasta el momento en que fueron desalojados del campo motivo de esta cuestión. Las diligencias de mensura que se han practicado, acreditan que *no es solo la ocupación material de dicho campo la que ha tenido Furnus y sus sucesores, sinó también el*



ánimo de hacerlo suyo,⁽¹⁾ ejerciendo á este objeto, los diversos actos de que se hace mérito en la demanda y que caracterizan la posesión, definida por el artículo 2351, no obstante la que anteriormente hubieran tenido los demandados.

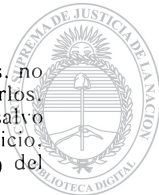
Es indudable que el campo en cuestión, como el de «Puntas» y «Rincón del Chañar», fueron ocupados con las haciendas pertenecientes á la sociedad formada en 1876 entre Furnus, Lagraña y Pozzi, pero no es menos *cierto* que, una vez entregado el campo perteneciente á la Señora de Labougle y liquidada la Sociedad mencionada en 1882, *Furnus estableció su Estancia* en el denominado «San Luis» y lo *denunció en compra* al Gobierno de la Provincia, por quien se ordenó á su solicitud, el *deslinde* que expresan las diligencias de fs. 1 á 73, primer cuerpo, como es *indudable* también, que, *considerando ese campo como suyo*, *Furnus practicó los demás actos de posesión* de que se ha hecho mérito por sus sucesores, hasta el momento en que éstos fueron *desalojados en 1892*,⁽²⁾ de manera que debía considerarse como perdida para los demandados la posesión que ellos y sus causantes hubieran tenido con anterioridad.

Las declaraciones de fs. 401 y fs. 550 á 558, de las que se ha hecho mérito especialmente, no contradicen la posesión alegada por los demandantes.

Por lo que hace á los daños y perjuicios reclamados también por los actores, pienso que no es la oportunidad de establecerlos, por cuanto, admitiendo que se hubieran causado, como con-

(1) No sólo por los beneficios de su posesión, sino hasta su *propiedad*.

(2) Por orden judicial y por la fuerza pública, sin haber sido jamás citados, oídos, ni condenados por autoridad alguna, y sin que los mismos Lagraña hubieran reclamado jamás, á Furnus, la entrega de ese campo!



secuencia de la desposesión sufrida por ellos, no existe en autos una base para determinarlos, correspondiendo, en consecuencia, dejar á salvo sus derechos para que los gestione en otro juicio, conforme á lo dispuesto por el artículo 219 del Código de Procedimientos.

Estas consideraciones, las concordantes aducidas en el escrito de expresión de agravios, así como los antecedentes de jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia Nacional, en las causas que se registran en la pág. 274, tomo 6, y 7, pág. 347 de la 2ª Serie y tomo 10 pág. 66 de la 3ª Serie de sus Fallos, que considero concurren á demostrar la *procedencia* y *justicia de la demanda*, deciden mi voto por la *negativa*.

El Sr. Vocal **Dr. Molina Arrotea**, dijo:

El Señor Vocal preopinante, teniendo á la vista antecedentes pertinentes de la causa, considera, con indiscutible acierto, que la cuestión queda reducida á saber si la parte actora ha justificado la posesión que invoca, como base de demanda, y si ella debe prevalecer no obstante la que alegan haber tenido también los demandados.

En concepto del mismo Señor Camarista, esta posesión ha sido plenamente acreditada por la parte actora, siendo á su juicio contraria á las resultancias de autos, la conclusión de la sentencia, en cuanto á que dicha posesión no reúne los caracteres necesarios para fundar la acción ejercitada por los herederos Furnus: como lo es también la de que la sucesión Lagranaña haya demostrado una posesión *anterior* á la de los demandantes, posesión perfecta, con *animus domini*.

Disiento en opiniones con el Sr. Vocal, pues, según mi modo de pensar, el pronunciamiento



del Inferior es arreglado á derecho, naciendo su error, al juzgar lo contrario, de la manera cómo aprecia el *origen* y caracteres de la posesión ⁽¹⁾ de que hacen méritos respectivamente las partes, especialmente la de la sucesión demandada.

El campo que reclama la demanda, se halla *ubicado entre* los denominados «Rincón y Puntas del Chañar», uno y otro de propiedad de la familia Lagraña, siendo su situación la que determina el croquis de fs. 22 vta. — véase escrito de contestación fs. 190.

Desde luego, la posesión, por parte de la misma familia de Lagraña, de todo el campo del Chañar, en las condiciones enunciadas por el Inferior, se halla ampliamente comprobada en autos, siendo sobre este particular decisivas las referencias del pronunciamiento recurrido. ⁽²⁾

Es así que la parte demandante, en su alegato de bien probado, expresa que, en la mente de Don Manuel Ignacio Lagraña, existió el propósito de hacer una sola propiedad de todo el campo del «Chañar», desde la confluencia de los arroyos «Chañar» y «Pelado», hasta el «Mocoretá», apropiándose y disponiendo, para realizar esta idea, del campo Puntas, que, por confusión de límites, formaba de hecho uno solo con el Rincón.

Aunque, según los mismos herederos Furnus, este párrafo es impertinente, ⁽²⁾ calificación inexacta por otra parte, ella no desvirtúa la eficacia que aquellas declaraciones tienen con referencia á punto tan capital del pleito. ⁽²⁾



Hay más: la ocupación de todo el inmueble por la familia Lagraña. ⁽¹⁾ aparece reconocida por el mismo causante. á estar á los recaudos testimoniados de fs. 10 adelante. A continuación del pasage que cita la sentencia. dice el apoderado del Señor Furnus ⁽²⁾: que, por reconocimientos privados hechos por su representado é informes que ha recibido de personas competentes. cree que dichos herederos ocupan indebidamente una gran área de campo fiscal. entre los expresados límites. para cuyo descubrimiento será necesario el saneamiento previo de la propiedad según sus límites.

Esta posesión resulta. de otro lado. corrobora-da por los testimonios de Acuña. fs. 391 vta.. Martínez. fs. 399. Gutiérrez. 401 vta.. Rodríguez 405 y Gauna, 407 vta. Según estos testigos. la familia Lagraña ha tenido siempre la *posesión* del campo «Rincón del Chañar». en toda su extensión. hasta lindar con «Puntas». sin permitir posesión de persona extraña. habiéndola tenido desde muchó antes de Agosto de 1892.

Estos hechos lo saben y afirman los testigos por haber sido vecinos antiguos de dichos campos. asegurando. los unos. haberlos frecuentado desde niños. los otros que los conocen desde treinta años. etc.. etc. ⁽³⁾

(1) Hasta 1882.

(2) En el escrito de denuncia, presentado ante el Gobierno de la Provincia, solicitando en *compra* el *excedente fiscal*.

Es á este escrito al que se refiere Lagraña cuando dice que, desde la denuncia de 23 de Setiembre de 1882, hasta la demanda que originó este litigio, han considerado al causante *Furnus* y á sus sucesores como *usurpadores*.

Acá está el origen de la *posesión* de Furnus. V. pág. 191, VIII.

(3) Ni en la sentencia, ni en los presentes considerando, se niega que Furnus haya tenido la *ocupación* del campo desde 1882 á 1892, haciéndose girar toda la cuestión sobre el *ánimus*, tan discutido por Savigny, Pothier, Laurent, Molitor, etc. etc., á fin de establecer cuándo esa ocupación se convierte en *posesión*, y, sin embargo, unos testigos rurales, que confiesan haber vivido en esos campos, desde niños hasta viejos, sabiendo firmar apenas, distinguen (di-



Los mismos demandantes hacen notar que, por su parte, han reconocido la posesión de los Lagraña, anterior á 1882, por lo que se hallan, dicen, excentos de probarla, aun cuando no esté ella en discusión.

Este hecho, es, sin embargo, de trascendente importancia, como que, acreditada esa posesión, á los Furnus les correspondía la prueba de que fué interrumpida *con la intención de tenerla para sí, animus domini* ⁽¹⁾, y esto, independientemente de su situación de demandantes, con la carga consiguiente de la prueba, á virtud de las negativas categóricas de la defensa.

Con efecto: la posesión, artículo 2445 Cód. Civil, se retiene y se conserva por la sola voluntad de continuar en ella, aunque el poseedor

cen) la ocupación de la posesión y declaran que Furnus ocupaba, pero que Lagraña poseía (!), desmintiendo, así, á Adolfo Posada, traductor y anotador de Ihering, que dice: «En general, puede afirmarse que la noción de la posesión, distinta, por un lado, de la mera tenencia y por otro, de la propiedad, es una noción jurídica difícil, y que, como tal, no puede encontrarse en el derecho positivo, sino después que la cultura llega á cierto grado.

Los pueblos primitivos son inhábiles para entrar en aquellos distinguos, que la posesión romana y moderna suponen. La distinción entre mero *detentador* y *propietario* es fácil, pero no lo es tanto la otra, al menos tal como va implícita al fin en la usucapión y en cierto modo en el interdicto».

Si la sentencia recurrida y los mismos considerandos estudiados, dan por comprobada ampliamente la ocupación exclusiva de parte de Furnus, quien tenía así el *corpus*, ¿en qué se fundaban los testigos para afirmar que Lagraña poseía, cuando resulta que, durante esos diez años citados, no han ejecutado un solo acto de posesión en ese campo?

El Tribunal superior lo resuelve, en derecho, por el *solo animo*; pero, aquellos testigos, que desde niños andan todavía por los campos, ¿cómo han podido penetrar hasta la intención de Lagraña, cuando ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, *sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste*, como lo dice el art. 913 de nuestro Código Civil?

Por otra parte, si toda esta cuestión se reducía á saber si Furnus ocupaba el campo, con la intención de tenerlo para sí (cuando nadie ha alegado que lo tuviera para otro) y que es lo que constituye la posesión, no eran los testigos quienes debían declararlo, sino el Juez, que debía pulsar los movimientos del *corpus*, para descubrir la existencia del *animus*, á fin de declarar la vida de la posesión, constituida por su unión, *neque per se corpore, neque per se animo!*

(1) V. pág. 195, in-line y siguientes, donde se llega á la conclusión de que, probada la ocupación queda *ipso facto* acreditada la intención.

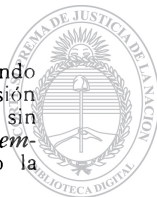


no tenga la cosa por sí. ó por otro. voluntad que se juzga continúa. mientras no se haya manifestado una voluntad contraria. (1)

La doctrina de este artículo es elemental y apartándome de sus fuentes informativas, recordaré. con la cita del apelante (fs. 725) que para la conservación de la posesión es una regla tradicional que el *animus* basta: *animo retinetur possessioni*, y que. desde el momento que se tenga siempre la intención de ser propietario y poseedor se conserva la posesión. aun cuando no se tenga la posibilidad de usar materialmente de la cosa. (2)

Cierto es que el expositor citado por los recurrentes. hace notar que esa conservación se entiende *siempre que otro no se tome el lugar del poseedor y no posea durante más de un año*. agregando todavía que la posesión legal de un inmueble. una vez adquirida. se conserva por la sola intención del poseedor. mientras no sufra interrupción por *el hecho* de un tercero. ó que ella no sea voluntariamente abandonada.

Pero estas salvedades son también de doctrina y de precepto expreso de nuestro derecho. Según los artículos 2455 y 2456 del Cód. Civil. la posesión se pierde cuando. por *el hecho de un tercero* sea desposeído el poseedor. ó el que tiene la cosa por él. *siempre que el que lo hubiese arrojado de la posesión, la tome con áni-*



mo de poseer ⁽¹⁾; perdiéndose igualmente cuando se deja que alguno la *usurpe*, éntre en posesión de la cosa y goce de ella durante *un año*. sin que el anterior poseedor haga. *durante este tiempo*, acto alguno de posesión ó haya turbado la del que la usurpó. ⁽²⁾

(1) Lo que es muy natural, porque «si con el acto de la turbación no tuviese por objeto hacerse poseedor el que lo ejecutó, la acción del poseedor será juzgada como *indemnización de daño* y no como acción posesoria» según lo prescribe el art. 2497 del Código Civil, agregando el Dr. Ilerena, que «cualquier hecho, que no importe una pretensión de un derecho sobre la cosa, no puede dar lugar á la acción posesoria, aunque él importe un ataque al derecho del demandado».

Será un simple hecho aislado, sin la continuidad ni los demás caracteres legales necesarios para que afecte el derecho de posesión, en sus dos elementos, *corpus* y *animus*; pero, de que se requiera, en el autor del acto, esta intención de afectar la posesión ajena, no se sigue que siempre deba exigirse la prueba expresa de su existencia; porque, «si el acto tuviese el efecto de *excluir absolutamente* al poseedor de la posesión, la acción será juzgada como despojo», dice el mismo artículo, anotando el Dr. Segovia, que, «cuando se destruyen las obras existentes en nuestro inmueble, *aunque no haya ánimo de poseer*, tiene lugar la acción de despojo, según el art. 2500» (2498).

En virtud de esta prescripción legal, el simple efecto excluyente del acto afecta la posesión, desde que importa arrebatar totalmente el *corpus*, y causa su pérdida, porque el solo transcurso del tiempo destruye el *animus*, que debe manifestarse durante el año, en forma de acción posesoria ó de actos suficientes para interrumpir la prescripción, si es que quiere mantener el derecho.

Esto por lo que respecta á la *pérdida* de la posesión, que no debe confundirse con su *adquisición*, para la cual el ánimo de poseer tiene que existir imprescindiblemente, pues se puede perder la posesión aun sin quererlo, pero no se puede adquirir sinó con voluntad.

El excluido en absoluto está en el caso de la imposibilidad de usar materialmente de la cosa.

Pero, como la ley, en el punto estudiado, no se coloca en tales hipótesis extremas, sinó que trata del caso en que, por *el hecho de un tercero*, sea desposeído el poseedor ó cuando haya un *acto de turbación*, del que no resultase una exclusión absoluta, entouces es lógico averiguar la intención que inspira á su autor, para definir si afecta la posesión y da nacimiento á las acciones posesorias ó si solo debe juzgarse como indemnización de daño.

En el caso *sub-judice*, la *exclusión* de Lagraña fué *absoluta* y durante *diez años*; por consiguiente, para declarar la *pérdida* de su posesión, no había para qué averiguar si el que lo arrojó de ella, la tomó con ánimo de poseer.

Esto no obstante, también se comprobó la existencia de este *ánimo de poseer*, porque se ha alegado, de parte de Furnus, haber *adquirido* esa posesión.—V. más adelante: nota (1), pág. 302.

(2) La circunstancia de afirmarse que Lagraña mantuvo *solo animo* su posesión, durante los diez años aludidos, prueba que, durante ese tiempo, *no ha ejecutado acto alguno de posesión*; lo que corroborara las conclusiones del cap. XXVI, de la pág. 79 y núm. 12 de la pág. 258.

En cuanto á la *usurpación*, que, según el art. 2456 del C. Civil, causa también la pérdida de la posesión, aparte de que la *ocupación* de Furnus es re-



No encuentro, entre tanto, que tales hechos ó circunstancias se hayan producido, en nuestro caso, determinando, como consecuencia, la situación jurídica requerida para el progreso de la demanda.

La sentencia del Juez Inferior lo pone, así, de manifiesto en atinadas consideraciones. (1)

La sucesión demandada expresa que es propietaria y poseedora, desde hace más de un siglo, de los campos del «Chañar», sin haber reconocido ni consentido jamás posesión extraña de la más mínima parte de los mismos (2). Uno de los herederos permitió, es cierto, á *Pozzi*, el socio industrial de la Compañía de fs. 229, ocupara gratuitamente la fracción denominada «Paniagua» y no «San Luis», como la llaman los demandantes y cuyo nombre les es desconocido. (3)

Se ha visto ya que la posesión de los Lagraña hasta el 82, no la desconoce la parte de Furnus, y, en cuanto á esta *ocupación precaria de*

conocida en la sentencia y en estos considerandos, la parte de Lagraña dijo, en su escrito contestando la expresión de agravios: «¿Cómo van á tener necesidad de probar mis poderdantes que Furnus poseyó, ya sea para él ó para ellos, cuando jamás han reconocido que Furnus poseyó nada; cuando, desde la denuncia de 23 de Septiembre de 1882, hasta la demanda que originó este litigio, HAN CONSIDERADO al causante *Furnus* y á su sucesión, como USURPADORES?»

Con diez años de usurpación, y sin que el anterior poseedor haya hecho, durante ese tiempo, acto alguno de posesión ó haya turbado la del que la usurpó, no puede conservarse, *solo animo*, la posesión!

(1) Las observaciones concretadas en la «expresión de agravios,» contra las consideraciones de la sentencia, han quedado subsistentes y son jurídicamente irrelevantes, por apoyarse en la Ley y en la doctrina concordante de los sabios autores allí citados. Estas generalidades no las destruyen.

(2) Lo contrario resulta de esa ocupación de Furnus, durante diez años, reconocida en la sentencia y de no haberse reclamado jamás de esta ocupación, contra Furnus, cuyos *títulos de propiedad* corren agregados á los autos.

(3) Cualquiera que sea el nombre que le den las partes, lo muy esencial y decisivo es que son *dos campos distintos*, aunque contiguos; de dos leguas cada fracción, que valen como cien mil pesos cada una, y cuya *falta de distinción* causa el grave error de hecho, que extravía esta argumentación. V. cap. XXVII, pág. 85 y letras C. y D. pág. 110.



Pozzi, tiene en autos elementos suficientes de comprobación (1).

La defensa hace mérito. con referencia á este último extremo. de un juicio tramitado contra *dicho ocupante*, ante la justicia federal de Corrientes. informando á su respecto el testimonio de fs. 182. Según la *ejecutoria* (2) en él recaída. quedó acreditado que uno de los herederos Lagraña cedió. en efecto. graciosamente. á Pozzi. el *terreno en cuestión*. (3) con la particularidad de que este hecho se constató por propia confesión del

(1) La ocupación precaria de Pozzi no se refería al campo en cuestión, OCUPADO POR FURNUS, COMO LO RECONOCE LA SENTENCIA, sino á las dos leguas linderas, contiguas, que van desde el arroyo Paniagua hasta el Pairiri.

Por lo demás, Pozzi dejó de ser socio de Furnus al empezar el año 87 y, como que era su yerno, fué interesado en esta cuestión, recién después de su muerte, en Julio de 1892: es decir, un mes y medio antes del despojo, el que fué realizado en virtud de un juicio promovido en 1889, referente á otro campo y contra tercera persona, porque ninguna relación de derecho los unía en ese intervalo. Acá se discutía la ocupación de Furnus y no de Pozzi.

(2) Absolutamente no causa *ejecutoria* la sentencia que finaliza un *interdicto*, porque, como lo dispone expresamente el art. 579. del Cód. de Procedimientos, «cualquiera que sea la sentencia, se entenderá siempre *sin perjuicio* de las acciones de posesión ó de dominio, que puedan corresponder al vencido, con arreglo á derecho.»

A este respecto, el Sr. juez Dr. Molina Arrotea, decia, en el fallo que se halla en la Ser. 2ª, tomo 4, pág. 244, que: «las acciones posesorias *salvadas* no se refieren á los interdictos, sino á las *acciones ordinarias*, para conseguir la posesión definitiva.»

«Que si fuera procedente instaurar necesariamente todos los interdictos, se desnaturalizaría su carácter; son juicios esencialmente sumarísimos, á punto de que por la antigua legislación, se podía fallar con la sola audiencia del actor, y una vez desechada la pretensión del demandante, *debe acudir al juicio ordinario*, siu que pueda renovarla calificándola con otra denominación.»

V. Cap. XXIX, pág. 113 y referencias á los §§ V y VI del escrito sobre competencia.

(3) Absolutamente nó; y aquí está el más grave error cometido.

El campo cedido á Pozzi es el que está al lado, es el contiguo al terreno cuestionado. Son *dos* campos, real y verdaderamente distintos.

Su confusión implica la desaparición de una fracción de *dos leguas!* V. pág. 241-5.

La confesión de Pozzi jamás se ha referido al terreno en cuestión, que, como lo reconoce la sentencia y este mismo pronunciamiento, estaba *ocupado por Furnus y no por Pozzi: Inclusionis unius, exclusio alterius*.

Sea que «al terreno en cuestión» se llame «San Luis», como le denomina Furnus, ó «Paniagua», como quiere Lagraña, lo indudable es que el «Pairiri», según se ve en los mapas de la Provincia de Corrientes, y lo dice la misma parte de Lagraña, está más hacia el Oeste, de á dos leguas del terreno en cuestión, y cómo se explica que se atribuya á este terreno, el aludido per-



mencionado Pozzi. á quien se condenó. en definitiva. á su restitución. con más los daños y perjuicios.

En las actuaciones de este proceso. cuyas constancias los Sres. Furnus han pedido se tengan como parte de prueba (fs. 233), aparece una carta fechada en Junio de 1886. dirigida. por Pozzi. al Dr. Gómez. arrendatario de Lagraña del mismo campo ⁽¹⁾ y en la que le dice. que. en contestación á la suya no duda de que sus intenciones sea buscar los medios conciliatorios para que desocupe (Pozzi) la parte de campo que el Señor F. Javier Lagraña le tiene cedido ⁽²⁾ y posteriormente arrendado al Dr. Gómez. Así. pues. agrega. me indicará cuál es el plazo ó término prudencial que me acordará. para poder mudar el establecimiento social. que aun pende su liquidación del Tribunal de Goya. ⁽³⁾

Deponiendo como testigo el mismo Dr. Gómez. manifiesta á fs. 297 que. en la época comprendida entre los años 1882 á 1892, es más ó

miso. otorgado á Pozzi. cuando un heredero de Lagraña confesó (V. pág. 251) que *es cierto* que las haciendas de Don Carlos Pozzi. parte de ellas. pastaban hasta el arroyo PAIRIRÍ. *durante el tiempo que el Sr. Pozzi OCUPABA ESE CAMPO. POR CESIÓN GRATUITA DEL ABSOLVENTE?*

¿Cómo se concilia esa referencia con lo manifestado. á Pozzi. por la Señora viuda de Lagraña. diciéndole: «con respecto al *pedido que V. me hace de ocupar el Pairirí*. prestado ó arrendado»....?

Y las distancias. las épocas. los ocupantes y demás circunstancias diversas de ambos campos. porqué no se han apreciado?

V. cap. 15. 18. 19 y 29 del Alegato y núms. 8. 13 y 14 del Informe. pág. 235.

(1) No. Las cartas dirigidas al Dr. Gómez se referían siempre al campo cedido á Pozzi y no al terreno en cuestión. ocupado por Furnus. aun cuando se han hecho valer respecto de este otro terreno y de otras personas.

V. cap. XVIII. pág 55 etc.

(2) El uso de referencias generales y la indeterminación de la cosa. sirvieron de base premeditada para la confusión hoy triunfante.

(3) La sociedad se liquidó en 1886. y á principios de 1887. el Sr. Pozzi *desocupó el campo cedido* por Lagraña. hasta la línea mensurada y amojonada. en 1884. por el Sr. Carlevaro. como deslinde del campo en cuestión y del cedido á Pozzi. V. Cap. XIX. pág. 60.



menos, el tiempo que tuvo *ocupado* el Sr. Carlos Pozzi el campo lindero al de «Puntas del Chañar», por concesión gratuita de Don Javier Lagraña. Que en 1886, el declarante realizó un contrato de arrendamiento con la Sra. Florentina C. de Lagraña, de la fracción de campo que *ocupaba Pozzi*, habiendo desistido más tarde, de común acuerdo, dicho arrendamiento, por las dificultades que oponía Pozzi, para la entrega del campo, reconociendo éste, sin embargo, que lo *ocupaba* por concesión de Javier Lagraña. (1)

La importancia de este testimonio es indiscutible. (2) por la calidad del deponente y el carácter de los hechos sobre que atesta. Esta declaración concuerda, en lo fundamental, con la prestada en *el juicio contra Pozzi*, testimoniado á pedido de la parte demandante.

Este mismo testigo y el Doctor Labougle, presentado por ambos litigantes, afirman, á fs. 491 y fs. 550 y fs. 551, concordando en sus dichos, que la familia Lagraña ha tenido siempre la posesión del campo «Rincón del Chañar», en toda su extensión, hasta lindar con «Puntas del Chañar». (2)

En presencia, pues, de todos estos antecedentes de hecho y de doctrina, paréceme por demás evidente que *los actos de ocupación material*, de que hace mérito la demanda, y sobre los que

(1) Se observa que tan pronto se reconoce la *ocupación de Furnus*, como se la atribuye á *Pozzi*. Solo esta confusión explica la anomalía de haberse despojado al uno, mediante un juicio seguido contra el otro, sobre la base de la no distinción de los *dos* campos citados, materialmente diversos!

(2) Sin embargo, declaró que no había estado nunca en el campo en cuestión y dió, como razón especial de su dicho, el haber estado su Sr. padre encargado de atender y proveer el valioso establecimiento pastoril de Lagraña, confesando, después, que había muerto *veinte años* antes de la época discutida!

El mismo declaró: «me consta» que *Furnus* no ocupó, porque «no me consta» que haya ocupado!



tanto insiste en sus alegatos y en sus pruebas, son, por su *origen y por la forma en que se han producido*, jurídicamente *ineficaces* para fundar su derecho. *faltándole como le falta, la prueba del animus*, que es el elemento moral de la posesión, como lo dice la sentencia, y que *no puede deducirse*, en nuestro caso, *de la tenencia y disposición de la cosa, por cuanto había un poseedor anterior*.⁽¹⁾

(1) En los § X y XI, págs. 195 y siguientes, fundado en la opinión de los sabios autores allí citados: Baudry-La Cantinerie, Laurent, Aubry y Rau, Maynz, Molitor, Wodon, Jhering, con el Dr. Vélez y sus comentadores Drs. Segovia y Llerena, se llega á la conclusión incontestable de que los «actos exteriores, que produzcan el efecto de privar al poseedor de disponer de la cosa,» son las manifestaciones *legalmente suficientes* de la *intención*, y como «dos posesiones iguales y de la misma naturaleza, no pueden concurrir sobre la misma cosa,» porque *inclusio unius, exclusio alterius*, si Furnus no ocupaba para sí, debió ineludiblemente poseer para otro, para Lagraña.

Y si Lagraña no alegó ni probó ni admitió que Furnus ocupara para ellos y si «los frutos de ese campo, en sus diversas formas: procreo de haciendas, engordes en invernadas, cortes de maderas, construcción y uso de sus casas, corrales, alambrados, tajamares, sementeras, frutas, aves, peces, flores, el aire, etc., etc., durante diez años fueron *exclusivamente percibidos, usados y consumidos* por Furnus, ¿necesitaba probar que su intención, al *apropiárselos*, era poseerlos para sí? — Nadie come para que otro engorde!

«El elemento fundamental de todo acto, es la voluntad del que lo ejecuta,» dice el Dr. Vélez y como todo hecho humano, se presume ejecutado con discernimiento, intención y libertad, es evidente que los mismos *actos* de ocupación ó tenencia de una cosa, constituyen la prueba de la intención, exteriorizada por medio de ellos.

«La relación de hecho encierra en sí misma la presunción de la voluntad del poseedor, dice Jhering; *sufficit ad probationem, si rem corporaliter teneam.*»

Por consiguiente, con la prueba de la ocupación, quedó acreditada la intención, y no de un solo año, sino de *diez años* continuos.

Es innegable lo que dice Baudry—La Cantinerie al respecto: «La distinción que hemos hecho del *animus* y del *corpus* existe más bien en la teoría que en la práctica. La verdad es que la *intención* de guardar la cosa á título de propietario, *se manifiesta por los actos mismos, que constituyen el elemento corporal* de la posesión. El *corpus* no se presenta, en realidad de los hechos, en estado aislado, independientemente de todo elemento intelectual; los *actos de aprehensión* que hemos indicado, *revelan*, al mismo tiempo, la existencia del *animus domini*, de aquel que se ha puesto en posesión.»

No debe olvidarse, como vulgar y equivocadamente sucede, que el *animus domini*, en materia de *posesión*, no significa tener intención de hacerse *propietario* de la cosa, sino del *uso*, de la *percepción de frutos*, de los *beneficios de la ocupación* misma, los que no pueden recaer sobre dos sujetos á un mismo tiempo. *Plures eadem rem possidere non possunt.*

¿Qué manifestación más elocuente de esta intención, en la posesión, puede legalmente exigirse que la *apropiación* real y el *consumo* mismo de los frutos,



Bueno es observar también, que *el poseedor* de un inmueble, por el solo temor de incurrir en la pérdida de su posesión ó para asegurarse contra posibles interpelaciones judiciales, no puede estar exigiendo de terceros actos ó declaraciones expresas de reconocimiento de su derecho, ni hacerlos de su parte deliberadamente y con el propósito, ostensible de hacer público que persevera su *animus possidendi*.⁽¹⁾

Sería extremar la previsión humana; sería extremarla innecesariamente, porque, amparado por el principio — *posee porque posee*, — le basta, para la conservación é integridad de su derecho, la sola concurrencia de su voluntad.⁽¹⁾

que, siendo efectuado por uno, no puede, en el orden lógico de la naturaleza, aprovechar á otro?

Y si la ley le dice, al que está percibiendo esos frutos, usando y consumiendo esos beneficios, *durante más de un año*, que «*él posee porque posee*», ¿con qué facultad va á restringirse su libertad, sin haberse constituido un derecho especial al efecto, desde que las acciones correspondientes al poseedor anterior se han prescripto, por su inacción de más de un año?

El poseedor anterior, que ha sido *absolutamente excluido* del uso del *corpus*, durante diez años, lejos de mantener su posesión *solo animo*, ha perdido diez veces su derecho de posesión.

Y el poseedor posterior, que ha dispuesto absoluta y exclusivamente del *corpus*, durante esos mismos diez años, manifestando, además, pretensiones, no sólo sobre el uso de lo que en realidad tenía en su poder, sino hasta acerca del derecho de propiedad de la cosa, ha *adquirido legalmente diez veces el derecho de posesión*.

(1) Esto es equivocado, pues lo cierto es que el *poseedor* siempre debe hacer ostensible que persevera su *animus*, porque, como lo dice el artículo 913 del Cód. Civil, «ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste.»

Hay que distinguir, ¿á qué se llama *poseedor*?

Si es al que tiene el *corpus*, entonces su *animus* se exterioriza por medio de los actos mismos, que constituyen el elemento corporal de la posesión.

Si es al que solo tiene el *animus*, en presencia de un usurpador que tiene el *corpus*, entonces, de acuerdo con el art. 2456 del Cód. citado, debe ejecutar actos de posesión, so pena de perder su derecho si transcurre un solo año sin hacer nada.

En una sola circunstancia es aparentemente cierta la conclusión anotada: cuando el *corpus* no es usurpado por otro. Sin embargo, aun en ese caso, la voluntad del poseedor se manifiesta, aunque no ejecute actos, en la posibilidad física de ejecutarlos cuando quiera.

Por otra parte, *poseedor* se llama á la persona que tiene la *posesión*, á la que, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad, «tenga



En estas consideraciones y en las concordantes de la sentencia. *que reproduzco en todas sus partes*, fundo mi voto. que emito por la *afirmativa*.

una cosa bajo su poder,» sea «un contacto personal» ó «con la posibilidad física de tomarla», (Arts. 2351 y 2373, Cód. Civil.)

Por consiguiente, la regla del artículo 2363; «posee porque posee,» se refiere á la persona que tiene el *corpus*, constituido, así, en prueba de la *posesión* misma, como que, siendo la exteriorización natural y legítima del *animus*, del que recibe á su vez la vida que le anima, constituye el envase, la encarnación del *derecho de posesión*.

No es, pues, al que tenga el *solo animo* á quien deba llamarse *poseedor*, ni aplicarle la máxima: posee porque posee, y nada menos que para eximirle de exteriorizar su voluntad, ante los actos de ocupación y disposición física de un usurpador de diez años continuos!

Las consideraciones aludidas son de estricta aplicación lógica y legal á la parte de Furnus, á quien la sentencia reconoce el *corpus* y á quien no corresponde exigirse acredite la razón, el origen, el porqué de su posesión, desde que él posee porque sí, porque posee!

Es claro que *al que posee* «le basta, para la conservación é integridad de su derecho, la sola concurrencia de su voluntad,» manifestada perseverantemente en el hecho de la posesión misma; pero, *al que no posee*, como Lagraña, hay que recordarle, con Laurent (Tom. 32, § 270, pág. 280) y la Corte de Casación citada por él, que «en principio, la posesión, una vez adquirida, no se conserva por la sola intención, sino cuando esta *posesión intencional* NO SEA CONTRARIADA por la *posesión REAL* de un tercero,» sin olvidar tampoco que la posesión y las acciones posesorias se adquieren, pierden y prescriben por el transcurso de solo *un año* y no por más de diez, como se ha aplicado al presente!

Para que, no obstante la *ocupación exclusiva de Furnus*, ya no discutida desde que está *reconocida* en la sentencia, cuyas consideraciones reproduce, en todas sus partes, la mayoría del Tribunal, pudiera Lagraña mantener la *posesión*, no hay, en todas las legislaciones y en todas las teorías posesorias conocidas, más que un solo medio: que dicha ocupación fuera *mera tenencia*, que Furnus fuera *mero tenedor*.

Y para que la *ocupación* sea *mera tenencia* es requisito esencial, indispensable, *si ne qua non*, que se tenga la cosa á nombre de otro, que se reconozca la posesión de aquel á cuyo nombre se ocupe: que *Furnus ocupara á nombre de Lagraña*.

Aun cuando no se diga categóricamente, ésta es la base capital y decisiva de la sentencia confirmada, como que es lo único que ha podido determinar la solución aceptada.

Y, sin embargo, *Lagraña jamás pretendió*, ni *alegó*, ni *probó*, ni siquiera *admitió* que se dijera que Furnus ocupara, y menos, en su nombre y con su permiso.

En su escrito contestando la expresión de agravios, se lee: «el Inferior parece sostener que *he admitido que la sucesión de Furnus ocupó el campo en litigio* y que si no *ejecutaron* mis poderdantes *acto alguno* para destruir su *posesión* fué porque no les traía perjuicio alguno.

Creo que al Inferior se le ha deslizado este *error*. Siempre he sostenido, desde el principio de este litigio... que *ni Furnus, ni sus herederos OCUPARON* fracción alguna...»

En consecuencia, no siendo *mera tenencia*, la *ocupación* de Furnus solo ha



Los Señores Vocales Doctores DÍAZ, GIMÉNEZ y GELLY, se adhieron al voto anterior.

Con lo que terminó el acto. quedando acordada la siguiente sentencia.

EMILIO GIMÉNEZ

CARLOS MOLINA ARROTEA — JULIÁN GELLY

NICANOR GONZÁLEZ DEL SOLAR — DELFÍN B. DÍAZ

Ante mí:

JORGE L. DUPUIS

Es copia fiel del acuerdo original, que. redactado por mí. queda en el libro respectivo.

JORGE L. DUPUIS

podido realizarse á nombre propio, encerrando en sí misma ese *animo possidendi*, que le constituye en *posesión*, desde que la intención es el elemento intrínseco fundamental de todo acto humano.

Tan íntima es en la realidad esta relación del *corpus* y del *animus*, que en el Código Alemán, que debe empezar á regir en 1900, se ha llegado hasta prescribir que «la posesión de una cosa se *adquiere* obteniendo, *de hecho*, *poder* sobre la misma», y termina cuando «el poseedor renuncie su *poder de hecho* sobre la cosa ó la *pierda de cualquier otro modo*».

Y en la exposición de motivos, se dice que, al ofrecer el Código la protección á la posesión, «*sin distinguir*... si el poseedor tiene ó no la cosa *animo possidendi* ó *sin esa intención*», no hace en ello más que seguir la dirección del nuevo desarrollo del derecho... «en conformidad con el moderno progreso jurídico»...

Y entre el extremo de reconocer la *posesión* allí donde exista un *poder de hecho*, *sin distinguir* si se tiene la cosa *animo possidendi* ó *sin esa intención* y el declarar que el *solo animo* es de mayor eficacia jurídica que ese poder de hecho ejercitado exclusivamente durante *diez años*, hay un abismo, que solo podrán esclarecer los encargados de preparar la legislación del cercano porvenir, de que nos habla el Dr. Machado!

Buenos Aires, Setiembre 24 de 1898



Y Vistos: Atento el resultado de la votación, de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma, con costas, la sentencia apelada de fs. 686, regulándose en 500 pesos $\frac{m}{n}$ los honorarios del Doctor Martínez y en 80 pesos $\frac{m}{n}$ los del procurador Sidders. Devuélvase, rep. los sellos.

EMILIO GIMÉNEZ

CARLOS MOLINA ARROTEA — JULIÁN GELLY

NICANOR GONZÁLEZ DEL SOLAR — DELFÍN B. DÍAZ

Ante mí:

JORGE L. DUPUIS

ÍNDICE



Demostración gráfica

Láminas I & VIII.

ALEGATO

HECHOS probados:	Pág.	
Ubicación y propiedad.	1 &	20
Actos posesorios de Fumus	21 &	78
" " " Lagraña.		79
Campo «Paniagua».		85
Resumen de los hechos probados.		106
DERECHO:		
Desalojo contra Pozzi		113
Derecho de posesión.		125
Daños y perjuicios.		137

<i>Sentencia de 1ª Instancia</i>	151 &	164
<i>Expresión de Agravios.</i>	167 &	225
<i>Réplica</i>	229 &	232

INFORME IN-VOCE

Moral.	núms.	1 á 3	236
Antecedentes	"	4	239
Propiedad	"	5	241
Posesión de Fumus		6 á 11	244 á 258
Actos posesorios de Lagraña		12	258
Demandas de desalojo		13 á 20	260
Conclusión		21 á 22	273

SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA

Voto del Doctor González del Solar, en <i>disidencia</i>	283
" de la mayoría del Tribunal	292